



NACIONES UNIDAS

ASAMBLEA  
GENERAL



Distr.  
GENERAL

A/6700/Add.14 (Parte II)\*  
1. diciembre 1967  
ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

Vigésimo segundo período de sesiones  
Tema 23 del programa

INFORME DEL COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR LA SITUACION CON  
RESPECTO A LA APLICACION DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA  
INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES

(Relativo a la labor realizada en 1967)

Relator: Sr. Mohsen S. ESFANDIARY (Irán)

CAPITULO XXIII

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS, ISLAS VIRGENES BRITANICAS,  
ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, MONTSERRAT, SAN CRITOBAL-NIEVES-  
ANGUILA, SANTA LUCIA, SAN VICENTE, BERMUDAS, BAHAMAS, ISLAS  
TURCAS Y CAICOS, ISLAS CAIMAN, ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS)  
Y HONDURAS BRITANICA

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. DECISIONES ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD POR EL COMITE ESPECIAL Y POR LA ASAMBLEA GENERAL . . . . .		
A. Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía, San Vicente, Bermudas, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, e Islas Caimán . . . . .		Véase A/6700/Add.14 (Parte I)
B. Islas Malvinas (Falkland Islands) . . . . .		
II. INFORMACION SOBRE LOS TERRITORIOS . . . . .		
A. Islas Vírgenes de los Estados Unidos . . . . .		
B. Islas Vírgenes Británicas . . . . .		

\* Este documento contiene la Parte II del capítulo XXIII del informe del Comité Especial a la Asamblea General. El capítulo introductorio general se publicará más adelante con la signatura A/6700 (Parte I). Los demás capítulos del informe se reproducen en distintas ediciones.

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
C. Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente . . . . .	)	
Generalidades de los Territorios . . . . .	)	
Antigua . . . . .	)	
Dominica . . . . .	)	
Granada . . . . .	)	
Montserrat . . . . .	)	
San Cristóbal-Nieves-Anguila . . . . .	)	
Santa Lucía . . . . .	)	
San Vicente . . . . .	)	
D. Bermudas . . . . .	)	
E. Bahamas . . . . .	)	
F. Islas Turcas y Caicos . . . . .	)	
G. Islas Caimán . . . . .	)	
H. Islas Malvinas (Falkland Islands) . . . . .	)	
I. Honduras Británica . . . . .	)	
III. EXAMEN PRELIMINAR POR EL COMITE ESPECIAL DE LOS TERRITORIOS DE ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA, SANTA LUCIA Y SAN VICENTE . . . . .	652 - 800	5
Introducción . . . . .	652	5
A. Peticiones por escrito y audiencias . . . . .	653 - 666	5
Peticiones por escrito . . . . .	653	5
Audiencias relativas a Granada . . . . .	654 - 666	6
B. Declaraciones de los miembros . . . . .	667 - 800	12
IV. MEDIDAS PRELIMINARES ADOPTADAS POR EL COMITE ESPECIAL	801 - 948	63

/Véase A/6700/Add.14  
(Parte I)/

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
V. EXAMEN POR EL COMITE ESPECIAL DE LAS ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS, ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, MONTSEERRAT, SAN CRISTOBAL- NIEVES-ANGUILA, SANTA LUCIA, SAN VICENTE, BERMUDAS, BAHAMAS, ISLAS TURCAS Y CAICOS, ISLAS CAIMAN, ISLAS , MALVINAS (FALKLAND ISLANDS) Y HONDURAS BRITANICA . . . . .	949 - 1033	112
Introducción . . . . .	949 - 955	112
A. Peticiones escritas y audiencias . . . . .	956 - 985	113
Peticiones escritas . . . . .	956	113
Audiencia relativa a Honduras Británica . . . . .	957 - 985	114
B. Examen del informe del Subcomité III . . . . .	986 - 1032	123
VI. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITE ESPECIAL . . . . .	1033	131
ANEXO: INFORME DEL SUBCOMITE III . . . . .		137

III. EXAMEN PRELIMINAR POR EL COMITE ESPECIAL DE LOS TERRITORIOS  
DE ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA,  
SANTA LUCIA Y SAN VICENTE

Introducción

652. En su 488a. sesión, celebrada el 20 de febrero de 1967, el Comité Especial decidió examinar en sus sesiones plenarias los Territorios de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente. El Comité Especial examinó dichos Territorios en sus sesiones 489a. a 497a., 500a., 501a. y 504a. a 506a., celebradas entre el 21 de febrero y el 23 de marzo de 1967. Al concluir su examen de dichos Territorios, el Comité Especial los remitió al Subcomité III para un examen ulterior. Durante el detallado e intenso examen de estos Territorios por el Subcomité, éste aprovechó la oportunidad para oír a ciertos particulares que deseaban proporcionarle información. En el informe del Subcomité III (véase el anexo), figura una reseña de su examen de dichos Territorios y de las conclusiones y recomendaciones por él formuladas.

A. PETICIONES POR ESCRITO Y AUDIENCIAS

Peticiones por escrito

653. El Comité Especial distribuyó las siguientes peticiones por escrito:

<u>Peticionario</u>	<u>Documento</u>
<u>Granada</u>	
Sr. Eric M. Gairy, Dirigente de la oposición en Granada	A/AC.109/PET.573 y Add.1
Sr. Eric M. Gairy, Dirigente de la oposición en Granada, y Sr. Sylvester	A/AC.109/PET.573/Add.2
Sr. M.A. Caesar	A/AC.109/PET.580 y Add.1 a 3
<u>San Cristóbal-Nieves-Anguila</u>	
Dos peticiones del Sr. Ronald Webster	A/AC.109/PET.574
Sr. Atlin Harrigan	A/AC.109/PET.575

Peticionario

Documento

San Vicente

Dos peticiones del Sr. E.T. Joshua, Ministro  
Principal de San Vicente

A/AC.109/PET.584

Audiencias relativas a Granada

654. El Comité Especial escuchó a los siguientes peticionarios en las sesiones que se indican a continuación:

Sr. Eric M. Gairy, Dirigente de la oposición 489a. sesión  
(A/AC.109/PET.573) (El Sr. Caesar, colega del  
Sr. Gairy, dio lectura a la declaración de éste)

Sr. Michael Caesar (A/AC.109/PET.580/Add.2) 493a. sesión

655. El Sr. Caesar, haciendo uso de la palabra en nombre del Sr. Eric M. Gairy, Dirigente de la oposición en Granada, dice que cuando el Sr. Gairy se dirigió al Comité el 7 de septiembre de 1966 (A/AC.109/SR.463), manifestó que la situación política y constitucional en Granada era volcánica. El pueblo había estado haciendo manifestaciones muy numerosas y pidiendo elecciones generales antes de que entrara en vigor la nueva Constitución, no solamente porque el Gobierno no había dado cumplimiento a su promesa electoral de convertir a Granada en un Estado unitario con Trinidad y Tabago dentro del plazo de un año después de las últimas elecciones, sino también porque había comenzado a celebrar conversaciones con el Gobierno del Reino Unido acerca de una nueva constitución sin consultar en primer lugar a la población. Con arreglo a esa nueva constitución, se otorgaría a Granada el pleno gobierno propio en el orden interno, y su condición jurídica pasaría a ser la de un Estado asociado con el Reino Unido.

656. Cuando el Sr. Gairy asistió a la Conferencia Constitucional de las Islas Windward en mayo de 1966, como jefe de la oposición, firmó el informe de la Conferencia con ciertas reservas sobre algunas partes del texto de la constitución propuesta. Las noticias aparecidas recientemente en los periódicos en el sentido de que la Ministra del Reino Unido para las relaciones con el Commonwealth ha informado al Parlamento del Reino Unido que el Sr. Gairy está totalmente de acuerdo con la constitución son evidentemente falsas. El orador da lectura a una carta dirigida

al West Indian, uno de los principales periódicos de Granada, y firmada por el Presidente del Granada Trade Union Council. En ella se indica que el Sr. Gairy no había dado su conformidad a las cláusulas de la constitución propuesta relativas al Senado, a la Cámara de Representantes, a las disposiciones transitorias y a la necesidad de un referéndum sobre ciertas cuestiones. Señalaba también que el Secretario para las Colonias del Reino Unido había dado seguridades en esa Conferencia de que se examinaría la cuestión de las elecciones antes de la aplicación de la constitución, lo que no había ocurrido. Los dirigentes de la oposición de Granada habían objetado firmemente la inclusión de una cláusula relativa a disposiciones transitorias sin que se celebraran primero elecciones generales. Por consiguiente, el Sr. Gairy había reservado la posición del partido opositor sobre esa cláusula, y sobre las demás cláusulas relativas a la composición de la asamblea legislativa, y sus reservas están consignadas en el informe de la Conferencia de 1966 de las Islas Windward, publicada en el Command Paper No. 3021 del Reino Unido. En la carta se pedía a la Ministra para las relaciones con el Commonwealth que adoptara medidas inmediatas para aclarar la mala interpretación, y se llegaba a la conclusión de que lo que se proponía para Granada era la disolución de la asamblea legislativa existente y el reemplazo de ésta por un órgano legislativo totalmente nuevo y de composición diferente, con diferentes funciones.

657. El propio Sr. Gairy envió de inmediato un telegrama en que se señalaba que se había dado a la Ministra una información errónea y que él no había estado nunca de acuerdo en que se aplicara la constitución sin elecciones, agregando que la situación en Granada seguía siendo volcánica y que se estaban organizando varias manifestaciones de protesta. Las reservas del Sr. Gairy al proyecto de constitución se relacionaban con cuatro puntos: dos de ellos referentes a la organización interna de la asamblea legislativa y los otros dos a las disposiciones transitorias y la cuestión de las medidas para la asociación. Con relación a las disposiciones transitorias, el partido opositor rechazó el proyecto propuesto, en primer lugar porque con arreglo a éste se transformaría la asamblea legislativa de una cámara elegida en una asamblea bicameral sin consultar al pueblo; en segundo lugar, por cuanto implicaría que la disposición de la Constitución actual que rige la vida de la actual asamblea de una cámara seguiría estando en vigor después de entrar en vigencia la nueva constitución en que se prevé una asamblea bicameral; tercero,

porque se negaría al pueblo de Granada su derecho fundamental a elegir la primera asamblea de representantes bicameral de Granada de conformidad con los principios democráticos de la libre determinación.

658. El Sr. Gairy rechazó la disposición en que se indica que no es necesario un referéndum en relación con la ley por la que se dé por terminada la asociación entre el Reino Unido y Granada y se dé efecto constitucional a los arreglos en virtud de los cuales Granada se una a un país independiente del Commonwealth en el Caribe. En opinión del Sr. Gairy, la verdadera cuestión es si el propio pueblo ha aceptado o rechazado la constitución. Hasta ahora, no ha ejercido ese derecho.

659. El pueblo de Granada considera que el objetivo primordial del Comité Especial es asegurar la plena aplicación de los principios de la libre determinación y ayudar a los pueblos oprimidos del mundo en su lucha por liberarse de los problemas del colonialismo en todas sus formas. A pesar de que el Comité tiene antecedentes muy felices, ese pueblo lamenta mucho que, pese a la información que el Sr. Gairy le proporcionó en septiembre, el Comité no haya podido dar a Granada la atención urgente y necesaria que merece. Desgraciadamente, el Gobierno del Reino Unido afirma ahora que la cuestión es un asunto interno y que, por consiguiente, no puede aplazar la entrada en vigor de la nueva constitución. El pueblo de Granada no puede creer realmente que la Potencia administradora sea verdaderamente incapaz de demorar la aplicación de sus propias instrucciones, a menos que esté avivando deliberadamente las llamas del desorden interno en Granada. Se ha informado ya acerca de choques con la policía y de ataques a clérigos. En realidad, la situación ha llegado a un punto tal que todos los miembros del partido opositor han renunciado al Consejo Legislativo porque no se da al pueblo de Granada la oportunidad de ejercer su derecho a elegir un nuevo gobierno de su preferencia. Con un golpe de pluma se quiere cambiar la estructura de la asamblea legislativa y se ha de investir del pleno control interno a un Gobierno comprometido a seguir una política contraria a los deseos del pueblo.

660. El pueblo de Granada ha pedido al Sr. Gairy que solicite al Comité Especial que interceda ante el Gobierno del Reino Unido, en su nombre, a fin de aplazar la aplicación de la constitución propuesta hasta que se celebren elecciones generales. Toda tentativa de aplicar la constitución sin elecciones generales representaría una extrema injusticia por parte del Gobierno del Reino Unido, que sería responsable de lo que pudiera ocurrir en Granada.

661. En su 493a. sesión, el Comité Especial escuchó al Sr. Michael Caesar en relación con Granada.
662. El Sr. Caesar dice que el Gobierno del Reino Unido está poniendo los toques finales a las disposiciones necesarias para poner en vigor las nuevas medidas constitucionales en virtud de las cuales se concede la autonomía interna y el nuevo estatuto de Estado asociado con el Reino Unido a cada uno de los seis Territorios que se examinan, y que le parece imposible que el Comité Especial considere la cuestión a fondo antes de que sea demasiado tarde. Esta situación ha sido creada por el Gobierno del Reino Unido, que no permitió que las misiones de las Naciones Unidas visitaran los Territorios, presentó una información muy voluminosa sobre los antecedentes de los Territorios mientras aplicaba sus propias decisiones y no consintió en aplazar la aplicación de éstas para que el Comité Especial tuviese tiempo de estudiarlas.
663. El representante del Reino Unido y otro representantes insistieron mucho en el hecho de que en la Conferencia Constitucional de Londres no se había formulado ninguna propuesta para conceder por separado la independencia a los Territorios. Sin embargo, se ha convenido en general, y la población de los Territorios así lo reconoció en 1945, que la concesión de la independencia a cada Territorio por separado no era viable. Por eso se estableció la Federación de las Indias Occidentales, pero más adelante fue disuelta por el Gobierno del Reino Unido contra los deseos de la población de todos los Territorios que la constituían. Tanto el Primer Ministro Federal como el Jefe federal de la Oposición fueron a Londres en marzo de 1962 para protestar contra la manera en que el Gobierno del Reino Unido estaba preparando la disolución de la federación, y el Sr. Dennis Healey, a la sazón en la Cámara de los Comunes, declaró que el Gobierno del Reino Unido había decidido destruir toda la cooperación que había entre los Territorios sin tratar primero de lograr algún acuerdo entre sus gobiernos para determinar con qué debería sustituirse aquélla.
664. A raíz de disolverse la Federación, el pueblo de los ocho Territorios interesados expresó sus deseos de formar una nueva Federación como Estado independiente dentro del Commonwealth. La cuestión se debatió hasta 1965, momento en que el Reino Unido adujo como obstáculo para crear tal federación el hecho de que en septiembre de 1962 el recién elegido Gobierno de Granada había declarado su



intención de tratar de asociarse con Trinidad y Tabago en lugar de formar parte de una nueva federación. Sin embargo, el anterior Gobierno de Granada había sido disuelto por el Gobierno del Reino Unido, a los 18 meses de estar en el poder, en virtud de un informe preparado por una comisión investigadora con respecto al cual no se pidió la opinión del electorado. En consecuencia, la decisión de cambiar el Gobierno elegido de Granada en 1962 fue adoptada por el Gobierno del Reino Unido y no por la población de Granada. Durante las elecciones de 1962 el Gobierno del Reino Unido recurrió a distintas maniobras electorales: se dijo al pueblo que su Gobierno había sido disuelto, que se habían suspendido la Constitución y todos los subsidios, y que había que elegir un nuevo Gobierno. Puesto que fue el nuevo Gobierno el que declaró su preferencia por la asociación con Trinidad y Tabago, no cabe duda de que el primer obstáculo a la federación de los "ocho pequeños" fue creado por el Gobierno del Reino Unido. Resulta evidente, por la manera en que se presentó al electorado la cuestión de la asociación con Trinidad y Tabago, y por el hecho de que al cabo de cuatro años el Gobierno no había cumplido su promesa, que el único objetivo fue dejar que el Gobierno del Reino Unido ganase tiempo para preparar y aplicar sus nuevas propuestas sobre el Estado asociado, que dividiría para siempre a los Territorios en dos Estados separados.

665. Es claro, en consecuencia, que había una alternativa a las nuevas medidas relativas a los "Estados Asociados de las Indias Occidentales", es decir, la independencia dentro de una federación, pero que no se había dado al pueblo la posibilidad de elegir. Sean cuales fueren las ventajas que pudieran tener las nuevas medidas, caso de tenerlas, dividirían a la población de los Territorios contra sus deseos expresados; cada uno de los nuevos Estados tendría, por ejemplo, su propio himno nacional y su propia bandera. Incluso si el Comité Especial se encontrase ante un hecho consumado, debe condenar sin ambages la estratagema del Gobierno del Reino Unido. La población de los Territorios espera ansiosamente la decisión del Comité, que le ayudará en su determinación de continuar la lucha contra el colonialismo, lograr la unidad y ocupar el lugar que legítimamente le corresponde entre las naciones libres del mundo.

666. En respuesta a preguntas de los miembros del Comité Especial, el peticionario dice que cuando se convocaron elecciones en 1962 el Gobierno que Granada tenía entonces ya había convenido constituir una federación con otros Territorios del

/...

Caribe. Sin embargo, con el cambio de Gobierno se planteó la cuestión de constituir un Estado unitario con Trinidad y Tabago, aunque no se la expuso claramente ni el pueblo la entendió bien, debido a la situación creada por el Gobierno del Reino Unido al disolver el Gobierno de entonces, suspender la Constitución y convocar elecciones. La cuestión de la asociación la decidieron después los Gobierno del Reino Unido y de Granada, aunque el último no tenía mandato para discutirla y menos todavía para poner en vigor los acuerdos de asociación. Sin embargo, los habitantes de Granada no se opusieron a los acuerdos de asociación, como se deduce de la petición que él presentó en nombre del dirigente del partido de oposición, sino a los procedimientos para aplicar los acuerdos. El orador opina que si se celebra inmediatamente un referéndum, en las actuales circunstancias de Granada el pueblo se decidirá por el Estado asociado. Sin embargo, lo cierto es que al poner en vigor los acuerdos el Gobierno del Reino Unido ha violado el principio de libre determinación. Si se pregunta a los habitantes de Granada si quieren ratificar los nuevos acuerdos de asociación con el Reino Unido o unirse con otros territorios en una federación, elegirán la segunda alternativa. El peticionario añade que los resultados de las elecciones de 1962 no representan el deseo de la población porque se celebraron en circunstancias anormales creadas por el Reino Unido.

## B. DECLARACIONES DE LOS MIEMBROS

667. En relación con la declaración formulada en nombre del Sr. Gairy, el representante del Reino Unido señala a la atención del Comité Especial la declaración que formuló su delegación cuando el Comité escuchó al Sr. Gairy en una ocasión anterior (A/AC.109/SR.463). El principal hecho importante ocurrido después de esa audiencia es la renuncia de los miembros del partido opositor en el Consejo Legislativo. Como aclaró la Ministra de Estado para los asuntos del Commonwealth en la Cámara de los Comunes el 14 de febrero de 1967, esas renunciaciones no modifican la posición con respecto a la oportunidad de las elecciones en Granada.

668. Los puntos planteados por el peticionario no afectan en modo alguno la aceptabilidad de las nuevas medidas de asociación que deben entrar en vigor en Granada el 3 de marzo. En la Conferencia de 1966 de las Islas Windward, el Sr. Gairy expresó ciertas reservas acerca de algunas partes de la constitución interna de Granada que habían sido acordadas en esa Conferencia. Esas reservas, sin embargo, no afectaban a la propuesta de que Granada se convirtiera en Estado asociado del Reino Unido, en lo que el peticionario y su partido estaban totalmente de acuerdo al igual que los representantes del partido gubernamental. Sin embargo, cuando se debatió en el Consejo Legislativo el informe de la Conferencia, el Sr. Gairy sostuvo nuevamente que debía haber elecciones antes de que Granada se convirtiera en Estado asociado, a pesar de que el Sr. Gairy había firmado el informe de la Conferencia, y de que además había votado a favor de la resolución del Consejo Legislativo por la que se aprobaba el informe. Además, cuando el Sr. Gairy compareció ante el Comité en septiembre no se opuso a las medidas de asociación. Por consiguiente, la declaración formulada por la Ministra del Reino Unido para los asuntos del Commonwealth a que se refiere la petición del Sr. Gairy es totalmente exacta. El orador señala a la atención un comunicado de prensa de la Oficina del Commonwealth del Reino Unido, en el que se indicaba que, cuando el Sr. Gairy discutió la cuestión en Londres recientemente con la Ministra para los asuntos del Commonwealth, la Ministra le informó que no se habían citado exactamente sus palabras. Si bien estaba al corriente de que el Sr. Gairy había formulado ciertas reservas al informe de la Conferencia, la Ministra le recordó que, al firmar el informe, el Sr. Gairy había expresado su acuerdo en que Granada avanzara hacia la asociación. La oportunidad de las elecciones generales había sido examinada a fondo en la Conferencia de 1966, y se había aclarado entonces que el Gobierno del Reino Unido consideraba

que no era adecuado intervenir en algo que era un asunto interno. El Ministro Principal de Granada ha anunciado ya que deben celebrarse elecciones antes del 15 de enero de 1968.

669. Con relación a la oportunidad de las elecciones, la situación, con arreglo tanto a la Constitución actual como a la constitución nueva, es exactamente la misma de la mayoría de los países que cuentan con un sistema parlamentario de partidos: la Constitución establece el plazo máximo entre las elecciones. Dado que la última elección en Granada se celebró en septiembre de 1962, con arreglo a la Constitución la asamblea legislativa debe ser disuelta a fines de 1967 y las elecciones deben celebrarse a más tardar en enero de 1968. Hay dos circunstancias en que las elecciones podrían celebrarse antes; primero, si el gobierno existente fuera vencido en un voto de confianza en la asamblea, y, segundo, si el Ministro Principal decidiera, por cualquier motivo, aconsejar al Jefe de Estado de Granada que disuelva la asamblea legislativa antes de lo necesario desde el punto de vista constitucional. No existe ninguna disposición en la constitución de Granada, como tampoco en la del Reino Unido, que permita al jefe de la oposición decidir en qué oportunidad deben celebrarse las elecciones, y la renuncia de cuatro miembros de la oposición en el Consejo Legislativo no modifica la situación. Es demasiado tarde para celebrar elecciones parciales con arreglo a la actual Constitución, y con arreglo a la nueva el Primer Ministro tendrá que asesorar al Gobernador, como ocurre con todos los demás asuntos internos, en cuanto a la promulgación de los necesarios decretos de convocatoria a elecciones.

670. El peticionario ha pedido elecciones que permitan al pueblo de Granada pronunciarse acerca de las nuevas medidas de asociación y de la nueva Constitución. Sin embargo, eso ya se ha hecho en realidad; los dos partidos de Granada y sus dirigentes elegidos han indicado que están de acuerdo en principio con el nuevo sistema. El peticionario ha afirmado también que el Gobierno actual no tiene ningún mandato para llevar a Granada a la asociación. Sin embargo, en virtud de los arreglos de asociación, será perfectamente posible para Granada unirse a Trinidad y Tabago, o a cualquier otro país, en el futuro, si así lo desean los pueblos y los Gobiernos interesados. Por consiguiente, la cuestión de si debe celebrarse una elección en breve o de si la asamblea legislativa debe desempeñar el período total establecido en la Constitución es una cuestión puramente interna. Se reconoce que es perfectamente válido que cualquier dirigente de la oposición argumente a favor de la pronta

celebración de elecciones; sin embargo, no es posible por cierto oponerse al principio constitucional de que corresponde al Gobierno y no a la oposición el decidir cuándo deben celebrarse elecciones.

671. En relación con la declaración del propio peticionario, el representante del Reino Unido dice que ya se ha referido a la cuestión constitucional que ha planteado el peticionario. El vocablo "imponer", que el peticionario empleó al referirse a la nueva situación jurídica de Granada, es injusto; los dos partidos políticos de Granada suscribieron íntegramente los nuevos acuerdos y participaron en la Conferencia Constitucional que los preparó. Además, el dirigente del partido de oposición firmó el informe de la Conferencia sobre la propuesta de asociación, y votó en favor de los nuevos acuerdos propuestos.

672. El peticionario se ha referido a la desintegración de la Federación de las Indias Occidentales y ha expresado la esperanza de que algunos de sus miembros formen otra nueva, pero en el Comité no se trata ahora de esta cuestión. Tampoco se trata de los acontecimientos de 1962 en Granada, que son cuestiones ya registradas y no importan actualmente para la política de Granada en vísperas de la soberanía.

673. El peticionario no indica con claridad qué preconiza ni qué actitud adopta ante el mandato del actual Gobierno de Granada. Si el peticionario quiere que Granada se independice por separado o si desea una nueva federación o unión con Trinidad y Tabago, los pueblos interesados tienen esas opciones abiertas. A este respecto, le ha satisfecho oír que los habitantes de Granada no se oponen a los acuerdos de asociación, aunque parece que algunos tienen reservas acerca de los métodos empleados. Quiere decir que la incorporación de Granada como Estado asociado no impedirá ni perjudicará ninguna evolución que el peticionario quiera preconizar en el futuro, desde luego en el entendimiento de que los habitantes de Granada compartirán esa opinión.

674. Por último, el peticionario ha dado la impresión de que los nuevos acuerdos se introdujeron en el Territorio con excesivo apresuramiento. Sin embargo, la delegación del Reino Unido informó al Comité Especial en septiembre de 1966, y desde entonces ha proporcionado constantemente información al Comité. Además, la propuesta original de asociación se distribuyó al Comité en diciembre de 1965.

675. En su declaración general, el representante del Reino Unido dice que, durante la semana que comienza el 27 de febrero de 1967, Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila y Santa Lucía adquirirán una nueva condición jurídica como Estados asociados al Reino Unido. San Vicente, territorio en el que ha

habido ciertos problemas especiales, adquirirá la misma condición jurídica a más tardar el 1.º de junio de 1967. Con la entrada en vigor de la nueva Constitución en cada uno de esos Territorios, las islas se denominarán "Estados Asociados de las Indias Occidentales". La nueva organización representa una modificación en la política de descolonización del Reino Unido. Aunque la condición de Estado asociado no carece del todo de precedentes en el mundo, ciertas características del arreglo propuesto para los seis Territorios de referencia son enteramente nuevas. El orador desea por lo tanto explicarlas con cierto detalle y confía en poder complementar la información que ahora proporciona mediante la distribución del correspondiente Libro Blanco del Reino Unido a los miembros del Comité.

676. En septiembre de 1966 se dio al Subcomité III una explicación detallada de las propuestas de su Gobierno y de los procesos seguidos en su preparación, y dicha explicación fue resumida en el documento A/6300/Add.10 (capítulo XXII, anexo, párrafos 139 a 169). En dicha exposición el orador aclaró que la nueva organización entraría en vigor a comienzos de 1967. La delegación del Reino Unido ha proporcionado también a la Secretaría abundante material al respecto, y muchos de los documentos básicos figuran en el documento de trabajo (véanse los párrafos 133 a 143 supra).

677. Lo primero que el orador desea dejar establecido es que, en virtud de las nuevas disposiciones, los seis Territorios gozarán de plena autonomía. Serán completamente autónomos en sus asuntos internos y de esta manera se dará total cumplimiento a las obligaciones que impone a su Gobierno el Capítulo XI de la Carta. En segundo lugar, los Territorios entrarán a formar parte de una asociación estrictamente voluntaria con el Reino Unido, asociación en virtud de la cual cada Territorio se hallará en completa libertad de declararse independiente, conforme a los procedimientos constitucionales convenidos, en cualquier momento en que desee hacerlo. Del mismo modo, cada isla gozará de entera libertad para dar por terminada su asociación con el Reino Unido y asociarse a cualquier otro Estado. En tercer lugar, las nuevas disposiciones han sido elaboradas en constante consulta con la población de cada uno de los Territorios interesados y han sido aceptadas libre y voluntariamente por la población. Por lo tanto, es evidente que todo cuanto se ha hecho y había de hacerse se ajusta plenamente a las obligaciones que su Gobierno ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

/...

678. Antigua y San Cristóbal, Nieves y Anguila, al igual que Montserrat, forman parte de las Islas Leeward, mientras que Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Granada forman parte de las Islas Windward. Ninguno de los seis Territorios tiene una población mayor de unos 94.000 habitantes, y por lo tanto se estimó que las mejores perspectivas para su futuro las presentaba la asociación de los mismos. La Federación de las Indias Occidentales, incluidos los Territorios que se están considerando y varios otros territorios del Caribe, fue creada en enero de 1958, pero se disolvió en 1962 después del retiro de Jamaica y Trinidad y Tabago. Posteriormente hubo debates acerca de la posibilidad de una nueva federación que incluiría a Barbados, los seis Territorios que actualmente considera el Comité y Montserrat, si bien Granada se retiró de las negociaciones en 1962 y declaró su intención de tratar de asociarse a Trinidad y Tabago. A fines de 1964, se había logrado un grado considerable de acuerdo pero existían todavía graves discrepancias sobre varios asuntos fundamentales. En abril de 1965, Antigua se retiró de las negociaciones. Barbados decidió en consecuencia independizarse por separado, y adquirió su independencia en noviembre de 1966. Resultó así evidente que no existía ninguna perspectiva inmediata de asegurar el acuerdo sobre una federación en la cual los territorios más pequeños serían plenamente independientes. El Gobierno del Reino Unido y muchos de los gobiernos de los Territorios dejaron bien sentado que continuaban considerando como la mejor solución alguna forma de asociación entre los Territorios, pero se hizo evidente que, por el momento, sería menester encontrar alguna otra solución.

679. Durante todo el período que el orador ha descrito, las seis islas ya disfrutaban de gobierno propio en gran medida, pero las disposiciones en vigor no constituían la autonomía interna total.

680. Las circunstancias económicas en las cuales el Gobierno del Reino Unido y los Gobiernos de los seis Territorios han considerado la cuestión del adelanto constitucional se encuentran ampliamente descritos en la exposición de su delegación ante el Subcomité III (A/6300/Add.10, capítulo XXII, anexo, párrafos 146 a 149). El importe total de la ayuda del Reino Unido a los seis Territorios en el ejercicio económico 1965-1966 fue de alrededor de 6.250.000 dólares de los Estados Unidos, y en 1966-1967 es probable que sea de alrededor de 9.150.000 dólares de los Estados Unidos. En 1966, el Reino Unido, los Estados Unidos y el Canadá auspiciaron un

estudio económico tripartito de Barbados y de las Islas Leeward y Windward. La principal recomendación hecha en el estudio se refería a la necesidad de una cooperación económica regional plena. Se pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que patrocinara un estudio acerca de un posible banco regional de desarrollo, el cual incluiría también a los países independientes del Commonwealth situados en el Caribe. Los Gobiernos de las islas convinieron también en formar un comité regional de desarrollo al cual se asociarían los gobiernos que auspiciaron el Estudio Económico Tripartito.

681. Volviendo a la cuestión de las propuestas constitucionales, el orador dice que las islas tienen fuertes vínculos con el Reino Unido, tanto sentimentales como en materia de intereses económicos, y desean vivamente preservar esos vínculos. Sin embargo, varios de los Gobiernos de las Islas quieren tener una mayor fiscalización sobre los asuntos internos. El Gobierno del Reino Unido ha tratado por lo tanto de idear una nueva relación entre los Territorios que fuera conforme a su madurez política pero les permitiera continuara manteniendo con el Reino Unido las lazos que desearan preservar. De conformidad con nuevas propuestas hechas a los Territorios en el otoño de 1965, se sugirió que cada Territorio se convirtiera en un Estado asociado al Reino Unido, y que cada Territorio tuviera pleno control sobre sus asuntos internos, el derecho de enmendar su propia Constitución y la facultad de poner fin a su asociación con el Reino Unido. El Reino Unido aceptaría la responsabilidad de la defensa y de los asuntos exteriores de los Territorios mientras perdure la asociación. Los Estados continuarían teniendo derecho a recibir ayuda del Reino Unido. Los gobiernos de los Territorios han manifestado que aceptan en general las propuestas como base para la negociación, y en cada Territorio se ha celebrado una conferencia con el Gobernador del Territorio y los representantes de todos los partidos de la oposición. En la primera conferencia, con Antigua, se convino que, aunque el Gobierno del Reino Unido tendrá en definitiva la responsabilidad de la defensa y de los asuntos exteriores, procederá siempre en consulta con el Gobierno de Antigua, y el Gobierno del Reino Unido prometió delegar en el de Antigua una parte importante de su autoridad con respecto a las relaciones exteriores de la isla. También se llegó a pleno acuerdo con respecto a un esquema de la nueva constitución interna de Antigua, en virtud de la cual el Parlamento de la isla se hallará en libertad de enmendar o reemplazar la constitución, la cual ha de ser



plenamente democrática y ha de incluir medidas destinadas a preservar los derechos humanos. El Gobernador ejercerá los poderes de un Jefe de Estado constitucional, actuará en todos los casos con el asesoramiento de sus Ministros, y no se hallará de modo alguno sometido a instrucciones del Gobierno del Reino Unido. La Cámara de Representantes, al igual que el actual Consejo Legislativo, será elegida por sufragio universal, y el poder ejecutivo será ejercido por un gabinete dirigido por un Primer Ministro que deberá tener mayoría en la Cámara. El Senado tendrá poderes limitados de aplazamiento, y su composición representará ampliamente la posición de los partidos en la Cámara Baja. En la Constitución habrá ciertas cláusulas rígidas que sólo podrán ser enmendadas después de su aprobación por una mayoría de dos tercios en un referéndum. Sin embargo, se ha convenido que no habrá necesidad de referéndum en relación con un proyecto de ley para dar por terminada la asociación entre el Reino Unido y Antigua y poner en vigencia disposiciones en virtud de las cuales Antigua se una a otros países del Commonwealth, ya sea mediante unión o federación. Tampoco habrá necesidad de aprobación mediante referéndum si Antigua entra en alguna otra forma de asociación constitucional con un país independiente del Caribe, integrante del Commonwealth, en virtud de la cual este último país tome a su cargo las responsabilidades del Reino Unido con respecto a la defensa y a las relaciones exteriores de Antigua. Aparte de eso, Antigua podrá libremente dar por terminada su asociación con el Reino Unido en cualquier momento mediante el mismo procedimiento que se aplicaría para enmendar las cláusulas rígidas de la Constitución.

682. En la Conferencia celebrada con los representantes de las cuatro Islas Windward, la delegación de dichas Islas pidió una asociación más estrecha en el ámbito económico entre el Reino Unido y los Territorios. Sin embargo, la delegación del Reino Unido se vio en la obligación de señalar que dichos problemas se hallaban fuera del alcance de la Conferencia. Los delegados de las Islas Windward aceptaron dicha posición y la Conferencia continuó elaborando una serie de acuerdos, los cuales comprenden tanto las constituciones internas de los Territorios como las disposiciones para la asociación entre cada Territorio y el Reino Unido, con arreglo a normas muy similares a las establecidas en el caso de Antigua. La única diferencia importante es que varias delegaciones de las Islas Windward pidieron garantías de que la facultad del Reino Unido para dar por terminada en forma unilateral la asociación no sería ejercida en forma arbitraria o repentina. El Gobierno del Reino Unido se comprometió - compromiso que también se aplica a Antigua y a San Cristóbal, Nieves

y Anguila - a no dar por terminada la asociación sin comunicar con seis meses de anticipación su propósito de hacerlo, y manifestó su disposición de celebrar una conferencia con el Territorio respectivo en la cual se discutirían todas las consecuencias de la terminación de la asociación. Con respecto a cualquier propuesta para finalizar la asociación por parte del Reino Unido, se requerirá la aprobación del Parlamento de dicho Estado. Los propios Territorios tienen, por supuesto, el derecho de dar por terminada en forma unilateral la asociación, sin tener en cuenta las opiniones del Gobierno o del Parlamento del Reino Unido.

683. La Conferencia con los representantes de San Cristóbal, Nieves y Anguila llegó también a un pleno acuerdo semejante al de las dos Conferencias anteriores. En las tres Conferencias se convino que existirían ciertas disposiciones comunes con respecto a los tribunales de los seis Territorios. En septiembre de 1966, se celebró en Santa Lucía una Conferencia para considerar las disposiciones tendientes a organizar una Corte Suprema regional. La Conferencia examinó las disposiciones legales que habrían de dictarse para la Corte Suprema y aprobó el proyecto de texto de un acuerdo sobre disposiciones administrativas para la Corte.

684. Las disposiciones convenidas en todas esas conferencias han sido sometidas a la aprobación de las seis Asambleas Legislativas respectivas. En cada Territorio, las disposiciones propuestas han sido aprobadas mediante una resolución oficial. En Antigua, Dominica, Santa Lucía, Granada y San Cristóbal, Nieves y Anguila, las resoluciones pertinentes fueron aprobadas por unanimidad. En San Vicente, la resolución fue aprobada sin división, aunque los miembros de la oposición abandonaron el Consejo Legislativo antes de la votación, como protesta contra la negativa del Gobierno de San Vicente a aplazar la introducción de nuevas disposiciones mientras se hallaban pendientes ciertas reclamaciones electorales. Sin embargo, cabe hacer notar que los oradores de la oposición que usaron de la palabra en el debate no atacaron las disposiciones relacionadas con la asociación como tales, y que tanto el Gobierno como los dirigentes de la oposición firmaron el informe de la respectiva conferencia en Londres.

685. En cuatro de los Territorios, se utilizó una forma adicional de consulta indirecta con respecto a las disposiciones mediante la celebración de elecciones generales después del anuncio de las nuevas propuestas del Reino Unido. En Antigua, se

/...

celebró en noviembre de 1965 una elección general en la cual quedó aclarado que el partido oficial, si resultaba elegido, trataría de negociar una vinculación con el Reino Unido que entrañara un mayor grado de autonomía interna para el Gobierno, mientras que la responsabilidad de la defensa de los asuntos exteriores se dejaría en manos del Reino Unido. El partido ganó los diez escaños de la asamblea legislativa, con lo cual la política recibió así el claro apoyo del electorado. En Dominica, se celebraron elecciones en enero de 1966, y el Dominica Labour Party, que había anunciado que trataría de negociar una nueva relación con el Reino Unido sobre la base de las nuevas propuestas, obtuvo diez de los once escaños. El partido de la oposición aceptó también las nuevas disposiciones. En San Cristóbal, Nieves y Anguila, se celebraron elecciones en julio de 1966 y los miembros de todos los partidos que obtuvieron escaños en las elecciones firmaron el informe de la Conferencia de Londres. En San Vicente, los representantes de ambos partidos firmaron el informe de la Conferencia pertinente. El escaso margen de los resultados de la elección general celebrada en agosto de 1966, en la cual se presentaron reclamaciones en las que se discutían los resultados de varios distritos, produjeron dificultades en la política interna. Dichas dificultades se hallan ahora resueltas después de conversaciones celebradas en Londres entre los Ministros del Reino Unido y el Ministro Principal y el jefe de la oposición del Territorio. En dichas conversaciones se convino que algunos aspectos de la Constitución de San Vicente, tal como se acordara en la Conferencia de Londres, serían objeto de ciertas modificaciones, que una comisión de límites independiente establecería la delimitación de los distritos electorales y se celebrarían nuevas elecciones a más tardar en diciembre de 1968, y que San Vicente adquiriría la condición de Estado asociado a más tardar el 1.º de junio de 1967.

686. En Granada y en Santa Lucía la situación es ligeramente diferente. El mandato de la asamblea legislativa de Granada dura hasta julio de 1967 y el de Santa Lucía hasta julio de 1969. En cada Territorio, tanto el Gobierno como los partidos de oposición han aceptado las nuevas disposiciones, aunque en Granada la oposición ha formulado reservas acerca de una cantidad de detalles de la constitución interna propuesta. En algunos casos, la responsabilidad de la recomendación de la fecha de nuevas elecciones, si se celebran antes de la época especificada por la constitución

/...

corresponde explícitamente al Ministro Principal. En Granada la oposición ha insistido en la celebración de nuevas elecciones antes de que entren en vigencia las nuevas disposiciones sobre asociación, y el Gobierno elegido de Granada se ha resistido a ese pedido.

687. El tercer Territorio en el cual suscitaron dificultades particulares fue el de San Cristóbal, Nieves y Anguila, pues en la isla de Anguila, se experimentó cierta ansiedad acerca de la relación entre Anguila y la isla de San Cristóbal. El miembro representante de Anguila en el Consejo Legislativo concurrió a la Conferencia Constitucional celebrada en Londres y firmó el informe de la Conferencia sin reservas. Posteriormente fue reelegido como representante de Anguila. En la Conferencia se convino que tanto en Nieves como en Anguila se establecería un nuevo sistema de administración local y que dicho sistema estaría previsto en la nueva constitución. Se ha convenido en que el Parlamento local decida acerca de los detalles del sistema, pero que de conformidad con la Constitución habrá consejos separados, uno para Nieves y otro para Anguila. Por lo menos dos tercios de los miembros de cada consejo serán elegidos. En consecuencia, se incluyeron en el proyecto de constitución disposiciones apropiadas. Los intereses especiales de Anguila se hallan así completamente protegidos. Las recientes dificultades producidas en Anguila fueron principalmente originadas por un equívoco acerca de los propósitos del Gobierno de San Cristóbal, Nieves y Anguila. El Gobierno del Reino Unido y el de San Cristóbal, Nieves y Anguila confían en que la publicación de la constitución de San Cristóbal, Nieves y Anguila dé nuevas garantías a la población de Anguila. El orador desea añadir que el principio de la asociación con el Reino Unido ha sido plenamente aceptado por el representante elegido del pueblo de Anguila.

688. El West Indies Bill, destinado a permitir a los seis Territorios adquirir la nueva condición de asociados a Gran Bretaña y en general a hacer efectivas las conclusiones de las tres Conferencias celebradas en Londres, fue aprobado por el Parlamento y recibió el asentimiento real el 16 de febrero de 1967. Varios decretos reales dictados de conformidad con el West Indies Act entrarán en vigor en breve para fijar las fechas en las cuales darán comienzo las nuevas asociaciones y para establecer la constitución de los Territorios. Los cargos de Administrador de cada uno de los seis Territorios serán abolidos en virtud de la nueva constitución, y un representante del Gobierno del Reino Unido tendrá a su cargo en el futuro el enlace entre

/...

los Estados asociados y el Gobierno del Reino Unido. En los informes de las Conferencias y en los Libros Blancos que la delegación del Reino Unido distribuirá a la mayor brevedad posible figuran nuevos detalles acerca de los acuerdos entre el Reino Unido y los Territorios que reglamentan el ejercicio de la responsabilidad británica en cuanto a las relaciones exteriores y la defensa, y sobre las disposiciones convenidas para las constituciones internas de los territorios.

689. Así pues, los seis Territorios gozarán de autonomía total. La asociación de cada Territorio con el Reino Unido será enteramente voluntaria. La West Indies Act establece que la asamblea legislativa de cualquier Estado asociado podrá en cualquier momento dar por terminada la asociación, en forma unilateral y con arreglo a su propia legislación; así pues, en el futuro dependerá de los Estados asociados el proceder ya sea a declarar la independencia o a celebrar alguna forma de asociación con uno o más de los demás países de la región. Todas estas disposiciones, tanto para las constituciones internas de los Territorios como para las condiciones de su asociación con el Reino Unido, han sido elaboradas en la forma más detallada mediante consultas con los representantes de la población de los Territorios, y han sido plenamente aceptadas por dichas poblaciones. En realidad, la consideración primordial que se tuvo en cuenta en todo momento fue la actuación en consulta con la población de las islas. El orador confía en que, cuando el Comité Especial haya examinado la gran cantidad de información sobre el asunto, estimará que la población de los Territorios merece ser felicitada por el trabajo arduo que ha significado el paso a su nueva condición.

690. El representante de Malí dice que no entiende del todo la relación entre el Gobernador y el Gobierno de Antigua. Si el Gobierno es derrotado en el Parlamento, ¿caerá el Gobernador junto con los Ministros?

691. El representante de Siria hace notar que el representante del Reino Unido pareció dar poca importancia a las reservas del Sr. Gairy, dirigente de la oposición de Granada. Solicita que se aclaren dichas reservas.

692. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dice que de la declaración del peticionario resulta evidente que las conversaciones sobre la condición futura de Granada se han celebrado únicamente entre los representantes del Gobierno y de la oposición, y que no se ha hecho tentativa alguna de determinar las

opiniones de la población. La última vez que el Comité Especial examinó la cuestión de Granada, la delegación del Reino Unido dijo que no existía procedimiento especial para consultar a la población. La delegación de la Unión Soviética no quedó satisfecha con esa declaración, y preguntó al representante del Reino Unido qué procedimiento había para consultar la voluntad de la población con respecto a la condición futura de Granada.

693. El representante del Irak pregunta si, la asistencia financiera mencionada por el representante del Reino Unido proviene sólo del Gobierno del Reino Unido o de otro gobierno también. También le agradecería saber si parte de dicha asistencia se gasta en los sueldos de los funcionarios del Reino Unido o de otros funcionarios extranjeros de los Territorios.

694. El representante del Reino Unido subrayó el derecho de los Territorios a abandonar la asociación cuando lo desearan, pero no hizo ningún hincapié acerca de la forma en la cual se había decidido establecer la asociación. Se refirió a la mayoría de dos tercios necesaria para separarse de la asociación. Pero cuatro miembros del órgano legislativo han renunciado debido a la cuestión de la asociación, lo cual deja sólo a los seis miembros oficiales. El orador se pregunta si seis miembros, de un total de diez, constituyen la mayoría de dos tercios del electorado o de la opinión pública del Territorio.

695. El representante del Irán pregunta si se considera alguna relación orgánica de los seis Territorios que han de asociarse al Reino Unido. En segundo lugar, le agradecería saber si la población de los Territorios tuvo la oportunidad de optar por la independencia en vez de la asociación con el Reino Unido, y si se le han explicado las ventajas de esa otra solución antes de que sus representantes fueran consultados con respecto a su condición futura.

696. El representante del Uruguay señala la importancia de garantizar que la salida de un Territorio de su condición colonial se efectúe de conformidad con la voluntad de la mayoría, pues en lo sucesivo las Naciones Unidas dejan de tener jurisdicción alguna. Si los Territorios que se examinan optan por alguna forma de asociación, la declaración de la independencia absoluta será luego un asunto que deberá decidir cada gobierno asociado, de conformidad con las constituciones respectivas. Pero si en dichas constituciones se establecen quorums especiales, y no se observa el principio de la simple mayoría, la decisión podría quedar en manos de minorías y la

libertad de los pueblos interesados podría resultar restringida. El orador desearía que el Reino Unido diera seguridades expresas a ese respecto.

697. El representante de Túnez hace notar que el representante del Reino Unido no ha hecho referencia a las Naciones Unidas al hablar de los Territorios que se consideran, y pregunta si no se podría invitar a la Organización a concurrir y a observar sobre el terreno el proceso de descolonización que el Reino Unido está llevando a cabo.

698. El representante de Bulgaria dice que a él también le agradaría saber más acerca de los procedimientos utilizados para determinar la voluntad de las poblaciones de los Territorios, y si éstas tuvieron oportunidad de optar por la independencia.

699. El representante de Venezuela señala que los Territorios que constituyen la asociación han de disfrutar de plena autonomía interna. El orador desearía saber cómo han de decidirse sus asuntos interiores.

700. El Presidente, hablando como representante de la República Unida de Tanzania, dice que en la mayoría de sus Territorios el Reino Unido ha previsto elecciones antes de la transición de la autonomía a la independencia. Al haber negociado una nueva condición jurídica para los Territorios que se examinan ¿por qué el Gobierno del Reino Unido no dispuso la celebración de elecciones para que la población pudiera expresar su opinión?

701. El representante del Reino Unido dijo que, si los Estados asociados deseaban optar por otra condición, sería necesaria la mayoría de dos tercios. ¿Por qué, entonces, no fue necesario que el Gobierno del Reino Unido instituyera un referéndum con mayoría de dos tercios para que los Territorios asumieran su nueva condición?

El orador pregunta si el Gobierno del Reino Unido no podría aplazar la entrada en vigencia de la nueva condición jurídica de esos Territorios hasta que el Comité Especial haya tenido tiempo de informar a la Asamblea General.

702. En respuesta a las anteriores preguntas relativas a la nueva condición jurídica de la asociación que ha de entrar en vigor próximamente entre el Reino Unido y cinco de los seis territorios del Caribe oriental, el representante del Reino Unido dice que la respuesta a alguna de las preguntas puede hallarse en los documentos que la delegación británica confía poder proporcionar al Comité Especial el 24 de febrero. De ese modo, la pregunta que hizo el representante de Malí acerca de la relación exacta entre el Gobernador y el Primer Ministro y los ministros de cada Estado asociado, una vez que se establezca la nueva condición, queda contestada en los informes de las tres Conferencias Constituyentes celebradas en Londres, con respecto a las constituciones de los territorios. El Gobernador de cada Estado asociado no estará sujeto en modo alguno al control del Gobierno del Reino Unido, cuyas relaciones con los Estados asociados se mantendrán por conducto de otro funcionario, es decir, el representante del Gobierno del Reino Unido. El Gobernador de Antigua, por ejemplo, será simplemente un jefe constitucional de Estado que ejercerá sus facultades únicamente por consejo del Primer Ministro y de los ministros, y cuya posición será estrictamente análoga a la de la Reina en el Reino Unido o a la del Gobernador General en Australia o Sierra Leona.

703. Del mismo modo, la pregunta que hizo el representante de Siria acerca de las reservas formuladas por el Sr. Gairy, ex jefe de la oposición en Granada, con respecto a los acuerdos concertados para la Constitución de Granada, puede contestarse remitiendo al informe de la Conferencia sobre las Islas Windward (Command Paper 3021). En la página 11 de ese informe se señala que las reservas del Sr. Gairy se referían a los párrafos 5, 6, 11 y 17 del apéndice IV, en el que se describe la Constitución de Granada; en dichos párrafos se trata del Senado y de la Cámara de Representantes, de las disposiciones transitorias respecto del órgano legislativo, y de las disposiciones relativas a la unión con otro país del Commonwealth sin efectuar un referéndum.



704. El representante del Uruguay preguntó qué garantías existían de que un gobierno minoritario no introduciría cambio alguno en la condición jurídica de una isla sin que hubiera pruebas satisfactorias de que gran parte de la población deseara ese cambio. También se describen estas garantías en los informes de las tres Conferencias. Por ejemplo, en el párrafo 20 del informe de la Conferencia sobre Antigua (Command Paper 2963) se declara que para que Antigua dé fin a la asociación se precisará una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y una mayoría de dos tercios en un referéndum; sin embargo, no será preciso un referéndum para dar fin a la asociación con objeto de establecer una asociación constitucional de cualquier índole con un país independiente del Commonwealth en la zona del Caribe o con uno o varios Estados asociados en una nueva unidad independiente. Si bien en general se está de acuerdo en que por ahora no es factible una asociación con los países vecinos del Caribe pertenecientes al Commonwealth, se mantiene la esperanza de que esta unión será posible en lo futuro; por lo tanto, se ha eliminado el requisito de una mayoría de dos tercios en un referéndum para tal eventualidad, con el completo acuerdo de los representantes de los Territorios en las tres Conferencias. Un gobierno que sólo tenga una minoría de los votos emitidos puede tener una mayoría en el órgano legislativo, pero no es probable que tenga una mayoría de dos tercios en la Cámara baja; por lo tanto, existe una garantía adecuada contra el riesgo que mencionó el representante del Uruguay.

705. En respuesta a la pregunta que hizo el representante de Venezuela acerca de las relaciones exteriores de los nuevos Estados asociados, se puede decir, en términos muy generales, que el Gobierno del Reino Unido se hará cargo de las relaciones exteriores de cada uno de los Estados asociados, pero en todo lo posible delegará en el gobierno de los Estados sus facultades sobre determinadas materias. En el documento de trabajo de la Secretaría (véanse los párrafos 135 a 137 supra) figuran en detalle las disposiciones relativas a la administración de las relaciones exteriores. En virtud de las facultades en ellos delegadas, los gobiernos de los Estados podrán solicitar su admisión como miembros con plenos derechos o miembros asociados en los organismos especializados de las Naciones Unidas o en organizaciones semejantes, negociar y concertar ciertos tipos de acuerdos comerciales con otros países, organizar visitas con fines comerciales, negociar y firmar

acuerdos de interés puramente local con cualquier otro país del Commonwealth o cualquier territorio británico de la región, y aprobar diversas medidas sobre cuestiones de ayuda extranjera y otras cuestiones de relaciones exteriores.

706. Las respuestas a las preguntas que hizo el representante del Irak acerca de la ayuda al Caribe oriental, no pueden darse por el momento por no haberse recibido todavía en Nueva York, pero se están haciendo averiguaciones y el orador espera poseer en breve esta información.

707. Las relaciones orgánicas entre los seis Estados asociados y el Reino Unido, acerca de las cuales preguntó el representante del Irán, quedarán determinadas y se regirán por la Ley relativa a las Indias Occidentales, las distintas órdenes constitucionales en que figurarán las constituciones de los territorios, la orden por la que se establezca la Corte Suprema de los Estados asociados de las Indias Occidentales las órdenes relativas a las apelaciones ante el Consejo Privado y a las indemnizaciones y jubilaciones, y en diversos acuerdos entre el Gobierno del Reino Unido y los Estados relativos a la defensa y las relaciones exteriores. Estos acuerdos serán complementados con despachos como los que figuran en los informes de las Conferencias.

708. El representante del Irán también preguntó si la población de los Territorios había tenido la oportunidad de optar por la independencia, en vez de la libre asociación. La respuesta es que una vez en vigor los arreglos relativos a la asociación, la población de cada Estado tendrá el derecho de decidirse en cualquier momento a favor de la independencia. La otra posibilidad, en vez de la propuesta asociación, habría sido que las islas continuaran siendo colonias indefinidamente; esto habría sido inaceptable sin duda para los miembros del Comité Especial y, desde luego, lo habría sido también para el Gobierno del Reino Unido, como se indica en el párrafo 9 del informe sobre la Conferencia sobre las Islas Windward (Command Paper 3021).

709. El Presidente preguntó por qué el Gobierno del Reino Unido no había organizado preguntó por qué el Gobierno del Reino Unido no había organizado elecciones generales o un referéndum antes de que se efectuara un cambio en la condición jurídica de los Territorios. Es muy cierto que en muchos otros territorios coloniales, especialmente cuando la propuesta de avanzar hacia la independencia era objeto de controversias en el plano local, se celebraron elecciones antes de adoptar definitivamente la decisión de conceder la independencia. Sin embargo, en el caso de los seis Territorios del Caribe oriental, ningún partido político buscaba la independencia y todos convinieron en apoyar las nuevas disposiciones relativas a la

asociación; además, la decisión adoptada no es concluyente ni irrevocable. En los propios arreglos relativos a la asociación figuran las disposiciones concernientes a la consulta de toda la población acerca del futuro por medio de referéndums y por conducto de sus órganos legislativos elegidos; con arreglo a la Constitución de los Estados y en virtud de las disposiciones relativas a la asociación, los partidarios de la independencia podrán tratar de obtener apoyo en los órganos legislativos y entre la población para introducir las medidas constitucionales apropiadas para obtener la independencia.

710. El orador confía en que con su exposición también ha contestado a diversas preguntas que hicieron los representantes de la Unión Soviética, el Irak, el Irán y Bulgaria y el Presidente.

711. Con respecto a la cuestión concreta planteada por el representante del Irak acerca de Granada, es cierto que los seis miembros gubernamentales del órgano legislativo de Granada no constituyen los dos tercios de los diez miembros de ese órgano; sin embargo, la resolución por la que se aceptan las nuevas disposiciones relativas a la asociación fue aprobada en el órgano legislativo antes de que renunciaran a su cargo los miembros de la oposición, no por una mayoría de dos tercios sino por unanimidad. En los demás órganos legislativos, las resoluciones también se aprobaron por unanimidad.

712. En cuatro de los seis Territorios se han celebrado elecciones dentro del marco de las propuestas de asociación de los nuevos Estados con el Reino Unido. En cada caso, o bien un partido favorable a los arreglos propuestos ha vuelto a ocupar el poder con una mayoría considerable, o bien ambos, el gobierno y la oposición, han apoyado dichos arreglos; en los dos territorios en que no se han celebrado elecciones, ha habido un acuerdo semejante entre el gobierno y los partidos de la oposición. Por lo tanto, es evidente que la población de cada uno de los territorios aprueba los arreglos de asociación propuestos.

713. Por último, en lo que se refiere a las preguntas que hizo el representante de Túnez, el Gobierno del Reino Unido siempre ha reconocido plenamente los intereses legítimos de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional al dar cumplimiento a sus deberes, tanto en virtud de la Carta como de otra índole, para con los pueblos de sus territorios dependientes. El Gobierno británico siempre ha cooperado plenamente con el Comité Especial y ha suministrado información completa y detallada

/...

acerca de la política del Reino Unido y de su aplicación, tanto en relación con los territorios del Caribe oriental como de otros territorios. En la declaración del Reino Unido ante el Subcomité III, el 8 de septiembre de 1966, se suministró información detallada sobre las propuestas de asociación; esa declaración se incorporó en el informe del Subcomité al Comité Especial y en el informe del Comité a la Asamblea General; además, había a disposición del Comité y de la Secretaría una gran masa de datos en forma de documentos publicados y otros informes. Sea como fuere, los Territorios son sociedades abiertas que pueden visitarse libremente, por lo que sería imposible deformar la verdadera situación en los Territorios o impedir que cierta clase de información llegara a las Naciones Unidas.

714. Por último, el Presidente preguntó si se podrían posponer algunos de los arreglos propuestos mientras el Comité Especial estudiaba la cuestión. Sería muy difícil justificar tal aplazamiento a las poblaciones de los Territorios; saben que todas las propuestas fueron explicadas al Comité Especial en septiembre de 1966 y que en cinco de los seis Territorios se ha previsto la entrada en vigor de los arreglos para dentro de pocos días. Dificilmente pueden detenerse a última hora los preparativos para la celebración de su nueva condición jurídica. Además, prácticamente toda la legislación pertinente ya ha sido aprobada y ha quedado terminada, o está a punto de entrar en vigor. Sin embargo, la entrada en vigor de los nuevos arreglos de asociación, que ofrecen a la población de los nuevos Estados oportunidades muchísimo más amplias de elección, no tiene por qué impedir en modo alguno que el Comité Especial continúe estudiando la situación en la zona del Caribe oriental, y la delegación del Reino Unido tendrá mucho gusto en cooperar plenamente en la realización de ese estudio.

715. El representante de la República Unida de Tanzania dice que la primera declaración hecha por el representante del Reino Unido ha dado a la delegación de Tanzania cierta preocupación, especialmente si se tiene en cuenta que en dicha declaración se eludieron algunos de los conflictos que existen entre las aspiraciones de la población de los Territorios y los planes de la Potencia administradora. Las preguntas pertinentes que se han hecho a ese representante ponen de manifiesto la inquietud del Comité. El representante del Reino Unido tampoco ha tratado de las cuestiones que preocupan en especial al Comité, concretamente, las obligaciones que la Carta impone a la Potencia administradora en relación

con sus pueblos colonizados, la responsabilidad de las Naciones Unidas para con dichos pueblos y, lo más importante, las aspiraciones legítimas de los pueblos colonizados a ocupar el lugar que les corresponde en la comunidad mundial por su propia elección libre.

716. El representante del Reino Unido declaró categóricamente que, en virtud de los nuevos arreglos, los Territorios alcanzarían la plena autonomía. Sin embargo, el orador rechaza terminantemente ese argumento. Las conclusiones y recomendaciones del Comité Especial respecto de los seis Territorios (A/6300/Add.10, párr. 469) han reafirmado que incumbe exclusivamente a la población de los Territorios manifestar libremente su voluntad acerca de la forma de estatuto político que desean adoptar, a fin de alcanzar los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Dichas conclusiones reafirman también el derecho de la población de los Territorios a ejercer su derecho a la libre determinación en completa libertad y con pleno conocimiento de las diversas formas de estatuto político que se les brindan, y expresan la creencia de que, sobre todo en el caso de los Territorios pequeños, las Naciones Unidas deberían tomar medidas apropiadas para asegurar que la población de los Territorios esté en condiciones de expresarse acerca de su futura condición libremente y con pleno conocimiento de las posibles opciones. Sin embargo, en la presente sesión, el representante del Reino Unido ha declarado que no se ha tomado ninguna disposición para consultar a la población en su totalidad, porque no se ha tomado ninguna decisión irrevocable.

717. El representante del Reino Unido ha declarado también que en Granada han surgido ciertas dificultades debido a que el partido de oposición no está de acuerdo con ciertas disposiciones de la nueva Constitución y ha solicitado que se celebren elecciones antes de que entren en vigor los nuevos arreglos. Sin embargo, la Potencia administradora niega su responsabilidad por la celebración de elecciones en Granada. Esta situación recuerda otras situaciones coloniales en las que el Reino Unido trató de imponer sus innovaciones en contra de los deseos de las poblaciones interesadas. La delegación de Tanzania sigue manteniendo que es deber de la Potencia administradora permitir que los pueblos de los territorios coloniales en su totalidad ejerzan

su derecho a manifestar total y libremente sus deseos. Este es un derecho fundamental e inalienable, consagrado tanto en la Carta como en la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, que en Granada no ha sido respetado. En la Carta y en la Declaración también está implícito el deber de la Potencia administradora de asegurar que las Naciones Unidas tengan alguna relación con el ejercicio de ese derecho. Sin embargo, parece que la Potencia administradora no está dispuesta a cumplir con su obligación de celebrar elecciones en los territorios. Además, como se señala en la petición presentada por el jefe del partido de la oposición de Granada, la entrada en vigor de los arreglos propuestos no sólo sería inconstitucional, sino que negaría al pueblo de Granada su derecho fundamental a elegir el primer órgano legislativo bicameral de su historia, en conformidad con el principio de la libre determinación.

718. Así, pues, es importante saber por qué el Reino Unido se niega a modificar su actitud. En virtud de la Constitución actual, el mandato del órgano legislativo expira en octubre de 1967 y, normalmente, la Potencia administradora tendría que convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, en virtud de los nuevos arreglos, la autoridad ejecutiva y administrativa actual ha de continuar ejerciendo su cargo durante otros cinco años, lo que quiere decir que no se consultará a la población del territorio acerca de su estatuto constitucional ni se le informará plenamente de la situación durante un período de diez años. En efecto, el partido de la oposición ha dimitido del órgano legislativo para mostrar la oposición de la población a esa negativa de sus legítimos derechos. El Gobierno del Reino Unido no ha cumplido, pues, las obligaciones contraídas en virtud de la Carta y de la Declaración.

719. El representante del Reino Unido ha señalado también que hay ciertos problemas en relación con Anguila y que espera que la publicación de la Constitución de San Cristóbal, que incluye disposiciones para el gobierno local de Anguila, servirá de seguridad para la población de ese Territorio. Si esto significa que las disposiciones que se desean poner en vigor en un futuro próximo no han sido ni siquiera publicadas todavía, la situación es muy grave.

720. La delegación de Tanzania se preocupa también por los aspectos económicos de la situación en los seis Territorios. El Reino Unido se ha esforzado en subrayar la importancia de sus vinculaciones económicas con los Territorios y, aunque no desea

discutir el tipo de ayuda económica que se concede, es inquietante que en la actualidad se insista tanto en ese aspecto. La delegación de Tanzania ha mantenido siempre que el derecho de los pueblos a la libre determinación no debe ser restringido por ninguna consideración económica; la viabilidad económica de cualquier territorio es una cuestión que incumbe exclusivamente a la población de dicho territorio. En el pasado, los intereses económicos se han utilizado con frecuencia en los territorios coloniales como un arma para intimidar a los pueblos que luchan por sus aspiraciones legítimas.

721. El propio Comité Especial tiene obligaciones con respecto a los territorios que se están examinando y debe asegurarse de que las Potencias coloniales cumplan sus obligaciones y que los pueblos colonizados alcancen la libre determinación. La situación en los seis Territorios pone de manifiesto que existen contradicciones fundamentales entre la población y las autoridades coloniales, consecuencia de las tentativas de la Potencia administradora de denegar a los pueblos el derecho a la libre determinación. El Comité Especial, por consiguiente, debe inmediatamente pedir a la Potencia administradora que se abstenga de tomar medida alguna para llevar a cabo sus planes que haga peligrar aun más el legítimo derecho de las poblaciones interesadas a la libre determinación, y debe también pedir al Reino Unido que consulte a la población de los Territorios en su totalidad acerca de su estatuto futuro, mediante una elección o un plebiscito. A este respecto, el Comité Especial, como representante de las Naciones Unidas, debe decidir que ha de intervenir en tales consultas.

722. El representante del Uruguay desea aclarar lo que dijo anteriormente. Señaló que si los pueblos de los territorios no pueden decidir ulteriormente, por mayoría simple, que desean renunciar al estatuto de asociación y asumir la independencia total, podía verse restringida la libertad de los pueblos interesados. El representante del Reino Unido, en su contestación ha subrayado que una decisión en favor de la independencia completa requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y una mayoría de dos tercios en un referéndum. Ese es precisamente el problema: esas disposiciones tenderán a proteger el statu quo y a limitar la posibilidad de libre determinación. No habría nada que

oponer a ningún arreglo particular entre un territorio y la antigua Potencia colonial siempre y cuando, en virtud de la Constitución, el pueblo indígena pudiera optar por la libertad total por mayoría absoluta pero, en caso contrario, su libertad de elección estaría limitada. Con la exigencia de una mayoría de dos tercios, una minoría podría bloquear cualquier decisión a favor de la independencia completa. El orador considera que esta cuestión preocupa a todos y que convendría aclararla.

723. Las anteriores decisiones de los órganos de las Naciones Unidas son favorables al concepto de asociación, siempre que esta solución sea libremente escogida por la población indígena y que la elección sea supervisada por las Naciones Unidas. No basta con decir que no se ha manifestado oposición alguna a los arreglos propuestos; la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General exige no sólo la ausencia de oposición, sino la existencia de un deseo positivo de una determinada solución. Si se demuestra que existe ese deseo, y siempre que los Estados asociados puedan escoger en cualquier momento la independencia completa por mayoría absoluta, el Comité podrá perfectamente apoyar un arreglo de asociación.

724. El representante del Irak desea unirse a las observaciones hechas por el representante de la República Unida de Tanzania y particularmente a su insistencia en la necesidad de cumplir las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. En las resoluciones de las Naciones Unidas se ha destacado repetidas veces que no debe romperse la unidad de los territorios coloniales, pero las observaciones del representante del Reino Unido parecen abrir el camino a la fragmentación de los territorios. El representante de Tanzania se ha referido también a la gran importancia que el representante del Reino Unido concede a la asistencia económica de su país a esos territorios. El orador quisiera que el representante del Reino Unido diera más detalles acerca de dicha asistencia. A este respecto, el representante del Reino Unido afirmó en la sesión anterior que los territorios tienen vínculos muy fuertes, tanto sentimentales como económicos, con la Gran Bretaña. Desearía que se le explicara esta afirmación, porque no sabe qué lazos sentimentales pueden existir entre una antigua colonia y la Potencia colonial.

725. El representante del Reino Unido se ha referido también a las disposiciones que permiten a cualquier territorio poner fin a su asociación con el Reino Unido y unirse en alguna forma de asociación con un país independiente del Commonwealth en



el Caribe. El representante del Irak se pregunta qué procedimiento habría de seguirse si uno de los Territorios deseara asociarse con un país que no fuera miembro del Commonwealth ni estuviera situado en el Caribe. Además, según la información que figura en el documento de trabajo de la Secretaría, cierto país que no es miembro del Commonwealth está colocado en una posición privilegiada en lo que respecta a las relaciones científicas y culturales. Quisiera saber por qué se ha hecho esa excepción.

726. El representante del Irán dice que aprecia la amplia declaración hecha por el representante del Reino Unido en respuesta a las preguntas que se le han formulado. Sin embargo, dicho representante ha insistido en el hecho de que la decisión a favor de la asociación no es irrevocable. Pero la cuestión fundamental se refiere a los derechos soberanos de la población. Podría ser posible convenir en levantar un tanto las restricciones de los derechos soberanos de la población inherentes al estatuto colonial en virtud del nuevo estatuto. Sin embargo, el orador observa que el representante del Reino Unido se ha abstenido de afirmar que la población del Territorio ha ejercido su derecho a la libre determinación. ¿Ha ejercido ese derecho al elegir la asociación con el Reino Unido o sencillamente ha pasado a una etapa superior de desarrollo político? El orador desearía saber si el representante del Reino Unido considera que la decisión constituye un ejercicio del derecho a la libre determinación. Al recuperar sus plenos derechos soberanos, el pueblo puede escoger unirse a otro Estado, pero ha de tener la posibilidad de ejercer su derecho a la libre determinación con absoluta libertad y, para asegurarla, debe haber algún tipo de presencia internacional imparcial.

727. El representante de Siria dice que comparte las preocupaciones del representante del Uruguay. Una cuestión que afecta al destino de un pueblo debe ser sometida a referéndum popular. La Carta de las Naciones Unidas y la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General hablan de "libre determinación" y de "la voluntad y los deseos libremente expresados" del pueblo. Por ese motivo le parecen importantes las reservas de la oposición en el caso de Granada. Esas reservas no se refieren a cuestiones secundarias sino, según el representante del Reino Unido, a cuestiones tales como el Senado, las disposiciones transitorias para el órgano legislativo y las disposiciones relativas a la unión con otro país del Commonwealth sin efectuar un referéndum.

/...

Estos elementos constituyen la base misma de los propuestos arreglos constitucionales, que tal vez tienen, por objeto, como ha sugerido el representante del Uruguay, consagrar el statu quo. El orador se pregunta por qué no se ha aplicado el sencillo procedimiento de la libre determinación y por qué, en su lugar, se han establecido procedimientos complejos.

728. El representante de Venezuela dice que quisiera hacer otra pregunta al representante del Reino Unido acerca de las relaciones exteriores de los futuros Estados asociados. El documento que se cita en el documento de trabajo de la Secretaría (véase el párrafo 137 supra) contiene una lista de cuestiones limitadas en relación con las cuales el Gobierno del Reino Unido delega la autoridad al Gobierno del Territorio de que se trate. En el inciso f) del párrafo 2 se indica que el Gobierno del Territorio podrá negociar y firmar acuerdos de asistencia financiera y técnica o de índole cultural y científica con cualquier miembro del Commonwealth británico o con los Estados Unidos de América o con cualquier organización internacional de la que sea miembro el Reino Unido. El orador se pregunta por qué razón se hace una excepción en favor de los Estados Unidos y se excluye, por ejemplo, a los países de habla española de la misma región.

729. La representante de los Estados Unidos de América dice que su delegación acoge cordialmente la iniciativa que el Gobierno del Reino Unido y los Gobiernos de los seis Territorios del Caribe han tomado con el fin de preparar planes para la propuesta creación de los Estados Asociados de las Indias Occidentales. Los nuevos acuerdos se concertaron mediante consultas amistosas entre los Gobiernos pertinentes y parecen ser una solución factible y apropiada a los problemas especiales con que se enfrentan los territorios pequeños. Igualmente importante es el hecho de que los acuerdos se concertaron en consulta con los representantes elegidos de los habitantes de las islas de que se trata y están, por lo tanto, en conformidad con los deseos de dichos habitantes.

730. Efectuaron las negociaciones unos representantes elegidos mediante el sufragio universal de los adultos, los cuales aceptaron los métodos propuestos para enmendar las nuevas Constituciones. Además, el hecho de que los miembros de los partidos de la oposición hubiesen asistido a las conferencias constitucionales permitió tener en cuenta todos los puntos de vista antes de concertarse los acuerdos definitivos. Que los nuevos acuerdos son voluntarios lo demuestran también el hecho de que en las conferencias no se formuló ninguna propuesta para la independencia de cada Territorio. Además, los representantes de las Islas Windward pidieron que el Reino Unido no terminase la asociación de una manera arbitraria o repentina, mostrando así que hay el deseo de que continúe la asociación estrecha con el Reino Unido.

731. Las reservas expresadas en el Comité Especial en nombre del jefe del partido de la oposición en Granada son, a juicio de la oradora, de interés político esencialmente interno. Aunque posiblemente haya algún desacuerdo sobre los aspectos internos de la Constitución de Granada, esa Constitución podría enmendarse si una proporción suficientemente grande del electorado lo deseara y, en todo caso, se celebrarían elecciones en Granada en el mes de enero de 1968. En conclusión, la Sra. Anderson agrega que la formación de los Estados Asociados de las Indias Occidentales representa un nuevo y constructivo método para resolver el problema de los territorios pequeños.

732. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas advierte que la cuestión que se examine tiene consecuencias de importancia no sólo para los seis Territorios de que se trata sino también para otros muchos territorios pequeños. Tras un estudio cuidadoso del documento de la Secretaría sobre los seis Territorios coloniales que se examina, así como de la declaración del representante del Reino Unido, su delegación sólo puede llegar a la conclusión de que este país elaboró sus planes para la condición jurídica futura de los Territorios sin consultar al pueblo. La condición jurídica futura de cualquier territorio colonial debe resolverse en conformidad con la voluntad libremente expresada de sus habitantes. Se afirma que el pueblo dio su aprobación por conducto de los órganos legislativos de los seis Territorios. Pero estos órganos fueron elegidos bajo el sistema colonial, y la administración del Reino Unido los controla. El hecho de haberse invitado a los representantes de esos órganos a formular observaciones sobre las propuestas reformas constitucionales no puede, por lo tanto, considerarse como equivalente a una participación del pueblo. El orador recuerda al Comité lo que el Sr. Gairy, jefe de la oposición en Granada, dijo acerca de las manifestaciones en esa isla cuando el Gobierno territorial comenzó las discusiones constitucionales con el Gobierno del Reino Unido sin consultar al pueblo.

733. Complica la situación la negativa permanente del Reino Unido a cooperar con las Naciones Unidas y a permitir que una misión del Comité Especial visite los territorios para averiguar los puntos de vista de los habitantes sobre su condición jurídica futura. Por lo tanto, las Naciones Unidas no han podido asegurarse de que a los pueblos de los Territorios se les daría la oportunidad de ejercer su voluntad soberana en condiciones de relativa libertad. La nueva condición jurídica, que

entrará en vigor en breve, ha sido así elaborada sin la aprobación del pueblo y prescindiendo de las Naciones Unidas.

734. El hecho de que el Reino Unido retendrá el control sobre los asuntos exteriores y la defensa, que son atributos principales de la soberanía, muestra claramente que hay razones para dudar de que los Territorios sean independientes. Además, hay otras disposiciones en los propuestos acuerdos que indican que el Gobierno del Reino Unido retendrá el derecho de intervención directa en los asuntos internos de los Territorios (véase el párrafo 136 supra). Por lo tanto, carece de sentido la afirmación de que los Territorios gozarán de plena autonomía interna y de que el Gobierno del Reino Unido ha cumplido en consecuencia sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Además, si se tiene en cuenta que el jefe ejecutivo de todos los llamados Estados Asociados será nombrado por la Reina, que los Territorios continuarán siendo económicamente dependientes de la metrópoli y que habrá todavía bases militares en los Territorios, no puede por cierto considerarse que las medidas tomadas por el Gobierno del Reino Unido ponen fin, según se afirma, a las relaciones coloniales entre esos Territorios y el Reino Unido. Por el contrario, con la introducción de la nueva condición jurídica, la dependencia colonial anterior continuará en una nueva forma.

735. Por consiguiente, el Comité Especial debe declarar que los pueblos de los Territorios del Caribe no han tenido la posibilidad de ejercer su derecho a la libre determinación y a la independencia, que la Declaración sobre la concesión de la independencia es plenamente aplicable a los Territorios y que el Reino Unido tiene todavía ante las Naciones Unidas la obligación de cumplir la Declaración y otras decisiones sobre los Territorios, en particular la resolución 2232 (XXI), que ha pasado enteramente por alto. Las decisiones del Comité debieran también reflejar el derecho de las Naciones Unidas a supervisar la situación en los Territorios con el fin de ayudar a sus habitantes a ejercer el derecho a la libre determinación y a la independencia.

736. En vista de que las repercusiones trascendentales de la situación en los Territorios del Caribe, el Comité Especial se encuentra ante una tarea importantísima: recomendar a la Asamblea General que las Potencias coloniales apliquen una serie de medidas preparatorias para asegurar que los habitantes de los territorios bajo su administración tengan la posibilidad de expresar libremente y sin obstáculos

sus deseos en cuanto a su porvenir. Las medidas que se tomen deben ser tan eficaces que frustren todas las tentativas de las Potencias coloniales de utilizar diversas formas de asociación, integración etc. como medio de anexarse completamente los territorios pequeños o de mantener su anterior dominación valiéndose de una nueva etiqueta. De no adoptarse estas medidas en el Caribe, el Reino Unido no tendrá dificultad alguna en lograr una solución en su propio interés. No puede haber garantía de que otras Potencias coloniales no quieran seguir su ejemplo y aplicar versiones propias de la descolonización que no tengan nada que ver con los verdaderos intereses de los habitantes bajo su dominación. No es un accidente que la representante de los Estados Unidos haya aplaudido las medidas tomadas por el Reino Unido en los territorios del Caribe y las haya considerado como un modelo para la solución de problemas análogos en el futuro.

737. La elaboración de las medidas que el orador sugiere exigirá grandes esfuerzos del Comité Especial, ya que cabe esperar que las Potencias coloniales opongan una resistencia porfiada. Pero estas medidas son evidentemente esenciales. A juicio de su delegación, los puntos claves son los siguientes:

- 1) Garantía de la población indígena de todos los derechos y libertades democráticos.
- 2) Retiro de las fuerzas armadas del país metropolitano y supresión de las bases militares extranjeras.
- 3) Abrogación de todos los acuerdos con los territorios dependientes que puedan entrañar directa o indirectamente una limitación de su futura soberanía o que tiendan a asegurar derechos y privilegios especiales para los países metropolitanos o sus ciudadanos y empresas en los territorios.
- 4) Abstención de toda actividad encaminada a violar la unidad nacional y la integridad territorial de un territorio.
- 5) Revocación de todas las leyes, reglamentos y prácticas que permitan la discriminación racial en las esferas política, económica y otros campos de la vida en los territorios coloniales.
- 6) Preparación y ejecución por las Naciones Unidas de elecciones sobre la base del sufragio universal, directo e igual, y establecimiento de autoridades representativas en los territorios coloniales.

738. El representante de Bulgaria dice que por los recientes acontecimientos de los seis Territorios del Caribe, y por las declaraciones de los representantes de la Potencia administradora y del dirigente del partido de oposición de Granada, es evidente que esos Territorios han alcanzado una etapa importante de su desarrollo. Vistas las obligaciones especiales que incumben a las Naciones Unidas y al Comité Especial en lo que se refiere a los Territorios y a los habitantes de éstos, conforme a la Carta y a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, es esencial que el desarrollo de esos Territorios se efectúe de conformidad con los principios democráticos de la Declaración, las aspiraciones e intereses de esos pueblos y su derecho a la libre determinación.

739. Se ha declarado que, convertidos en "Estados asociados de las Indias Occidentales", aquellos Territorios llegarán a tener gobierno propio en un nuevo régimen de asociación con el Reino Unido, pero el orador no cree realmente que los nuevos acuerdos constitucionales, incluso la disposición de que esos pueblos están en libertad de modificar su condición jurídica en cualquier momento, cumplan en realidad la obligación que incumbe a la Potencia administradora de acuerdo con el Capítulo XI de la Carta. Las conclusiones y recomendaciones principales relativas a los Territorios, formuladas por el Comité Especial ya en 1964, según las cuales las disposiciones de la Declaración han de aplicarse en aquéllos en conformidad con la voluntad libremente expresada de la población, aún tiene validez y han sido ratificadas por la resolución 2232 (XXI) de la Asamblea General. El orador entiende que las conferencias constitucionales no son la mejor manera de determinar los deseos del pueblo si se trata de llevar a efecto los párrafos 2 y 5 de la Declaración. Las consultas que se contemplan en la Declaración no deben ser simples formalidades, sino el primer acto de soberanía de un pueblo que ejerce el derecho de libre determinación. Corresponde a los habitantes designar a representantes que redacten una nueva constitución por su nuevo Estado, independiente y soberano. Toda solución de los problemas de los territorios pequeños tiene que fundarse en el correcto cumplimiento de las disposiciones de la Declaración relativas al derecho de libre determinación. Además, la Potencia administradora y el Comité Especial tienen el deber de recomendar que se tomen medidas a fin de que los pueblos interesados ejerzan completa y libremente ese derecho.

740. Es evidente que la situación política, económica y social de la mayoría de los territorios coloniales, contando entre ellos a los pequeños territorios, dificulta el ejercicio del derecho de libre determinación. Además, el aumento de la influencia que ejercen los monopolios extranjeros, que privan a la población local de participar en la vida económica, así como la existencia de bases militares extranjeras y los acuerdos militares de las Potencias coloniales, presentan graves obstáculos al cumplimiento de la Declaración. El orador lamenta que no haya sido posible la colaboración efectiva del Comité Especial y la Potencia administradora en lo tocante a los seis Territorios del Caribe y que la Potencia administradora ni siquiera haya convenido en permitir que una misión los visite.

741. En conclusión, observa que las Naciones Unidas no tienen que reducirse a asentir pasivamente a las decisiones de la Potencia administradora, sino que, en conformidad con el espíritu de la Carta y de la Declaración, tienen que recomendar medidas para que los pueblos de los territorios coloniales decidan completa y libremente su futuro por sí mismos.

742. El representante de Chile dice que su delegación admite las dificultades especiales que entraña la descolonización de los territorios pequeños. Las pequeñas islas del Caribe, por su reducida población, aislamiento relativo y falta de recursos económicos, difícilmente pueden ser viables como entidades independientes. De ahí las tentativas de constituir federaciones en la región. En el mundo moderno, en que hay una tendencia a la integración y la constitución de unidades económicas más grandes, los "miniestados" son una especie de anacronismo. Pero el colonialismo también es un anacronismo, y no hay que valerse del problema de la viabilidad económica de los pequeños territorios como pretexto para desconocer el derecho de libre determinación de los pueblos, que se proclama en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

743. Es posible que algunas de las soluciones que se mencionan en vez de la independencia en la resolución 1541 (XV) tengan ventajas prácticas para determinados territorios, y que quizás parezcan convenientes a modo de medidas transitorias que precedan a la independencia completa; sin embargo, de acuerdo con el principio VII que se consigna en el Anexo de la resolución 1541 (XV), la libre asociación con otro Estado tiene que ser el resultado de la libre y voluntaria elección de los pueblos del territorio interesado, expresada con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos y siempre que el pueblo del territorio conserve la libertad de modificar la condición jurídica del territorio mediante la expresión de su voluntad conforme a medios democráticos y por procedimientos constitucionales. Lamenta que, en el caso de las islas que se consideran, los acuerdos de asociación con el Reino Unido no tengan por base un referéndum por el que los pueblos de las islas hayan elegido expresamente, en vez de la independencia o la integración, la asociación con la anterior Potencia administradora. Si se hubiera obrado conforme a ese procedimiento, el pueblo habría ejercido el derecho de libre determinación, como ocurrió en el caso de las islas Cook.

744. El orador no duda de las declaraciones, formuladas por la delegación del Reino Unido, de que los representantes del Gobierno y de la oposición de diversas islas han asentido a la asociación con el Reino Unido, ni de que el acuerdo quizás resulte materialmente ventajoso para las islas. Sin embargo, el consultar al pueblo quizás habría llevado al mismo resultado que se ha conseguido por la consulta con los dirigentes políticos y habrá guardado más conformidad con el principio de la libre determinación. El Comité Especial y la Asamblea General también han subrayado la importancia de una presencia de las Naciones Unidas antes y durante la realización de un referéndum de esa índole. Conciliar esos principios con la realidad política de los acuerdos de asociación es un problema particularmente delicado, y su delegación quiere estudiar cuidadosamente cualquier proyecto de resolución o consenso sobre el asunto antes de tomar una posición definitiva.

745. El representante de Italia dice que al tomar en consideración el tema el Comité emprende algo nuevo. En el caso de los territorios considerados hasta ahora, la tarea del Comité era teóricamente bastante simple, por más



que a veces se complicara por la falta de colaboración de la Potencia administradora. Las dos partes principales del problema fueron en todos los casos las Naciones Unidas, por un lado, y la Potencia administradora, por el otro, y el pueblo del territorio quedaba hasta cierto punto relegado a segundo plano. Pero los seis Territorios de que ahora se trata consideran hace tiempo su futuro y han avanzado mucho hacia el gobierno propio. Hay Gobiernos territoriales establecidos por procedimientos democráticos, a base de elecciones generales, y no hay por qué suponer que las asambleas legislativas de los Territorios no representan la voluntad del pueblo. La nueva condición jurídica de asociación con el Reino Unido se ha negociado libremente con los representantes de los Territorios, que la han aprobado. La Asamblea legislativa de cada Territorio ha aceptado las propuestas por unanimidad y, en el caso de cuatro Territorios, las decisiones han sido además ratificadas en elecciones recientes. Ese es el fondo de la situación que hay que considerar.

746. Su delegación hubiera querido que todos los territorios no autónomos de la región se unieran en una federación, que se hubiera celebrado un referéndum en cada territorio antes de implantar los nuevos regímenes, que hubieran sido diferentes los procedimientos señalados para modificar posteriormente el régimen constitucional de los territorios, que todos los territorios fueran económicamente independientes y no tuvieran que recurrir a la ayuda financiera del Reino Unido. Pero no se trata de saber si la situación es ideal. Al Comité le incumbe determinar, fuera de toda duda, que el pueblo de los territorios ha aceptado los nuevos regímenes libremente por intermedio de sus representantes electos, y que no se los han impuesto. El orador cree que ese es el caso. En las peticiones presentadas al Comité no se indica en ningún caso una oposición real a los acuerdos de asociación. El caso que presenta el peticionario de Granada no quiere decir que la mayoría de los habitantes de Granada se opongan a los acuerdos. Parece que en el caso de Anguila hay cierta oposición a la unión con San Cristóbal y Nieves; el orador espera que los documentos distribuidos en la sesión que se celebra aclaren hasta cierto punto ese particular.

747. En conclusión, dice que también siente algunos temores como los expresados por sus colegas, pero le parece que los acuerdos constitucionales celebrados concuerdan con las pautas señaladas por el Comité respecto a los pequeños territorios, claro está que en la inteligencia de que los pueblos interesados tienen libertad de modificar según les parezca su régimen constitucional en el futuro. Subraya que

su delegación entiende que la mejor solución para los territorios de la región consiste en alguna forma de federación o asociación entre ellos, y espera que en un futuro próximo se alcance ese acuerdo.

748. El representante del Afganistán dice que las declaraciones del representante del Reino Unido aclaran aspectos de la cuestión que hasta ahora no resultaban claros para su delegación. Sin embargo, aún hay aspectos que hasta cierto punto le resultan dudosos. Su delegación no está segura, por ejemplo, de la eficacia de los métodos que se han empleado para consultar a la población de los Territorios respecto a la nueva condición jurídica que se les propone. ¿La Potencia administradora ha tomado medidas suficientes para que se respeten las aspiraciones de los pueblos de los Territorios? ¿El Comité tiene la certeza de que los pueblos de los Territorios han ejercido plenamente el derecho de libre determinación? ¿Se ha considerado suficientemente la viabilidad económica de los nuevos Estados? ¿Hasta qué punto será posible que los nuevos Estados reciban ayuda del Reino Unido si optan después por la independencia completa? ¿Se descuenta que, antes de la aprobación de los nuevos acuerdos, la Potencia administradora, en colaboración con todas las partes interesadas, exploró todas las posibilidades de hallar la manera de lograr una nueva unión de los territorios y de establecer un sólo Estado económica y administrativa-mente viable? Le parece que esas preguntas se podrían haber contestado y que el Comité se hallaría en mejor situación para tomar una decisión si se hubiera enviado a los territorios una misión visitadora de las Naciones Unidas que se cerciorara de los hechos. El problema que considera el Comité es un problema colonial, y es esencial que se apliquen cuidadosamente las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. La Potencia administradora es la única responsable del cumplimiento incondicional de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de que se garantice el progreso de los Territorios hacia la independencia verdadera.

749. El representante de Siria dice que, aunque la declaración hecha por el representante del Reino Unido arrojó cierta luz sobre los antecedentes de la situación en las islas del Caribe que se están considerando, el Comité sigue estimando que las disposiciones adoptadas no alcanzan a satisfacer las exigencias de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. ¿Están los recursos de las islas sometidos a la explotación extranjera que se menciona en el párrafo 1 de la Declaración? ¿Quién domina la agricultura y las diversas industrias de los Territorios? Con respecto al párrafo 2 de la Declaración, ¿cómo se convino la nueva condición jurídica de "asociación" con la Potencia administradora? Se ha dicho al Comité que los partidos políticos y los representantes elegidos de la población habían prestado su acuerdo, pero, ¿hasta qué punto son representativos y cuáles fueron sus mandatos al ser elegidos? ¿Qué opinan las masas populares acerca de la nueva condición jurídica? Esas preguntas continúan sin respuesta. Lo que es cierto es que las elecciones de que se trata no se realizaron bajo la fiscalización de las Naciones Unidas.

750. Contrariamente a lo preceptuado en el párrafo 3 de la Declaración, se invocan dificultades económicas y políticas como pretexto para aplazar la independencia de los Territorios. La Potencia administradora hace especial hincapié en el hecho de que los Territorios no son económicamente viables. Sin embargo, la Potencia administradora alega haber cumplido con las obligaciones que le impone el Capítulo XI de la Carta. ¿Cómo puede explicarse que durante los años de gobierno colonial no se haya hecho nada por desarrollar los recursos de los Territorios? El estudio tripartito realizado y el recurso tardío al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo equivalen a una concesión de que los Territorios han sido descuidados en el pasado.

751. En vista de estas preguntas fundamentales, la delegación de Siria se halla imposibilitada de evaluar los propósitos de la Potencia administradora y las medidas que está adoptando. Los efectos finales de las mismas son difíciles de pronosticar, y la esperanza de que mejoren la situación crítica de los habitantes resulta harto dudosa.

752. El representante de Malí dice que el Comité debe considerar detenidamente las medidas que tiene derecho a proponer con respecto a la aplicación plena y fiel de la histórica Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los seis Territorios del Caribe. Los vientos de evolución que soplan en todo el mundo desde la segunda guerra mundial han sacudido los

cimientos de los imperios coloniales establecidos contra la voluntad de los pueblos del "tercer mundo". Los éxitos logrados en años recientes en la lucha por la libre determinación y la independencia han infundido confianza en los pueblos de los territorios pequeños y los nuevos acontecimientos que se registran en los seis Territorios del Caribe no son sino un resultado lógico de esa lucha valiente.

753. El 27 de febrero, Antigua y San Cristóbal, Nieves y Anguila se convirtieron en Estados asociados al Reino Unido, y los demás territorios del Caribe han de adquirir idéntica condición jurídica dentro de pocos días. Tales acontecimientos representan por cierto un adelanto y el Comité debe agradecer al Reino Unido el haber efectuado ciertas concesiones. Según el representante del Reino Unido, la condición de Estados asociados ofrecida a los seis Territorios, junto con una asistencia económica importante, permitirán progresar a los habitantes de las islas. Pero el propio orador no puede comprender por qué no se los ha consultado. Ciertamente, los gobiernos de los Territorios y los dirigentes de los diversos partidos de la oposición participaron en la Conferencia constituyente; pero eso no debe necesariamente excluir las consultas populares acerca del futuro de los Estados asociados, particularmente porque el Reino Unido ha afirmado que para que cualquiera de los Estados ponga fin a la asociación se requerirá una mayoría de dos tercios en un referéndum. Por lo tanto, el orador no puede estar de acuerdo con el representante del Reino Unido en que los territorios han de ser completamente autónomos en sus asuntos internos y en que el Gobierno del Reino Unido ha cumplido plenamente las obligaciones que le impone el Capítulo XI de la Carta. La Carta impone obligaciones precisas a las Potencias administradoras con respecto a las poblaciones de los territorios no autónomos. Además, la Potencia administradora no aplica el principio enunciado en el párrafo 2 de la Declaración, a saber, que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y que en virtud del mismo deciden libremente su condición política y realizan libremente su desarrollo económico, social y cultural.

754. Su delegación continúa opinando que, aunque se ha hecho cierto progreso, los seis Territorios siguen siendo colonias, y cree que el Comité Especial compartirá esa opinión y proseguirá el examen de la situación en dichos territorios teniendo en cuenta el Capítulo XI de la Carta. El orador confía en que el Reino Unido cumpla pronto con la totalidad de sus obligaciones hacia los pueblos de los Territorios y les permita expresar libremente su opinión con arreglo a sus propias aspiraciones.

/...

755. El representante del Reino Unido dice que muchos miembros del Comité han preguntado por qué el Gobierno del Reino Unido no realizó referendos ni recurrió a otros medios de consulta directa para determinar los deseos de la población de los seis Territorios en lo referente a la asociación con el Reino Unido. En respuesta a esas preguntas, el orador hace notar, en primer término, que su delegación ya explicó las consultas exhaustivas que se habían celebrado con los representantes elegidos de todos los partidos políticos de los territorios, representantes que habían sido elegidos por sufragio universal. El referendo no es el único método posible de consulta y, además, no es necesariamente el mejor en todos los casos, pues es difícil ofrecer a los pueblos la simple opción de decidir por "sí" o "no" cuando se trata de propuestas detalladas y complicadas. Por lo tanto, se hicieron las consultas con la población a través de sus representantes elegidos y los resultados han sido unánimemente confirmados por las asambleas legislativas de cada una de las islas, y, en cuatro de los seis Territorios, en elecciones generales recientes.

756. En segundo término, un referendo significa la elección entre dos posibilidades; sin embargo, la opción de independizarse se halla implícita en las propuestas de asociación. Ninguno de los pueblos de los Territorios desea la independencia inmediata, aunque están en libertad de independizarse cuando lo deseen en virtud de las nuevas disposiciones. Por lo tanto, la única salida posible fuera de la asociación habría sido continuar en la condición de colonias, cosa que el propio Gobierno del Reino Unido había aclarado que no podía ofrecer a los pueblos de los territorios.

757. En tercer lugar, las nuevas disposiciones sobre asociación constituyen fundamentalmente una forma de elección libre y democrática permanentemente disponible. En virtud de la nueva condición jurídica, los pueblos de los Territorios han de decidir plenamente sus propios destinos. Por cierto que no se sugiere que han de celebrarse consultas populares con los pueblos coloniales antes de concederles el gobierno propio; el Comité Especial nunca pidió un referendo popular sobre la concesión de la independencia a un territorio colonial. Por lo tanto, no existe motivo para pedir un referendo antes de acordar una nueva condición jurídica que incluye la libertad absoluta de optar por la independencia en cualquier momento y, además, da a los pueblos interesados un campo de elección más amplio para el futuro que la propia independencia.

758. El representante de la República Unida de Tanzania dice que el representante del Reino Unido acaba de poner nuevamente en evidencia que no se ofreció una opción a las poblaciones respectivas. El propio orador señaló que el Gobierno del Reino Unido no había cumplido las obligaciones que le imponían la Carta y la Declaración. Además, la situación en Granada se agrava cada vez más, y se ha hecho un llamamiento al Comité para que adopte medidas con urgencia, porque según el jefe de la oposición de Granada, la situación es volcánica.

759. El representante del Reino Unido subraya que no dijo que no se hubiera ofrecido la posibilidad de opción a las poblaciones de los seis Territorios, sino lo contrario. En virtud de las nuevas disposiciones, los pueblos interesados se hallan en completa libertad de decidir su propio futuro. Por lo que hace a Granada, señala que ningún partido político de ese Territorio se opone a las nuevas disposiciones sobre asociación

760. El representante de Sierra Leona manifiesta que su delegación tiene presente constantemente el principio de que los habitantes de un territorio bajo dominio colonial tienen un derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia. Aunque su delegación reconoce que la Potencia administradora ha procurado llegar a esa meta en los seis Territorios del Caribe, le inquieta la rotunda afirmación del representante del Reino Unido de que, una vez alcanzada la soberanía de conformidad con los actuales acuerdos, los Territorios habrán llegado a la independencia integral. Su delegación tiene la impresión de que la Potencia administradora no está dispuesta a ir hasta el fin, y por eso no puede estar conforme con la afirmación de que los territorios alcanzarán independencia integral de acuerdo con la Carta y con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

761. Según el espíritu de la Carta, todos los pueblos que están bajo dominio colonial tienen que gozar de soberanía completa; en virtud de los actuales acuerdos, en los seis Territorios del Caribe no sucede así. En tal caso, el Comité Especial tiene el deber sagrado de procurar no sólo la independencia completa de los seis Territorios, sino también de buscar medios para lograr que se aplique en seguida e íntegramente la declaración que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

762. Quizá convenga que el Comité Especial espere los informes de los subcomités que se encargan de los territorios pequeños, para que se pueda estudiar con más minuciosidad que hasta ahora la cuestión amplia de su futura situación jurídica. En vista de las circunstancias, el procedimiento no afectará seriamente los intereses de los seis Territorios del Caribe.

763. El representante de Yugoslavia dice que su delegación siempre ha sostenido que las Naciones Unidas tienen una responsabilidad especial para con los territorios pequeños. La Asamblea General no hace distinción sobre los derechos fundamentales de los pueblos a la libertad y a la independencia entre los territorios pequeños y los grandes; los principios enunciados en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General son aplicables a todos los territorios no autónomos, sean cuales fueren su tamaño, su población y sus circunstancias. Si bien es cierto que los pueblos de los territorios pequeños tropiezan con dificultades en su lucha por la independencia, también lo es que tienen un derecho inalienable a manifestar libremente su opinión acerca de los derechos enunciados en esa resolución y que las Naciones Unidas deben ayudarles a ello. No obstante, las Naciones Unidas no han podido cumplir todas sus obligaciones en los seis Territorios del Caribe y cabe deplorar que no haya sido posible enviar misiones visitadoras allí.

764. Los seis Territorios van a cambiar en breve su condición jurídica, aun cuando el pueblo en conjunto no ha sido consultado. Nadie podría poner en entredicho las nuevas disposiciones si, bajo supervisión de las Naciones Unidas, se hubiese dado la oportunidad de expresar su opinión a la población de los Territorios. La delegación de Yugoslavia no puede apoyar las nuevas disposiciones porque no está convencida de que reflejan los deseos de los pueblos interesados; el hecho de que no hubiera oposición de parte de los partidos políticos no puede sustituir a la libre expresión de los deseos de la población.

765. El orador cree también que la Potencia administradora no ha cumplido sus obligaciones para con los pueblos de los seis Territorios. Si bien las nuevas disposiciones suponen cierto progreso, el Reino Unido tiene todavía obligaciones con respecto a los pueblos de los Territorios y a las Naciones Unidas.

766. El representante de Túnez estima que, al responder a las preguntas de algunos miembros del Comité, el representante del Reino Unido no hizo más que proporcionar información, lo cual dista de ser satisfactorio en las presentes circunstancias. Por supuesto, cabe decir mucho acerca del significado de las obligaciones

de la Potencia administradora con respecto a los Territorios, la diferencia de naturaleza de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General y las ventajas relativas de las diversas formas de consulta popular. Con todo, sigue siendo cierto que podrían haberse evitado muchos problemas si las Naciones Unidas hubiesen estado más íntimamente implicadas en el proceso de descolonización de los seis Territorios, como ocurrió, por ejemplo, con las disposiciones de asociación entre Nueva Zelanda y las Islas Cook.

767. Los problemas de los seis Territorios son indudablemente muy complejos, y la calidad de Estado asociado con el Reino Unido tal vez sea la solución óptima. El jefe de la Oposición de Granada no puso en tela de juicio el principio de asociación en sí, pero, como señaló con gran acierto el representante de la Unión Soviética, los métodos utilizados por el Reino Unido en la aplicación de las disposiciones acaso establezcan un precedente para la descolonización de otros territorios dependientes y signifiquen que las Potencias administradoras se negarán a cooperar con las Naciones Unidas. El Comité Especial faltaría a su deber si hiciese suyos los métodos utilizados por el Reino Unido. En consecuencia, el orador considera que la Potencia administradora no ha cumplido debidamente sus obligaciones para con los Territorios, dado, en particular, que las Naciones Unidas no participaron en la preparación de las nuevas disposiciones. Con todo, cabe esperar que las nuevas disposiciones constitucionales no impidan la consulta popular, para que se puedan conocer los deseos de los pueblos interesados.

768. La representante de los Estados Unidos de América manifiesta que su delegación sigue convencida de que la constitución de los Estados asociados de las Indias Occidentales es una solución realista y efectiva para los problemas de los seis pequeños Territorios del Caribe; en realidad, pocos miembros del Comité han presentado prueba de lo contrario. Sin embargo, es importante garantizar que las disposiciones propuestas reflejen los deseos de la población interesada. Esas disposiciones de asociación fueron redactadas, tras laboriosas consultas con los representantes electos de los Territorios, aun cuando no se procediese a un referéndum propiamente dicho. En cuatro de los seis Territorios se celebraron elecciones en el contexto de las propuestas de asociación. A la luz del debate habido en el Comité y de las pruebas sumamente útiles presentadas por el Sr. Caesar, no parece



haber razón alguna para dudar del aserto del Reino Unido de que las disposiciones de asociación concuerdan con los deseos de los pueblos interesados. Además, no se ha percibido ninguna reacción crítica de cinco de los seis Territorios que tuvieron oportunidad de expresarse a través de los medios de información y de sus organizaciones políticas, y las críticas del Sr. Caesar con respecto a Granada se referían a cuestiones de procedimiento más que a las propias propuestas de asociación.

769. La oradora dice que su delegación está segura de que a los representantes electos del pueblo de los Territorios se les ofreció la debida oportunidad para expresar su preferencia por otras disposiciones. Aun cuando el Sr. Caesar haya afirmado que el Gobierno que efectuó las negociaciones en nombre de Granada tenía un mandato para adoptar las disposiciones necesarias a fin de constituir un Estado unitario con Trinidad y Tabago, la oradora no ve muy clara la exacta naturaleza de ese mandato ni la medida en que debía considerarse obligatorio. En cualquier caso, no parece que en Granada se prefiera actualmente la unión con Trinidad y Tabago a las disposiciones de asociación; además, la población podrá, esta vez, decidir su porvenir por sí misma.

770. Añade que apoyará, si el Comité ha de seguir estudiando la cuestión de los seis Territorios, la idea de remitir ese tema al Subcomité III.

771. Al representante de Polonia no le parece que los problemas de los seis Territorios del Caribe se hayan resuelto conforme a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El objetivo primordial del Comité Especial estriba en garantizar la plena aplicación de los principios de esa Declaración y el orador conviene en que el Comité debe estudiar seriamente la condición jurídica futura de los pequeños Territorios de que se trata. Es harto evidente que, desde un punto de vista político, los seis Territorios del Caribe están aún lejos de la autonomía y de la independencia. El Reino Unido se ha reservado dos atributos cardinales de la soberanía, a saber, las relaciones exteriores y la defensa. Por lo tanto, no cabe decir que los Territorios han ejercido plenamente su libre determinación o alcanzado la independencia conforme a la Carta y a los principios de la Declaración.

772. Otro extremo suscitado durante el debate fue la línea de conducta adoptada por el Reino Unido en la ejecución de las propuestas de asociación. El significado de la libre asociación, según pone en claro la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, consiste en que los pueblos de los Territorios interesados deben elegir libre y voluntariamente con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos. Ello es de particular importancia puesto que la asociación puede llevar a graves restricciones de los derechos soberanos de los pueblos. Las nuevas disposiciones fueron adoptadas en conferencias constitucionales a las que asistieron representantes del Gobierno del Reino Unido y de los Gobiernos y partidos políticos de los Territorios; no obstante, el mandato legal de los representantes de los Territorios sigue siendo objeto de dudas puesto que, en realidad, habían renunciado a una parte considerable de la soberanía de los Territorios en materia de defensa y relaciones exteriores.

773. Por supuesto, cabe aducir que la falta de resistencia a las nuevas disposiciones puede interpretarse como asentimiento. Sin embargo, según lo destacara el representante del Uruguay, es menester una demostración favorable de la voluntad de los pueblos, no una mera falta de oposición. En consecuencia, el Comité no debe apoyar las disposiciones propuestas sino recomendar medidas que permitan a los pueblos de los seis Territorios decidir libremente su porvenir.

774. El representante de Australia dice que la cuestión fundamental que se plantea el Comité consiste en saber si los seis Territorios del Caribe han alcanzado la plenitud del gobierno propio conforme a la Carta. El principio VII enunciado en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General determina los requisitos que deben regir en la asociación de una Potencia administradora y un territorio no autónomo.

775. El orador no duda que se ha cumplido el primer requisito, a saber que la libre asociación debe ser el resultado de la libre y voluntaria elección de los pueblos del territorio interesado expresada con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos. Nadie puede alegar que la decisión de asociarse con el Reino Unido no fue voluntaria pues se adoptó por mayoría en los órganos legislativos libremente elegidos de los Territorios, es decir por la mayoría de los órganos que representan la opinión popular, lo que, a juicio del orador, supone que lo fue "con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos". Aun cuando quepa aducir que debía

haberse presentado una opción más clara entre la independencia, la integración y la asociación, es un hecho que los pueblos de los Territorios no descaban la independencia y que han fracasado todos los intentos de integración por medio de una federación. Así, la única posibilidad frente a la asociación voluntaria habría sido la continuación del régimen colonial.

776. El principio VII también requiere que los territorios asociados puedan modificar libremente el estatuto del territorio mediante la expresión de su voluntad por medios democráticos y con arreglo a los procedimientos constitucionales. Dicho requisito se cumple con las disposiciones constitucionales que permiten a cada uno de los Territorios lograr su independencia a reserva de una mayoría de dos tercios. Por supuesto como ha destacado el representante del Uruguay, esto pudiera entrañar que una minoría se impusiese a los deseos de la mayoría; no obstante, ningún instrumento constitucional es perfecto y, además, tal situación es improbable. Por otra parte, una disposición para la modificación de la Constitución por dos tercios difícilmente puede considerarse perjudicial para los procedimientos constitucionales democráticos, ya que figura en las constituciones de muchos Estados independientes para evitar la adopción de medidas precipitadas e irrevocables sobre cuestiones importantes. También la Asamblea General exige una mayoría de dos tercios en las cuestiones importantes.

777. Los demás requisitos expresados en el principio VII, a saber que el Territorio asociado debe tener el derecho a determinar su constitución interna sin ninguna injerencia exterior de conformidad con los debidos procedimientos constitucionales y los deseos libremente expresados del pueblo, también han sido satisfechos por la Potencia administradora. En consecuencia, la delegación de Australia está convencida de que las disposiciones de asociación de los seis Territorios constituyen un acto auténtico de libre determinación.

778. Los problemas de los territorios pequeños son tan profundos y complejos que el Comité debe contar con flexibilidad máxima en su criterio y obrar con prudencia en cuanto a la introducción de requisitos nuevos y más estrictos, que podrían denegar e incluso detener el proceso de descolonización. En particular, no debe fijar condiciones previas arbitrarias que puedan prejuzgar los deseos de la población. El representante de Chile señaló los esfuerzos emprendidos para establecer una federación

en el Caribe en la que los Territorios hubieran podido tener mayor viabilidad económica y prosperidad continua. No obstante, aun cuando hayan fracasado los intentos del Reino Unido para reunir a los Territorios en una federación, esa posibilidad sigue abierta. Además, nada sugiere que la Potencia administradora haya tratado de impedir la formación de dicha federación. Los peticionarios de Granada han hablado repetidas veces de su deseo de asociación con Trinidad y Tabago; no obstante, hasta el presente el pueblo de Trinidad y Tabago no ha dado su aprobación, aun cuando es muy posible que lo haga más adelante. Puesto que la federación ha resultado imposible, el Reino Unido parece haber optado por la mejor solución a su alcance: al asociarse con cada uno de los Territorios seguirá suministrando asistencia económica y de otra índole y asumirá también buena parte de las responsabilidades internacionales de los Territorios conforme a los deseos de sus respectivos Gobiernos. En consecuencia, parece que el Reino Unido ha hecho cuanto estaba de su parte en lo que cabe tachar de circunstancias difíciles.

779. El representante del Reino Unido anuncia que procederá a responder a las preguntas formuladas durante el debate sobre las islas del Caribe oriental.

780. El representante del Irak preguntó si alguna parte de la ayuda recibida por los Territorios procedía de fuentes ajenas al Reino Unido, y qué fracción de la ayuda prestada en la actualidad por el Gobierno del Reino Unido se destinaba a los funcionarios de fuera de los Territorios. En los últimos años las Naciones Unidas, el Gobierno del Canadá y el Gobierno del Reino Unido han prestado cierta ayuda; además, los Territorios se beneficiaron directamente de varios planes iniciados durante el período de la Federación de las Indias Occidentales. Estos planes, financiados por el Gobierno de los Estados Unidos, han quedado terminados recientemente. Sólo el 1,6% de toda la ayuda prestada por el Reino Unido en 1966 representa pagos de cualquier índole a los funcionarios británicos y a otros funcionarios no autóctonos. El representante del Irak también sugirió que la suma de 13 millones de dólares concedida por el Reino Unido como ayuda para el desarrollo durante el actual período trienal (1965-1968) tal vez no fuera compatible con las cifras correspondientes a la ayuda total del Reino Unido a los Territorios durante cada uno de los ejercicios económicos de 1965/66 y 1966/67) no obstante, estas últimas cifras representan la ayuda total en forma de capital, tanto de préstamos como de subsidios, la ayuda presupuestaria y la asistencia técnica

- mientras que la cifra de 13 millones de dólares sólo representa la ayuda para el desarrollo que reviste la forma de subsidios concedidos en virtud de las Colonial Development and Welfare Acts. Así pues, no hay ninguna incompatibilidad.

781. El representante del Irak se interesó por la situación de los Territorios en lo tocante a la asociación con países del Caribe ajenos al Commonwealth o, en general, con países situados fuera del Caribe. Conforme a las nuevas disposiciones, los Estados asociados tendrán libertad absoluta para forjar uniones o asociaciones con cualquier otro Estado soberano, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales necesarios. La única diferencia es de procedimiento: si la propuesta se refiere a un país del Commonwealth o a un Territorio del Caribe no se aplicará el requisito de la aprobación por una mayoría de dos tercios en un referéndum.

782. El representante de Venezuela se refirió a la delegación de autoridad ejecutiva por parte del Gobierno del Reino Unido (véase el párrafo 137, supra), que autorizaría a los Estados asociados a negociar ciertos acuerdos con cualquier miembro del Commonwealth o con los Estados Unidos de América, pero que limitaba esta autoridad a los países mencionados; sugirió que esto tal vez restringiera las relaciones de los Estados asociados con sus vecinos de habla española. Pero en el documento también se dice que "el Gobierno británico considerará con ánimo favorable toda solicitud que haga el Gobierno del Territorio para que se le autorice a tomar medidas sobre cuestiones aisladas de relaciones exteriores que no se prevean en el presente despacho". Así pues, no se excluía necesariamente una ampliación de la autoridad existente que abarcara los acuerdos con más gobiernos de los indicados en la actualidad.

783. Varios representantes, especialmente los del Uruguay y Siria, criticaron los requisitos, que figuran en las constituciones de los Estados asociados, de que los cambios constitucionales de importancia necesiten la aprobación de una mayoría de dos tercios. Se sugirió que bastaría con una mayoría simple. El caso es que en muchas partes del mundo la aprobación de una mayoría de dos tercios constituye una salvaguardia generalmente aceptada contra los cambios constitucionales apresurados, arbitrarios o imprudentes. Y es más, en lugar de aceptarse universalmente el principio de la simple mayoría para determinar cambios constitucionales de importancia, en las constituciones de muchos de los países representados en el Comité

Especial se prevé la necesidad de una mayoría considerablemente mayor, es decir de dos tercios, o en algunos casos, de tres cuartos. En el Artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas figura una disposición muy parecida. Una de las razones que movieron a los autores de esas constituciones a no aceptar la mayoría simple es, por supuesto, el deseo de proteger las libertades fundamentales y los derechos humanos enunciados en dichos documentos. El orador ve con simpatía la preocupación del representante del Uruguay por la posibilidad de que una minoría pueda impedir cambios de importancia, pero éste es un riesgo que muchos otros Estados soberanos han decidido correr para defender las libertades humanas fundamentales. Si bien los Estados asociados no serán totalmente independientes, tendrán plena autoridad para reformar sus propias constituciones y modificar su condición jurídica, cosa que no ocurre con los territorios coloniales del Reino Unido. Por esta razón se consideran necesarias ciertas salvaguardias. Además, el requisito de una mayoría de dos tercios fue aceptado sin reservas por todas las delegaciones de las Indias Occidentales en las conferencias constitucionales, y los seis órganos legislativos elegidos lo respaldaron posteriormente.

784. El representante del Irán preguntó si los Territorios llevarían a cabo un acto de libre determinación, y cuándo lo harían. La respuesta es que al preparar las nuevas disposiciones no se ha producido un acto único de libre determinación sino un ejercicio continuo de la libre determinación en varios planos: al nivel de la población en general, la libre determinación por medio de los procesos democráticos de las elecciones y de todos los demás conductos de actividad política de que dispone una democracia; la libre determinación mediante decisiones de los órganos legislativos elegidos, cada uno de los cuales aprobó las nuevas disposiciones; y la libre determinación ejercida por los partidos y los Gobiernos elegidos de los Territorios en sus conferencias y otras consultas con el Gobierno del Reino Unido. Además, la libre determinación no cesará cuando entren en vigor las nuevas disposiciones, ya que en ellas se prevé un mecanismo permanente para su ejercicio constante.

785. Se preguntó al peticionario de Granada si el Gobierno de ese Territorio había recibido un mandato del electorado para la asociación con el Reino Unido. La delegación del Reino Unido desea formular dos observaciones a ese respecto. En primer lugar, en cuatro de los seis Territorios se celebraron elecciones dentro del marea

de las propuestas relativas a la plena autonomía y la asociación con el Reino Unido; en cada caso, el resultado fue un apoyo abrumador de esas propuestas. En los dos Territorios restantes, uno de los cuales es Granada, no ha habido elecciones recientemente pero los partidos políticos - del Gobierno y de la Oposición - participaron en la preparación de los nuevos acuerdos de asociación y los aceptaron sin reservas; sus dirigentes firmaron los informes de la conferencia y los órganos legislativos aprobaron por unanimidad las resoluciones oficiales que los sancionaban. Por consiguiente, en esos dos Territorios no se ha planteado la cuestión del mandato en una elección general, ya que los partidos están de acuerdo sobre el particular.

786. En segundo lugar, según el sistema constitucional británico, un gobierno es elegido por el pueblo para gobernar conforme a su mejor criterio; no está obligado a ajustarse a un mandato concreto y su responsabilidad está garantizada por el hecho de que los electores pueden rechazarlo en las elecciones siguientes si hace mal uso de su autoridad. La opinión popular respecto de las grandes cuestiones de importancia política siempre tiene en los gobiernos una influencia variada, y no sólo en época de elecciones sino también entre éstas, por conducto de todos los medios de comunicación, de las organizaciones de los partidos y de todas las demás instituciones de la democracia representativa. Es evidente que no podría pretenderse que por el hecho de que en dos Territorios no se celebraran elecciones tras la formulación de las propuestas de asociación, no hay pruebas de que el pueblo acepte tales propuestas. Por el contrario, las pruebas son abrumadoras. Hubo tiempo y oportunidad sobrados para que se hiciera pública cualquier oposición a las propuestas, pero en ninguno de los Territorios ocurrió semejante cosa. El pueblo manifestó, con libertad y sin presión alguna, por conducto de sus representantes elegidos de todos los partidos, la aprobación voluntaria de la nueva condición jurídica.

787. Recordando que el representante de Sierra Leona sugirió que los seis Territorios del Caribe no estaban a punto de lograr la plena independencia conforme al sentido de la resolución 1514 (XV), el orador añade que conviene referirse a los textos fundamentales de las Naciones Unidas. En primer lugar, en el Capítulo XI de la Carta se define a los territorios no autónomos o colonias como aquellos cuyos pueblos "no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio": por consiguiente la piedra de toque de la descolonización es "la plenitud del gobierno propio". En

segundo lugar, en la resolución 1541 (XV) se establecen los principios que deben servir de guía para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Artículo 73 de la Carta, cosa que no es una simple cuestión de forma porque si no existe tal obligación, el territorio de que se trate no es un territorio no autónomo, con arreglo al Capítulo XI de la Carta. En la resolución 1541 (XV) se dice que la plenitud del gobierno propio puede alcanzarse por la independencia soberana, la libre asociación o la integración de un Estado independiente; en el principio VII de la resolución se describen las características de la libre asociación, y las nuevas disposiciones para los Territorios del Caribe se ajustan debidamente a tales características. Finalmente, hay que recordar la resolución 1514 (XV), bien conocida de todos los miembros del Comité Especial. Según demostró el representante del Uruguay, deben interpretarse las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV), aprobadas con pocas horas de diferencia, de manera que no haya contradicción alguna entre ambas. En la resolución 1541 (XV) se enuncian algunos de los métodos de descolonización posibles, además de la plena independencia y soberanía; en el párrafo 5 de la resolución 1514 (XV) se pide la adopción inmediata de medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de los territorios coloniales "en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados". Este párrafo sólo tiene una interpretación posible: se deben ofrecer todos los poderes al pueblo, y se le deben traspasar a éste todos los que desee asumir y ejercer directamente por su cuenta. Si el pueblo decide, con toda libertad, pedir a otra autoridad que ejerza ciertos poderes limitados en su nombre, y tiene la posibilidad de asumir todos los poderes, también se habrá dado cumplimiento a esa recomendación fundamental de la resolución 1514 (XV).

788. En su intervención del 21 de febrero (véase el párrafo 677 supra), la delegación del Reino Unido intentó dejar bien sentados tres puntos. Primero, que en virtud de las nuevas disposiciones, los seis Territorios disfrutarán de la plenitud del gobierno propio; segundo, que la asociación con el Reino Unido es totalmente voluntaria y cualquiera de las partes puede rescindirla en cualquier momento "por medios democráticos y con arreglo a los procedimientos constitucionales", según se dice en el principio VII de la resolución 1541 (XV). Tercero, que se ha llegado al nuevo régimen de los Territorios mediante un proceso de largas y exhaustivas consultas con sus pueblos, los cuales han aceptado libremente dicho régimen, también por medios democráticos y con arreglo a los procedimientos constitucionales. El orador cree que su delegación ha presentado pruebas más que suficientes en apoyo de estas tres afirmaciones.



789. El representante de Siria señala que los representantes de los Estados Unidos de América, de Australia y del Reino Unido se han referido al régimen de asociación como si se tratara de una plena asociación como la mencionada en la resolución 1541 (XV). Pero la propia Potencia administradora también habla, en otros contextos, de un grado menor de asociación, en la que las seis islas confiarían su defensa y sus relaciones exteriores a la Potencia administradora. Pregunta si se trata entonces de una verdadera asociación y si las islas estarán representadas en el Parlamento del Reino Unido; o si dicho Parlamento legislará para las islas, sin su consentimiento, al menos en lo relativo a la defensa y las relaciones exteriores.

790. Otra cuestión respecto de la que el orador tiene reservas es el punto planteado de manera tácita por el representante de Italia, y de manera explícita por el representante de Australia, a saber, que las islas únicamente pueden elegir entre la continuación del régimen colonial y la asociación. El orador pregunta a dichos representantes por qué a las islas no se les ha de permitir que elijan entre la asociación, la federación o la independencia, si así lo desean.

791. Cuanto más se habla de las supuestas disposiciones constitucionales menos clara ve la situación la delegación de Siria, que sigue abrigando serios recelos.

792. El representante de Italia dice que sólo mencionó una posible oposición entre las ideas de asociación y federación en relación con la declaración del peticionario de que hubiera preferido la federación con Trinidad y Tabago. Pero Trinidad y Tabago constituyen un Estado independiente y soberano, y si éste no desea positivamente establecer una federación con Granada, esta posibilidad no se puede someter a la aprobación del pueblo de Granada en un referéndum. La consecuencia es que, aunque se pudiera convencer al Gobierno del Reino Unido y al Gobierno de Granada de que aplazaran la entrada en vigor de las actuales disposiciones, lo único que podría decidirse por medio de un referéndum sería la elección entre asociación y régimen colonial.

793. El representante del Reino Unido opina que si el representante de Siria estudia el texto de la declaración que su delegación acaba de formular observará que las disposiciones para la asociación son perfectamente compatibles con la resolución 1541 (XV). En segundo lugar, en sus declaraciones anteriores el orador

describió ampliamente el mecanismo detallado gracias al cual el Reino Unido ejercerá las últimas responsabilidades relativas a la defensa y las relaciones exteriores. Estas funciones siempre se desempeñarán tras las debidas consultas y con la máxima delegación de responsabilidad. El representante de Siria preguntó por qué no se había ofrecido al pueblo la posibilidad de elegir la independencia. El orador responde que esta elección es un elemento intrínseco de la nueva condición jurídica y todos los Territorios pueden optar por ella en cualquier momento.

794. El representante de Australia declara que, en lugar de tratar de responder al representante de Siria, se permitirá remitirlo al acta taquigráfica de su intervención.

795. El representante de Sierra Leona recuerda que una de las cuestiones que puso de relieve en su intervención de la sesión precedente fue que los Territorios no alcanzarán la plena soberanía e independencia con arreglo a las nuevas disposiciones. Señala que el propio representante del Reino Unido así lo ha admitido en su intervención de la sesión en curso.

796. El representante del Uruguay dice que en el debate se han tocado muchas cuestiones, inclusive la validez de las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de la Asamblea General. A este respecto, el orador cita la declaración que hizo en la 1287a. sesión del Consejo de Seguridad, en ocasión de la admisión de Guyana a las Naciones Unidas (S/PV.1287, págs. 22 a 26 de la versión inglesa). En esa declaración, señaló a la atención los cambios que, al aprobar la resolución 1514 (XV), había introducido la Asamblea General, e hizo referencia al folleto Las Naciones Unidas y la descolonización del antiguo Embajador Velázquez, en el que se señalaba que, aunque pudiera argumentarse que la resolución 1514 (XV) iba más allá de la letra de la Carta de las Naciones Unidas, dicha resolución se ajustaba al espíritu de la Carta.

797. La resolución 1514 (XV) se basa indudablemente en las disposiciones de los Capítulos XI y XII de la Carta. Conforme al Artículo 73, los Miembros de las Naciones Unidas que tienen la responsabilidad de administrar territorios no

autónomos se han obligado, entre otras cosas, a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos de los territorios, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto. Conforme al Artículo 76, los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria incluyen el de promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia. La resolución 1514 (XV) refleja también las disposiciones del inciso c del Artículo 55 de la Carta acerca de la promoción del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma o religión, y la referencia que en el párrafo 2) del Artículo 1 se hace al principio de la libre determinación de los pueblos. De este modo, la resolución 1514 (XV) se basa jurídica y políticamente en el texto y en el espíritu de la Carta.

798. A este respecto, se arguye en Las Naciones Unidas y la descolonización que uno de los caracteres distintivos de la resolución 1514 (XV) en su insistencia en la necesidad de que el acto de la libre determinación se realice en completa libertad, sin ninguna condición previa, de modo que la voluntad popular pueda expresarse auténticamente sin sombra de duda. Se dice allí además que la resolución parece abrir la puerta para una vigilancia de los procedimientos plebiscitarios por las Naciones Unidas, y no solamente para la hipótesis de integración con un Estado independiente prevista en la resolución 1541 (XV). El propio orador, en el Subcomité III, sostuvo firmemente que no había incompatibilidad entre las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV), y remite a los miembros al documento A/AC.109/SC.4/SR.52, página 8, en el que consta el argumento del orador de que el concepto de autonomía, en el caso de los pequeños territorios puede tomar cualquiera de las formas definidas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, y que el procedimiento propuesto en el caso de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos es

compatible con la resolución 1541 (XV), que el Subcomité tenía el deber de interpretar en conjunción con la resolución 1514 (XV) en el caso de los territorios a los cuales se aplicaban ambas resoluciones. En el caso de los pequeños territorios que no sean económicamente viables como Estados independientes, la completa independencia no tendrá significado real. Por lo tanto, se necesitan disposiciones diferentes que les permitan salir de su condición de colonias.

799. Al hablar de la libre determinación, la resolución 1514 (XV) se refiere implícitamente a la celebración de un referéndum. El representante del Reino Unido ha argüido que las elecciones serían un acto de libre determinación tan válido como un referéndum. Ni la Carta ni la resolución 1514 (XV) especifican cómo ha de ejercerse la libre determinación, pero en la última se precisa que deben respetarse la voluntad y los deseos libremente expresados por el pueblo. La cuestión del procedimiento que se siga puede ser de importancia secundaria si se tiene la seguridad de que los representantes elegidos por el pueblo han recibido el claro mandato de consentir en la asociación de los territorios con la Potencia administradora en las condiciones establecidas por los acuerdos. El procedimiento ideal es evidentemente un referéndum celebrado bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Como dijo el orador en su declaración anterior, no basta con decir que no se ha manifestado oposición alguna a los arreglos propuestos; tiene que haber un deseo positivo en su favor. El representante del Reino Unido parece compartir esta opinión, porque se ha referido a las elecciones realizadas. La dificultad que se presenta al Comité es que, como resultado de actos electorales que las Naciones Unidas no han podido supervisar, se enfrentan con un hecho consumado. ¿Qué actitud debe tomar el Comité? Como abogado, el orador se inclina por soluciones estrictamente jurídicas. Sin embargo, comprende que el derecho internacional está evolucionando y no se encuentra claramente definido; además, no existen sanciones para hacer obligatoria su aplicación. Como el Comité no es un tribunal, ¿qué le queda por hacer si el Reino Unido, de hecho, ha prescindido de la resolución 1514 (XV)? A este respecto, el orador remite a los miembros a otra declaración que hizo en el Consejo de Seguridad (S/PV.1274, pág. 12 de la versión inglesa). En ella, el orador subrayó

los peligros del dogmatismo jurídico e instó a que, sin transigir en los principios, se buscara la paz mediante la comprensión, la buena voluntad y la negociación. Estos conceptos se aplican también a la tarea de la descolonización. En la misma declaración, el orador se refirió a una observación de de Visscher, antiguo Magistrado de la Corte Internacional de Justicia, que había señalado el peligro de tratar de hacer del derecho internacional un sistema completamente autónomo y de cerrar los ojos a los factores políticos y sociales.

800. Ahora que se ha producido el hecho consumado, la dificultad consiste en que el Reino Unido puede no tener en cuenta ninguna decisión que adopte el Comité. En esencia, la solución que se ha aprobado puede ser aceptable para la mayoría de los miembros del Comité y compatible con las posiciones adoptadas sobre la cuestión de los territorios pequeños por el Subcomité III, la Cuarta Comisión y la propia Asamblea General. Sin embargo, en lo que respecta al procedimiento que se ha seguido, no ha habido ninguna supervisión de las Naciones Unidas para asegurarse de que el pueblo ha expresado libremente sus deseos acerca de su condición. En estas circunstancias, ¿debe el Comité tomar una decisión que equivalga a una declaración de guerra contra el Reino Unido? El orador piensa que no. Aunque podría decirse que el procedimiento seguido no se ha ajustado a la resolución 1514 (XV), el orador considera que podría buscarse una solución en consulta con los nuevos gobiernos de los Territorios a los que el Reino Unido ha traspasado los poderes. Podría invitarse a una conferencia a los dirigentes políticos de las islas, ya sea que pertenezcan a los gobiernos o a los partidos de la oposición, y podría llegarse a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum de modo que el acto de descolonización se ajustase a las normas establecidas por las Naciones Unidas. Podría remitirse la cuestión al Subcomité III, que informaría nuevamente al Comité Especial. De esta manera, podría encontrarse una solución realista y razonable al problema que tiene ante sí el Comité.

...

#### IV. MEDIDAS PRELIMINARES ADOPTADAS POR EL COMITE ESPECIAL

801. En la 495a. sesión del Comité Especial, celebrada el 3 de marzo de 1967, el representante de Sierra Leona presentó un proyecto de resolución (A/AC.109/L.378) relativo a los seis Territorios y patrocinado por Afganistán, Irak, Malí, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria y Yugoslavia.

802. La parte dispositiva del proyecto de resolución tenía el texto siguiente:

"1. Deplora profundamente que la Potencia administradora no haya aplicado las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y en particular la resolución 1514 (XV);

"2. Reafirma que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General sigue aplicándose a dichos Territorios, y pide a la Potencia administradora que acelere el proceso de descolonización de los mismos, de conformidad con la Declaración que figura en la mencionada resolución;

"3. Pide a su Subcomité III que examine la situación de dichos Territorios en todos sus aspectos, incluyendo la posibilidad de enviar una misión visitadora, y que informe al Comité Especial lo antes posible."

803. El representante de Sierra Leona dice que en el proyecto de resolución se incorporan principios generales que parecen desprenderse de las deliberaciones. No cree que haya desacuerdo respecto a los cuatro párrafos del preámbulo. En el párrafo 1 de la parte dispositiva, en que se deplora que la Potencia administradora no haya aplicado las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y, en particular, la resolución 1514 (XV), se refleja la actitud que han adoptado bastantes representantes en la deliberación. La Potencia administradora se ha limitado a afirmar que los territorios han alcanzado la "plenitud del gobierno propio", lo cual no es lo mismo que la independencia, por mucho que la delegación del Reino Unido insista en la nueva condición jurídica de los territorios. En las deliberaciones se ha advertido que no conviene a los intereses de las Naciones Unidas una interpretación estrecha de la Carta y que siempre debe tomarse en consideración el espíritu de ésta y de las resoluciones de las Naciones Unidas.

804. En el párrafo 2 de la parte dispositiva se reafirma que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General sigue aplicándose a dichos territorios y se pide a la Potencia administradora que acelere la descolonización. Si bien se admite que la condición jurídica de las islas ha cambiado, en el Comité se han formulado preguntas respecto a la validez de ese cambio, en vista del método de consulta a que se ha recurrido y que no hay garantías en cuanto a la libertad de elección, garantías que sólo están en situación de dar las Naciones Unidas.

805. En el párrafo 3 de la parte dispositiva se pide al Subcomité III que examine la situación de dichos territorios y la posibilidad de enviar una misión visitadora. El Subcomité III, que ya ha estudiado el caso de las islas del Caribe, tendrá facultades para formular recomendaciones sobre la forma en que el pueblo de las islas ha de ejercer la libre determinación, cómo se ha de conseguir la viabilidad económica y cómo han de ayudar las Naciones Unidas a que avancen cuanto antes hacia la independencia.

806. El representante de Siria dice que el representante de Sierra Leona ha demostrado muy bien la necesidad de que se adopte una resolución sobre estos territorios. El régimen implantado por la Potencia administradora evidentemente dista de los objetivos señalados por la resolución 1514 (XV). Hay que subrayarlo a la luz de la sorprendente afirmación del Reino Unido, según la cual ha cumplido las obligaciones que le impone el inciso e del Artículo 73 de la Carta. El proyecto de resolución contribuirá a colmar la diferencia entre los objetivos expuestos en dicho Artículo y el estado actual de las islas.

807. El representante del Reino Unido dice que necesitará más tiempo para estudiar el proyecto de resolución; sin embargo, a primera vista, el texto parece muy discutible. Si bien pide al Subcomité III que siga examinando la situación, parece prejuzgar de muchos puntos que el Subcomité III tendrá que considerar. Su delegación rechaza categóricamente la insinuación de que no se han descolonizado los seis Territorios. No se ha tenido en cuenta su exposición de la sesión precedente sobre la resolución 1514 (XV), ni tampoco se habla en el proyecto de las obligaciones que estipula la Carta respecto de los territorios no autónomos. Sugiere que no se vote por ahora sobre el proyecto de resolución y

/...

que se remita al Subcomité III, que debe tener la oportunidad de examinar de principio a fin todo el asunto.

808. El representante de la República Unida de Tanzania dice que no pueden cuestionarse la validez y aplicabilidad de la resolución 1514 (XV), a pesar de las observaciones del representante del Reino Unido. No le sorprende que la delegación del Reino Unido sostenga que la adopción del proyecto de resolución equivaldría a prejuzgar de la cuestión. Pero el Comité tiene el mandato de examinar todos los territorios que no se han independizado, diga lo que diga la Potencia administradora en cuanto a la condición jurídica de aquéllos. Indudablemente es cierto que el Reino Unido no ha aplicado las disposiciones de la resolución 1514 (XV) en los Territorios. Si la resolución 1514 (XV) es válida y comprende los territorios que no se han independizado, debe pedirse al Reino Unido que descolonice los seis Territorios. Se propone remitir el caso al Subcomité III precisamente porque han de examinarse otras materias, como la preferencia dada a ciertos países de la región en lo que atañe a relaciones económicas.

809. El representante de Italia desearía que los patrocinadores le explicaran algunos puntos. Su primera pregunta se refiere al párrafo 1 de la parte dispositiva. El factor decisivo de la descolonización, por lo menos en cuanto se refiere a los territorios pequeños, es la libre determinación o la consulta de los pueblos de los territorios en cuanto a su porvenir. Por eso el incumplimiento de la resolución 1514 (XV) reviste dos formas: la Potencia administradora no admite, lisa y llanamente que la población de un territorio ejerza el derecho de libre determinación, o lo reconoce en principio y trata de eludirlo en la práctica, por ejemplo, amañando las elecciones. Pregunta si los patrocinadores pueden indicar de cuál de esas posibles formas de incumplimiento se trata. ¿O entienden acaso que puede darse a los Territorios la independencia completa, considerando su reducida población y superficie, sin tener en cuenta para nada que esos pueblos no han manifestado ningún deseo de lograr la independencia por separado?



810. Su segunda pregunta se refiere al párrafo 2 de la parte dispositiva y, en particular, a la segunda parte de éste. Se pregunta si los autores quieren dar a entender que no ha habido en los territorios descolonización en absoluto. En resoluciones análogas se ha recurrido a ciertas fórmulas, como la de intensificación de la descolonización, por ejemplo. Se pregunta qué medidas debe tomar, a juicio de los autores, la Potencia administradora para llevar a efecto la segunda parte del párrafo 2.

811. Por último, quiere formular preguntas acerca del párrafo 3 de la parte dispositiva. Si se aceptan las premisas de los párrafos 1 y 2, ¿cómo se concilian éstos con el párrafo 3 y cuál será el mandato del Subcomité III cuando el Comité Especial haya adoptado una decisión radical sobre la situación de los Territorios? Italia, miembro del Subcomité III, teme que los párrafos 1 y 2 restrinjan el mandato hasta el extremo de que resulte casi inaplicable.

812. El representante de Venezuela dice que su delegación conoce los problemas de que se trata, no sólo porque está representada en el Subcomité III, sino también por la proximidad geográfica de Venezuela a las islas. No puede decirse que el nuevo régimen de asociación con el Reino Unido represente un retroceso en la evolución política de los Territorios. Cuando el Subcomité III trató de los Territorios en 1966, la situación era desalentadora. Se habían roto las negociaciones sobre la constitución de una federación y una de las grandes islas de la zona había decidido lograr la independencia por separado. Ahora se ha dado con una fórmula que, si bien no es enteramente compatible con la resolución 1514 (XV), representa sin embargo un adelanto importante y coincide en todo, tanto con las disposiciones del Artículo 73 de la Carta como con la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. Su delegación apoya sin reservas la resolución 1514 (XV), pero le parece perfectamente admisible una solución como la que se prevé en la resolución 1541 (XV), que complementa la resolución 1514 (XV). ¿Cabe acaso deplorar un adelanto en la vida de los pueblos que están viviendo bajo el colonialismo desde hace más de siglo y medio, sólo porque ese adelanto no corresponda estrictamente a la resolución 1514 (XV)?

813. Es muy acertado señalar un defecto de los acuerdos celebrados entre la Potencia administradora y los representantes de los Territorios. Las decisiones importantes de esta índole requieren la consulta popular. El pueblo no ha tenido oportunidad de expresar su preferencia respecto a las posibilidades que se le presentaban. El Profesor Rousseau, autoridad incuestionable en derecho internacional, dice que el referéndum es un factor indispensable de la libre determinación. Pero el Profesor Rousseau observa también que una solución política es a veces más práctica que una solución estrictamente jurídica. Teme que se restrinjan de manera indebida las deliberaciones del Subcomité III si el Comité declara que sólo es aplicable a los Territorios la resolución 1514 (XV).

814. Su delegación profesa gran respeto por la resolución 1514 (XV); empero, tratándose de territorios pequeños, sin recursos suficientes, es esencial hallar soluciones que les aseguren el bienestar.

815. El representante del Reino Unido dice que la cuestión que examina el Comité Especial reviste gran importancia para la futura labor de las Naciones Unidas y de su país en la esfera de la descolonización. No está sólo en juego el porvenir de las islas del Caribe; la cuestión estriba en cómo prestar el mejor servicio a los pueblos de muchos otros pequeños territorios. Treinta y uno de los territorios que figuran en el programa del Comité tienen poblaciones de menos de 100.000 habitantes. Lo que se haga en el caso de las islas del Caribe puede afectar al resto y, en consecuencia, el Comité tiene la obligación de estudiar muy detenidamente toda la cuestión antes de sacar cualquier conclusión.

816. En los últimos 20 años el colonialismo ha sido liquidado en gran medida y su propio país ha desempeñado un papel de primera línea en ese proceso revolucionario. El 99% de la población del Commonwealth vive ahora en países independientes. El Reino Unido se ocupa hoy con el 1% restante. Aunque el porcentaje es pequeño las dificultades son variadas y enormes. Cada uno de los territorios coloniales presenta un problema único y requiere un estudio

concienzudo. El problema al que ahora debe dedicar su atención el Comité Especial es el de los países demasiado pequeños, demasiado pobres o demasiado aislados para llevar solos la vida de un Estado independiente. No sólo no pueden soportarla solos, sino que a menudo sus pueblos no la desean. Tal vez haya 30 países, muchos de ellos pequeñas islas, en esta categoría. Su población es escasa, pero ello no es razón para la indiferencia; el problema de la política correcta que debe seguirse en estos territorios preocupa en grado máximo al Reino Unido, y el orador confía en que el Comité Especial examinará la cuestión teniendo plenamente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas y los objetivos enunciados por la Asamblea General.

817. Desde la primera Conferencia de la Federación de las Indias Occidentales celebrada en Montego en 1947, el Reino Unido se ha esforzado por llevar las colonias de las Indias Occidentales a la autonomía y la independencia en un federación unida. En el último momento, cuando ya se había fijado la fecha de la independencia, se convocó un plebiscito en Jamaica y la Federación fue rechazada por escasa mayoría. Desde entonces, Jamaica, Trinidad y Tabago, Guyana y Barbados han sido admitidos en las Naciones Unidas como Estados separados e independientes. Por haber prestado servicios en el Caribe durante casi 10 años, opina el orador que el colapso de la propuesta Federación de las Indias Occidentales constituye el fracaso de un concepto acertado.

818. Cuando se produjo ese fracaso hace cinco años, muchas islas del Caribe seguían bajo administración del Reino Unido con poblaciones que oscilaban entre casi 100.000 y menos de 10.000 habitantes. Todas ellas tenían instituciones democráticas y una larga experiencia política, pero muchas eran a todas luces demasiado pequeñas, aisladas o pobres para soportar la superestructura de un Estado independiente. Por consiguiente, se estudió a fondo la posibilidad de que muchas de las islas menores pudiesen constituir una federación propia, pero a medida que avanzaron las consultas quedó claro que las islas no estaban entonces preparadas para federarse. Aun cuando una asociación más estrecha, que tal vez lleve a una federación del Caribe más extensa,

quizá sea posible en el futuro - y deliberadamente se ha dejado abierta la puerta a tal federación - ha sido necesario respetar los deseos de los propios pueblos. Una vez descartada la federación, cuando menos de momento, el Reino Unido se dedicó a una serie de consultas con los dirigentes electos de las distintas islas, incluso con los jefes de los partidos de oposición. Las divergencias provocadas por muchas cuestiones de interés local fueron superadas y se llegó a un acuerdo total sobre los principales objetivos entre los dirigentes del Gobierno y de la oposición. En efecto, los seis órganos legislativos votaron por unanimidad a favor de la propuesta modificación constitucional. El Reino Unido considera que el voto unánime de un Parlamento libremente elegido con sufragio total de los adultos es la expresión definitiva e inapelable de la voluntad popular. Los deseos del pueblo así representado han sido aceptados por sus gobiernos y aplicados en todas las islas excepto en San Vicente, donde las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 29 de mayo.

819. Los principios en que se han inspirado en esta empresa su país y los representantes electos de las islas son los siguientes: En primer término, debe permitirse a los isleños administrar sus propios asuntos, debe ponerse término a la era colonial, y debe lograrse "la plenitud del gobierno propio". En segundo término, en todas las disposiciones adoptadas a tal fin deben prevalecer los intereses y deseos del pueblo y debe concedérsele una "libre y voluntaria elección ... con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos". En tercer término, en cada uno de los territorios debe darse al pueblo "el derecho a determinar su constitución interna sin ninguna injerencia exterior de conformidad con los debidos procedimientos constitucionales y los deseos libremente expresados de su pueblo". En cuarto término, debe garantizarse a los pueblos la libertad de modificar el estatuto de sus territorios - e incluso el derecho a optar por la plena independencia - cuando quiera que lo deseen "mediante la expresión de su voluntad por procedimientos democráticos". Estos objetivos y principios, mantenidos durante las consultas, fueron establecidos por las propias Naciones Unidas en la Carta y en la resolución de la Asamblea General que enuncia los principios de libre asociación. A los dos

primeros criterios - autonomía y libre elección - los arquitectos de esta resolución agregaron dos condiciones esenciales. ¿Tienen los pueblos la libertad de modificar su constitución, si así lo desean, y la libertad de modificar su estatuto de asociación en cualquier momento por su propia y libre voluntad? Estas dos condiciones constituyen la garantía absoluta de que los deseos del pueblo prevalecerán ahora y en lo sucesivo. Las nuevas constituciones del Caribe no sólo satisfacen plenamente ambas condiciones, sino que incluyen opciones claras y permanentes para el futuro, que van desde nuevas federaciones o asociaciones hasta la independencia individual total, si, en cualquier momento, el pueblo de cada uno de los territorios la desea. El Reino Unido no podía haber cumplido más claramente los requisitos que él y, en verdad, también el propio Comité Especial están obligados a respetar. Nadie que haya estudiado todos los documentos y declaraciones, en particular la intervención de la Sra. Judith Hart, Ministro de Estado, en la Cámara de los Comunes el 31 de enero de 1967, puede dudar de que los principios y objetivos mencionados hayan inspirado tanto a los representantes del Reino Unido como a los de las islas en todas las etapas de este proceso.

820. El Reino Unido ha hecho cuanto estaba de su parte para mantener al Comité Especial informado de sus intenciones. Nadie puede poner en entredicho la disposición de su delegación a cooperar plenamente con el Comité ni su deseo de presentarle todos los hechos. Sin embargo, ahora tiene que hacer frente a un proyecto de resolución (A/AC.109/L.378) que deplora profundamente cuanto ha hecho el Reino Unido. No hay ningún agradecimiento de los propósitos que ha perseguido su país, ningún reconocimiento de los procedimientos de consulta democrática, ningún respeto por los deseos de los pueblos interesados, ningún encomio por la autonomía conseguida, ninguna aprobación del derecho que se otorga a los pueblos interesados a modificar su constitución y a proseguir, si quieren, hasta la plena independencia, ninguna referencia en absoluto a las disposiciones de libre asociación que habían sido autorizadas explícitamente por la Asamblea General. La única reacción patente en el proyecto de resolución es de pesar. ¿Qué deducciones ha de sacar su delegación de ese proyecto de resolución? ¿Ha de suponer que sus autores rechazan las disposiciones explícitas de la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General y la libre expresión de la voluntad de los pueblos interesados? ¿Desearon sus autores estipular que los territorios coloniales restantes, por pequeños, pobres o aislados que sean,

deben ser obligados a abandonar sus propios fines libremente expresados y verse forzados a la independencia, quieranla o no? Cualquier intención arrogante de este tipo sería, sin duda, rechazada por los pueblos interesados.

821. Aparte de expresar su profundo pesar, el proyecto de resolución propone que el Subcomité III siga examinando toda la cuestión. Su delegación ya ha declarado que desea cooperar con el Subcomité. Pero, si se va a adoptar el proyecto de resolución, el Reino Unido no ve justificación alguna para un debate ulterior en el Subcomité o en el Comité Especial. Si el Comité Especial va a deplorar lo que se ha hecho y, con ello, va a despreciar los deseos del pueblo, se pondrá término a la cooperación de su delegación con el Comité en estas cuestiones importantes. No solicita de ningún miembro del Comité que renuncie a su parecer. Pero estas cuestiones tienen consecuencias de largo alcance y, por ello, apela al Comité para que dedique más tiempo a este tema con objeto de volver a examinar todo el problema.

822. El representante de Finlandia dice que el Comité Especial se enfrenta con la cuestión compleja de cómo contribuir del mejor modo posible a que los pueblos de los territorios pequeños y aislados satisfagan sus aspiraciones. Su delegación opina que las nuevas disposiciones relativas a los territorios del Caribe suponen un enfoque razonable y práctico en el momento actual. Entiende que el acuerdo de asociación no ha tropezado con ninguna oposición auténtica ni en los territorios interesados, ni en el Comité Especial. De una u otra forma, estas disposiciones son, a todas luces, un paso importante del colonialismo a la independencia. Los procedimientos, más bien que los resultados, han sido objeto de críticas en el Comité. Varias delegaciones han preguntado por qué no se ha concedido a los pueblos de los territorios la oportunidad de expresar su opción mediante un referéndum. Su delegación también habría preferido un referéndum, pero parece que las disposiciones han sido aceptadas libremente por los representantes electos de los territorios y que éstos representan, a su vez, la voluntad del pueblo. Observa que, con arreglo a las nuevas disposiciones, los territorios podrán optar por la plena independencia, si la desean.

823. El proyecto de resolución A/AC.109/L.378 no reconoce que las nuevas disposiciones suponen un paso dado en la dirección acertada. La sugerencia de que el Subcomité III examine la cuestión es valiosa, pero debería permitirse al Subcomité que procediese sin las restricciones que impone el resto del proyecto de resolución.

Aun apreciando los fines perseguidos por los autores, su delegación preferiría que no se votase sobre el proyecto de resolución y se remitiese la cuestión al Subcomité III.

824. El representante de la República Unida de Tanzania dice que el Comité ha llegado a una etapa que debe examinar la situación de los pequeños territorios coloniales con particular atención, a fin de asegurarse de que no contribuye a malbaratar los intereses de sociedades futuras. Rechaza la sugerencia del representante del Reino Unido de que los autores del proyecto de resolución no han pensado bastante estas cuestiones o han dado muestras de arrogancia para con los pueblos de los territorios del Caribe. Las Potencias coloniales son quienes se muestran arrogantes. No le ha sorprendido escuchar los lamentos del representante del Reino Unido por el fracaso de los planes de una Federación de las Indias Occidentales. El pueblo de esa región ya se pronunció sobre esas maquinaciones coloniales cuando tuvo la oportunidad de expresar su voluntad; el resultado fue el nacimiento de Estados independientes y soberanos como Jamaica, Trinidad y Tabago, Barbados y Guyana.

825. El representante de Sierra Leona dice que ha tenido en todo momento gran fe en las Naciones Unidas en general y en el Comité Especial en particular. Los pueblos bajo dominio colonial vuelven sus ojos a la Organización para que les traiga libertad e independencia. Teniendo presentes estas ideas, desea replicar a los diversos puntos suscitados en el debate. En primer lugar, desea decir que se atiene a su declaración anterior, en la cual reconoció que la Potencia administradora había hecho esfuerzos encaminados a la autonomía y la independencia de los seis territorios del Caribe; tampoco sugirió que los correspondientes problemas fuesen simples.

826. Se han levantado objeciones a la segunda frase del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A/AC.109/L.378, en que se pide a la Potencia administradora que acelere el proceso de descolonización de los territorios interesados de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. En cuanto se le alcanza, se aduce que Su Majestad la Reina, por ley del Parlamento, se ha despojado de toda jurisdicción sobre los asuntos internos de los seis territorios y, en consecuencia, los territorios han sido descolonizados. Tal vez sea así de jure pero ¿lo es de facto? El texto constitucional de cada uno de los territorios dispone que la autoridad ejecutiva será conferida a Su Majestad y que, en su nombre,

la ejercerá el Gobernador, quien será designado por Su Majestad y mantendrá el cargo a discreción de Su Majestad. Nada hay en el texto que diga que el Primer Ministro, su gabinete o el pueblo del territorio tengan voz en la designación o destitución del Gobernador. Todo esto no parece compatible con el principio fundamental de que cualquier asociación similar a la establecida debe basarse en la igualdad absoluta. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución 742 (VIII) la Asamblea General expuso su opinión de que cabe lograr el gobierno propio mediante la asociación con otro Estado si se realiza "libremente y sobre la base de absoluta igualdad". Conforme al párrafo 5 de la parte dispositiva de la misma resolución, la validez de toda forma de asociación entre un territorio no autónomo y otro país depende de la voluntad libremente expresada por el pueblo "en el momento de tomar esa decisión". En el caso actual el pueblo no expresó su voluntad en el momento de la decisión. En los territorios en que se celebraron elecciones el pueblo en conjunto fue consultado una vez concertados los acuerdos y en dos territorios todavía no ha sido consultado. A fin de disipar cualquier duda, la Potencia administradora debía haber cumplido los requisitos de la resolución 742 (VIII), como hizo en las Islas Cook.

827. Estas razones justificarían por sí solas la aprobación del proyecto de resolución. Pero queda, además, la cuestión de las disposiciones de defensa. Los gobiernos de los territorios no deben conceder acceso a su territorio o aguas territoriales a fuerzas o agentes de cualquier otro gobierno sin el consentimiento previo del Reino Unido. Desea señalar tres cosas al respecto. En primer lugar, este requisito parece privar a los gobiernos de las islas del libre ejercicio de los derechos que entraña la plenitud del gobierno propio. En segundo lugar, ni siquiera existe una disposición que garantice que no será retirado irrazonablemente el consentimiento para un arreglo de esa índole. En tercer lugar, cabría esperar que una asociación basada en la igualdad absoluta prefiriese la consulta en vez de colocar a uno de los asociados en posición de inferioridad. Es evidente que se hace caso omiso del principio de igualdad absoluta. ¿No es ésta una razón que justifique el profundo pesar?

828. La Asamblea General ha solicitado del Comité Especial que arbitre los medios adecuados para la aplicación total e inmediata de la resolución 1514 (XV) en los territorios que todavía no han logrado la independencia o la plenitud del gobierno propio. Ello es lo que se trata de hacer con el proyecto de resolución.

/...



829. El representante de la Costa de Marfil nunca ha transigido en cuestiones coloniales y siempre ha apoyado plenamente la causa de los pequeños territorios. Sin embargo, en el caso de los territorios que se examinan, la situación le resulta confusa. En vista de las nuevas disposiciones que se han introducido en los territorios, no es necesario, en su opinión, que el Comité adopte una decisión inmediata sobre el fondo del problema. La cuestión debe remitirse al Subcomité III, que podrá estudiar todos los aspectos jurídicos de las nuevas disposiciones. Además, el Comité no ha tenido oportunidad de cerciorarse de las opiniones de los propios isleños acerca de los problemas que se presentan. Sin que ello signifique tomar posición sobre el fondo de la cuestión, el orador considera que, con arreglo a la información disponible, sería un error rechazar las medidas que pueda haber adoptado la Potencia administradora para la descolonización de los territorios. Reconoce que el proceso de descolonización no está terminado y que, por consiguiente, la resolución 1514 (XV) aún se aplica a los territorios; pero no cree que el Comité deba aprobar una resolución como la propuesta en el documento A/AC.109/L.378. Propone que la cuestión se remita al Subcomité III para un estudio detallado. Si se rechaza esta propuesta, su delegación, lamentablemente, encontrará muy difícil apoyar el proyecto de resolución presentado al Comité.

830. El representante del Reino Unido está seguro de que el representante de Sierra Leona reconoce la fuerza especial de las decisiones de un parlamento libre y soberano elegido por sufragio de los adultos, particularmente cuando estas decisiones se han aprobado por unanimidad. Pide a dicho representante que considere cuidadosamente si el Reino Unido ha actuado con arreglo a la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General; el orador afirma que el Reino Unido y los representantes elegidos por los territorios han tenido muy en cuenta esa resolución. Además, el Comité está igualmente obligado a prestarle especial atención.

831. No cree que el representante de Tanzania, después de reflexionar, mantenga su acusación de que los esfuerzos encaminados a establecer una federación en la zona del Caribe han sido resultado de maquinaciones del Gobierno del Reino Unido. El orador sabe, por experiencia personal, que las propuestas tendientes a una federación surgió del pueblo mismo y de sus representantes electivos; los esfuerzos enderezados a establecer una federación se emprendieron de conformidad con los deseos libremente expresados del pueblo y no fueron iniciados por el Gobierno del Reino Unido, aunque

éste les prestó todo su apoyo y aliento. Cuando, andando el tiempo, una de las entidades que iban a formar parte de la federación manifestó que no estaba dispuesta a federarse, el Gobierno del Reino Unido aceptó sin dificultad los deseos del pueblo interesado. El Comité no puede hacer caso omiso de los deseos del pueblo, expresados libre y unánimemente por dirigentes elegidos de los partidos de la mayoría y la minoría, en parlamentos libres. El representante de Tanzania ha hablado de "malbaratar" los intereses de los pueblos coloniales. Sin embargo, la cuestión que se plantea al Comité es la de saber si puede poner obstáculo a los deseos expresados por el pueblo mediante un sistema parlamentario libre.

832. El orador no ha acusado de arrogancia al Comité ni a los autores. Ha dicho meramente que, si el Comité tratase con desprecio los deseos del pueblo de los territorios, ello equivaldría a un acto de arrogancia. En todos los procesos de descolonización es esencial que se tenga en cuenta la voluntad popular libremente expresada y, en los seis territorios del Caribe, esta voluntad ha sido libremente expresada.

833. El orador concuerda con el representante de la Costa de Marfil en que debe disponerse de más tiempo para el examen del proyecto de resolución. Desde luego, la cuestión no es simple; deben examinarse todos los factores y debe prestarse la debida atención a los procedimientos empleados para consultar al pueblo. Nada perdería el Comité si diese al Subcomité III más tiempo para celebrar consultas, no sólo con los miembros del Comité, sino también con otros Estados miembros interesados. El porvenir de las Naciones Unidas podría muy bien quedar afectado por la condición que alcancen los treinta o más territorios coloniales dispersos que siguen figurando en el programa del Comité. Por lo tanto, el orador propone que, antes de votar sobre el proyecto de resolución, el Comité remita la cuestión de los seis territorios al Subcomité III para nuevo examen.

834. El representante de la República Unida de Tanzania observa que el representante del Reino Unido señaló que el Reino Unido había tratado de formar una federación en el Caribe y casi había logrado su propósito, pero que, cuando se organizó un plebiscito en Jamaica, la Federación fue rechazada por el pueblo. Si bien el orador no desea interpretar los actos del pueblo, presume que éste ha rechazado las propuestas porque no está de acuerdo con ellas.

835. En el proyecto de resolución A/AC.109/L.378 se prevé que la cuestión ha de remitirse al Subcomité III. Al aprobar el proyecto el Comité no haría sino cumplir el mandato que le ha confiado la Asamblea General, a saber, examinar todos los territorios que no hayan alcanzado aún la independencia; a estos territorios se refiere la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y esto se refleja en los dos primeros párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución. El tercer párrafo satisface los deseos de las muchas delegaciones que han solicitado que se remita la cuestión al Subcomité III. Por lo tanto, el orador recomienda encarecidamente al Comité que apruebe el proyecto de resolución, que no significará prejuzgar en modo alguno del examen de la cuestión por el Subcomité III.

836. El representante del Uruguay dice que hay una serie de textos básicos que se refieren a la cuestión examinada por el Comité, y cabe estudiarlos en conjunto. No es acertado considerar que el único texto por el que deben regirse las deliberaciones del Comité es la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Es cierto que dicha resolución es un instrumento básico de la comunidad internacional, del cual surgen todos los demás, pero ello no significa que no deban aplicarse otros textos cuando corresponda.

837. El presente debate se refiere a territorios muy pequeños y a cuestiones coloniales que afectan a una serie de islas que, económica, demográfica y geográficamente, tienen limitada importancia. La población total de las islas, grandes y pequeñas, que está examinando el Comité asciende a 480.000 habitantes. Tan sólo unas pocas horas después de haber aprobado la resolución 1514 (XV), la Asamblea General vio que era necesaria otra resolución adicional para los territorios muy pequeños que no podían llegar a la independencia por sí mismos y que podrían ser víctimas de Potencias que trataran de imponerles una nueva forma de colonialismo. Además, la preocupación de las Naciones Unidas por los pequeños territorios no empezó con la aprobación de la resolución 1514 (XV); en la resolución 742 (VIII), la Asamblea General enumeró los factores que habrían de tenerse en cuenta para decidir si un territorio había alcanzado o no la plena autonomía. La resolución 1541 (XV) de la Asamblea General se refiere a esa resolución y a la resolución 1467 (XIV), por la que se estableció el Comité Especial de los Seis para estudiar los principios rectores sobre la transmisión de información en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, y en ella se dice que los principios propuestos por el Comité deben

aplicarse a la luz de los hechos y las circunstancias de cada caso para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Artículo 73 de la Carta. El principio III del anexo de la resolución 1541 (XV) señala que la obligación de transmitir información constituye una obligación internacional y debe cumplirse con el respeto debido a la realización del derecho internacional. En virtud del principio VI, puede considerarse que un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio cuando, entre otras cosas, establece una libre asociación con un Estado independiente. El principio VII estipula que la libre asociación debe ser el resultado de la libre y voluntaria elección de los pueblos del territorio interesado expresada con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos, debe respetar la individualidad y las características culturales del territorio y de sus pueblos, y reservar a los pueblos del territorio la libertad de modificar el estatuto de ese territorio mediante la expresión de su voluntad por medios democráticos y con arreglo a los procedimientos constitucionales. Agrega que el territorio que se asocia debe tener derecho a determinar su constitución interna sin ninguna injerencia exterior, de conformidad con los debidos procedimientos constitucionales y los deseos libremente expresados de su pueblo, sin excluir la posibilidad de celebrar las consultas que sean apropiadas o necesarias. Por lo tanto, los principios que rigen la libre asociación permiten al Estado asociado ejercer su voluntad y optar por la completa independencia política cuando así desea. Como en el proyecto de resolución A/AC.109/L.378 sólo se menciona la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, puede causar la impresión de que sólo hay una regla para la descolonización. Esto contradice las recomendaciones de la Asamblea General según las cuales los pequeños territorios deben buscar una forma de federación o libre asociación que les permita desarrollarse plena e independientemente.

838. El hecho de que la resolución 1514 (XV) no sea el único texto pertinente y de que se consideren ciertos territorios como excepciones se desprende claramente de lo que ha ocurrido con los antiguos territorios de Basutolandia y Bechuania. A este respecto, el orador recuerda haber dicho en el Consejo de Seguridad (S/PV.1306) que la obtención de la independencia por Lesotho y Botswana constituye una nueva afirmación del espíritu de descolonización que está transformando rápidamente el mapa político del mundo. Señaló en esa ocasión que el Subcomité establecido para

estudiar las medidas destinadas a garantizar la integridad territorial y la soberanía de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia, había hecho todo lo necesario para promover la obtención de una independencia segura y efectiva por los dos países que estaban en condiciones de obtenerla, es decir, Basutolandia y Bechuania. Ambos territorios estaban situados en una región del Africa meridional que, políticamente, estaba en manos de una minoría no africana. Por lo tanto, el Subcomité había tenido en cuenta las resoluciones 1817 (XVII) y 1954 (XVIII) de la Asamblea General, según las cuales toda tentativa de anexar a Basutolandia, Bechuania o Swazilandia, o de infringir de cualquier modo su integridad territorial, sería considerada por las Naciones Unidas como un acto de agresión violatorio de la Carta. Dijo, además, que era urgente establecer garantías internacionales que protegiesen efectivamente los países expuestos a vecinos cuyos designios y objetivos expansionistas eran notorios y cuya política de apartheid era repudiada por todas las personas civilizadas.

839. Es evidente, pues, que la resolución 1514 (XV) no es la única resolución aplicable a los territorios pequeños. Por consiguiente, el orador no puede aceptar que el proyecto de resolución A/AC.109/L.378 se refiera sólo a la resolución 1514 (XV) y no haga mención de las demás resoluciones pertinentes. En su opinión, habrían de celebrarse consultas antes de votar sobre el proyecto de resolución; el Subcomité III debe seguir examinando la cuestión no sólo por las consecuencias que pueda tener para los seis territorios del Caribe, sino también porque podrá servir de precedente para territorios similares que están por descolonizar. El Comité, desde luego, debe tomar con entusiasmo su tarea de descolonización, pero también proceder con cautela.

840. En su declaración anterior el orador señaló los inconvenientes de una situación de facto y dijo que el Comité no podía tomar una decisión que equivaliese a imponer un casus belli a la Potencia administradora. Esta opinión ha adquirido aun más importancia en vista de que el representante del Reino Unido ha pedido que se remita la cuestión al Subcomité III. Nadie puede negar que el Uruguay se dedica incansablemente e intrépidamente a la causa de la descolonización. Sin embargo; considera que deben ponderarse las características especiales de cada caso y que, dadas sus grandes responsabilidades, el Comité Especial tiene que actuar con prudencia. Por esta razón, el Comité debería suspender el debate sobre los seis territorios del Caribe y remitir la cuestión al Subcomité III para nuevo examen.

841. El representante de Túnez se da cuenta de que una de las razones que han llevado a la presentación del proyecto de resolución es el factor tiempo. Los autores quieren que el Comité adopte una decisión antes de que las nuevas disposiciones entren en vigor. Otra razón ha sido la declaración de la delegación del Reino Unido según la cual, después de entrar en vigor las nuevas disposiciones, la Potencia administradora no se considerará obligada a transmitir información a las Naciones Unidas o a cooperar con el Comité Especial. Sin embargo, en lo que se refiere a la primera razón, las disposiciones han entrado ya en vigor para todos los territorios excepto San Vicente. En segundo término, el orador entiende, por la declaración que acaba de hacer el representante del Reino Unido en la presente sesión, que la delegación del Reino Unido está dispuesta a seguir cooperando con el Comité Especial y a proporcionarle toda la información necesaria para el estudio de la cuestión. Se pregunta, pues, si todavía urge aprobar un proyecto de resolución antes de que se remita la cuestión al Subcomité III. Sin perjuicio de la postura de su delegación acerca del proyecto, el orador se pregunta si la delegación del Reino Unido puede asegurarle que continuará cooperando con el Comité en el estudio de la cuestión y le proporcionará toda la información necesaria para ese estudio.

842. El representante de Madagascar ha apoyado siempre con entusiasmo todas las medidas adoptadas en el Comité para acelerar la descolonización. Sin embargo, considera que en el presente caso la cuestión debe examinarse en cuanto al fondo, independientemente de toda consideración doctrinaria. Se trata de saber si ciertos cambios constitucionales introducidos en determinados territorios significan un progreso hacia la descolonización. El orador considera que el mejor camino hacia la independencia es la concesión de un mayor grado de autonomía a los representantes elegidos por la población. Las medidas adoptadas por la Potencia administradora parecen constituir, evidentemente, un paso hacia la libre determinación y la autonomía, y no deben ser motivo de pesar, sino de agradecimiento o, por lo menos, de alguna evaluación objetiva. Muchos países han llegado a la independencia después de un proceso en que se les ha dado gradualmente mayores poderes en las cuestiones internas, proceso que por sí mismo ha estimulado su deseo de independencia. El orador está convencido de que, antes de mucho tiempo, la población de las islas que se examinan pedirá la independencia, y de que el Reino Unido concederá esa independencia cuando se la pidan.

843. El orador se da cuenta de que las disposiciones constitucionales no se ajustan completamente a la resolución 1514 (XV). Como ha dicho el propio representante del Reino Unido, queda todavía mucho por hacer. Tal vez sea necesario introducir perfeccionamientos, como, por ejemplo, en lo que respecta a la designación del Gobernador, a que se ha hecho referencia. Precisamente porque es necesario introducir mejoras, la delegación de Madagascar apoya la propuesta del representante de la Costa de Marfil de que la cuestión se remita al Subcomité III.

844. El representante de los Estados Unidos de América no se opone a la propuesta formulada en el proyecto de resolución de que se remita la cuestión al Subcomité III. Sin embargo, no concuerda con lo que se dice en los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva, ni con el tono general negativo del proyecto. Además de remitir la cuestión al Subcomité, en el proyecto de resolución parece sugerirse también cuál ha de ser el resultado del examen del Subcomité. Su delegación coincide con varios oradores en que la asociación constituye un progreso cierto. Nadie ha puesto en duda esta opinión y, por lo tanto, parece poco apropiado iniciar la parte dispositiva del proyecto de resolución con una expresión de profundo pesar. Es más, su delegación nunca ha aceptado que la independencia constituya la única forma de poner fin a la condición de territorio no autónomo. Sigue considerando que también tienen aplicación las diversas posibilidades enumeradas en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. En sus consultas con el Gobierno del Reino Unido, los representantes elegidos por los territorios examinados no han mostrado preferencia por la independencia en lugar de las actuales disposiciones. En todo caso, ahora que es autónomo, el pueblo de los territorios tendrá plena oportunidad de elegir por sí mismo en lo futuro y podrá optar por la independencia cuando la desee. No corresponde al Comité dictar al pueblo lo que debe elegir. El proyecto de resolución, al hacer hincapié en un supuesto incumplimiento de la resolución 1514 (XV), parece sugerir que la única solución aceptable es la independencia. Si es preciso remitir la cuestión al Subcomité III para nuevo examen, hay que hacerlo sin estas conclusiones a priori.

845. El representante del Reino Unido, en respuesta a la pregunta del representante de Túnez, desea aclarar la actitud de su delegación en lo referente a la cooperación con el Comité y el Subcomité. Como ha dicho, si se aprueba un proyecto de resolución en los términos propuestos, toda participación o cooperación ulterior de su delegación en las cuestiones que se examinan, ya sea en el Subcomité o en el Comité Especial, será imposible. Si, empero, se aprueba su propuesta y se decide que la cuestión

debe someterse a nuevo examen en el Subcomité, el orador puede asegurar que su delegación participará plenamente en los debates del Subcomité a fin de ayudarlo a llegar a sus conclusiones.

846. El representante de Sierra Leona no considera apropiado que el representante del Reino Unido trate de influir en la votación con amenazas. El representante del Reino Unido ha pedido también al orador que considere las nuevas disposiciones a la luz de la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. Pero la resolución 1541 (XV) se refiere a los principios que deben servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Artículo 73 de la Carta. De todos modos, el principio de igualdad, ya mencionado, está consagrado en dicha resolución. En virtud del principio V, si hay elementos que influyen en las relaciones entre el Estado metropolitano y el territorio de modo que éste se encuentre colocado arbitrariamente en una situación o en estado de subordinación, esos elementos confirmarán la presunción de que existe la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Artículo 73 de la Carta. El fondo de los argumentos en favor del proyecto de resolución es que en las actuales disposiciones falta el elemento de igualdad absoluta.

847. El Presidente también se siente obligado a referirse a la declaración del representante del Reino Unido acerca de la cooperación de su delegación con el Comité. Las obligaciones del Reino Unido y de otros miembros del Comité Especial se desprenden de las que les imponen la Carta y las resoluciones de la Asamblea General, aunque, naturalmente, cada delegación tiene derecho a interpretar por sí misma la Carta y las resoluciones de las Naciones Unidas.

848. El representante de la República Unida de Tanzania desea sumarse a las observaciones del representante de Sierra Leona y del Presidente. Triste será para el Comité el día en que sus acciones sean determinadas por amenazas de no cooperación por parte de las Potencias coloniales.

849. El representante de la República Unida de Tanzania dice que su delegación rechaza la actitud del Gobierno del Reino Unido con respecto a los territorios que se examinan y considera que lo que se pide en el proyecto de resolución de las siete Potencias es correcto y necesario. Por consiguiente se opone enérgicamente a la propuesta del Reino Unido de que la cuestión sea referida al Subcomité III sin ninguna acción por parte del Comité, especialmente en vista del tiempo ya dedicado al debate de la cuestión. Propone que el Comité proceda a votar sobre el proyecto de resolución.

/...



850. El representante del Irán dice que, después de consultar con otros miembros del Comité desea proponer ciertas enmiendas al proyecto de resolución, con la esperanza de que éste logre el asentimiento de una serie de delegaciones que participaron en el debate. En primer término propone que el párrafo dispositivo del proyecto de resolución sea eliminado. Ello satisfaría a los representantes que consideraron que no debiera haber expresión de pesar alguna en vista de que ha habido cierto adelanto en la condición de los Territorios. En segundo término propone que el actual párrafo 2 de la parte dispositiva se modifique en el siguiente sentido: "Reafirma que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y otras resoluciones pertinentes siguen aplicándose a estos Territorios". Se ha pedido a la Potencia administradora que acelere el proceso de descolonización en otras resoluciones, y por consiguiente la última parte del párrafo no es necesaria. En el actual párrafo 3 de la parte dispositiva propone la adición de las palabras "a la luz de los recientes acontecimientos constitucionales" después de "examinar". El Subcomité debe naturalmente estudiar la situación a la luz de los importantes acontecimientos constitucionales que han tenido lugar. Es de esperar que los patrocinadores del proyecto de resolución puedan aceptar estas enmiendas, y que la delegación del Reino Unido encuentre posible retirar su propuesta de referir la cuestión al Subcomité III. De este modo el Comité podría acercarse a la unanimidad.

851. El representante de Sierra Leona dice que los autores del proyecto de resolución aceptan las enmiendas sometidas por la delegación del Irán. Aclara que ello no se debe a la desdichada amenaza hecha por la delegación del Reino Unido en una sesión reciente, sino que tiene por fin promover los intereses del Comité y de los pueblos de los Territorios que se examinan. Espera que la delegación del Reino Unido encuentre las enmiendas aceptables y que ofrezca su plena cooperación al Comité y al Subcomité.

852. El representante de Italia dice que el nuevo texto del proyecto de resolución (A/AC.109/L.378/Rev.1) después de aceptadas por los patrocinadores las enmiendas del Irán, se ajusta mucho más al punto de vista de su delegación. Le complace notar que hay acuerdo general en cuanto que el problema sea examinado en detalle por el Subcomité III. No obstante, la actual redacción del proyecto aun le ofrece algunas dudas. Considera que el nuevo párrafo 1 de la parte dispositiva, al reafirmar que la resolución 1514 (XV) y otras resoluciones siguen aplicándose a los Territorios,

/...

se anticipa a las conclusiones de las deliberaciones del Subcomité. La resolución 1514 (XV) es, desde luego, la principal guía del Comité, pero la cuestión de si la resolución 1514 (XV) y otras pertinentes han sido cumplidas en los Territorios, y hasta qué punto no se ha resuelto aún. Por consiguiente propone que el nuevo párrafo 1 de la parte dispositiva sea eliminado y que el nuevo párrafo 2 de la parte dispositiva sea enmendado en el siguiente sentido: "Pide a su Subcomité III que examine la situación de dichos Territorios en todos sus aspectos, teniendo en cuenta la reciente evolución constitucional así como las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y demás resoluciones pertinentes" (A/AC.109/L.381).

Ello daría al Subcomité III un mandato lo más amplio posible.

853. El representante del Reino Unido dice que, al estudiar la importante cuestión de los seis Territorios del Caribe, el Comité debe adoptar una actitud de cooperación sin prejuicios. Es evidente que las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de la Asamblea General son complementarias y no contradictorias y que el Comité debe tener en cuenta ambos textos. La libre asociación es, frente a la plena independencia, una posibilidad admisible, aceptable y debidamente autorizada. Las disposiciones que al respecto figuran en las resoluciones 1541 (XV) de la Asamblea General han sido respetadas plenamente tras amplísima consulta entre el Gobierno del Reino Unido y los habitantes de las islas y con el apoyo unánime de los órganos legislativos de los Territorios elegidos libremente y por sufragio universal de los adultos. Su delegación preguntó si los patrocinadores del proyecto de resolución (A/AC.109/L.378) rechazaban las disposiciones explícitas de la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General y la libre expresión de la voluntad de los pueblos interesados y si deseaban estipular que todos los territorios coloniales restantes, por pequeños, pobres o aislados que fueran, debían ser obligados a abandonar sus propios fines libremente expresados (párrafo 820 supra). Estas preguntas quedaron sin respuesta.

854. El proyecto de resolución revisado (A/AC.109/L.378/Rev.1) no reconoce los propósitos perseguidos por el Gobierno del Reino Unido y los órganos legislativos electos de las islas de que se trata. No reconoce los procedimientos de consulta democrática que se han aplicado plena y libremente. No respeta los deseos de los pueblos interesados expresados libre y claramente. No acoge con beneplácito la autonomía que ha llegado a conceder el Gobierno del Reino Unido con su política y

con arreglo a sus obligaciones en virtud de la Carta. No expresa aprobación del derecho que se otorga a los isleños para modificar sus constituciones y avanzar por su propia voluntad, si así lo desean, hasta la independencia total. Y, por último, no menciona en absoluto las disposiciones que rigen la libre asociación y que han sido autorizadas explícitamente por la Asamblea General. Sin duda, estos defectos merecen nuevo examen.

855. La delegación del Reino Unido sigue creyendo que las cuestiones que estudia el Comité tienen consecuencias trascendentales no sólo para los Territorios del Caribe, sino también para otros territorios. Insta al Comité a que no se pronuncie definitivamente en la etapa actual y a que asigne, en cambio, más tiempo para un nuevo examen de la cuestión y una cooperación fructífera. Aún es posible y necesario llegar a cabo un debate completo con plena cooperación y sin prejuicios. La Sra. Judith Hart, Ministro de Estado para el Commonwealth, que tiene a su cargo las cuestiones que ahora se estudian, llegará en breve a Nueva York y espera entablar conversaciones oficiosas con muchas delegaciones en las Naciones Unidas. Sería una lástima que el Comité adoptase una decisión que pudiese impedir esas conversaciones.

856. El Comité debe tener presente la cuestión más amplia del futuro de los territorios coloniales dispersos y a menudo pequeños que aún existen en todo el mundo. Lo que haga con respecto a los seis Territorios del Caribe ha de tener, por fuerza, cierta influencia en sus futuras decisiones acerca de los demás Territorios. Al proponer que se remita la cuestión al Subcomité III para que prosiga su estudio, el orador no pide a ningún miembro del Comité que modifique las opiniones expresadas, aun cuando espera que escuchando nuevos argumentos los representantes mantendrán una mente abierta.

857. Si bien acoge con satisfacción el hecho de que los autores del proyecto de resolución original hayan tenido en cuenta los argumentos expuestos en el Comité y hayan introducido algunos cambios de importancia en el texto revisado (A/AC.109/L.378/Rev.1), siguen haciendo algo que no debería hacerse en la etapa actual, a saber, prejuzgar la cuestión. La recomendación definitiva a la Asamblea General incumbe totalmente al propio Comité, que conservará todas sus facultades y su plena libertad de acción. Su delegación puede aceptar la enmienda (A/AC.109/L.381) al proyecto de resolución revisado presentada por el representante de Italia.

858. Puede muy bien ocurrir que el proyecto de resolución en su forma actual no sea satisfactorio para ninguno de los miembros del Comité. Tras nuevas reflexiones y estudios cabría llegar a un texto más completo que reflejase la opinión general en forma más adecuada. El orador no solicita que se retire ninguna de las propuestas presentadas al Comité. Las consecuencias de cualquier decisión que pueda adoptar el Comité tienen tan largo alcance que valdría la pena permitir al Subcomité III que revisase toda la cuestión. La experiencia del orador en las Naciones Unidas le indica que, incluso cuando las opiniones son totalmente divergentes e incluso cuando un solo miembro cree que hay ventajas en seguir examinando una cuestión, no debe excluirse esa posibilidad. En consecuencia, pide al Comité, con ánimo de cooperación máxima, que brinde al Subcomité III esta oportunidad a fin de que pueda tratar de hallar una base de acuerdo común.

859. El orador, desde luego, no profiere amenazas, como se ha dicho, sino más bien ofrece cooperación. Deploraría sin duda que el Comité rechazase esta cooperación. Está muy dispuesto a examinar la cuestión a fondo en el Subcomité III antes de llegar a una conclusión. Espera, por ello, que se dispondrá de más tiempo para el debate, que se permitirá al Subcomité III examinar la cuestión, que no se impedirá al Reino Unido cooperar con ese Subcomité y que el Comité reservará su juicio sobre el proyecto de resolución y sobre la enmienda al mismo.

860. El representante del Uruguay declara que el Comité tiene el deber de la cuestión que se le ha planteado con todo el realismo necesario. En particular, conviene recordar que la libre asociación o la integración total con otro Estado, así como las fórmulas de federación política o unión económica, constituyen en cuanto a la descolonización, fórmulas plenamente legítimas, cuya adopción permite, a veces, sortear ciertos obstáculos, de otro modo, insuperables. No hay que considerar en ningún caso que la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General contradice las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la que es, al contrario, corolario natural. También importa reafirmar este principio puesto que la resolución 1541 (XV) deberá aplicarse probablemente no sólo en los seis territorios de que se ocupa ahora el Comité, sino también en muchos otros territorios que se encuentran en análoga

situación. Cabe recordar que, cuando se examinó el proyecto de Declaración sobre la concesión de la independencia, algunos países se opusieron al hecho de que ese texto presentase la independencia total e inmediata como única fórmula aceptable, lo que les parecía contrario a las disposiciones de la Carta que prevén el gobierno propio dentro del marco de entidades políticas más amplias. En particular, el representante de los Estados Unidos de América declaró en esa ocasión que no era oportuno adoptar un principio cuya aplicación podría entrañar en ciertos casos una excesiva partición territorial y política, y afirmó que la autonomía total en el marco de un conjunto político más amplio era a veces más indicada que la independencia total. En un comentario sobre estas reservas en un importante artículo del "Anuario Uruguayo de Derecho Internacional" (tomo II, págs. 188 y 189), el Embajador Velásquez, ex Vicepresidente del Comité Especial, insiste sobre todo en que ambas resoluciones (la resolución 1514 (XV) y la resolución 1541 (XV)) fueron aprobadas por la Asamblea en el mismo período de sesiones con unas horas de intervalo y concluye de ello que no pueden ser contradictorias. El autor del artículo analiza a continuación la hipótesis de que habría que interpretar la independencia a que se alude en el texto de la resolución 1514 (XV) como una primera etapa absolutamente indispensable, a partir de la cual el territorio que hubiese logrado esa independencia podría después, y sólo después, contraer obligaciones como, por ejemplo, las que tuviesen por objeto la asociación con otro Estado. Se trata, en suma, de la hipótesis de que todo pueblo debería poseer, aunque sólo fuese por un solo instante, antes de comprometerse para el futuro el poder soberano y total de decisión que caracteriza a la independencia. No obstante, el Embajador Velásquez sólo expone esta interpretación para desecharla a renglón seguido, ya que, declara, quienquiera que la admita deberá considerar nulos de toda nulidad los actos de libre determinación de los diversos territorios cuando éstos se encontraban todavía sometidos al régimen colonial, es decir, prácticamente todos los actos realizados hasta el presente en el dominio colonial, incluso con posterioridad a la aprobación de la Declaración sobre la concesión de la independencia. Se ve así de qué modo, llevando el purismo hasta el absurdo, es posible llegar a negar los mismos principios en que se inspira la tesis original. Si se aceptase esa interpretación habría que considerar nulas, por ejemplo, la integración de Groenlandia a Dinamarca y la de Surinam a los

Países Bajos, ocurridas antes de la Declaración sobre la concesión de la independencia, así como los casos de integración de la "Gran Malasia", Zanzíbar, Kenia y muchos otros acaecidos después del mes de diciembre de 1960.

861. Colocándose en el lado opuesto a esta tesis, la delegación del Uruguay sostiene que, por el contrario, hay que encarar las realidades históricas y políticas que caracterizan a la actual situación de las Antillas británicas, aun cuando dicha situación no sea totalmente clara; en efecto, una actitud de hostilidad tendría, a su juicio, consecuencias mucho más graves que una actitud más flexible, pero también más constructiva, que tendría el mérito de orientar a la descolonización en el sentido deseado por las Naciones Unidas al mismo tiempo que permitiría trabajar en armonía con la Potencia administradora.

862. Durante el examen de la cuestión la delegación uruguaya se ha esforzado en todo momento por hacer adoptar una fórmula que tenga en cuenta simultánea e igualmente tres factores fundamentales: la voluntad de descolonizar, el realismo político y la adhesión a los principios de derecho. No cabe duda alguna de que la solución adoptada en las conferencias de Londres es legítima, ya que responde a los intereses de las poblaciones de que se trata. Además, concuerda con las conclusiones y recomendaciones que figuran en los informes presentados en 1964, 1965 y 1966 por el Subcomité III, informes que fueron aprobados por el Comité Especial, por la Cuarta Comisión y, por último, por la propia Asamblea. En las conclusiones y recomendaciones formuladas por el Comité en 1964, reproducidas en el informe relativo a la labor de 1966, figura el pasaje siguiente:

"El Comité observó que estas islas parecían contar con elementos comunes suficientes ... como para hacer posible alguna forma de unión entre algunas de ellas, si no entre todas. El Comité afirmó que parecía haber acuerdo general entre "las siete pequeñas" ... con respecto a la independencia inmediata y la formación de algún tipo de federación (A/6300/Add.10, párr. 2).

Precisamente estas fórmulas de "unión" y de "federación" sirvieron de base a los acuerdos constitucionales de Londres para la libre asociación de las pequeñas islas de las Antillas orientales y el Reino Unido. En cuanto a las relaciones previstas entre el Reino Unido y los territorios se enuncian en los términos siguientes en el acta de los debates que figura en el informe del Subcomité III sobre la labor de 1966:

"El Gobierno del Reino Unido reconocía que ... no bastaba con hacer entrega de nuevas facultades a los gobiernos locales en un contexto colonial, y había resuelto idear una nueva relación que fuese compatible con la madurez política de los Territorios, pero que, al mismo tiempo, les permitiera mantener con el Reino Unido los vínculos que desearan conservar ... El Gobierno del Reino Unido había propuesto que cada Territorio se convirtiera en un Estado asociado con el Reino Unido, con control sobre sus asuntos internos y con derecho a enmendar su propia constitución, incluida la facultad de poner término a la asociación con el Reino Unido y declararse independiente" (Ibid., párrs. 150 y 151).

Así, pues, habida cuenta de esta situación, el Subcomité III formuló sus recomendaciones al concluir sus trabajos.

863. En estas condiciones, la fórmula adoptada en las conferencias constitucionales de Londres no sólo no contradice los principios que deben regir la descolonización sino que indica, además, en cierta medida la preocupación por aplicar las recomendaciones del Subcomité III y, en consecuencia, del Comité Especial, de la Cuarta Comisión y de la Asamblea General.

864. Sin embargo, conviene destacar que la Potencia administradora no ha organizado efectivamente ningún referéndum para determinar la voluntad de la población acerca de las nuevas disposiciones. La delegación del Reino Unido ha mantenido al respecto que de conformidad con la Carta, el referéndum no constituye el único medio de poner en práctica el principio de la libre determinación. Se diría que, en este punto, coincide con ella el Embajador Velásquez, cuyo artículo publicado en el "Anuario Uruguayo de Derecho Internacional" ya ha citado el orador. En dicho artículo, el Sr. Velásquez recuerda que, cuando se examinó el texto de la Declaración sobre la concesión de la independencia en el decimoquinto período de sesiones de la Asamblea, las Potencias coloniales manifestaron sobre todo su oposición respecto del párrafo 5 de dicha Declaración, es decir, el que se refiere a las medidas que deberían tomarse inmediatamente para traspasar todos los poderes a los pueblos de los territorios no autónomos. Al comentar esta cuestión el autor del artículo declara que parece evidente que, cuando se habla de traspaso en la Declaración, sólo puede tratarse de un traspaso a los representantes del pueblo ya que el derecho constitucional moderno sólo conoce el sistema de representación, y agrega que lo que importa es saber qué condiciones deben reunir esos representantes para que pueda considerarse que la soberanía que se transmite lo es en realidad a las poblaciones mismas.

/...

865. Sin volver a su posición personal, que es favorable al referéndum, declara que no le parece posible negar la validez del razonamiento del Sr. Velásquez, sobre todo cuando se trata de territorios dependientes del Reino Unido, país en el que la voluntad popular sólo se manifiesta mediante elecciones, ya que la fórmula del referéndum es ajena a las instituciones británicas.

866. Por último, no hay que olvidar que, según todas las versiones de los hechos, incluso las expuestas por diversos peticionarios, parece que las poblaciones de los seis territorios son partidarias de la fórmula adoptada, de modo que cabe prever, en el impuesto de consulta popular, una gran mayoría de votos afirmativos.

867. Habida cuenta de esas diversas consideraciones, la delegación del Uruguay ha estudiado las distintas propuestas presentadas en relación con la cuestión que examina el Comité. Puesto que no se ha podido llegar a un entendimiento unánime ni sobre el proyecto de resolución de las siete Potencias (A/AC.109/L.378/Rev.1), ni sobre el párrafo único propuesto por el representante de Italia (A/AC.109/L.381), algunas delegaciones han propuesto que se apruebe un nuevo texto que sustituiría al párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de las siete Potencias y que diría lo siguiente: "El Comité Especial ... 1. Reafirma que las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 y las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General deben ser satisfechas en esos Territorios".\* Este texto tendría en cuenta a la vez los principios y los hechos: al adoptarlo el Comité seguiría siendo fiel a la resolución 1514 (XV) sin desconocer, por ello, el hecho consumado. La aprobación de este texto permitiría, además, evitar un conflicto deplorable con la Potencia administradora cuya resuelta voluntad de colaboración hay que reconocer. Si se examina la situación sin prejuicios cabe afirmar que el Reino Unido adoptó en las conferencias de Londres medidas positivas en el sentido de la descolonización y de la autonomía de los territorios que se examinan. Por su parte, el Comité insiste desde hace varias semanas en el respeto cabal de los principios. Es cierto que lo hace a causa de su adhesión a dichos principios, pero también es cierto que, con su insistencia, estorba, sin quererlo, su aplicación. Sería absurdo atacar un estado de cosas del que parecen alegrarse los principales interesados, o sea, las poblaciones de los territorios. A juicio de la delegación uruguaya, el Subcomité III debería tratar de hallar ya una fórmula que permita conciliar, por una parte, el hecho consumado en el marco del derecho británico y, por

---

\* Publicado ulteriormente con la signatura A/AC.109/L.387. En el debate se modificó verbalmente el texto substituyéndose la palabra "satisfechas" por "observadas".



otra, los principios del derecho internacional, esforzándose por corregir una situación ya consolidada, en lugar de tratar de subvertirla en cierto modo por puritanismo. La descolonización debe seguir su curso y sería absurdo retrasarla so pretexto de perfeccionismos. Una vez que la descolonización ha eludido la acción del Comité Especial, éste debe tratar de canalizarla y no de ponerle trabas.

868. El Uruguay no tiene colonias y, por lo tanto, no le anima en este caso, ningún interés egoísta. Trata sólo de favorecer la aplicación del derecho en el respeto de situaciones políticas e históricas nacidas de la auténtica voluntad de los pueblos. Por ello, la delegación uruguaya cree que cumple con su deber al presentar su enmienda y al invitar encarecidamente a los coautores del proyecto de resolución a aceptarla.

869. El Presidente haciendo uso de la palabra en su carácter de representante de la República Unida de Tanzania, declara que su delegación se esforzará por tratar la cuestión desde un punto de vista realista, aunque no únicamente en el plano jurídico. Los países africanos saben muy bien que hay que enfrentarse al problema de la descolonización partiendo de la experiencia y, justamente porque todavía existen en Africa países sometidos, la opinión de las delegaciones africanas no puede dejar de ser realista. Sin embargo, al mismo tiempo, su voto las compromete más de lo que comprometería a otras delegaciones y reviste para ellas especial valor cuando piensa que puede sentar un precedente.

870. La República Unida de Tanzania considera que ha llegado el momento de tomar una decisión, si es posible, en el curso de la presente sesión. Cuando el Comité decidió incluir directamente la cuestión de los seis territorios en su programa, se encontró ante un hecho consumado, pues era dudoso que el Reino Unido aceptase revisar las disposiciones decididas respecto al estatuto de los territorios en cuestión, y el estatuto entró en vigor en el mismo momento en que lo estaba discutiendo el Comité. Por lo tanto el Comité debe decir ahora lo que piensa del nuevo estatuto, juzgándolo en relación con las normas de las Naciones Unidas. Es indudable que algunos territorios lograron su independencia antes de que se aprobase la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General pero, desde que se aprobara, esta resolución ha servido de norma de orientación. Tanzania no tiene, por cierto, intención de imponer una conducta a los pueblos colonizados; sin embargo, estima que toda iniciativa puede tomarse, en particular en el caso presente, teniendo en cuenta la resolución 1514 (XV). El representante del Reino Unido declaró que los seis territorios podrían hacerse cargo en forma enteramente autónoma de sus asuntos internos y que el Gobierno británico habría cumplido

/...

así las obligaciones que le incumben en virtud del Capítulo XI de la Carta (véase el párrafo 677 supra). Esta no ha sido nunca la opinión de Tanzania que estima que una de las cuestiones esenciales es precisamente saber si el Gobierno británico tiene derecho a felicitarse. Sin entrar a examinar si el nuevo estatuto responde o no a los deseos de la población, el orador piensa que el Comité debe tan sólo preguntarse si el Reino Unido ha cumplido con sus obligaciones y si la resolución 1514 (XV) sigue siendo aplicable al caso que se examina. Si es aplicable, el párrafo 2 del proyecto de resolución A/AC.109/L.378/Rev.1 sería casi superfluo, pues entonces el problema tendría que someterse, sin duda alguna, al Subcomité III. De las numerosas consultas entre el Reino Unido y Tanzania se deduce que la única discrepancia, aunque de carácter fundamental, entre ambos países, se refiere a la cuestión de saber si la resolución 1514 (XV) sigue siendo aplicable a los territorios en cuestión, y esta discrepancia no podrá ser superada mediante consultas, por lo cual es necesario tomar una decisión a la mayor brevedad posible.

871. Algunas Potencias coloniales se niegan a calificar a sus territorios africanos de colonias y proclaman que éstos forman parte integrante de la metrópoli. Es posible que algún día se declare ante el Comité que los jefes tradicionales de esos territorios han aceptado la integración de éstos. Por ello la delegación de Tanzania desea que se formule un principio aplicable en tal sentido a todos los territorios, sean cuales fueren y sin tener en cuenta su extensión. Tanzania no considera, por supuesto, que la independencia sea la única expresión del derecho a la libre determinación: por ejemplo, aprobó en la Cuarta Comisión, el estatuto de la Islas Cook, después de haberse convencido que la población había podido ejercer realmente ese derecho, si bien en este caso su aplicación no culminó en la independencia. El orador desea subrayar que el apoyo prestado por la delegación de Tanzania al proyecto de resolución presentado al Comité no obedece en lo más mínimo a un sentimiento de hostilidad con respecto al Reino Unido. La delegación de Tanzania ha reconocido más de una vez el espíritu de cooperación demostrado por el Gobierno británico en sus relaciones con el Comité de los Veinticuatro. Pero esto no permite justificar que se abandonen ciegamente los principios. Por lo demás, el orador está convencido de que el Gobierno británico continuará cooperando con el Comité de los Veinticuatro.

872. A juicio de los coautores del proyecto de resolución que figura en el documento A/AC.109/L.378/Rev.1, éste representa, en su forma actual, lo menos que puede hacer el Comité en favor de las poblaciones de los seis territorios. La delegación

de Tanzania desea pues que se tome una decisión inmediata, juzga inútil efectuar nuevas consultas y espera que cuando el problema se presente al Subcomité III, el Reino Unido prestará a éste su cooperación.

873. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recuerda que la delegación soviética definió ya su posición con respecto al problema que tiene ante sí el Comité, y declara que esta posición sigue siendo la misma.

874. Con todo el representante de la Unión Soviética desearía hacer algunas observaciones a propósito del proyecto de resolución presentado al Comité y de las enmiendas de la delegación italiana referentes a dicho proyecto de resolución.

875. A nadie escapa la importancia de la decisión que debe tomar el Comité acerca de las seis colonias bajo administración británica: lo que está en juego es el destino de la población de esos territorios. Desde hace tres semanas se discute si las modificaciones hechas al estatuto constitucional de esos territorios por la Potencia administradora concuerdan a las exigencias de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, así como a las disposiciones de la Carta y a otros textos en los que se reconoce a todos los pueblos el derecho a la libre determinación y a la independencia. Por otra parte, se trata de decidir si la Autoridad Administradora ha cumplido todas las obligaciones que le incumben en virtud de esos textos y de las decisiones de la Asamblea General con respecto a una cuestión tan importante como el futuro estatuto de los Estados, si bien esta cuestión deberá ser resuelta en forma definitiva por la propia población y únicamente por ella.

876. Para responder a estas preguntas el Comité debe examinar ante todo las condiciones en que la población de los territorios en cuestión ha ejercido su derecho de libre determinación, a fin de poder decir si ha tomado libremente y sin obstáculos su decisión sobre las modificaciones constitucionales y sobre su estatuto futuro. De los elementos de juicio presentados al Comité se deduce que éste no es el caso, o por lo menos que los métodos adoptados por la Potencia administradora no se ajustaron a las normas enunciadas en la Carta ni en la Declaración. No es una simple coincidencia que la mayoría de los miembros del Comité, después de madura reflexión, hayan juzgado que carecen de fundamento serio las seguridades ofrecidas por la Potencia administradora en tal sentido. Las poblaciones de los

/...

territorios en cuestión no han tenido la posibilidad de decidir por sí mismas y en forma directa. Esas poblaciones no han podido pronunciarse sino sobre el rechazo o la aceptación del estatuto de Estados asociados que se les ofrecía, y la hipótesis de la independencia ni siquiera ha sido discutida por la Conferencia constitucional. Puesto que no se presentaron las condiciones indispensables para que la población pudiese decidir libremente, cabe concluir legítimamente que las disposiciones de la Declaración que se refieren a la posibilidad de decidir no han sido respetadas. Se trata de un punto esencial que se impone al examen del Comité, cuando éste decida si se han aplicado o no las disposiciones de la resolución 1514 (XV).

877. No cabría en ningún caso calificar de consulta popular las negociaciones emprendidas con los representantes que forman parte de los órganos legislativos de los territorios en cuestión. Esos órganos, en las condiciones de la administración colonial, no pueden ser considerados como portavoces de la población. Ha podido comprobarse este hecho durante los acontecimientos ocurridos en Granada, provocados por las reformas constitucionales implantadas por la Potencia colonial; en efecto, en ese caso, los representantes elegidos por la población negociaron sobre la base de principios completamente diferentes a aquellos que los electores les habían pedido que defendieran, lo cual constituye una flagrante violación de la voluntad popular. Se ha dicho al Comité que las opiniones de la población de Granada, que estaba deseosa de unirse a los otros territorios, no implicaban que, por ejemplo, Trinidad y Tabago deseara a su vez entrar en tal asociación. Pero éste no es el problema que se discute, sino el hecho de que los representantes de Granada no hayan tenido en cuenta la voluntad de la población. Al escoger el camino de la asociación con el Reino Unido, no han tenido en cuenta las instrucciones que habían recibido de los habitantes.

878. De las aclaraciones proporcionadas por el representante del Reino Unido se deduce que la Potencia administradora no ha tenido en lo más mínimo la intención de proceder a una verdadera consulta popular. Es verdad que se ha previsto que los habitantes de las islas podrán - mediante ciertos procedimientos constitucionales - unirse a los territorios de la región que también forman parte del Commonwealth británico. En los acuerdos constitucionales concertados se reserva también el derecho de la población a lograr la independencia, pero esa decisión deberá adoptarse por mayoría de dos tercios. En realidad no se habla de referéndum, si no es en un

porvenir hipotético y lejano. Por el momento, la población no ha tenido la posibilidad de dar a conocer su opinión. No se le ha pedido que se pronuncie sobre la asociación con el Reino Unido. En realidad, como lo ha hecho notar el representante del Uruguay, la Potencia administradora ha recurrido a un procedimiento que el Comité no puede aprobar. Por lo tanto no es sorprendente que el Reino Unido no acepte la presencia en los territorios de una misión visitadora de las Naciones Unidas.

879. En lo que se refiere al valor intrínseco de las disposiciones constitucionales adoptadas, la delegación soviética advierte que el estatuto de Estado asociado no pone fin en forma alguna a las relaciones coloniales entre los territorios y el Reino Unido. Por ejemplo, el Gobierno británico se reserva el derecho a intervenir directamente en los asuntos internos de los territorios - sin que siquiera hubiese sido invitado a hacerlo por sus gobiernos - en materia de defensa y de relaciones exteriores. No cabe hablar siquiera de autonomía interna. Todo permite pensar pues que el Reino Unido no ha aplicado la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

880. En las circunstancias actuales, el Comité Especial no puede limitarse a remitir la cuestión al Subcomité III, como quisieran el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Al ceder a estas presiones el Comité retardaría aun más el arreglo de esta importante cuestión y traicionaría la confianza de las poblaciones interesadas. Por el contrario, hay que proclamar claramente y sin ambages que el Reino Unido no ha cumplido las obligaciones que ha contraído, pues la asociación no es un primer paso hacia la independencia y la soberanía.

881. Así pues, el Comité debe seguir de cerca la situación y velar porque la Potencia administradora tome medidas conforme a la Carta y a las decisiones de las Naciones Unidas. Por ello la delegación soviética era partidaria del proyecto de resolución presentado anteriormente por los países afroasiáticos (documento A/AC.109/L.378). En ese texto, contrariamente a la versión revisada (A/AC.109/L.378/Rev.1), se enunciaba correctamente la posición del Comité con respecto al estatuto previsto para los territorios en cuestión y se precisaba sin equívocos que la Potencia administradora no había aplicado las resoluciones pertinentes a la Asamblea General. Sin embargo, puesto que en la versión revisada se dice también que la resolución 1514 (XV) sigue aplicándose a los mencionados territorios, la delegación de la URSS se pronunciará a favor del nuevo proyecto de resolución.

/...

882. El representante del Reino Unido, haciendo uso de la palabra en virtud del derecho a responder, declara que considera muy lamentables las graves acusaciones de que su país acaba de ser objeto; en efecto, el representante de la Unión Soviética acaba de afirmar que las poblaciones interesadas no habían tenido la posibilidad de hacer una verdadera elección, que no habían sido consultadas y, lo que es más, que sus representantes elegidos no podían ser considerados como sus verdaderos portavoces. El orador desea recordar que se consultó debidamente a todos los representantes, ya se tratase de representantes elegidos o de dirigentes de los partidos de oposición. Cabe lamentar las palabras del representante de la URSS, que seguramente serán consideradas como un insulto en los territorios interesados.

883. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desea reafirmar el derecho imprescriptible de las poblaciones de los territorios coloniales que, en todos los casos y circunstancias, deben tener la posibilidad de decidir su estatuto político. Este era el sentido de las declaraciones de la delegación soviética.

884. La respuesta del representante del Reino Unido no aporta ningún elemento nuevo al debate. Lo cierto es que la población no tuvo la posibilidad de optar y que no fue consultada directa y democráticamente. La Potencia administradora no ha tenido en cuenta las decisiones de la Asamblea General y, en particular la resolución 2232 (XXI), por la que se la insta a permitir a una misión visitadora de las Naciones Unidas a visitar los territorios. La Potencia administradora tampoco ha hecho nada por retirar sus tropas de los territorios en cuestión ni por dismantelar las bases militares que ha instalado en ellos. Por otra parte, el ejemplo de la Isla de la Ascensión y de Adén demuestra en forma suficiente que, en los países coloniales, el ejercicio de los derechos soberanos de la población es incompatible con el mantenimiento de la presencia militar extranjera. La delegación soviética tan sólo ha querido reafirmar que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General continúa aplicándose a los territorios examinados, y sus preocupaciones en tal sentido son compartidos por un gran número de representantes.

885. El representante del Reino Unido desea reafirmar el carácter representativo de los miembros elegidos de los consejos de gobierno en los territorios que se examinan.

886. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hace notar que la opinión de esas personalidades, cualquiera sea su carácter representativo, no refleja necesariamente la de la población, como lo demuestra el ejemplo de Granada.

887. El representante de Venezuela declara que el Comité Especial, imbuido de los principios de la resolución 1514 (XV), debe tener siempre en cuenta los intereses y el bienestar de las poblaciones de los territorios de que se ocupa. Tratándose en particular de los territorios pequeños, hay que desconfiar de toda independencia precaria y ficticia. En tal sentido, parece que el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 1514 (XV) permite considerar algunas fórmulas originales de libre determinación y de autonomía interna.

888. En todo caso, el Comité Especial no podría sustituirse a los intereses, y en especial a los representantes elegidos - cuyo carácter representativo no impugna el orador - en la búsqueda de las soluciones más apropiadas. Por el contrario, corresponde al Comité velar porque la voluntad de la población se exprese libremente y por medios democráticos, como se dice en la resolución 1514 (XV). La población de los territorios cuyo porvenir político está en juego - como convendrá tal vez el representante del Reino Unido - debería pues ser consultada por medio de un referéndum y deberían enunciarse claramente los términos de la alternativa propuesta. Tales son las consideraciones en las cuales se inspirará la delegación de Venezuela en el momento de pronunciarse sobre las diversas propuestas presentadas al Comité.

889. El representante del Reino Unido dice que, en general, el Comité reconoce la utilidad de las conversaciones celebradas por algunos de sus miembros con la Sra. Judith Hart, Ministro de Estado del Reino Unido para los Asuntos del Commonwealth, quien tiene a su cargo los Territorios que se examinan. Por su parte, ella también encontró valiosas esas conversaciones. Algunos miembros del Comité tuvieron también la oportunidad de mantener conversaciones oficiosas con el Sr. Southwell, Primer Ministro Adjunto de San Cristóbal, quien era Ministro Principal en el momento en que se aprobaron las nuevas disposiciones. El orador estima que todas las delegaciones estarán de acuerdo en que las conversaciones celebradas en las últimas semanas han sido valiosas e importantes. Han suscitado cuestiones cuyo alcance va más allá del Caribe y que se encuentran en lo más hondo del problema planteado al Comité: ¿de qué modo pueden los Territorios más pequeños y más pobres encontrar el lugar que les corresponde en el mundo y ser ayudados para decidir libremente su futuro? Pocos precedentes hay en qué basarse. Su delegación ha estudiado detenidamente el principal precedente reciente: el de las Islas Cook. El Gobierno de Nueva Zelanda adoptó una iniciativa prudente y las Naciones Unidas desempeñaron un papel valioso en la obtención de un resultado convenido, basado en el respeto de los deseos de la población interesada.

/...

890. El Reino Unido ha pedido más tiempo para alcanzar una solución satisfactoria con respecto a los territorios del Caribe; desea cooperación sin prejuicios. Su delegación mantiene, en primer término, que las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de la Asamblea General no son contradictorias, sino complementarias, y, en segundo término, que la libre asociación es una alternativa aceptable y debidamente autorizada de la plena independencia. Las disposiciones de la resolución 1541 (XV) relativas a la libre asociación han sido plenamente satisfechas en los Territorios que se examinan a raíz de una consulta muy amplia entre el Gobierno del Reino Unido y las poblaciones interesadas y de votaciones unánimes en los órganos legislativos de esos Territorios elegidos por sufragio universal de los adultos.

891. En el curso del debate se han planteado algunas cuestiones fundamentales. Precisamente para estudiar los acontecimientos en los territorios del Caribe en el trasfondo de estas cuestiones el Gobierno del Reino Unido ha solicitado más tiempo. Una de esas cuestiones se refiere a los efectos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, cuyo párrafo 5 de la parte dispositiva prevé la adopción de medidas inmediatas para traspasar todos los poderes a los pueblos de los países, y territorios coloniales en conformidad con su voluntad y deseos libremente expresados. Durante el debate sobre las Islas Cook en 1965, el representante del Irak demostró que sólo se satisfaría ese requisito fundamental si se traspasan a las poblaciones de un antiguo Territorio colonial todos los poderes que éstas deseen, libre y abiertamente, inclusive la facultad de obtener la independencia inmediata en cualquier momento que lo deseen<sup>1/</sup>. Esta es exactamente la situación de los Estados Asociados de las Indias Occidentales.

892. La segunda cuestión fundamental es la de saber si el único modo de cumplir la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General consiste en otorgar la plena independencia. El orador no cree que ningún miembro del Comité desee contestar a esta pregunta en sentido afirmativo, y las observaciones del representante de Tanzania en la sesión anterior fueron muy pertinentes a este respecto. Lo importante es que los pueblos interesados disfruten de independencia en la elección. También este es el caso en los Territorios del Caribe en los que se ha respetado plenamente el principio VII de la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. Una cuestión conexa es la de si conviene permitir o alentar a los Territorios del Caribe a constituir una federación. Las disposiciones adoptadas con el asentimiento de los pueblos interesados se han formulado deliberadamente a fin de hacer fácil la constitución de una libre federación si esto es lo que desean esos pueblos.

---

<sup>1/</sup> Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa (A/6000/Rev.1) cap. VIII, párrs. 106 a 113.



893. Otra cuestión importante es la de saber cuál es el método óptimo de conceder a los pueblos el derecho a alcanzar la plena independencia cuando quiera que la deseen. En el caso actual se ha previsto un referéndum. Tal vez haya opiniones divergentes acerca de las virtudes de un referéndum, pero éste ha sido aceptado inmediatamente por todos los pueblos interesados. Una cuestión más es la que se refiere a la intervención de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ya supervisaron un plebiscito y unas elecciones, pero no se prescribe forma alguna de presencia de las Naciones Unidas. Tal vez pueda invitárselas a desempeñar una nueva función con objeto de salvaguardar los intereses y deseos de los pueblos mismos. Esto tendría que estudiarse en el Comité a fin de encontrar solución a la cuestión más amplia del método óptimo de consultar a la opinión pública. En la sesión anterior el representante del Uruguay analizó las ventajas de un referéndum, que son muchas. Otros han dicho que, de haberse celebrado un referéndum en las islas, tal vez el resultado hubiese sido exactamente el mismo que en la actualidad y el Comité habría quedado totalmente satisfecho. Si tal es el caso, lo único que hace falta ahora es aportar pruebas de que, en realidad, las disposiciones adoptadas concuerdan plenamente con los deseos de la población. Como dijo el representante de Tanzania, los deseos de los pueblos han de ser decididos por ellos y no debe dictarlos el Comité. Si las pruebas de que se dispone no son suficientes, es probable que quepa aducir pruebas adicionales. El orador está seguro de que, si dispone de tiempo, su delegación podría disipar las dudas del Comité.

894. En todo momento el Reino Unido ha defendido con firmeza el sistema parlamentario. Un referéndum puede ser la solución de algunos problemas sencillos, pero una nueva constitución no es un problema sencillo, y hay que elaborarla mediante negociaciones entre los representantes acreditados del pueblo. Esto puede hacerse en una conferencia, pero no en un referéndum.

895. El Reino Unido, que tiene mayores responsabilidades coloniales pendientes que cualquier otra Potencia, siempre ha sido partidario de la más íntima cooperación con las Naciones Unidas, en particular con los órganos que se ocupan del colonialismo. Aunque no haya compartido en todo momento las opiniones de otras delegaciones, siempre ha estado dispuesto a proporcionar información para explicar y justificar su política. El orador tiene vivos deseos de que prosiga esa relación; si continúa dicha cooperación no podrá menos que obtenerse buenos resultados.

896. Otra cuestión más amplia es la que se refiere a la eficacia de la labor de las delegaciones en las Naciones Unidas. A juicio del orador, el papel de los representantes ante las Naciones Unidas no consiste simplemente en exponer discrepancias de opinión, sino en buscar tenazmente un terreno común en el que sea posible lograr

acuerdo. En este sentido aún hay posibilidades de progreso en la cuestión que se examina. El problema no se refiere únicamente a los hechos reales de la situación; hay que asegurar al Comité que cuanto se hace concuerda no sólo con los deseos del pueblo, sino también con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y con las demás resoluciones que constituyen el mandato del Comité. Por ser este el caso, el orador está convencido de que todos desean dejar la puerta abierta para nuevas consultas, incluso para el contacto directo entre los miembros del Comité y los dirigentes electos de los pueblos interesados.

897. Todo lo que pide la delegación del Reino Unido se reduce a que el Comité aplaze su juicio sin perder su libertad de acción y decisión. Esto podría hacerse mediante la aprobación ya sea de la enmienda italiana (A/AC.109/L.381), o de la enmienda uruguay (A/AC.109/L.387), o bien mediante la aceptación de la propuesta del Reino Unido de someter toda la cuestión al Subcomité antes de adoptar una decisión definitiva. El orador estima que el acuerdo está próximo y que hay un deseo general de evitar una ruptura, y hace un llamamiento a los miembros del Comité para que no prejuzguen la cuestión y dejen la vía abierta para la adopción de medidas constructivas.

898. El Presidente toma la palabra en capacidad de representante de la República Unida de Tanzania y dice que algunas de las observaciones que formulara anteriormente en su carácter de representante de Tanzania han sido citadas fuera de contexto en la exposición que acaba de hacer el representante del Reino Unido, dándoles un significado que nunca pretendió atribuirles su delegación. Espera que los miembros del Comité que deseen conocer el auténtico significado de la exposición de la delegación de Tanzania lo leerán.

899. El representante de Sierra Leona dice que no duda del sincero deseo del Gobierno del Reino Unido de cumplir las obligaciones que le impone el Capítulo XI de la Carta y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, entre las que destaca la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. La opinión de su delegación en cuanto a si las elecciones celebradas en los Territorios del Caribe que se examinan representan el tipo de consulta previsto en esta resolución, fue expuesta con claridad en una sesión anterior. Lo que el orador desea examinar esta vez es el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A/AC.109/L.378/Rev.1, en el que se reafirma que la resolución 1514 (XV) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General siguen aplicándose a dichos Territorios, por considerar que una decisión a ese propósito podría influir sobre el porvenir de todas las pequeñas islas cuyo nombre sigue figurando en el programa del Comité.

900. En el caso de las Islas Cook, en 1965 una misión de las Naciones Unidas fiscalizó las elecciones allí celebradas y presentó un informe al Secretario General, quien a su vez presentó por su parte un informe al Comité; éste ha examinado el tema sin pronunciarse en definitiva sobre la aplicabilidad de la resolución 1514 (XV). Sin embargo, se dio a entender tácitamente que esta resolución seguía aplicándose, hasta que la Asamblea General decidió, en su vigésimo período de sesiones, que la Potencia administradora no tenía que transmitir información referente a las Islas Cook.

901. Parece que el Comité no desea por ahora adoptar una decisión definitiva respecto a las islas del Caribe pero, como quiera que todos por lo visto convienen en que la cuestión sea remitida al Subcomité III, al parecer es evidente que la resolución y el Artículo 73 de la Carta deban considerarse aplicables a los Territorios hasta el momento en que el Comité Especial, después de examinar las recomendaciones del Subcomité III, llegare a decidir que no lo son.

902. El Gobierno del Reino Unido ha cooperado con el Comité atendiendo las solicitudes de información y le ha ayudado en general a encontrar soluciones; incluso sus puntos de vista relacionados con las misiones visitadoras parecen acercarse más a los de la mayoría de los miembros del Comité que en el pasado. A juicio del orador la anuencia del Reino Unido a someter la cuestión al Subcomité III denota acuerdo en que son aplicables las disposiciones de la resolución 1514 (XV), hasta que el Comité mismo decida lo contrario y su delegación, entre otras, expresó la opinión de que cualquier resolución aprobada por el Comité debe considerarse como provisional y puede ser reemplazada por una nueva decisión.

903. El Comité Especial tiene ante sí un número cada vez mayor de temas relacionados con las dificultades de los territorios muy pequeños. Conviene que en esos territorios, se conceda a la población la oportunidad de expresar sus opiniones en cuanto a su futuro político, pero la independencia del tipo que ha venido siendo tradicional para los territorios de mayor extensión no parece viable para aquéllos. Por consiguiente, el Comité Especial debe estudiar muy concienzudamente los métodos que habrían de aplicarse al tratar los problemas de esos "mini-territorios", entre los cuales las islas del Caribe prácticamente habrán de ser los primeros que examinará el Comité. Su delegación desea evitar que se adopte una fórmula de la que alguna Potencia administradora pudiera hacer mal uso en lo futuro. La adopción

del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución no prejuzga la decisión definitiva del Subcomité, ni cierra la puerta a negociaciones futuras.

904. La delegación de Sierra Leona estima que algo se ha avanzado en la consecución de un nuevo estatuto político por parte de las islas del Caribe y, por lo tanto, acepta que se suprima parte del proyecto de resolución que pudiera considerarse como una condena de la política del Reino Unido. El orador espera que este país coopere haciendo posible al Subcomité III el examen de todos los aspectos de la cuestión, incluso el envío de una misión visitadora que pueda examinar la situación con los nuevos gobiernos constituyentes.

905. El representante del Irak dice que la declaración formulada por su delegación en el curso del debate sobre las Islas Cook, a la que se ha referido el representante del Reino Unido, concernía a una situación muy diferente de la que actualmente existe en las islas del Caribe. En primer término, a las autoridades de los Territorios del Caribe no se les han conferido plenos poderes ni se les ha brindado la oportunidad de asumirlos. En segundo término, al pueblo de las Islas Cook se le ofrecieron cuatro opciones: la completa independencia, la integración con Nueva Zelanda, la autonomía interna y la federación con los grupos de la Polinesia; el orador se pregunta si a los pueblos de las islas del Caribe se les ha ofrecido una opción entre esas posibilidades. En tercer lugar, en las Islas Cook estuvo presente una misión de las Naciones Unidas cuando el pueblo tomó su decisión, al paso que en las islas del Caribe no se ha permitido la presencia de las Naciones Unidas. El representante del Reino Unido aludió hoy, después de haberse adoptado las decisiones definitivas, a la posibilidad de contacto directo entre los miembros del Comité Especial, y los dirigentes de los territorios, pero el orador se pregunta si esa sugerencia entraña el consentimiento del Reino Unido al envío de una misión visitadora o si sólo significa que algunos miembros de la administración local se comunicarán con los miembros del Comité Especial como peticionarios o con algún otro carácter.

906. Se ha hablado de la buena disposición del Gobierno del Reino Unido a cooperar en todo momento para responder a preguntas y justificar su política; pero lo que el Comité Especial desea es que el Reino Unido coopere modificando su política y ayudando al Comité a aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas.

907. El representante del Reino Unido también ha hablado de conciliar las discrepancias que separan a las Potencias administradoras y a los miembros del Comité Especial, pero la parte más importante en una cuestión colonial no es ni la Potencia administradora ni el Comité sino el pueblo de los territorios. Los miembros del Comité no pueden transigir con la Potencia administradora; tanto los unos como la otra deben tener en cuenta ante todo y sobre todo los deseos del pueblos de los territorios y deben esforzarse por darles el derecho a decidir por sí mismos lo que desean.

908. El representante de Bulgaria dice que su delegación estima que resulta difícil creer que las disposiciones constitucionales en los seis territorios del Caribe sean de índole tal que permitan a la Potencia administradora dar por cumplidas las obligaciones contraídas en virtud del Capítulo XI de la Carta. La disposición por la que se garantiza la libertad del pueblo a decidir en cualquier momento modificar su estatuto se refiere exclusivamente al futuro. Su delegación reconoce los sinceros esfuerzos desplegados por los miembros del Comité para encontrar una fórmula que sea aceptable para todos y al propio tiempo que concuerde con las obligaciones de las Naciones Unidas en el histórico proceso de descolonización, pero no puede esperarse que la Organización trate de lograr la cooperación de la unanimidad a costa de abandonar una posición de principio. Bulgaria considera que todos los territorios coloniales, independientemente de su tamaño o desarrollo económico, deberían quedar libres del dominio colonial extranjero y que en todos ellos cabe aplicar la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

909. La delegación búlgara votará a favor del proyecto de resolución que figura en el documento A/AC.109/L.378/Rev.1, y espera que la Potencia administradora preste al Comité su colaboración positiva cuando se examine de nuevo la cuestión de los seis Territorios.

910. El representante de Italia, reafirmando la declaración formulada anteriormente por su delegación (A/AC.109/SR.500), dice que la reciente evolución constitucional en los seis Territorios del Caribe oriental básicamente sigue los principios enunciados en la resolución 1514 (XV) y en otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Su delegación se felicita por las nuevas disposiciones elaboradas por los gobiernos libremente elegidos en los seis Territorios y por el Gobierno del Reino Unido, y los considera como una etapa positiva hacia los objetivos fijados por las Naciones Unidas en lo que respecta a los pueblos y países coloniales. Su delegación ha propuesto una enmienda (A/AC.109/L.381) al proyecto de resolución (A/AC.109/L.378) por considerar

/...

que el párrafo 1 de la parte dispositiva de éste parecía indicar anticipadamente una de las conclusiones a las que podría llegar el Subcomité III después de examinar el tema. Con esa propuesta se ha pretendido no modificar la finalidad y el sentido del proyecto de resolución, sino más bien esclarecer la cuestión para que le sea posible al Subcomité III estudiar el problema sin limitaciones.

911. El orador coincide con la delegación de Tanzania en que la cuestión de los métodos y procedimientos aplicados por la Potencia administradora al implantar las nuevas disposiciones constitucionales pueden tener repercusiones trascendentales que afecten a otros territorios no autónomos, todo lo cual justifica, pues, el nuevo examen detallado de la cuestión por el Subcomité III. La finalidad del debate en el Comité ha sido precisamente la de determinar si la resolución 1514 (XV) y otras resoluciones pertinentes han sido aplicadas y hasta qué punto, y en qué forma siguen aplicándose a los Territorios en cuestión.

912. En vista del amplio acuerdo existente en cuanto al significado del debate, sería desafortunado que una votación sobre la propuesta italiana viniera a destacar una discrepancia de opiniones que realmente no existe. Por consiguiente, su delegación ha decidido retirar su enmienda siempre que el Comité pase a votar sobre el proyecto de enmienda del Uruguay (A/AC.109/L.387), que puede considerarse como un mejor empeño para allanar ciertas diferencias entre las distintas delegaciones.

913. El representante del Reino Unido dice que, si interpretó mal lo que dijo el Presidente cuando hizo uso de la palabra en su carácter de representante de Tanzania, desea pedirle disculpas. Sin embargo, lo impresionó profundamente la declaración del Presidente a efecto de que es al propio pueblo al que toca decidir su porvenir, pues ésta es precisamente la médula de la tesis que su propia delegación ha venido tratando de exponer ante el Comité.

914. Aunque comprende que el representante de Sierra Leona esté ansioso por hallar una solución aceptable para todos, el orador desea insistir una vez más ante el Comité sobre el punto básico de que no conviene prejuzgar. Si el Comité adoptase una posición antes de enterarse de todos los datos, el orador no acierta a comprender de qué puede servir que el Subcomité continúe examinando el asunto.

915. Asegura al representante del Irak que al hacer una cita de una declaración hecha por su predecesor, no se propuso sugerir que el caso que el Comité tiene actualmente ante sí fuese exactamente comparable al de las Islas Cook. En realidad, se había

referido al principio de que podrían ser cumplidos los requisitos expuestos en la resolución 1514 (XV) si al pueblo de un antiguo territorio colonial se le traspasan todos los poderes que desee, incluso la facultad de poder lograr su independencia en cualquier momento.

916. El Comité ha recorrido una distancia considerable para llegar a la decisión que ahora debe adoptarse. Si la cuestión se sometiese nuevamente al Subcomité sin pre-juzgar de ella, se obtendrían buenos resultados y su delegación ofrece su cooperación sobre esta base. Por arraigadas que sean las opiniones de los miembros del Comité, el orador espera que no se cerrará la puerta al estudio de cualesquiera posibilidades que pudieren existir para llegar a un resultado satisfactorio.

917. El Presidente, hablando en su carácter de representante de la República Unida de Tanzania, repite lo que dijo en la sesión anterior, es decir, que aunque su delegación no pone en tela de juicio la nueva situación aceptada por el pueblo de las islas del Caribe, estima que no han sido cumplidas las obligaciones que contrajera el Gobierno del Reino Unido en virtud del Capítulo XI de la Carta y de la resolución 1514 (XV).

918. La representante de los Estados Unidos de América dice que aunque es fundamental que se siga estudiando la cuestión en el Subcomité competente y a la luz de las resoluciones pertinentes, el Comité no debe decidir por adelantado los resultados de ese estudio. Esto ataría las manos del Subcomité y restaría eficacia a su labor. Por consiguiente, su delegación votará a favor de la enmienda propuesta por el Uruguay.

919. El representante de la India manifiesta que existe considerable terreno común entre la delegación de la Potencia administradora y su propia delegación. Por ejemplo, coincide con el representante del Reino Unido en que es preciso dar la más alta prioridad a los intereses de los pueblos del Territorio. También conviene en que las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) no son contradictorias. Pero al decir esto, su delegación quiere significar que en un caso en que se hubiese aplicado la resolución 1541 (XV) se podría aplicar también la resolución 1514 (XV), aunque no necesariamente en todos los casos. No obstante, en los casos en que no se hubiese aplicado la resolución 1514 (XV) no sería posible aplicar la resolución 1541 (XV).

920. Su delegación está también de acuerdo con el representante del Reino Unido en que la celebración de un referéndum no es el único medio para determinar los deseos de un pueblo. Ni tampoco es fundamental la presencia de las Naciones Unidas en todos los territorios coloniales; si por algún motivo tal presencia no ha sido posible en

/...

un territorio determinado, esto no significa inevitablemente que el pueblo no ha podido ejercer su derecho a la libre determinación en plena conformidad con las resoluciones pertinentes.

921. La divergencia de su delegación con la Potencia administradora reside en la convicción de que la aplicación de la resolución 1541 (XV) no excluye necesariamente la aplicación de la resolución 1514 (XV). En las Islas Cook se celebraron unas elecciones, que giraron en torno a los arreglos constitucionales propuestos, en presencia de un observador de las Naciones Unidas, quien quedó convencido de que el pueblo había ejercitado sin trabas su derecho a la libre determinación. A pesar de todo ello, la Asamblea General declaró que quedaba terminada la obligación de la Potencia administradora de transmitir información con arreglo al inciso e del Artículo 73 de la Carta pero que, no obstante, seguía siendo aplicable la resolución 1514 (XV). Esto significa que, si las circunstancias lo requieren, el Comité Especial o la Asamblea General están facultados para reanudar el debate sobre las Islas Cook. Hasta la Potencia administradora votó a favor de esa resolución.

922. En el caso de las islas del Caribe, en algunos territorios no se han celebrado elecciones. En los otros no está muy claro si el estatuto constitucional propuesto es el tema central de tales elecciones. En cualquier caso, la delegación de la India no se está pronunciando sobre esta cuestión. Incluso si el Comité Especial quedase convencido de que la condición actual es la que el pueblo desea, la Potencia administradora tendría que convenir con el Comité en que la resolución 1514 (XV) seguía siendo aplicable. En tal caso, la Potencia administradora ya no tendría la obligación de proporcionar información acerca de los territorios, pero el Comité todavía tendría derecho a volver a plantear la cuestión más adelante si las circunstancias lo exigieran.

923. Preocupa al orador saber que la delegación del Reino Unido está considerando seriamente en su conjunto la cuestión de su cooperación con el Comité. La delegación de la India aprecia mucho el que el Reino Unido siempre haya hecho gala de una actitud sumamente cooperativa. Pero la aprobación del proyecto de resolución de las siete Potencias no cerraría la puerta a la cooperación. El mandato conferido al Subcomité III, es decir, estudiar si se han cumplido o no las disposiciones de la resolución 1514 (XV), ofrece amplias posibilidades para que continúe la colaboración entre la delegación del Reino Unido y el Comité Especial.

924. Su delegación se abstendrá con respecto a la enmienda presentada por el Uruguay y votará a favor del proyecto de resolución en su totalidad.



925. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señala que en ninguna de las resoluciones de la Asamblea General relativas al Comité Especial se hace referencia a la resolución 1541 (XV). Las atribuciones del Comité Especial se basan exclusivamente en la resolución 1514 (XV).

926. Por los motivos que ya ha explicado, su delegación votará a favor del proyecto de resolución de las siete Potencias y en contra de la enmienda propuesta por el Uruguay, pues ésta no añade nada y denota que el Comité no puede adoptar posición alguna con respecto a lo ocurrido en los territorios del Caribe. No por pura coincidencia las delegaciones que se oponen enérgicamente a la aprobación de toda resolución por el Comité Especial y que sencillamente desean que el asunto pase al Subcomité III son las mismas que apoyan la enmienda.

927. El representante de la República Unida de Tanzania dice que su delegación votará en contra de la enmienda propuesta por el Uruguay porque no coincide en que la cuestión consiste en saber si deben o no aplicarse las resoluciones de la Asamblea General. Esas resoluciones, y en particular la resolución 1514 (XV), siguen siendo aplicables a todos los territorios que aún no han obtenido la independencia. Basándose en este principio su delegación copatrocinó el proyecto de resolución.

928. El representante de Malí dice que no podrá apoyar la enmienda propuesta por el Uruguay. Si el Comité aprobase esta enmienda, parecería reconocer de facto la situación que actualmente existe en los territorios. Pese a esa situación, continúan siendo territorios coloniales y la resolución 1514 (XV) se aplica tanto a ellos como a Rhodesia del Sur.

929. El representante del Irak manifiesta que le complace que el representante del Reino Unido diga que las situaciones reinantes en las Islas Cook y en las islas del Caribe son diferentes y que las disposiciones de la resolución 1514 (XV) serían cumplidas si se traspasaran a la población todos los poderes que ésta desea. No obstante, la declaración del Irak a la que se refirió el representante del Reino Unido, fue hecha dentro del contexto de la resolución 2064 (XX) de la Asamblea General relativa a las Islas Cook, de la que se desprende claramente que la resolución 1514 (XV) sigue aplicándose a ese Territorio. En la resolución 2064 (XX) no se dijo que hubiese terminado la responsabilidad de la Potencia administradora en las Islas Cook sino que ya no era necesaria la transmisión de información. Por lo tanto, el orador no comprende por qué el representante del Reino Unido se opone a la disposición del proyecto de resolución relativa a la aplicabilidad de la resolución 1514 (XV), especialmente en vista de que el asunto sería remitido al Subcomité III, el que presentaría un informe en su debida oportunidad. Para concluir, el orador declara que su delegación votará en contra de la enmienda propuesta por el Uruguay (A/AC.109/L.387).

930. El representante del Uruguay manifiesta que no coincide con el representante de la Unión Soviética en que la enmienda del Uruguay no añade nada y en que denota que el Comité no debe adoptar posición alguna. La enmienda constituye un esfuerzo real y constructivo para sacar al Comité de su estancamiento; no prejuzga nada ni compromete al Comité en forma alguna, salvo en lo tocante a su propósito declarado de realizar la descolonización.

931. El representante de Malí también ha declarado que no apoyará la enmienda del Uruguay. Sin embargo, esa posición parecería estar en pugna con la adoptada recientemente por el mismo representante en relación con la Somalia Francesa. En cambio, la posición de su propia delegación ha sido completamente congruente con respecto a todos los Territorios que el Comité ha examinado.

932. Tampoco puede admitir el orador que la enmienda propuesta por el Uruguay restringiría las atribuciones del Comité. En el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de las siete Potencias se indica que el Subcomité III examinaría la situación. Por lo tanto, antes de adoptar una decisión definitiva, el Comité tendría que esperar hasta que el Subcomité III presentase su informe. En consecuencia, no ve por qué el Comité deba dar directivas por adelantado. Además, al no prejuzgar la situación y permitir que el Subcomité III la examine a fondo y libremente, el Comité Especial no restringiría sus propias atribuciones.

933. El representante del Reino Unido con referencia a las observaciones formuladas por los representantes de la India y del Irak, señala que su delegación estaría por cierto dispuesta a considerar la posibilidad de adoptar, respecto a los seis territorios del Caribe, disposiciones análogas a las adoptadas en el caso de las Islas Cook. Este sería un tema de discusión muy adecuado para el Subcomité III. No obstante, la verdadera cuestión que se plantea al Comité, es la de si el asunto debe ser prejuzgado antes de que se someta al Subcomité III, es decir, si ha de pronunciarse un veredicto antes de oír a las partes interesadas.

934. El representante de Malí manifiesta que en el pasado su delegación ha dado pruebas suficientes de la congruencia de su política con respecto a la descolonización. El orador continúa convencido de que la enmienda propuesta por el Uruguay difiere fundamentalmente del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de las siete Potencias. No se trata de determinar si han de aplicarse las disposiciones de la resolución 1514 (XV) - ya que esto constituiría una interpretación errónea de la propia resolución - sino si dichas disposiciones siguen siendo aplicables a los territorios.

935. El representante de la India celebra que la delegación del Reino Unido esté dispuesta a considerar la posibilidad de aplicar a los territorios del Caribe la fórmula utilizada en las Islas Cook. Sin embargo, el proyecto de las siete Potencias no excluiría esa posibilidad. Si el Subcomité III determinase que las obligaciones de la Potencia administradora en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta han sido cumplidas o se han extinguido, y si tal conclusión fuese aceptada por el Comité Especial, la fórmula de las Islas Cook podría por cierto aplicarse a los seis territorios del Caribe.

936. El representante del Irak manifiesta que no puede aceptar la afirmación del representante del Reino Unido de que la aprobación del proyecto de las siete Potencias por el Comité equivaldría a pronunciar un veredicto antes de oír a las partes interesadas. El Comité ha dado a ese representante amplia oportunidad para hacerse oír. Además, toda decisión relativa a la aplicabilidad de la resolución 1514 (XV) a los territorios de que se trata es de la incumbencia del propio Comité; el Subcomité III sólo puede estudiar la situación - con inclusión de la posibilidad de enviar una misión visitadora a los territorios - e informar luego al Comité Especial. Además, no comprende cómo el representante del Reino Unido puede decir que las situaciones imperantes en las Islas Cook y en los seis territorios del Caribe son diferentes y, al mismo tiempo, sugerir que se apliquen soluciones análogas.

937. El representante del Reino Unido señala que él dijo que su delegación estaría perfectamente dispuesta a considerar la posibilidad de adoptar algunas disposiciones análogas a las aceptadas en las Islas Cook. No obstante, reitera su opinión de que la cuestión que el Comité tiene ante sí debe ser examinada sin prejuicios por el Subcomité III.

938. En su 506a. sesión, celebrada el 23 de marzo de 1967, el Comité Especial votó sobre las tres propuestas que tenía ante sí, a saber, el proyecto conjunto de resolución revisado (A/AC.109/L.378/Rev.1); la enmienda del Uruguay (A/AC.109/L.387), enmendada verbalmente; y la propuesta del Reino Unido de que, en lugar de someter a votación el proyecto de resolución, el Comité remitiera toda la cuestión al Subcomité III.

939. El Comité Especial votó en primer lugar sobre la propuesta del Reino Unido, que fue rechazada por 16 votos contra 6 y 2 abstenciones.

940. La enmienda del Uruguay (A/AC.109/L.387) fue rechazada en votación nominal por 13 votos contra 8 y 3 abstenciones, en la forma siguiente:

Votos a favor: Australia, Chile, Estados Unidos de América, Finlandia, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uruguay, Venezuela.

Votos en contra: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Irak, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Abstenciones: Etiopía, India, Irán.

941. El Comité Especial votó después sobre el proyecto conjunto de resolución revisado (A/AC.109/L.378/Rev.1), que quedó aprobado en votación nominal por 18 votos contra 3 y 3 abstenciones, en la forma siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Chile, Etiopía, India, Irak, Irán, Madagascar, Malí, Polonia, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Siria, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia.

Votos en contra: Australia, Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Abstenciones: Finlandia, Italia, Uruguay.

942. El representante de Chile toma la palabra para explicar su voto y dice que su delegación apoyó la enmienda del Uruguay porque ella hubiese permitido al Subcomité estudiar sin trabas la situación reinante en los territorios y porque ofrecía la posibilidad de remitir la cuestión al Subcomité sin prejuzgar en nada los actos de la Potencia administradora.

943. Su delegación se abstuvo de votar sobre el párrafo 1 de la parte dispositiva porque éste prejuzga los futuros trabajos del Subcomité III sobre la cuestión. El Subcomité III presentaría un informe al Comité Especial en un futuro próximo, y entonces el Comité Especial estaría en condiciones de examinar el fondo del asunto. No obstante, su delegación apoyó el proyecto conjunto de resolución revisado en su totalidad por considerar que la cuestión es digna de que el Comité la estudie especialmente.

944. El representante del Irán manifiesta que su delegación se abstuvo de votar sobre la enmienda del Uruguay porque su significado es virtualmente idéntico al del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto conjunto de resolución revisado. Con todo, su delegación votó a favor de dicho párrafo de la parte dispositiva porque tiene el mérito de ser claro y no exige interpretación alguna.

945. Su delegación sugirió suprimir el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución inicial (A/AC.109/L.378), así como la frase de dicho proyecto según la cual se hubiese pedido a la Potencia administradora que acelerase el proceso de descolonización de los territorios, porque tales disposiciones hubiesen constituido un prejuicio por parte del Comité. Sin embargo, tal como ha sido adoptada, la resolución no constituye ningún prejuicio sino simplemente una conclusión preliminar. Nada impide al Subcomité III hacer una recomendación habida cuenta de la nueva información y del examen completo y detallado de la cuestión. En consecuencia, el orador confía en que el Reino Unido continuará ofreciendo su colaboración al Comité.

946. El representante de Venezuela dice que su delegación votó a favor de la enmienda del Uruguay por considerar que hubiese contribuido a asegurar la más amplia colaboración de la Potencia administradora, que es sumamente necesaria para que el Subcomité pueda cumplir su cometido. Apoyó el proyecto conjunto de resolución revisado en su totalidad porque, a su juicio, la enmienda del Uruguay y el propio proyecto de resolución no se excluían recíprocamente, ya que en ninguno de los dos textos se disponía una abdicación de las facultades o las funciones del Comité.

947. El representante de Túnez indica que su delegación votó contra la enmienda del Uruguay por considerar que el espíritu de la misma ya informaba el texto del proyecto conjunto de resolución revisado.

948. La resolución relativa a la cuestión de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente (A/AC.109/235), aprobada por el Comité Especial en su 506a. sesión, celebrada el 23 de marzo de 1967, tiene el texto siguiente:

"El Comité Especial

Habiendo examinado las peticiones orales y escritas que le han sido presentadas, relativas a Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente,

"Habiendo escuchado las declaraciones de la Potencia administradora,

"Habiendo examinado la evolución reciente en dichos Territorios,

"Recordando la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, en que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, así como la resolución 2232 (XXI), de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1966,

"1. Reafirma que la resolución 1514 (XV) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General siguen aplicándose a dichos Territorios;

"2. Pide a su Subcomité III que, a la luz de los recientes acontecimientos constitucionales, examine la situación de dichos Territorios en todos sus aspectos, incluyendo la posibilidad de enviar una misión visitadora, y que informe al Comité Especial lo antes posible."

V. EXAMEN POR EL COMITE ESPECIAL DE LAS ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS, ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, MONTSERRAT, SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILA, SANTA LUCIA, SAN VICENTE, BERMUDAS, BAHAMAS, ISLAS TURCAS Y CAICOS, ISLAS CAIMAN, ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS) Y HONDURAS BRITANICA

Introducción

949. En su 488a. sesión, celebrada el 20 de febrero de 1967, el Comité Especial decidió remitir los siguientes Territorios al Subcomité III para su examen y consideración:

- 1) Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América
- 2) Islas Vírgenes Británicas
- 3) Montserrat
- 4) Bermudas
- 5) Bahamas
- 6) Islas Turcas y Caicos
- 7) Islas Caimán
- 8) Islas Malvinas (Falkland Islands)
- 9) Honduras Británica.

950. Como se expresa en el párrafo 948 supra, el Comité Especial, al aprobar su resolución relativa a Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente, pidió al Subcomité III "que, a la luz de los recientes acontecimientos constitucionales, examine la situación de dichos Territorios en todos sus aspectos, incluyendo la posibilidad de enviar una misión visitadora, y que informe al Comité Especial lo antes posible".

951. Posteriormente, el Subcomité III realizó un examen detallado e intensivo de los Territorios cuyo estudio le había sido encargado, incluyendo los Territorios de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente. En el anexo de este capítulo, se incluye el informe del Subcomité III, que contiene una relación del citado examen. Al buscar mayor información sobre los Territorios de Antigua, Dominica, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente, el Subcomité tuvo la oportunidad de escuchar a algunas personas que deseaban comunicarle información relativa a Anguila. Sobre la base de tal información, el Subcomité III formuló sus conclusiones y recomendaciones, que se exponen en su informe (véase el anexo).

952. El Comité Especial consideró esos Territorios en sus 548a., 564a. y 565a. sesiones, celebradas los días 30 de agosto, 27 de septiembre y 6 de octubre de 1967. En su 548a. sesión, escuchó a un peticionario en relación con Honduras Británica. En sus 564a. y 565a. sesiones, examinó dichos Territorios sobre la base del informe del Subcomité III.

953. El Comité tuvo ante sí dos cartas de fecha 3 de febrero de 1967 (A/AC.109/219 y 220), dirigidas al Secretario General, en las que los Representantes Permanentes de Argentina y del Reino Unido declaraban que sus Gobiernos deseaban reafirmar su voluntad de dar pleno cumplimiento al consenso aprobado por la Asamblea General sobre la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands), así como las disposiciones de la resolución 2065 (XX), de 16 de diciembre de 1965, que también invitaba a ambos Gobiernos a realizar negociaciones a fin de encontrar una solución para el problema.

954. En una carta de fecha 30 de agosto de 1967 (A/AC.109/263), el Representante Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas solicitó permiso para participar en el examen por el Comité Especial de la cuestión de Honduras Británica. En su 548a. sesión, el Comité Especial decidió, sin objeciones, acceder a esa solicitud.

955. En una carta de fecha 2 de agosto de 1967 (A/AC.109/257), el Representante Permanente de Guyana ante las Naciones Unidas solicitó permiso para que su delegación participara en las deliberaciones del Comité Especial sobre las cuestiones referentes a los Territorios del Caribe, especialmente las relacionadas con los Territorios de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente. En su 565a. sesión, el Comité Especial decidió, sin objeciones, acceder a esta solicitud.

#### A. Peticiones escritas y audiencias

956. Peticiones escritas. El Comité Especial distribuyó las peticiones escritas siguientes, además de aquellas enumeradas en el párrafo 653 supra:

##### Peticionario

##### Documento

##### Bermudas

Sr. W.G. Brown, Secretario General de la  
Bermuda Constitutional Conference

A/AC.109/PET.577



Peticionario

Documento

Honduras Británica

Sr. Compton Fairweather, Presidente del British Honduras Freedom Committee of New York, en representación del Hon. Philip Goldson, Miembro de la Cámara de Representantes y Jefe de la Oposición en Honduras Británica

A/AC.109/PET.696

Islas Malvinas (Falkland Islands)

Sr. Daniel Fernández Amor

A/AC.109/PET.703

Granada

Sr. E.M. Gairy, Jefe de la Oposición en Granada

A/AC.109/PET.573/Add.3

San Cristóbal, Nieves y Anguila

Tres peticiones del Sr. Peter E. Adams

A/AC.109/PET.708

Dr. Bertram Schaffner, Presidente,  
U.S. Caribbean Aid to Mental Health

A/AC.109/PET.709

Sres. Kennedy A. Simmonds, Vicepresidente,  
y Richard L. Caines, Secretario,  
People's Action Movement

A/AC.109/PET.710

San Vicente

Sr. Milton Cato, Jefe del Labour Party  
de San Vicente

A/AC.109/PET.628

Srta. Alma Johnson, Secretaria General,  
Federated Industrial and Agricultural  
Workers' Union, San Vicente

A/AC.109/PET.646

Audiencia relativa a Honduras Británica

957. En su 548a. sesión, el Comité Especial oyó al Sr. Philip Goldson, Jefe de la Oposición en Honduras Británica.

958. El Sr. Goldson dice que no se presenta como jefe de la oposición allí, sino como representante del conjunto de la población, y expresa la esperanza de que en un porvenir próximo el Primer Ministro de su país tenga también la posibilidad de exponer algunos de los graves problemas que se plantean con respecto a Honduras Británica. Tras situar geográficamente el territorio de Honduras Británica y

/...

explicar que el 80% de sus 110.000 habitantes son de origen afroeuropeo y el 20% de origen mixto español e indio maya, el orador recuerda que los mayas, que dejaron abundantes vestigios de su presencia, abandonaron por razones no explicadas el territorio poco después del siglo VIII. El Territorio estaba deshabitado cuando en 1638 náufragos británicos fundaron en la desembocadura del río Belice la primera colonia europea conocida. Los colonos españoles que ocupaban los territorios vecinos atacaron constantemente esta colonia ya que España reivindicaba la soberanía sobre el conjunto del hemisferio occidental excepto determinadas regiones de América del Sur reservadas a Portugal.

959. Por el Tratado de Madrid de 1670, España reconoció de facto las posesiones británicas establecidas en la región de las Antillas con excepción de la colonia instalada en la desembocadura del río Belice. En 1763, en virtud del Tratado de París, que puso fin a la Guerra de Siete Años, España reconoció a los colonos británicos el derecho de explotar la madera de campeche, aunque conservando la soberanía sobre el Territorio. Este derecho se confirmó en nuevos tratados concluidos en 1783 y 1786. Los colonos británicos, que tan pronto se administraban por sí mismos como encargaban la gestión de sus asuntos a los administradores que les enviaba Gran Bretaña, habían llegado entonces a ocupar toda la región que constituye actualmente Honduras Británica. En 1798 los colonos lograron una victoria naval decisiva sobre los españoles frente al Cayo San Jorge y consideraron desde entonces que el Territorio había pasado a ser británico por derecho de conquista.

960. En 1821 Guatemala y otras repúblicas de América Central obtuvieron su independencia de España. Desde entonces, Guatemala sostuvo que había heredado todos los territorios contiguos a sus fronteras que antes habían pertenecido a España. Eso explica que reivindique ahora Honduras Británica. Ahora bien, la soberanía de Honduras Británica había quedado garantizada por el Tratado Dallas-Claredon de 1850 y por el Tratado anglo-guatemalteco de 1859. Sin embargo, las dificultades actuales tienen su origen en este último tratado.

961. Conviene recordar con respecto a dicho tratado que la soberanía británica sobre ese territorio no se había proclamado nunca expresamente, aunque se hubiese ejercido de hecho desde hacía mucho tiempo; las fronteras del Territorio no habían sido definidas mediante tratado o acuerdo desde los tratados anglo-españoles de 1783 y 1786, y en virtud del Tratado Clayton-Bulwer Gran Bretaña ya no tenía la posibilidad de extender su dominio en América Central; por último, las reivindicaciones de Guatemala nunca fueron admitidas por Gran Bretaña o por España.

962. El artículo VII del Tratado, que era el más controvertido, estipulaba que las partes contratantes "... convienen mutuamente en desplegar en común todos sus esfuerzos, por los medios apropiados, para establecer la comunicación más fácil entre el punto más adecuado de la costa del Atlántico, cerca del Establecimiento de Belice, y la capital de Guatemala; de ese modo, el comercio de Inglaterra, por una parte, y la prosperidad material de la República, por otra parte, no pueden dejar de aumentar notablemente ...". Según los historiadores, el negociador británico aceptó ese artículo bajo su propia responsabilidad con gran asombro del Gobierno británico. Ciertamente, si ese artículo se hubiese rechazado Guatemala nunca hubiera firmado el tratado. Sus estipulaciones compensaban a Guatemala por el abandono de sus derechos sobre los territorios ocupados ilegalmente por los colonos de Belice. La carretera propuesta debía comunicar la ciudad de Guatemala con el puerto atlántico de Izabal. Así pues, no habría atravesado Honduras Británica. Sin embargo, habría contribuido a la prosperidad de la colonia al facilitar los intercambios entre Inglaterra y el conjunto de América Central. Gran Bretaña debía proporcionar los técnicos, y Guatemala los materiales y la mano de obra. El ingeniero británico encargado de delimitar materialmente la frontera y de disponer el trazado de la carretera comenzó sus trabajos en 1860. Sin embargo, a fines de dicho año interrumpió sus trabajos por no saber hasta dónde bordeaba la frontera de la colonia, en su ángulo noroeste, el territorio guatemalteco y a partir de qué punto empezaba a bordear el territorio de México. Como Gran Bretaña y Guatemala tampoco estaban de acuerdo sobre la cuestión de sus respectivas obligaciones financieras, hubo que negociar un nuevo acuerdo.

963. En virtud del Convenio suplementario firmado en 1863, la Gran Bretaña se comprometía a abonar a Guatemala 50.000 libras esterlinas para la construcción de una carretera que iría de la ciudad de Guatemala a la costa del Atlántico, "ya sea que esta vía sea completamente terrestre o que utilice en parte el curso del río Montagua, o incluso que se trate de otra ruta calculada para comunicar lo mejor posible con la posesión británica de Belice". El Convenio debía ratificarse en el plazo de seis meses. Mucho después de la expiración de ese plazo Guatemala pidió que se retrasase durante un año el canje de los instrumentos de ratificación, pues quería asegurarse de que podría cumplir con sus obligaciones "sin sacrificio". En 1865, o sea más de un año después, Guatemala ratificaba finalmente el Convenio

pero proponiendo dos "aclaraciones" que se presentaron formalmente al Gobierno británico en 1866. El Gobierno británico se negó a aceptar estas aclaraciones y declaró que el Convenio suplementario había caducado a causa del retraso impuesto por el Gobierno guatemalteco. Guatemala replicó que el artículo VII del Convenio de 1859 tendía a conceder "una compensación real a Guatemala ... por el abandono de sus derechos territoriales sobre Belice" y declaró que estaba dispuesta a firmar un nuevo convenio idéntico al antiguo. El Gobierno británico rechazó enérgicamente las reivindicaciones territoriales de Guatemala, negando que el Convenio de 1859 hubiese implicado tal concesión de territorio, y se declaró liberado en adelante de las obligaciones que le imponía el Convenio suplementario.

964. En 1884 Honduras Británica se convertía en colonia de la Corona.

965. En 1937 Guatemala reiteró sus propuestas anteriores, pero cuando éstas fueron de nuevo rechazadas propuso un arbitraje y el recurso al Presidente de los Estados Unidos como árbitro único. La propuesta de arbitraje fue inmediatamente aceptada. Sin embargo, el Gobierno británico estimó que el Tribunal de La Haya era el único competente para zanjar una cuestión jurídica de tanta complejidad.

966. En 1948 el Gobierno de Guatemala propuso una vez más que se sometiese la controversia a la mediación de los Estados Unidos. El Gobierno británico mantuvo su negativa. Guatemala declaró entonces que en todas las escuelas del país se enseñaba que Honduras Británica era guatemalteca y que todos los mapas serían modificados en consecuencia. Por su parte, el Gobierno británico declaró que no podía abandonar, sin que se lo ordenase una decisión de la Corte Internacional de Justicia, un territorio cuyos habitantes habían expresado muchas veces el deseo de seguir siendo miembros del Commonwealth.

967. Cabe suponer que si Guatemala se niega a someter la cuestión a una instancia judicial, es porque duda de la validez de sus reivindicaciones. A juzgar por la propaganda a que se dedica, el Gobierno de Guatemala no busca tanto una decisión jurídica como una decisión política.

968. A pesar de sus declaraciones anteriores, el Gobierno británico considera ahora oportuno aceptar la mediación de los Estados Unidos. Ahora bien, sabido es de todos que los Estados Unidos tienen grandes intereses en Guatemala y que, por lo tanto, no pueden ser imparciales.

969. Los habitantes de Honduras Británica se niegan categóricamente a quedar integrados, incorporados o asociados políticamente a la República de Guatemala. Están unidos en su voluntad de lograr que su país consiga realmente la independencia. Han demostrado muy netamente y muchas veces que no quieren pasar a ser guatemaltecos. En junio de 1966 se produjeron revueltas en Belice, capital del país, cuando se conoció la existencia de un plan común del Reino Unido, los Estados Unidos y Guatemala para confiar a Guatemala la defensa, las relaciones exteriores y el desarrollo económico de Honduras Británica. En las últimas semanas los diarios británicos han descrito un plan secreto que el Gobierno británico habría preparado bajo la presión de los Estados Unidos y que conduciría a la cesión de Honduras Británica a Guatemala. La población de Honduras Británica reaccionó con numerosas manifestaciones. Se enviaron telegramas de protesta a la Reina Isabel y a diversas personalidades. Todos estos mensajes testimonian el deseo de la población de ejercer su derecho a la libre determinación y la independencia.

970. Honduras Británica tiene razones válidas para no querer que la absorba Guatemala. Guatemala nunca gobernó ni poseyó el territorio conocido con el nombre de Honduras Británica. Honduras Británica era un territorio autónomo más de siglo y medio antes que Guatemala dejase de ser colonia española. Fue Gran Bretaña la que la puso de nuevo en 1884 bajo el régimen colonial. Por lo tanto, Gran Bretaña tiene la obligación jurídica y moral de hacer que el territorio regrese a la comunidad de las naciones libres. Hay un hecho aun más importante: durante más de tres siglos los habitantes de Honduras Británica han conocido la democracia. Se han beneficiado de la libertad de palabra, de expresión y de reunión, de la igualdad ante la ley, de la libertad de religión, de un régimen parlamentario y de tribunales asistidos por jurados. La administración pública es estable y el 90% de la población está alfabetizada. El Gobierno no ha sido derribado nunca por la violencia, y los ciudadanos no son encarcelados sin juicio ni están obligados a exiliarse a causa de sus opiniones o actividades políticas.

971. Los partidarios de la integración con Guatemala afirman que Honduras Británica no tiene una economía viable que le permita asegurar su independencia. Eso es verdad en parte. Sin embargo, es cosa segura que la economía de Honduras Británica sería todavía menos viable si pasase bajo el control de Guatemala. En realidad, Honduras Británica tiene prisa por ver que cesen las amenazas de integración que pesan sobre ella, pues obstaculizan su desarrollo. Frenan actualmente las inversiones tanto extranjeras como nacionales.

972. El orador no cree que Guatemala, que depende financieramente de los Estados Unidos, pueda resolver los problemas financieros y económicos de Honduras Británica. La economía del territorio, como la de muchos países pequeños, ha permanecido estancada a consecuencia de la explotación imperialista. Así pues, Honduras Británica no aceptará pasar del yugo británico al de Guatemala ahora, cuando la nación más pequeña puede confiar en explotar sus propios recursos gracias al proceso de descolonización alentado por las Naciones Unidas.

973. Sin embargo, esos son los propósitos del Presidente de Guatemala, según se desprende claramente de uno de los reportajes publicados en The Times de Londres del 12 de marzo de 1962, y de su carta al jefe de redacción del diario "La Hora" del 13 de agosto de 1958. Guatemala confía en llegar a colonizar de nuevo Honduras Británica, y con ese fin favorece primeramente su independencia. Guatemala ha preparado el terreno desde hace mucho tiempo. El fracaso de las negociaciones con Gran Bretaña, que en 1957 debían tener por objeto la obtención de fondos para el desarrollo de Honduras Británica, se explica del modo siguiente, según declaró el Gobernador de Honduras Británica en aquella época: el jefe de la delegación hondureña, Sr. Price, se reunió oficialmente con el Ministro de Guatemala, quien le había invitado a romper todos los vínculos con el Commonwealth británico y le había propuesto el establecimiento de una forma de asociación con Guatemala, a cambio de lo cual Guatemala se comprometía a ayudar financieramente a su país hasta que la población se pronunciase sobre el futuro régimen mediante un plebiscito. Pero el Primer Ministro guatemalteco también insinuó que si recibía una respuesta negativa, la frontera sería cerrada y se interrumpirían las relaciones económicas. El Ministro guatemalteco explicó asimismo que Guatemala ejercería un control total sobre las relaciones exteriores de Honduras Británica y que ésta no podría convertirse nunca en miembro de la Federación de América Central si no se convertía primeramente en Estado asociado a Guatemala.

974. El orador recuerda finalmente la emisión de un sello guatemalteco en el que figura un mapa de la República de Honduras Británica con la leyenda "Belice forma parte de Guatemala".

975. Así pues, Guatemala realiza desde hace años una amplia campaña de adoctrinamiento. No en vano se han introducido en Honduras Británica millares de "banderas de Belice" con los colores nacionales de Guatemala, azul y blanco; todos los

edificios públicos han sido pintados nuevamente de azul y blanco, y la radio controlada por el Gobierno habla de Belice, puesto que Guatemala no reconoce la existencia de Honduras Británica.

976. Honduras Británica figura en todos los mapas de Guatemala difundidos por el mundo entero bajo el nombre de Belice, separada de este país por una frontera departamental y no internacional. Estos mapas llevan la leyenda siguiente: "Belice, territorio guatemalteco ilegalmente conservado por Inglaterra". En las escuelas, los niños aprenden que Belice es un departamento de Guatemala que tendrán el deber de reconquistar. Y, por su parte, durante todos estos años los niños de Honduras Británica no pueden estudiar su propia historia. A ese respecto, el orador recuerda que en la Cámara de Representantes se rechazó una moción de la oposición en la que se pedía la preparación de nuevos manuales de historia, al igual que otra moción de la oposición en la que se pedía que se instruyera a ciudadanos de Honduras en el ejército británico para asegurar la defensa del país cuando éste lograra su independencia.

977. Pero desde hace algunos años la población de Honduras Británica comprende que ha sido víctima de una monstruosa conspiración. Eso está demostrado por los avances espectaculares del partido de oposición en las elecciones, a pesar de las maniobras hechas por el partido gubernamental para alterar los resultados. La población ha descubierto con horror que el Gobierno británico, que se opuso con indignación en 1957 a que Guatemala colonizara de nuevo Honduras Británica, trata ahora de ayudar a Guatemala en esa empresa.

978. En apoyo de esta aseveración, el Sr. Goldson cita el documento A/AC.109/PET.528, en el cual la resolución aprobada por el British Honduras Freedom Committee of New York en 1966 contiene los trece artículos de un tratado contemplado entre Gran Bretaña y Guatemala para colocar bajo el control de Guatemala, después de la independencia, la defensa, las relaciones exteriores y cierta parte de los asuntos económicos de Honduras Británica. Estas propuestas, que se elaboraron con la ayuda del mediador americano nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, coinciden aproximadamente con las que el Ministro guatemalteco hizo en Londres en 1957 a la delegación de Honduras Británica.

979. Dos artículos aparecidos en los dos grandes diarios de Londres The Daily Express y The Times del 5 de agosto de 1967, revelan que el plan preparado bajo

/...

presión de los Estados Unidos trata realmente de hacer pasar en definitiva a Honduras Británica independiente bajo la autoridad de Guatemala. Según ese plan, Honduras Británica no debe tener la posibilidad de hacerse miembro del Commonwealth, la Gran Bretaña y Guatemala deben conservar la responsabilidad de las relaciones exteriores y la defensa después de la independencia de Honduras Británica, y se obligará a ésta a que acepte una unión aduanera con su vecina, la cual tendrá libre acceso a sus puertos del Mar de las Antillas y a sus aguas territoriales. Gran Bretaña debe abonar 500.000 dólares a Guatemala para construir un ferrocarril entre el Mar de las Antillas y la frontera guatemalteca. The Times agrega que, a cambio de las concesiones británicas, Guatemala aceptará probablemente la frontera actual, que había dado lugar a controversia.

980. El apoyo total que los Estados Unidos conceden a las reivindicaciones de Guatemala se explica por el hecho de que los Estados Unidos defienden su zona de influencia en América Latina.

981. Así pues, el Sr. Goldson pide encarecidamente a las Naciones Unidas que intervengan para que el pueblo de Honduras Británica pueda ejercer su derecho a la libre determinación y manifestar, mediante un referéndum organizado por las Naciones Unidas, la forma de asociación política que desea tener con la República de Guatemala. Por último, pide que se incluya la controversia anglo-guatemalteca sobre Honduras Británica en el programa del próximo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

982. Refiriéndose a la declaración del peticionario, el representante del Reino Unido dice que reserva su posición y la de su Gobierno respecto a la declaración que acaba de hacer el peticionario. No hará ninguna observación porque está en curso una mediación entre Gran Bretaña y Guatemala. Sin embargo, puntualiza que el Gobierno británico ha desmentido públicamente las afirmaciones de que exista un plan secreto con objeto de ceder Honduras Británica a Guatemala. La posición del Gobierno británico respecto a la soberanía de Honduras Británica no ha variado.

983. El representante de Guatemala dice que su Gobierno rechaza categóricamente las observaciones del peticionario, que no coinciden en absoluto con la verdad. El Comité sabe bien que entre Guatemala y el Reino Unido hay una controversia por el Territorio de Belice al que también se llama Honduras Británica; por eso no le son aplicables las disposiciones de la resolución 1514 (XV), salvo las del párrafo 6.

/...



Guatemala y el Reino Unido han aceptado la mediación del Gobierno de los Estados Unidos de América y tienen entabladas respecto al Territorio negociaciones que probablemente conducirán a una solución satisfactoria.

984. Le interesa confirmar categóricamente que su Gobierno no ha renunciado ni renunciará nunca a sus derechos inalienables al Territorio de Belice. Subraya además, que la reserva tradicionalmente formulada por su Gobierno, en cuanto a su derecho respecto al Territorio, no es de ningún modo incompatible con el profundo interés que Guatemala tiene en el bienestar y el progreso de la población de Belice. El Gobierno de Guatemala continuará las negociaciones que en estos momentos mantiene con el Gobierno del Reino Unido y, como está en curso una mediación, no aceptará ninguna otra jurisdicción para resolver la controversia, a menos que las dos partes en ella decidan otra cosa.

985. Por último, se reserva el derecho de exponer al Comité, si fuere necesario, los argumentos jurídicos en que se funda la justa causa de su Gobierno.

B. Examen del informe del Subcomité III

986. La representante de los Estados Unidos de América manifiesta que su delegación formula reservas en lo relativo a las conclusiones y recomendaciones, que, a su parecer, no reflejan con exactitud la situación reinante en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La delegación norteamericana ha señalado ya las contradicciones que había entre esas conclusiones y la situación real, como lo prueban las actas de las sesiones dedicadas al examen de la cuestión por el Subcomité III.

987. Según el representante de Bulgaria, las conclusiones y recomendaciones del Subcomité III reflejan en conjunto la situación que sigue imperando en el territorio colonial de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, pese a la resolución 1514 (XV) y demás resoluciones de la Asamblea General concernientes a los territorios coloniales pequeños, sobre todo la resolución 2232 (XXI).

988. La delegación búlgara tiene reservas que formular en cuanto al inciso 5 del párrafo 82, que, a su juicio, no corresponde a la realidad de los hechos y que, además, no concuerda con los restantes incisos del párrafo. No cree, en efecto, que pueda señalarse progreso alguno en el terreno político desde la última vez que el Subcomité examinó la situación del territorio. Como lo demuestra el párrafo 42 del informe que se estudia, incluso las propuestas de la Convención Constitucional de 1964 tendientes a incrementar la participación de los habitantes en la administración de los asuntos locales no han modificado las relaciones fundamentales entre el territorio y la Potencia administradora, y no se han puesto en práctica las medidas propuestas.

989. La delegación búlgara formula también reservas respecto de la recomendación que figura en el inciso 8) y que preconiza la presencia de las Naciones Unidas en el territorio al ejercerse el derecho de libre determinación. Estima que en la etapa actual lo que conviene prever es el envío de una misión visitadora que se encargaría de informar sobre la situación; sólo así se podrán prever otras fórmulas. El orador, evidentemente, no es hostil a la idea de una presencia de las Naciones Unidas en el territorio, pero teme que en las actuales circunstancias esa presencia sea aprovechada por la Potencia colonial en detrimento de los intereses de la población, y preste apariencias de legalidad a un procedimiento que no puede surtir más efecto que el de reforzar la autoridad de la Potencia administradora. Conviene, por lo demás, recordar que el Subcomité rehusó participar en un procedimiento que nada de común tiene con el ejercicio del derecho a la libre determinación.

990. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comparte ese punto de vista. No se puede afirmar que haya habido progreso en el terreno político, ya que la Potencia administradora sigue ejerciendo el derecho de veto en la esfera legislativa. En cuanto a la presencia de las Naciones Unidas en el territorio, no será útil sino cuando se reúnan las condiciones previas que permitan a la Organización desempeñar un papel activo. Hay que empezar por enviar una misión visitadora para que estudie la situación allí mismo; cuando esa misión haya presentado su informe, se podrá adoptar una decisión sobre la presencia de las Naciones Unidas en el territorio. Hoy por hoy, esa presencia sería prematura.

991. La representante de los Estados Unidos de América declara que su delegación tiene por gratuitas las alegaciones de que no se ha logrado progreso alguno en el terreno político desde la última vez que el Comité examinó la situación en el territorio; esas afirmaciones no tienen en cuenta los hechos que la delegación norteamericana ha comunicado al Subcomité. En las Islas Vírgenes de los Estados Unidos hay dos partidos políticos; en noviembre de 1966 se organizaron elecciones libres en el territorio, y en ellas votó el 80% de los electores inscritos. Por lo tanto, la población ha tenido la oportunidad de expresar cómo enjuicia su futuro.

992. La oradora recuerda, además, que su delegación informó al Comité Especial de que se había cumplido la recomendación hecha por la Convención Constitucional de 1964, de revisar la composición del órgano legislativo del territorio y ampliarlo. En cumplimiento de otra recomendación de la Convención Constitucional de 1964, el órgano legislativo tiene ahora la facultad de fijar el importe de los estipendios parlamentarios y, por último, como recomendó la Convención de 1964, un proyecto de ley que prevé el nombramiento de gobernador por vía electiva ha sido presentado al Congreso de los Estados Unidos, que todavía no se ha pronunciado al respecto. Dicho proyecto de ley tiene el apoyo del gobierno federal. Parece a la oradora que estas medidas constituyen un progreso hacia la libre determinación. Si los Estados Unidos tuviesen intenciones de absorber el territorio de las Islas Vírgenes, no se tomarían la molestia de organizar elecciones que pudieran llevar a la autonomía.

993. El representante del Reino Unido dice que su delegación se reserva su actitud respecto de las conclusiones y recomendaciones del Subcomité III sobre las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

994. El representante de la República Unida de Tanzania se extraña de la ausencia del vocablo "independencia" en las conclusiones y recomendaciones que figuran en el párrafo 82; ¿puede el Comité, como lo hace en el inciso 6), reiterar el derecho inalienable del pueblo del territorio a la libre determinación sin reconocerle el derecho a la independencia? El orador propone, en vista de ello, que se añadan a ese inciso las palabras "y a la independencia" después de las palabras "a la libre determinación". Aparte esta reserva, la delegación de Tanzania suscribe enteramente las conclusiones y recomendaciones del Subcomité III.

995. El representante de Venezuela, hace notar, dirigiéndose al representante de Tanzania, que la palabra "independencia" aparece en el inciso 2), donde se dice que el Comité reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica cabalmente al Territorio. La idea de independencia está contenida implícitamente en el inciso 5), que expresa el pesar de que la Potencia administradora no haya aplicado todavía las disposiciones de la resolución 1514 (XV) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General con respecto a ese territorio. Huelga decir que la expresión libre determinación se entiende en sentido muy lato y que abre la puerta a todas las posibilidades, incluida la independencia absoluta, que es la forma más avanzada de autonomía.

996. El representante del Irán declara que su delegación suscribe de buen grado la propuesta del representante de Tanzania, pero desea que se indique en el acta de los debates que, a su parecer, la expresión "libre determinación" es lo bastante amplia para englobar la independencia. Por respeto a la libertad de la población es por lo que no se ha concretado forma alguna de libre determinación; a los habitantes del territorio incumbe el pronunciarse sobre este punto.

997. El representante de la República Unida de Tanzania declara que con ese mismo espíritu propuso que se mencionase expresamente la independencia.

998. El Comité Especial aprueba, en su forma enmendada, las conclusiones y recomendaciones relativas a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América que figuran en el párrafo 82 del informe del Subcomité.

### Islas Vírgenes Británicas

999. El representante del Reino Unido dice que lamenta profundamente la índole negativa de las conclusiones y recomendaciones relativas a las Islas Vírgenes Británicas, ya que no se ha tenido en cuenta el avance logrado por los habitantes del Territorio en los últimos años. En consecuencia, reserva la posición de su delegación con respecto al capítulo III del informe.

1000. El representante de Australia expresa reservas generales acerca de las conclusiones y recomendaciones, porque no prestan la debida atención a la reciente evolución política de los Territorios.

1001. El representante de Bulgaria dice que el informe refleja correctamente la situación en las Islas Vírgenes Británicas. Formula, sin embargo, reservas en cuanto al párrafo 9) de las conclusiones y recomendaciones, pues, a su juicio, la presencia de las Naciones Unidas en los pequeños territorios coloniales debe revestir la forma de misiones visitadoras; de no ser así, las Potencias administradoras podrían utilizar el mecanismo de las Naciones Unidas para mantener su dominación colonial. Pide que se deje constancia de sus reservas en el informe del Comité.

1002. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está de acuerdo, en general, con las recomendaciones y conclusiones del Comité, pero recuerda las reservas que formuló su delegación cuando el Comité Especial examinó los territorios del Océano Pacífico y del Océano Índico. La presencia de las Naciones Unidas en los Territorios coloniales debe estar supeditada al estudio de la situación y a la adopción de ciertas medidas por las Potencias administradoras, a fin de que la población pueda expresarse libremente; de no ser así, la presencia de las Naciones Unidas puede favorecer la continuación del colonialismo.

1003. El representante de la India dice que la segunda parte del párrafo 8) reproduce una idea que ya se enuncia en el párrafo 7). Sugiere que se suprima la última frase del párrafo 8), que comienza con las palabras "Por consiguiente ...".

1004. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apoya la sugerencia del representante de la India.

1005. El representante de Sierra Leona no se opone a la sugerencia de la India, pero propone que, además de la supresión de la última frase del párrafo 8), se invierta el orden actual de los párrafos 7) y 8). Los párrafos 1) a 6) son, en realidad, conclusiones, como también lo es la primera parte del párrafo 8), mientras que el párrafo 7) es una recomendación.

/...

1006. El representante del Irán expresa no tener objeciones que formular a la propuesta del representante de Sierra Leona en lo atinente a invertir el orden de los párrafos. Sin embargo, sugiere que, en lugar de suprimir la segunda parte del párrafo 8), se la reemplace por la siguiente frase: "En consecuencia, invita a la Potencia administradora a adoptar las medidas necesarias a este respecto, de conformidad con el párrafo 8)".
1007. El representante del Reino Unido dice que, si se pone a votación la supresión de la última frase del párrafo 8), votará en contra, pues, al parecer, se intenta con ello eliminar toda referencia a la resolución 1514 (XV).
1008. El representante de Venezuela acepta la enmienda propuesta por el representante de Sierra Leona, pero, a su vez, propone que la última frase del párrafo 8), a saber, "y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General", se inserte en el párrafo 7), después de las palabras "la resolución 1514 (XV)".
1009. El representante de Italia está de acuerdo con los representantes de Sierra Leona e Irán, y apoya la propuesta del representante venezolano.
1010. El representante de la India, apoyado por la representante de Etiopía, propone que la referencia de la enmienda venezolana se redacte de la siguiente manera: "otras resoluciones de la Asamblea General sobre este territorio".
1011. El Comité Especial aprueba la propuesta formulada por el representante de Sierra Leona en el sentido de eliminar la última frase del párrafo 8) y de invertir el orden de los párrafos 7) y 8).
1012. El Comité Especial aprueba también la propuesta del representante del Irán de que se agregue la siguiente nueva frase al nuevo párrafo 7: "En consecuencia, invita a la Potencia administradora a adoptar las medidas necesarias a este respecto, de conformidad con el párrafo 8) infra."
1013. Por 13 votos contra ninguno, y 8 abstenciones, el Comité Especial aprueba la propuesta del representante venezolano, enmendada por el representante de la India, de que las palabras "y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre este territorio" se inserten a continuación de las palabras "resolución 1514 (XV)" en el nuevo párrafo 8).
1014. El representante del Irán expresa que se abstuvo de votar porque, a su juicio, el párrafo enmendado no refleja con exactitud los debates sostenidos en el Subcomité III.

1015. El representante de los Estados Unidos de América dice que la resolución 1514 (XV) se aplica al territorio tratado en esta sección del informe y que no se la puede descartar como una simple referencia a los procedimientos de transmisión de informaciones.

1016. El Comité Especial aprueba, en su forma enmendada, las conclusiones y recomendaciones relativas a las Islas Vírgenes Británicas que figuran en el párrafo 160 del informe del Subcomité.

Antigua. Dominica. Granada. San Cristóbal. Nieves y Anguila. Santa Lucía y San Vicente

1017. Con respecto a este capítulo del informe del Subcomité, el representante del Reino Unido expresa que su Gobierno ya ha declarado que la resolución del Comité Especial prejuzga la situación de los Estados Asociados del Caribe Oriental y que no ve objeto en colaborar con el Subcomité. Se abstendrá de votar sobre esa sección del informe.

1018. El representante de Australia expresa reservas generales acerca de las conclusiones y recomendaciones, porque no prestan debida atención a la reciente evolución política de los territorios.

1019. Los representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Bulgaria formulan, respecto del inciso 11) del párrafo 287, reservas análogas a las que expresaron acerca del inciso 9) del párrafo 160 del informe del Subcomité.

1020. Los representantes de la India, Italia, Costa de Marfil, Chile, Madagascar, Túnez, Australia, Etiopía y Afganistán formulan reservas acerca del inciso 4) del párrafo 287, pues consideran que el Subcomité III no tiene competencia para oír a peticionarios.

1021. El representante del Irán señala, con respecto a las reservas formuladas, que el Subcomité III no concedió audiencias a peticionarios. Se limitó a dar a determinadas personas la oportunidad de proporcionarle los datos que necesitaba para desempeñar sus funciones. Al hacerlo, el Comité no se apartó de los precedentes establecidos, como demuestra el caso del Subcomité para la Guinea Ecuatorial.

1022. El representante de Venezuela opina que el Subcomité no se excedió en sus atribuciones al aprovechar esa oportunidad para obtener informaciones de primera mano sobre la situación en los territorios.

1023. Los representantes de Madagascar, el Reino Unido y los Estados Unidos de América expresan reservas con respecto al párrafo 286.

1024. El Comité Especial toma nota del párrafo 286 y decide aplazar el estudio de la cuestión que en él se plantea.

1025. El Comité Especial aprueba las conclusiones y recomendaciones relativas a Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente que figuran en el párrafo 287 del informe del Subcomité.

Bermudas, Bahamas, Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán

1026. El representante del Reino Unido dice que deplora la índole negativa de las conclusiones y recomendaciones relativas a las Bermudas, las Bahamas, Montserrat, las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán, ya que no se han tenido en cuenta los avances logrados por los habitantes de esos territorios en los últimos años. En consecuencia, reserva la posición de su delegación con respecto a esta sección del informe.

1027. El representante de Australia expresa reservas generales sobre las conclusiones y recomendaciones, porque no prestan la atención debida a la reciente evolución política de los territorios.

1028. El Comité Especial aprueba las conclusiones y recomendaciones relativas a las Bermudas, las Bahamas, Montserrat, las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán que figuran en el párrafo 352 del informe del Subcomité.

Islas Malvinas (Falkland Islands)

1029. El Comité Especial aprueba la declaración de consenso relativa a las Islas Malvinas (Falkland Islands) que figura en el párrafo 355 del informe del Subcomité.

Conclusiones y recomendaciones generales sobre los territorios bajo administración del Reino Unido

1030. El representante del Reino Unido reserva la posición de su delegación en lo tocante a las conclusiones y recomendaciones generales que figuran en el informe del Subcomité.



1031. El representante de Australia expresa reservas generales sobre las conclusiones y recomendaciones

1032. El Comité Especial aprueba las conclusiones y recomendaciones generales sobre los territorios bajo administración del Reino Unido que figuran en el párrafo 356 del informe del Subcomité.

## VI. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITE ESPECIAL

1033. A continuación, se enuncian las conclusiones y recomendaciones que el Comité Especial aprobó en sus 564a. y 565a. sesiones, celebradas el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 1967, respectivamente:

### A. Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América

1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones sobre el Territorio que aprobó en 1966 y confirmó la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

2) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica cabalmente al Territorio.

3) Reconoce que la exigüedad del Territorio y su escasa población plantean problemas particulares que requieren especial atención.

4) Toma nota de que en el Territorio no se ha registrado ningún progreso constitucional importante desde su último examen del asunto.

5) Deplora además que, no obstante haber realizado progresos en materia política, la Potencia administradora no haya aplicado mejor las disposiciones de la resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General con respecto a ese Territorio.

6) Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libre determinación y la independencia, y subraya una vez más que la Potencia administradora debe permitir al pueblo expresar su voluntad con respecto a la futura situación del Territorio con total libertad y sin restricción alguna.

7) Invita también a la Potencia administradora a promover la discusión abierta, libre y pública de las posibles opciones a que ese pueblo pueda acogerse para conseguir los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; y a cuidar de que el pueblo del Territorio ejerza su derecho a la libre determinación con pleno conocimiento de tales opciones.

8) Recordando el párrafo 6 de la resolución 2232 (XXI) del 20 de diciembre de 1966 que dice que "las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación", reitera su convicción de que una presencia de las Naciones Unidas durante los procedimientos de ejercicio del derecho de libre determinación será esencial

para garantizar el ejercicio, por el pueblo del Territorio, de tal derecho con toda libertad y sin restricción alguna, y con pleno conocimiento de las posibles opciones a que puede acogerse.

9) Encarece a la Potencia administradora que permita el envío de una misión visitadora de las Naciones Unidas al Territorio y que ofrezca a tal misión toda su cooperación y asistencia.

#### B. Islas Vírgenes Británicas

1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones sobre el Territorio que aprobó en 1964 y 1966 y confirmó la Asamblea General en sus vigésimo y vigésimo primer períodos de sesiones.

2) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales sigue siendo plenamente aplicable al Territorio.

3) Reconoce que la exigüidad del Territorio y su escasa población plantean problemas particulares que requieren especial atención.

4) Toma nota del resultado de la Conferencia Constitucional que se celebró en octubre de 1966 e igualmente de las elecciones en el Territorio que tuvieron lugar en el mismo año.

5) Lamenta que, a pesar de que algún progreso político se ha logrado en el Territorio desde su último examen del asunto, la Potencia administradora no haya aplicado mejor las disposiciones de la resolución 1514 (XV) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General con respecto a este Territorio.

6) Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libre determinación y subraya una vez más que la Potencia administradora debe permitir al pueblo expresar su voluntad con respecto a la futura situación del territorio con total libertad y sin restricción alguna.

7) Reitera el criterio de que debe ser posible que el Territorio se una a otros de la zona para formar un estado viable económica y administrativamente. Deplora que desde 1947 no se hayan tomado medidas efectivas para facilitar una posible federación con otros Territorios. Por consiguiente, invita a la Potencia administradora a que adopte las medidas del caso en tal respecto, sobre la base del párrafo 8), infra.

8) Invita a la Potencia administradora a promover la discusión abierta, libre y pública de las posibles opciones a que ese pueblo pueda acogerse para conseguir los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y de las otras resoluciones de la Asamblea General relativas al Territorio y a cuidar de que el pueblo del Territorio ejerza su derecho a la libre determinación con pleno conocimiento de tales opciones.

9) Recordando el párrafo 6 de la resolución 2232 (XXI), que dice que "las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos Territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación", reitera su convicción de que una presencia de las Naciones Unidas durante los procedimientos de ejercicio del derecho de libre determinación será esencial para garantizar el ejercicio, por el pueblo del Territorio, de tal derecho con toda libertad y sin restricción alguna, y con pleno conocimiento de las posibles opciones a que pueda acogerse.

10) Lamenta que la Potencia administradora no haya aceptado todavía el envío de una misión visitadora al Territorio, y afirma que una visita a él es útil y necesaria. Por lo tanto, pide a la Potencia administradora que permita el envío de una misión visitadora de las Naciones Unidas al Territorio y que ofrezca a tal misión toda su cooperación y asistencia.

C. Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente

1) El Comité Especial recuerda sus anteriores conclusiones y recomendaciones sobre estos Territorios, confirmadas por la Asamblea General.

2) Recuerda la resolución que aprobó en su 506a. sesión, celebrada el 23 de marzo de 1967, y, en particular el párrafo 2 de la parte dispositiva, en virtud del cual se encarga al Subcomité III de que "a la luz de los recientes acontecimientos constitucionales, examine la situación de dichos Territorios en todos sus aspectos, incluyendo la posibilidad de enviar una misión visitadora, y que informe al Comité Especial lo antes posible".

3) Deplora la actitud de la Potencia administradora que se ha negado a cooperar con el Subcomité III en sus esfuerzos para obtener información más completa sobre los acontecimientos políticos y constitucionales en los Territorios.

4) Toma nota de que el Subcomité III, por estimarlo necesario para llevar a cabo su tarea, procedió a escuchar a personas que le suministraron información sobre los recientes acontecimientos políticos y constitucionales en Anguila.

5) Toma nota de los acontecimientos constitucionales ocurridos en estos Territorios, y considera que representan un cierto grado de progreso en la esfera política para los pueblos interesados.

6) Toma nota además de los recientes acontecimientos políticos ocurridos en la isla de Anguila.

7) Reafirma que la resolución 1514 (XV) continúa aplicándose plenamente a estos Territorios.

8) Tomando en cuenta la resolución 2232 (XXI), reitera que la pequeña superficie y la escasez de recursos en estos Territorios plantean problemas particulares que requieren especial atención.

9) Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de estos Territorios a ejercer el derecho a la libre determinación con plena libertad y sin limitación alguna. Pide a la Potencia administradora que asegure que los pueblos de los Territorios estén informados acerca de las diversas posibilidades que se les ofrecen para lograr los objetivos de la resolución 1514 (XV).

10) Pide a la Potencia administradora que promueva el desarrollo de vínculos más estrechos entre estos Territorios mediante la construcción de una infraestructura política, económica y social común y conforme a los deseos de la población.

11) Recordando el párrafo 6 de la resolución 2232 (XXI), que establece "que las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos Territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación", reitera su creencia de que la presencia de Naciones Unidas durante los procedimientos vinculados con el proceso de libre determinación será esencial para asegurar que los pueblos de los Territorios puedan ejercer su derecho en completa libertad, sin restricción alguna y con completo conocimiento de las opciones que se les ofrecen.

12) Deplora que la Potencia administradora no haya permitido el envío de una misión visitadora a estos Territorios y afirma que tal visita sería útil y necesaria. Por lo tanto pide, una vez más a la Potencia administradora que permita a las Naciones Unidas el envío de una misión visitadora a los Territorios y le extienda completa cooperación y asistencia.

/...

D. Bermudas, Bahamas, Montserrat, islas Turcas y Caicos e islas Caimán

- 1) El Comité Especial recuerda sus anteriores conclusiones y recomendaciones relativas a las Bermudas, Bahamas, Montserrat, islas Turcas y Caicos e islas Caimán, aprobadas por la Asamblea General.
- 2) Toma nota de la declaración de la Potencia administradora que contiene información adicional sobre esos territorios.
- 3) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica plenamente a estos territorios.
- 4) Lamenta que la Potencia administradora no haya tomado todavía medidas efectivas para aplicar la Declaración a estos Territorios y la insta a que lo haga sin más demora.
- 5) Toma nota de que ciertos intereses financieros ajenos al desarrollo político, económico y social de estos territorios pueden constituir un impedimento en la aplicación de la resolución 1514 (XV) al Territorio de las Bahamas.
- 6) Considera que, en vista de que no dispone de suficiente información sobre estos territorios, la Potencia administradora debería permitir que las Naciones Unidas enviaran lo antes posible, una misión visitadora a los Territorios.
- 7) Considera que la Potencia administradora debe tomar inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos Territorios, sin condiciones ni reservas, de conformidad con su voluntad y su deseo libremente expresados, para permitirles gozar de libertad e independencia absolutas.
- 8) Reitera su convicción de que, sobre todo en el caso de los pequeños Territorios, las Naciones Unidas deben tomar medidas apropiadas para asegurar que los pueblos de estos Territorios tengan la posibilidad de expresarse libremente en cuanto a su situación futura, con pleno conocimiento de las diversas opciones que se les ofrecen.

E. Islas Malvinas (Falkland Islands)

Considerando que las negociaciones bilaterales constituyen el método más adecuado para resolver la cuestión de la descolonización de las Islas Malvinas (Falkland), pero careciendo de noticias respecto al progreso logrado en dicha vía desde que se aprobó el consenso el 20 de diciembre de 1966, el representante del Uruguay, apoyado por el representante de Venezuela, propuso que se reitere a las

/...

partes, los términos de la resolución 2065 (XX) y del consenso de diciembre 20 de 1966, con el objeto de lograr lo antes posible una solución pacífica del problema, teniendo en cuenta la recomendación contenida en la parte final del citado consenso en cuanto a la información que debe proporcionarse al Comité Especial y a la Asamblea General "acerca de la marcha de las negociaciones sobre esta situación colonial, cuya eliminación interesa a las Naciones Unidas, dentro del marco de la resolución 1514 (XV), de fecha 14 de diciembre de 1960".

F. Conclusiones y recomendaciones generales relativas a los Territorios bajo administración del Reino Unido

1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones relativas a estos territorios, que aprobó en 1966, confirmadas por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

2) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica plenamente a estos Territorios. Al mismo tiempo, reconoce que la poca extensión y la escasa población de los mismos, así como la naturaleza de su economía, plantean problemas peculiares que requieren especial atención.

3) Reafirma el derecho de los pueblos de estos Territorios al ejercicio de la libre determinación con toda libertad y con pleno conocimiento de las diferentes formas de condición política que se les ofrecen. Asimismo, expresa su convicción de que, sobre todo en el caso de los Territorios pequeños, las Naciones Unidas deberían adoptar medidas para que las poblaciones de esos Territorios se pudieran pronunciar libremente sobre su condición futura, con pleno conocimiento de las posibilidades que se les ofrecen.

4) Reitera su recomendación acerca de la necesidad de enviar misiones visitadoras a estos Territorios y, con tal fin, insta a la Potencia administradora a que permita que envíe misiones visitadoras a tales Territorios.

5) Recuerda que en 1964 manifestó la convicción de que estos Territorios deberían tener la posibilidad de unirse a otros Territorios de la región para formar un Estado que fuera económica y administrativamente viable. También recuerda que en aquel entonces algunos de estos Territorios estaban en negociaciones tratando de establecer una federación. Lamenta que esas negociaciones no dieran resultado y que, en consecuencia, cada Territorio se haya visto obligado a buscar una solución por separado. Manifiesta la esperanza de que la Potencia administradora haga todo lo posible por estrechar más los vínculos que existen entre estos Territorios, estableciendo una infraestructura común en la esfera política, económica y social conforme a los deseos de las poblaciones.

ANEXO\*

INFORME DEL SUBCOMITE III

Relator: Sr. Gilberto Ignacio Carrasquero (Venezuela)

INTRODUCCION

Atribuciones

1. En su 488a. sesión, celebrada el 20 de febrero de 1967, el Comité Especial decidió, al aprobar el 26<sup>o</sup> informe del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.368/Rev.1); mantener el Subcomité III con la misma composición que en 1966<sup>a</sup>. En la misma sesión el Comité Especial confirmó las atribuciones actuales del Subcomité y decidió examinar urgente y directamente en sesiones plenarias los territorios de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente. Los territorios remitidos al Subcomité III son los siguientes: Antigua, Bahamas, Bermudas, Dominica, Granada, Honduras Británica, Islas Caimán, Islas Malvinas (Falkland Islands), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente.
2. Además de esas atribuciones, el Comité Especial pidió al Subcomité que realizara la labor específica que le había asignado la Asamblea General en sus resoluciones relativas a los territorios encomendados a la atención del Subcomité III. Las decisiones de la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones relativas a los territorios encomendados a la atención del Subcomité III figuran en la resolución 2232 (XXI) aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1966 y en el consenso sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands) aprobado por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1966 (A/6628, párrafos 12 y 13). Los párrafos dispositivos de la resolución 2232 (XXI) dicen lo siguiente:

---

\* Publicado anteriormente con las signaturas A/AC.109/L.401/Rev.1 y A/AC.109/L.401/Add.1 a 4.

a/ Los miembros del Subcomité son: Bulgaria, Costa de Marfil, Irán, Italia, Madagascar, Uruguay y Venezuela.



"1. Aprueba los capítulos del informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a esos territorios;

"2. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de esos territorios a la libre determinación y a la independencia;

"3. Pide encarecidamente a las Potencias administradoras que pongan en práctica sin demora las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;

"4. Reitera su declaración en el sentido de que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de los territorios coloniales y a establecer bases e instalaciones militares en esos territorios, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

"5. Insta a las Potencias administradoras que permitan a las misiones de las Naciones Unidas visitar los territorios y les ofrezcan toda su cooperación y asistencia;

"6. Decide que las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación;

"7. Pide al Comité Especial que continúe prestando especial atención a esos territorios y que informe a la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución;

"8. Pide al Secretario General que continúe prestando toda la ayuda necesaria para el cumplimiento de la presente resolución."

El consenso sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands) dice lo siguiente:

"Con referencia a la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1965, relativa a la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands), la cuarta Comisión tomó nota de las comunicaciones de fecha 15 de diciembre de 1966, enviadas por la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (A/C.4/682 y A/C.4/683). En relación con este tema la Comisión llegó a un consenso en favor de que se instara a ambas partes a que continuaran las negociaciones con objeto de lograr lo antes posible una solución pacífica del problema y a que mantuviera debidamente informados al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y a la Asamblea General acerca de la marcha de las negociaciones sobre esta situación colonial, cuya eliminación interesa a las Naciones Unidas dentro del marco de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de fecha 14 de diciembre de 1960."

3. En la misma sesión, el Comité Especial autorizó al Subcomité III a presentar sin tardanza recomendaciones concretas acerca del envío de misiones visitadoras a los territorios que les interesan.
4. Por resolución adoptada en su sesión 506a., celebrada el 23 de marzo de 1967 (véase el párr. 948 de este capítulo), el Comité Especial pidió al Subcomité III que, a la luz de los recientes acontecimientos constitucionales, examinara la situación en los Territorios de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente en todos sus aspectos, incluyendo la posibilidad de enviar una misión visitadora.

#### Elección de la Mesa

5. En su 60a. sesión, celebrada el 23 de febrero de 1967 el Comité eligió por unanimidad al Sr. Mohsen Sadigh Esfandiary (Irán) para el cargo de Presidente, y al Sr. Gilberto Ignacio Carrasquero (Venezuela) para el cargo de Relator.

#### Sesiones celebradas por el Subcomité

6. El Subcomité celebró un total de 39 sesiones entre el 23 de febrero y el 25 de septiembre y consideró las cuestiones asignadas a él en el orden siguiente:

- a) Cuestión de las misiones visitadoras
- b) Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- c) Islas Vírgenes Británicas
- d) Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía

y San Vicente.

- i) Bermudas, Bahamas, Montserrat
- ii) Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán
- e) Islas Malvinas (Falkland Islands).

7. El Subcomité decidió aplazar el examen de la cuestión de Honduras Británica por falta de tiempo.

## I. CUESTION DE LAS MISIONES VISITADORAS

8. El Subcomité examinó la cuestión relativa a las misiones visitadoras en sus 62a. y 63a. sesiones, los días 7 y 9 de marzo de 1967. El Subcomité reanudó el examen de este tema en su 87a. sesión, celebrada el 25 de agosto de 1967.
9. Al examinar esta cuestión, el Subcomité tomó nota de que el Comité Especial le había autorizado a presentar sin demora recomendaciones concretas sobre el envío de misiones visitadoras a los territorios de que se ocupaba. Tomó nota asimismo de que el Comité Especial había resuelto que, a ser posible, las misiones visitadoras fuesen enviadas a los territorios en el período anterior al quinto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
10. El Subcomité se guió por las decisiones de la Asamblea General y del Comité Especial sobre la conveniencia de enviar misiones visitadoras a los territorios a que se aplica la Declaración, a saber, las decisiones contenidas en el párrafo 5 de la resolución 2232 (XXI) de la Asamblea General. También tomó nota de que en 1966 el Comité Especial había resuelto que se enviaran misiones visitadoras a los siguientes territorios: Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía, San Vicente, Bermudas, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán.
11. Por lo tanto el Subcomité decidió recomendar al Comité Especial que enviara misiones visitadoras a todos los territorios lo antes posible, distribuyendo las visitas a lo largo de dos años, si fuera necesario. En la misma sesión el Subcomité pidió a su Presidente que preguntase a las Potencias administradoras si estaban dispuestas a recibir en 1967 misiones visitadoras en los territorios a que se referían las propuestas del Subcomité, a saber, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Bahamas, Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente.
12. En la 74a. sesión, celebrada el 9 de mayo, el Presidente declaró que los Representantes Permanentes del Reino Unido y de los Estados Unidos habían contestado a las preguntas que les habían formulado en relación con las misiones visitadoras.
13. En carta del 20 de abril de 1967 dirigida al Presidente, el Representante Permanente del Reino Unido manifestó que había recibido instrucciones de informar, que en las actuales circunstancias, en envío de misiones visitadoras a Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila y Santa Lucía, que actualmente eran Estados

/...

asociados plenamente autónomos, sería improcedente. Oportunamente se enviaría una contestación sobre las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas y Montserrat. Posteriormente, el Representante Permanente del Reino Unido comunicó al Presidente, por carta de fecha 7 de junio de 1967, que su "Gobierno ha considerado esta petición, pero ha decidido que no le es posible aceptar estas propuestas".

14. El Representante Permanente de los Estados Unidos, en carta del 26 de abril de 1967 dirigida al Presidente, informó que la posición de su Gobierno con respecto a la propuesta misión visitadora a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos seguía siendo la que se comunicó al Subcomité en 1966. El Gobierno de los Estados Unidos creía que el envío de una misión visitadora de las Naciones Unidas a aquel Territorio no estaba justificado por el momento, y por lo tanto lamentaba no poder aceptar la recomendación del Subcomité.

#### Conclusiones y recomendaciones

15. Recordando los párrafos 5 de las resoluciones 2232 (XXI) y 2189 (XXI) de la Asamblea General, el Subcomité toma nota con pesar de que las Potencias administradoras, a saber, los Estados Unidos y el Reino Unido, continúan manteniendo la misma actitud negativa con respecto a la aceptación de misiones visitadoras en los territorios encomendados a la atención del Subcomité III.

16. El Subcomité recomienda al Comité Especial que inste encarecidamente a las Potencias administradoras a que reciban misiones visitadoras en dichos territorios en una fecha próxima.

## II. ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS

### A. Examen por el Subcomité

#### Introducción

17. El Subcomité examinó la cuestión del Territorio de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en sus sesiones 64a. a 72a. celebradas entre el 29 de marzo y el 19 de abril de 1967.

18. Obraba en poder del Subcomité el documento de trabajo preparado por la Secretaría (véase el documento A/6700/Add.14 (Parte I), párrs. 19 a 65).

19. De conformidad con el procedimiento acordado por el Comité Especial, el representante de los Estados Unidos de América, como Potencia administradora, tomó parte en los trabajos del Subcomité por invitación del Presidente.

#### Observaciones generales

20. El representante de los Estados Unidos dijo que su delegación había hecho una exposición básica sobre las Islas Vírgenes de los Estados Unidos ante el Subcomité el 18 de agosto de 1966 (A/AC.109/SC.4/SR.47) y que sólo tres meses antes el Territorio había sido objeto de discusión ante la Cuarta Comisión, el 16 de diciembre de 1966. En los últimos meses, se habían suscitado otros acontecimientos políticos, sociales y económicos de interés.

21. Durante el ejercicio fiscal de 1966 y hasta mediados de febrero de 1967, el Territorio había disfrutado de un crecimiento económico y social sostenido. El ingreso por habitante había aumentado en 100 dólares por año desde 1965 y, a principios de 1967, llegaba a 2.100 dólares anuales. Las recaudaciones por concepto de ingresos locales del Gobierno para el ejercicio fiscal de 1966 habían aumentado aproximadamente en una tercera parte, en comparación con las del año anterior. El Gobierno del Territorio había recaudado localmente 37.500.000 dólares durante 1966, con un aumento de 8.500.000 dólares sobre el ejercicio fiscal anterior. Las recaudaciones correspondientes al primer semestre del ejercicio económico de 1967 (del 1.º de julio al 31 de diciembre de 1966) habían aumentado en un porcentaje aún mayor en comparación con las del primer semestre del ejercicio económico precedente. El activo bancario ascendía a más de 100 millones de dólares, lo cual representaba un incremento del 11% sobre el de 1965.

/...

22. El límite máximo autorizado para bonos del sector público había aumentado de 10 millones a 30 millones de dólares, reconociéndose explícitamente la responsabilidad fiscal del Gobierno local y dejándolo en libertad para hacer frente a las crecientes necesidades del Territorio.
23. La Virgin Islands Development Authority, creada con el fin de permitir la transferencia de los bienes de la Virgin Islands Corporation a propietarios y administradores locales, había terminado su primer año completo de operaciones y sus ingresos recaudados excedían de 550.000 dólares, en comparación con los de la Virgin Islands Corporation que llegaron a 406.000 dólares durante el año anterior. La propiedad del aeropuerto Harry S. Truman había sido traspasada del Gobierno de los Estados Unidos al de las Islas Vírgenes. Actualmente, se realizaban semanalmente 21 viajes de ida y vuelta en aviones de reacción entre el Territorio y los Estados Unidos, mientras que en 1965 éstos llegaban sólo a tres. El aeropuerto, administrado por la Development Authority, era también utilizado por tres líneas aéreas que operaban en el Caribe.
24. La Isla de Santa Cruz había seguido ampliando su base industrial con la terminación de una gran planta de alúmina en un complejo industrial situado en tierras previamente no productivas. Avanzaban rápidamente los trabajos para finalizar la construcción en la isla de una gran refinería de petróleo, que, cuando entrase en plena actividad, contribuiría a la diversificación económica del Territorio al atraer industrias satélites a Santa Cruz.
25. En la Isla de Santo Tomás, la Virgin Islands Planning Board había seleccionado una zona adecuada para desarrollo industrial. El desarrollo industrial de la Isla marchaba a la zaga del de Santa Cruz por las ventajas físicas naturales de esta última.
26. Se había aliviado parcialmente el problema de la vivienda al inaugurar recientemente un proyecto de viviendas públicas de 200 unidades en Santa Cruz, aunque existía aún un desequilibrio entre la demanda y las viviendas públicas disponibles. Más de 3.000 unidades adicionales, tanto públicas como privadas, se encontraban en la etapa de planificación o de construcción. Actualmente, se estaba empleando el método de venta a un precio alzado de la casa terminada, que utilizaba a la empresa privada para la construcción de viviendas baratas con ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, y se había aprobado recientemente la construcción de más de 600 unidades

mediante este método. Debido al crecimiento de la población, los servicios de hospitales y de asistencia médica existentes seguían recargados de trabajo si se comparaba con las normas reinantes en los Estados Unidos. Dos centros de asistencia médica cuyo valor ascendería a varios millones de dólares, cada uno de los cuales tendría un hospital general, un centro para asistencia a largo plazo, un centro sanitario, un dispensario de consulta externa y pabellones para el personal residente, estaban actualmente en la etapa de adquisición del terreno; se esperaba que la construcción se iniciase a principios de 1968.

27. Continuaba el progreso en el campo de la enseñanza. Durante 1965, el Gobierno había iniciado un programa acelerado para la construcción de 113 aulas adicionales, y se había completado ya la construcción de una escuela secundaria elemental y de una de segundo ciclo. La proporción de profesores con respecto al número de alumnos se comparaba favorablemente con las normas más elevadas establecidas en los Estados Unidos. El Colegio Universitario de las Islas Vírgenes contaba con 229 estudiantes regulares y 1.000 estudiantes nocturnos, y en junio de 1966 se celebraba su segunda ceremonia de graduación. Se esperaba que en 1967 se matriculase un número de alumnos regulares 75% mayor que el de 1966, y se había establecido un programa cuatrienal para la formación de maestros, conjuntamente con la New York University.

28. El clima político en las Islas Vírgenes se basaba en la información y la libertad. Había seis periódicos, una revista mensual, tres estaciones de radio y dos estaciones de televisión que informaban sobre sucesos locales, nacionales e internacionales. El sufragio universal de los adultos se había introducido en 1936, y los requisitos de alfabetización se podían cumplir en español o en inglés. En el Territorio existía un sistema político de dos partidos, y en las últimas elecciones, celebradas en noviembre de 1966, más de 13.000 personas, que representaban a más del 80% de los votantes inscritos, emitieron su voto.

29. En 1966 la delegación de los Estados Unidos había informado al Comité Especial de que la recomendación de la Convención Constitucional de 1964, que establecía la reforma electoral del Cuerpo Legislativo de manera que correspondiese al requisito constitucional de representación igual para todos, se había convertido en ley. El representante de los Estados Unidos se complacía en comunicar a los miembros que durante 1967 había sido elegido, y se había venido reuniendo un Cuerpo Legislativo ampliado y conforme a la reforma electoral, integrado por quince miembros:

Santo Tomás y Santa Cruz eligen cinco miembros cada una, uno San Juan, y cuatro senadores de representación general. Como resultado de una recomendación de la Convención Constitucional de 1964, el Cuerpo Legislativo tenía ahora poder para establecer dietas legislativas y, en efecto, así lo había hecho recientemente. En virtud de otra recomendación de la Convención de 1964, se habían presentado proyectos de ley que disponían la elección de un Gobernador, los que habían sido aprobados en ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos en 1966. Los dos proyectos de ley aprobados diferían en cuestiones secundarias, como las referentes a las fechas de entrada en vigor y, debido a falta de tiempo, no pudieron conciliarse las divergencias antes de clausurarse la 89a. legislatura. Como los proyectos de ley pendientes dejaban de surtir efecto al final de la legislatura en que eran presentados los proyectos de ley de que se trataba ya no tenían fuerza legislativa. El 17 de enero de 1967, un nuevo proyecto de ley que disponía la elección de un Gobernador fue presentado a la 90a. legislatura, y se remitió a la Comisión de asuntos interiores e insulares del Senado donde se hallaba actualmente sometido a examen. El proyecto de ley estipulaba que el Gobernador de las Islas Vírgenes fuese elegido por una mayoría de las personas con derecho a votar para elegir el Cuerpo Legislativo. También daba al Cuerpo Legislativo autoridad para determinar la duración de sus legislaturas y ratificaba la aplicabilidad de ciertas partes de la Constitución federal al Territorio de las Islas Vírgenes. La protección proporcionada a los ciudadanos de los Estados Unidos por estas estipulaciones se había incluido ya en la legislación territorial.

30. El representante de Venezuela se complacía en observar que las condiciones sociales y económicas del Territorio figuraban entre las más favorables de la zona del Caribe. No obstante, su delegación estaba también interesada en la evolución política del Territorio. Tomando nota que el 16 de mayo de 1966 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos había aprobado un proyecto de ley que disponía la elección de un gobernador en las Islas Vírgenes y que el 10 de octubre de 1966 el Senado de los Estados Unidos había aprobado el proyecto de ley proveniente de la Cámara de Representantes con ciertas enmiendas, el representante de Venezuela preguntaba al de los Estados Unidos si podría informar al Subcomité en qué consistían estas enmiendas y cuál era la situación actual en lo referente a la elección del Gobernador. También deseaba saber cuál era la plataforma política del Virgin Islands Party, y si había sido absorbido por el Partido Demócrata o el Republicano.



31. El representante de Italia manifestó que su delegación estaba particularmente interesada en la evolución política del Territorio dentro del marco de las resoluciones que regulaban los trabajos del Subcomité. En lo relativo a las elecciones celebradas en el Territorio el 8 de noviembre de 1966, preguntó al representante de los Estados Unidos si podría proporcionar información alguna referente a los temas principales de la campaña electoral y a los programas de los partidos políticos. Sería también útil que la delegación de los Estados Unidos pudiera proporcionar al Comité recortes de periódicos, de manera que los miembros pudieran percatarse de las cuestiones que se plantearon al electorado y de cuál fue el ambiente político en el Territorio. Por último, el representante de Italia preguntó si el Cuerpo Legislativo había comenzado sus trabajos, y qué tendencias políticas se habían manifestado dentro del mismo.

32. El representante del Uruguay señaló que sería interesante conocer los puntos de vista de los partidos políticos de las Islas Vírgenes en lo referente al futuro estatuto político del Territorio.

33. El representante de los Estados Unidos, en respuesta al representante de Venezuela, señaló que la diferencia más importante entre los dos proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes y por el Senado en 1966, se refería a la fecha en que había de ser elegido el Gobernador. Tenían que haberse celebrado consultas entre las dos Cámaras para conciliar la diferencia, pero no había habido tiempo suficiente para hacerlo antes de que finalizara la legislatura. Por lo tanto, se había introducido nueva legislación con la aprobación del Poder Ejecutivo, en la actual legislatura.

34. Respecto a una de las preguntas hechas por el representante de Italia, el representante de los Estados Unidos podía comunicar al Subcomité que, en efecto, el Cuerpo Legislativo había empezado sus trabajos y se había reunido ya durante el año en curso.

35. El representante de Bulgaria dijo que desearía hacer algunas preguntas al representante de la Potencia administradora. En primer término, con frecuencia se había insistido en que debía darse la mayor publicidad posible en los territorios coloniales a la resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960, de la Asamblea General. El orador suponía que el Gobierno de los Estados Unidos controlaba los medios de información en las Islas Vírgenes que administraba y creía posible que sus habitantes

quizá no estuviesen plenamente informados acerca de la resolución 1514 (XV), así como de las demás resoluciones y recomendaciones ulteriores del Comité Especial y de la Asamblea General. El representante de Bulgaria se preguntaba si el representante de los Estados Unidos podría dar al Subcomité alguna información sobre el punto y sobre la medida en que la población estaba informada respecto de las diversas posibilidades que se le abrían en materia de emancipación política.

36. En segundo término, quisiera obtener alguna información respecto de la propiedad de la tierra en el Territorio: por ejemplo, ¿pertenece a quienes la cultivaban o a empresas comerciales?

37. En tercer término, con frecuencia se había señalado la necesidad de que misiones de las Naciones Unidas visitasen los pequeños territorios, tales como las Islas Vírgenes, con el propósito de examinar directamente la situación y averiguar los deseos de los habitantes. Tanto en el párrafo 5 de la parte dispositiva de su resolución 2189 (XXI), del 13 de diciembre de 1966, como en el párrafo 5 de la parte dispositiva de su resolución 2232 (XXI) del 20 de diciembre de 1966, la Asamblea General encarecía a las Potencias administradoras que permitiesen el envío de misiones visitadoras de las Naciones Unidas a los Territorios bajo su administración. En su 63a. sesión, el Subcomité había decidido recomendar el despacho en 1967 de misiones visitadoras a algunos Territorios, incluso a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Había pasado un mes desde esa sesión y el representante de Bulgaria se preguntaba si el Comité podría ahora tener algún indicio acerca de la actitud del Gobierno de los Estados Unidos en cuanto a una misión visitadora.

38. El representante de los Estados Unidos declaró que en cuanto a la divulgación en las Islas Vírgenes de información acerca de la resolución 1514 (XV) y de las opciones al alcance de los habitantes, deseaba puntualizar, en primer término, que los medios de información en las Islas Vírgenes, como en los Estados Unidos, estaban en manos del sector privado y no estaban controlados por el Gobierno de su país. Sin embargo, se había dado a conocer la resolución 1514 (XV) en el Territorio, y sus habitantes seguían con interés las deliberaciones de las Naciones Unidas sobre las Islas Vírgenes. Un representante de prensa del Territorio había estado recientemente en la Sede de las Naciones Unidas, y habían aparecido en la prensa de las Islas Vírgenes artículos de fondo sobre las deliberaciones del Comité Especial. En general, los isleños estaban perfectamente al tanto de las opciones previstas en

las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV). Asimismo tenían conocimiento de los acontecimientos ocurridos en las islas vecinas del Caribe, así como de las nuevas medidas recientemente adoptadas en algunas de ellas.

39. El representante del Irán manifestó que quisiera preguntar al representante de los Estados Unidos qué disposiciones se habían tomado encaminadas a la libre determinación, y si se daría a los habitantes la posibilidad de ejercer su derecho a la libre determinación en un futuro cercano. Recordó que en la sesión anterior, el representante de Italia había pedido información acerca de los programas electorales de los diversos partidos políticos del Territorio. Quisiera saber, en especial, si cada partido asumía una posición particular respecto del porvenir del Territorio. Si era así, preguntaba si podría decirse cuáles de las diversas posibilidades en cuanto al futuro estatuto del Territorio gozaban de mayor apoyo entre los habitantes.

40. El representante de Bulgaria recordó que, en su último informe a la Asamblea General (A/6300/Add.10), el Comité Especial de los Veinticuatro había declarado que las disposiciones de la resolución 1514 (XV) eran plenamente aplicables a los pequeños territorios coloniales, y había formulado varias conclusiones y recomendaciones relativas a los territorios que figuraban en el programa del Subcomité. Por su resolución 2232 (XXI), la Asamblea General había reafirmado, por otra parte, el derecho de los pueblos de esos territorios a la libre determinación y a la independencia, y había encarecido a las Potencias administradoras que pusiesen en práctica sin demora las resoluciones pertinentes. Era de lamentar, por lo tanto, que una vez más, debido a la actitud adoptada por la Potencia administradora respecto al envío de una misión visitadora y a la ausencia de peticionarios, el Subcomité tuviese que examinar la situación de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos basándose en un solo documento de trabajo preparado por la Secretaría. La delegación búlgara opinaba que el Subcomité debería señalar a la atención del Comité Especial y de la Asamblea esta situación anormal y procurarse todos los datos disponibles, especialmente los publicados en la prensa internacional. Por otro lado, cabía esperar que la Potencia administradora proporcionase sin dilación la información que se le había pedido sobre los partidos políticos de las Islas Vírgenes y sobre los debates del Congreso norteamericano en relación con el proyecto de ley sobre la elección del gobernador y las enmiendas respectivas.

41. Por más que el representante de la Potencia administradora hubiese declarado que se habían realizado progresos en las esferas política, social y económica, no era menos verdad que no siempre se aplicaban en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

42. Su delegación no rechazaba ninguna decisión que pudiera adoptar el pueblo del Territorio con respecto a su futuro. Lo fundamental era dar al pueblo completa libertad para tomar su decisión y crear condiciones económicas, sociales y políticas apropiadas para que su ejercicio de la libre determinación fuese genuino y sin restricción alguna. Sin embargo, era lamentable no sólo que las propuestas de la Convención constitucional de 1964 encaminadas a incrementar la participación de la población en la administración de los asuntos locales, no hubiesen modificado en nada las relaciones fundamentales entre el Territorio y la Potencia administradora, sino también que se hubiese aplazado la aplicación de las medidas propuestas. Después de más de dos años, las propuestas de la Convención Constitucional relativas a la elección del gobierno y a la supresión del derecho a veto distaban mucho todavía de haberse resuelto. En tales circunstancias, urgía que el Comité Especial reafirmase sus recomendaciones precedentes y obtuviese finalmente su cumplimiento por la Potencia administradora.

43. Si importaba conocer cuál era el ingreso medio por habitante en el Territorio, convendría también que la delegación de los Estados Unidos puntualizase cómo se distribuían en realidad los ingresos entre los diferentes medios sociales.

44. Para terminar, la delegación búlgara estimaba que el Comité Especial, en vez de tomar nota pasivamente de las decisiones adoptadas por las Potencias administradoras, debía procurar encontrar todos los medios que permitiesen a los pueblos de los territorios coloniales ejercer su derecho a la libre determinación, con libertad y conocimiento plenos de las diferentes posibilidades entre las que podían elegir, y hacer avanzar la descolonización. En lo tocante a la Potencia administradora, cabía esperar que reconocería plenamente las atribuciones de las Naciones Unidas y les prestaría toda su cooperación para la aplicación de la resolución 1514 (XV).

45. El representante de los Estados Unidos no admitía que pudiera decirse que prácticamente no había cambiado la situación del Territorio desde la última vez

que la había examinado el Comité. Los ingresos del Gobierno local para el ejercicio de 1966 (37.500.000 dólares para una población de menos de 50.000 habitantes) eran índice de la actividad económica del Territorio. Esto representó un aumento de 8.500.000 dólares con respecto al ejercicio fiscal de 1965. No dejaba tampoco de tener interés señalar que estaban en construcción 3.000 viviendas baratas y 113 aulas, y que pasaban de mil los alumnos que cursaban estudios superiores en el Colegio universario de las Islas Vírgenes, así como que se habían invertido varios millones de dólares en la construcción de hospitales.

46. Lamentablemente, era imposible facilitar datos precisos sobre la distribución de los ingresos en el Territorio. Tal tipo de estadísticas no existía en muchas otras regiones, incluso en ciertas partes de los Estados Unidos de América.

47. En cuanto a las recomendaciones de la Convención constitucional, hacía apenas un año - y no dos - que el Congreso se ocupaba de ese asunto. Era verdad que los debates preliminares habían fracasado debido a las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Representantes respecto a la duración del mandato del gobernador y a las disposiciones sobre su revocación, pero convenía añadir que el Gobierno de los Estados Unidos de América, deseoso de llegar a una solución satisfactoria, había sometido de nuevo la cuestión al Congreso. La delegación estadounidense estudiaba en estos momentos los proyectos de ley que habían sido propuestos lo mismo por la Cámara de Representantes que por el Senado, y daría al Subcomité información precisa a este respecto en una próxima sesión. En cualquier caso, el representante señalaba a la atención de los miembros de la Comisión el documento de trabajo (véase el documento A/6700/Add.14 (Parte I), párr. 40), donde se daba cuenta bastante sucinta, pero muy clara, de la situación al respecto.

48. El representante del Uruguay declaró que, debido al programa tan recargado del Comité Especial y de otros órganos de las Naciones Unidas en que participaba su delegación, como también a la necesidad de buscar, atendida la situación especial de los pequeños territorios, una doctrina que les fuese aplicable en lo referente al cumplimiento de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, su delegación desearía poder preparar sin premura una exposición documentada y bien meditada.

49. El representante de Italia estimaba, como el representante del Uruguay, que la cuestión de los métodos que debería emplear el Subcomité para el estudio de los pequeños territorios merecía ponderado análisis. Sería preferible, ante todo,

definir una doctrina aplicable al conjunto de los pequeños territorios que figuraban en el programa del Subcomité y determinar luego cómo debían aplicarse a cada uno de ellos las resoluciones de la Asamblea General, cosa ésta necesaria pues el mandato del Comité Especial se concibió claramente a los efectos de la descolonización de territorios más vastos, viables tanto política como económicamente y cuya población reclamaba la independencia.

50. En cuanto a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la delegación italiana observaba con satisfacción que recientemente se habían hecho apreciables progresos hacia su autonomía. La población del Territorio había tenido plenas posibilidades, en ocasión de la campaña electoral que precedió a las elecciones de noviembre de 1966, de expresar sus puntos de vista sobre el futuro de las Islas, y la nueva asamblea legislativa, si bien tenía una competencia bastante limitada, tenía completa libertad de acción para examinar cualquier problema político. En realidad, la población propendería más bien a sacar el mejor partido posible en los planos político, económico, etc., de la situación actual, que era alentadora si se consideraba principalmente el incremento del ingreso anual por habitante (de 1.543 dólares en 1963 a más de 2.000 dólares en 1965).

51. Así, pues, el Subcomité debería recomendar a la Potencia administradora que siguiese haciendo avanzar al Territorio hacia la autonomía completa y que procurara que se votase lo antes posible el proyecto de ley relativo a la elección de un gobernador. Debería asimismo pedir al Gobierno de los Estados Unidos de América no ocultar a la población del Territorio que podía optar entre varias soluciones en lo referente a su futuro político, y no presionar a la población para inducirla a optar por una solución con preferencia a otra. Por último, había que invitar a la Potencia administradora a que diese a conocer la labor de las Naciones Unidas en materia de descolonización y a que facilitase los contactos entre la Organización y los representantes electos de las Islas, si éstos así lo deseaban.

52. En los territorios que, como las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, disfrutaban ya de gran libertad política, cabía afirmar que se ejercitaba la libre determinación siempre que allí se celebraban elecciones libres. Era posible también afirmar que un acto de libre determinación no era válido si el juego no era limpio. Este problema debía ser examinado más a fondo por el Subcomité a propósito no sólo de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, sino también de todos los demás territorios que figuraban en el programa.

53. El representante del Irán, en relación con las observaciones del representante del Uruguay, declaró que, a su juicio, la doctrina que debía colegirse había de

fundarse en los principios de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, que eran aplicables a todos los territorios examinados por el Comité Especial. En cuanto a los pequeños territorios, el Subcomité podía también inspirarse en otras resoluciones de la Asamblea General y, subsidiariamente, en las opiniones pertinentes expresadas por diversos órganos de las Naciones Unidas. El representante del Irán subrayó, no obstante, que el derecho a la libre determinación no podía ser puesto en tela de juicio, y constituía el pilar de esa doctrina; en lo referente en particular a los pequeños territorios, tal derecho había de ser ejercido con absoluta libertad. La Asamblea General había indicado en varias resoluciones que, para que se cumpliese esa condición, era imprescindible la presencia de las Naciones Unidas. El Subcomité tenía por cometido, al propio tiempo que velaba por la aplicación de esos principios básicos, observar los progresos realizados y pedir su aceleración cuando le pareciesen demasiado lentos.

54. El representante de Bulgaria coincidía también en que el Comité Especial y sus Subcomités debían basar sus trabajos en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y, al propio tiempo, inspirarse en resoluciones ulteriores como, en este caso, las resoluciones 2189 (XXI) y 2232 (XXI). Todos los miembros del Subcomité habían votado a favor de estas últimas, lo cual no significaba que hubiesen de renunciar a discutir la forma como se aplicaban.

55. El representante de Italia advirtió que se había informado en fuentes independientes antes de hacer la declaración que acaba de oír el Subcomité.

56. En lo referente al mandato del Comité Especial y sus Subcomités, en general, éste evidentemente se fundaba en la resolución 1514 (XV), en la que se dispone concretamente que: "en los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios". Ahora bien, ¿significaba esto que hubiese que imponer la transmisión de todos los poderes a los pueblos de que se trate incluso cuando éstos no se consideraban todavía preparados para obtener la independencia y preferían esperar? A juicio del representante de Italia, la descolonización no era únicamente un expediente político para todos los territorios; era también, y ante todo, una cuestión de conciencia.

57. El representante del Irán estimaba por su parte que todos los pueblos aspiraban a la libertad y, que en el caso de los territorios pequeños, esa libertad consistía en elegir el estatuto que mejor les conviniese, sin presión exterior.

Correspondía, pues, al Subcomité y al Comité Especial, dentro del marco de las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de la Asamblea General, recomendar, de conformidad con la resolución 2189 (XXI), los medios más adecuados y las medidas que conviniese adoptar para que las poblaciones de esos territorios pudiesen ejercer plenamente su derecho a la libre determinación y a la independencia.

58. El representante del Uruguay opinó que la principal dificultad con que tropezaba el Comité Especial y sus Subcomités consistía en situar el problema que planteaba cada territorio colonial en su contexto y en buscar las resoluciones que le fuesen aplicables, habida cuenta del espíritu en que se inspiraban. Los problemas diferentes requerían indudablemente soluciones diferentes y por eso, después de adoptar la resolución 1514 (XV), la Asamblea General la había completado con la resolución 1541 (XV), que algunos rechazaban, pero que abría inmensas posibilidades a los pueblos coloniales, especialmente a los de los pequeños territorios, en cuanto al ejercicio de su derecho a la libre determinación.

59. El Comité Especial no era un tribunal, sino un órgano de las Naciones Unidas que tenía como misión resolver el problema de la descolonización en paz y armonía. Era ésta una tarea delicada que no debía realizarse con precipitación si se deseaba que los nuevos Estados fuesen viables y que tuviesen instituciones democráticas garantes de su libertad. Los problemas que planteaba la descolonización eran tanto más complejos cuanto más pequeños eran los territorios, y a menudo eran comprensibles las vacilaciones de las Potencias administradoras. Por ello, el representante estimaba que sería útil un debate esclarecido y ponderado sobre las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

60. El representante de Venezuela reconocía que se habían logrado algunos progresos en las Islas Vírgenes, especialmente en lo referente a la ampliación de la composición del Cuerpo Legislativo, pero que la demora producida en el examen de las propuestas relativas a la elección del gobernador no permitía expresar una complacencia sin reservas.

61. También se habían logrado progresos en el orden económico. El nivel de ingresos per capita era realmente elevado y las Islas Vírgenes disfrutaban de una situación económica y social de las más favorables de la región. No se sabía cómo se distribuía este ingreso entre la población, pero como la cifra indicada sólo era una media, holgaba decir que podían existir disparidades entre las diferentes categorías de habitantes. La delegación venezolana había observado con satisfacción



los esfuerzos realizados para dotar al Territorio de una base industrial y agrícola estable para favorecer que la estructura económica de las Islas adquiriera características similares y que el régimen de su tenencia sea favorable a la población dándole alto porcentaje en la administración de sus propios recursos. Sin embargo, debía reducirse prontamente el volumen de las importaciones, que parecía anormalmente elevado, aun teniendo en cuenta las condiciones propias de una economía insular.

62. Se habían logrado igualmente notables progresos en el campo sanitario y en la esfera educacional; no obstante, sería conveniente que el Subcomité estuviese mejor informado acerca de la orientación de la educación, especialmente de la secundaria, con el fin de determinar si el sistema era adecuado a las necesidades del desarrollo económico y social del Territorio.

63. Para concluir, el representante de Venezuela expresó la esperanza de que la Potencia administradora, respondiendo al pedido de la Asamblea General [Resolución 2232 (XXI)] ofreciese toda su cooperación y su asistencia al Subcomité para permitirle el buen cumplimiento de su mandato.

64. El representante del Uruguay dijo que, en vista del poco tiempo de que disponía el Subcomité, examinaría sólo ciertos aspectos de la situación de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En 1966 el Comité Especial había tomado nota de las informaciones transmitidas por la Potencia administradora sobre el tema de la Convención Constitucional que se había reunido de diciembre de 1964 a febrero de 1965 y que había aprobado un proyecto de ley donde se preveía una mayor autonomía para el Territorio. Igualmente había tomado nota de que la Potencia administradora sólo había llevado a efecto una de las propuestas formuladas por la Convención, ya que la referente a la elección del Gobernador no tenía aún fuerza de ley. Por otra parte, en su resolución 2232 (XXI) relativa a veinticinco territorios, entre ellos las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la Asamblea General había invitado a las Potencias administradoras a aplicar sin demora sus resoluciones precedentes. El Subcomité debía examinar la situación del Territorio en función de estos tres puntos mencionados en el informe, para juzgar si a partir de 1966 se había obtenido progreso en la dirección indicada por la Carta de las Naciones Unidas y por la resolución 1514 (XV) de la Asamblea. Esta última resolución era ciertamente el texto básico que convenía seguir, pero existían otras resoluciones pertinentes, sobre todo la resolución 1541 (XV) que no lo anulaban sino que lo completaban. En efecto, la resolución 1514 (XV) enunciaba como principio fundamental la independencia absoluta, pero cuando, como consecuencia de la dimensión o de la situación económica de un

territorio, era imposible alcanzar este ideal se debía, de acuerdo con el espíritu de la resolución 1541 (XV), buscar otra fórmula, que podía ser la libre asociación con un Estado independiente, la integración con un Estado independiente sobre la base de una completa igualdad o la federación con otros Estados pequeños.

65. Si la descolonización de las Islas Vírgenes progresaba lentamente, no se debía a la indiferencia o a la mala voluntad de la Potencia administradora. Del informe se desprendía, en efecto, que aquélla ejercía conscientemente sus responsabilidades con respecto al Territorio. Se habían logrado progresos en el orden económico y el social, así como en el sector de la educación. Estos progresos eran menos notables en el campo político; era cierto que se había instaurado el sufragio universal, pero no se había registrado progreso en lo relativo a las instituciones porque el Congreso de los Estados Unidos todavía no había adoptado una decisión. El representante del Uruguay observó al respecto que la complejidad del sistema democrático era la causa del retraso en la adopción de las decisiones legislativas.

66. La delegación uruguaya se asociaba a las sugerencias del representante de Italia que creía que para ayudar a la Potencia administradora a aplicar la resolución 1514 (XV), el Subcomité podría recomendarle que aprobase, rápidamente el proyecto de ley relativo a la elección del Gobernador y que informase a la población acerca de las diversas opciones que se le ofrecían, dándole todas las aclaraciones necesarias para que hiciese una elección prudente. Según había sugerido el representante de Italia, convenía solicitar a la Potencia administradora que no presionase a la población para inducirle a elegir una solución antes que otra y que le hiciese conocer las opiniones de las Naciones Unidas.

67. El Gobierno uruguayo era partidario de la descolonización, pero teniendo presentes las realidades económicas y políticas para el beneficio, bien entendido, de los pueblos interesados. No se trataba tanto de descolonizar cada año el mayor número posible de territorios, como de ayudar a fundar nuevos Estados viables, capaces, gracias a su situación económica y a su conciencia política, de disfrutar de la libertad. El Comité Especial debería, por consiguiente, solicitar a la Potencia administradora que vigilase el desarrollo económico del Territorio, que despertase la conciencia política de la población y que hiciese conocer a esta última las opciones que se le ofrecían, a fin de que pudiese elegir con pleno conocimiento de causa y con absoluta libertad.

68. El representante de la Costa de Marfil recordó que su delegación había tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión de las Islas Vírgenes con ocasión del examen de las resoluciones 2069 (XX) y 2232 (XXI) de la Asamblea General. La delegación marfilense reafirmaba su apoyo a los principios enunciados en estas resoluciones, inspirados en la resolución 1514 (XV) que, en su opinión, era totalmente aplicable a los territorios de que se ocupaba actualmente el Subcomité. El representante de la Costa de Marfil agradecía al representante de los Estados Unidos las informaciones que había suministrado a propósito de los esfuerzos realizados por su Gobierno para acelerar el desarrollo económico, social y político de las Islas Vírgenes; sin embargo, era indispensable que, de acuerdo con el párrafo 5 de la resolución 2232 (XXI), el Comité se trasladase a las Islas Vírgenes para obtener directamente, con la plena cooperación de los Estados Unidos, informes de primera mano acerca de la situación en el Territorio y de las aspiraciones de la población. El representante de la Costa de Marfil expresó la esperanza de que la Potencia administradora hiciese lo necesario para que esta población pudiese pronunciarse con plena libertad acerca de su porvenir político.

69. El representante de los Estados Unidos manifestó que, antes de satisfacer algunas de las solicitudes de aclaración y de información adicional formuladas por los miembros del Subcomité, deseaba señalar que su Gobierno no reunía información sobre las actividades políticas ni en el territorio continental de los Estados Unidos ni en el Territorio de que se trataba. Por lo tanto, muchos de los datos que presentaría al Subcomité serían o de carácter general o asequibles a todos. El representante de Bulgaria había afirmado que la Potencia administradora era la única fuente de información sobre el Territorio. A decir verdad, los seis periódicos y otros medios de información de las Islas Vírgenes proporcionaban un volumen apreciable de información fácilmente asequible sobre los asuntos del Territorio.

70. En cuanto a los partidos políticos, a sus programas electorales y a sus objetivos, el representante de los Estados Unidos declaró que en los párrafos 31 a 33 del documento de trabajo preparado por la Secretaría (A/6700/Add.14 (Parte I)) se hacía una descripción fidedigna de la estructura de los partidos en las Islas Vírgenes y que la información que se había dado acerca de la reciente campaña electoral era correcta. Sin embargo, en cuanto el citado representante sabía, no se había presentado ninguna denuncia de irregularidades después de las elecciones celebradas el 8 de noviembre de 1966. Se había efectuado un recuento, pero éste no había modificado los resultados.

71. Uno de los elementos primordiales de la vida política de las Islas Vírgenes era la preponderancia del registro de los demócratas en relación con los republicanos. El Partido Demócrata se había dividido en dos "bandos" y las principales cuestiones políticas eran posiblemente resultado de esa escisión dentro del partido. Sin embargo, las cuestiones controvertidas se limitaban a problemas básicamente locales porque ambas facciones eran parte del Partido Demócrata activo en el territorio continental de los Estados Unidos, y aprobaban el programa que este partido adoptaba en su convención nacional. El Territorio tenía voz y voto en las convenciones políticas nacionales. El Partido Republicano del Territorio también estaba identificado con el Partido Republicano de los Estados Unidos. Las cuestiones electorales en las Islas Vírgenes reflejaban en cierta medida las diversas posiciones de los principales partidos de los Estados Unidos. Además, durante la campaña electoral más reciente se había discutido una gran variedad de problemas locales, tales como la competencia por la inversión de los fondos públicos en carreteras y otros proyectos. Otra cuestión se refería a la ley sobre el juramento de lealtad que exigía a los candidatos a las elecciones primarias suscribir un voto de lealtad a su partido político. Como la comunidad de las Islas Vírgenes era pequeña y el Gobierno estaba en contacto con los electores, las elecciones a menudo giraban en torno de la personalidad, la reputación y la idoneidad de los candidatos y no de las cuestiones que se planteaban.

72. El estatuto futuro del Territorio no había sido una cuestión política en la campaña. Sin embargo, un indicador reciente y fidedigno de los puntos de vista de los habitantes sobre la cuestión era el informe sobre la convención constitucional de las Islas Vírgenes celebrada en 1964, que reflejaba el deseo de los isleños de progreso en el gobierno propio local en línea paralela a la creciente participación en la vida política de los Estados Unidos.

73. Los miembros del Subcomité estarían de acuerdo en que un requisito de la libre determinación era la existencia de instituciones democráticas a través de las cuales pudiese expresarse la voluntad popular. En el caso de las Islas Vírgenes, esas instituciones estaban en una etapa relativamente desarrollada, descollando entre ellas el cuerpo legislativo, cuyos miembros eran elegidos sobre la base del sufragio universal de los adultos y en el que se había reorganizado recientemente la representación electoral para reflejar con más exactitud la

/...

población de las diversas regiones. A este respecto, el representante de los Estados Unidos advirtió que más del 80% de los electores empadronados habían votado en las elecciones de noviembre de 1966. El cuerpo legislativo estaba investido de amplias facultades. Estaba en libertad de aprobar cualquier ley que no fuese incompatible con las leyes de los Estados Unidos aplicables al Territorio. En los últimos años, el Congreso norteamericano no había aprobado ninguna medida en relación con las cuestiones locales, y había limitado la legislación aplicable al Territorio al tipo de leyes que se aplicaban a todos los Estados de la Unión, tales como la reglamentación del comercio interestatal. El cuerpo legislativo podía asimismo hacer conocer su voluntad aprobando resoluciones sobre cualquier tema, incluso el estatuto futuro del Territorio, y el hecho de que disfrutara de completa autoridad para presupuestar los ingresos locales era prueba de su autonomía.

74. Se estaban tomando medidas adicionales encaminadas al pleno ejercicio de la libre determinación. El proyecto de ley sobre la elección de gobernador se discutía actualmente en el Congreso y contaba con el apoyo sin reservas del Poder Ejecutivo. En cuanto a las discrepancias entre las versiones del proyecto de ley de la Cámara de Representantes y del Senado, el representante de los Estados Unidos dijo que la exposición que figuraba en el párrafo 26 del documento de trabajo era correcta y que, entre algunas otras discrepancias, cabía citar el día del año en que el gobernador tomaría posesión de su cargo y la fecha en que dicha ley entraría en vigor.

75. Se ofrecía formación profesional en doce disciplinas al nivel de segunda enseñanza. Desde la última vez que su delegación había examinado esta cuestión, la Oficina de Empleo y el Departamento de Trabajo de las Islas Vírgenes habían elaborado un programa en virtud de la ley Manpower Development Act por el que los estudiantes interesados en formación profesional no ofrecida en el Territorio podían obtenerla fuera de éste.

76. La situación en cuanto a la propiedad de la tierra en el Territorio era análoga a la existente en los Estados Unidos. Casi toda la tierra productiva era propiedad de pequeños terratenientes, y las únicas parcelas de gran extensión estaban en la zona desértica de Santa Cruz y en el Parque Nacional de San Juan.

77. El representante de Bulgaria expresó la esperanza de que la Potencia administradora pudiese en algún momento dar a conocer al Subcomité su posición respecto a las misiones visitadoras.

/...

78. Deseaba reafirmar una vez más la postura de la delegación de Bulgaria acerca de la cuestión de los pequeños territorios coloniales y de los territorios coloniales en general, postura que se basaba en las resoluciones de la Asamblea General, las cuales reflejaban la política anticolonialista de las Naciones Unidas. La delegación de Bulgaria no rechazaba a priori ninguna solución, siempre que no estuviese excluida por la resolución 1514 (XV), que pudiesen adoptar los pueblos coloniales en proceso de emancipación política y descolonización. Lo importante era que los pueblos coloniales tuviesen plena libertad para ejercer su derecho a la libre determinación, y que se creasen las condiciones políticas, económicas y sociales necesarias para permitirles hacerlo. El Comité Especial debía guiarse por las decisiones de la Asamblea General, incluida la resolución 2232 (XXI) relativa a los territorios pequeños.

#### B. Aprobación del informe

79. El Subcomité examinó sus conclusiones y recomendaciones relativas al Territorio en sus sesiones 70a. a 72a. celebradas el 14, 18 y 19 de abril de 1967, respectivamente, y las aprobó de común acuerdo, con las reservas siguientes:

80. El representante de Bulgaria expresó vigorosamente las reservas de la delegación de su país por la supresión de las palabras "cierto grado de" entre las palabras "pese a" y "progreso" en el subpárrafo 5 de las conclusiones y recomendaciones.

81. Expresó además sus reservas por el subpárrafo 8 del texto aprobado. Ya en ocasiones anteriores la delegación de su país había tenido reservas en relación con recomendaciones similares. A su juicio, en la situación actual de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la presencia de las Naciones Unidas no serviría ningún propósito útil y bien podría restarle prestigio a la Organización en el Territorio. El representante de Bulgaria no desaprobaba la idea de una presencia de las Naciones Unidas, pues le parecía acertado que se interesaran profundamente y desempeñaran un papel activo en el proceso de la descolonización, mas esa presencia debiera manifestarse antes que nada mediante una misión visitadora que estaría en condiciones de informar sobre la situación. Más adelante podría considerarse alguna otra forma de presencia de las Naciones Unidas.

C. Conclusiones y recomendaciones

82. El Subcomité recomienda al Comité Especial que apruebe las conclusiones y recomendaciones siguientes:

- 1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones sobre el Territorio que aprobó en 1966, confirmadas por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.
- 2) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica cabalmente al Territorio.
- 3) Reconoce que la exigüidad del Territorio y su escasa población plantean problemas particulares que requieren especial atención.
- 4) Toma nota de que en el Territorio no se ha registrado ningún progreso constitucional importante desde su último examen del asunto.
- 5) Deplora además que, no obstante haber realizado progresos en materia política, la Potencia administradora no haya aplicado mejor las disposiciones de la resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General con respecto a ese Territorio.
- 6) Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libre determinación y subraya una vez más que la Potencia administradora debe permitir al pueblo expresar su voluntad con respecto a la futura situación del Territorio con total libertad y sin restricción alguna.
- 7) Invita también a la Potencia administradora a promover la discusión abierta, libre y pública de las posibles opciones a que ese pueblo pueda acogerse para conseguir los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; y a cuidar de que el pueblo del Territorio ejerza su derecho a la libre determinación con pleno conocimiento de tales opciones.
- 8) Recordando el párrafo 6 de la resolución 2232 (XXI) del 20 de diciembre de 1966 que dice que "las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación", reitera su convicción de que una presencia de las Naciones Unidas durante los procedimientos de ejercicio del derecho de libre determinación será esencial para garantizar el ejercicio, por el pueblo del Territorio, de tal derecho con toda libertad y sin restricción alguna, y con pleno conocimiento de las posibles opciones a que puede acogerse.
- 9) Encarece a la Potencia administradora que permita el envío de una misión visitadora de las Naciones Unidas al Territorio y que ofrezca a tal misión toda su cooperación y asistencia.

### III. ISLAS VIRGENES BRITANICAS

#### A. Examen por el Subcomité

##### Introducción

83. El Subcomité examinó la cuestión del Territorio de las Islas Vírgenes Británicas en sus 73a. a 78a. sesiones, entre el 20 de abril y el 16 de mayo de 1967.

84. El Subcomité tuvo ante sí el documento de trabajo preparado por la Secretaría (véase el documento A/6700/Add.14 (Parte I), párrs. 66 a 113).

85. Por invitación del Presidente, el representante del Reino Unido, como Potencia administradora, participó en los trabajos del Subcomité sobre este Territorio.

##### Declaraciones generales

86. El representante del Reino Unido dijo que se referiría únicamente a las Islas Vírgenes Británicas porque, por una parte, sólo se había enterado muy recientemente de que Montserrat figuraba en el programa de la sesión, y por la otra, no se había producido ningún hecho importante en ese Territorio desde la última vez que el Subcomité se había ocupado de él.

87. En las Islas Vírgenes Británicas se habían hecho recientemente progresos muy considerables. En el plano constitucional se habían adoptado decisiones importantes durante la Conferencia Constitucional reunida en Londres del 4 al 10 de octubre de 1966. Antes de referirse a esas decisiones, que estaban resumidas en el documento de trabajo sobre las Islas Vírgenes Británicas preparado por la Secretaría, recordó que las Islas eran un Territorio muy pequeño (no llegaba a las 60 millas cuadradas de superficie y en 1965 tenía 8.619 habitantes), con una experiencia de larga data en la representación democrática; ya en 1774 tenía un gobierno y una asamblea constitucionales elegidos. En 1950 se habían organizado elecciones generales. En 1954, poco antes de que se disolviera la Federación de las Islas Leeward, de las que formaba parte este Territorio, se le había dado una Constitución que había sido modificada en 1959.



88. La Conferencia Constitucional de 1966 había tenido por objeto poner al día esa Constitución. Las decisiones adoptadas en la Conferencia se basaban en gran medida en el informe de la Sra. Proudfoot, que en 1965 había sido designada Comisionada Constitucional de las Islas Vírgenes Británicas para que, habida cuenta de los deseos de la población, formulara recomendaciones sobre las modificaciones constitucionales que pudieran juzgarse necesarias. Su informe había sido preparado después de celebrar amplias consultas con todos los sectores de opinión del Territorio.

89. En la Conferencia se había acordado por unanimidad que el Consejo Legislativo comprendería un "speaker" que no sería escogido entre sus miembros; dos miembros ex-officio (el Attorney General y el Secretario de Hacienda), un miembro designado que nombraría el Administrador previa consulta con el Ministro Principal y siete miembros elegidos. El "speaker" sería elegido por mayoría simple de todos los miembros para todo el tiempo que durara el Consejo y sólo votaría en caso de empate. Todos los demás miembros del Consejo participarían en las votaciones, pero sólo se tomarían en cuenta los votos de los miembros elegidos para decidir si una moción de censura contra el Gobierno sería aprobada o rechazada. Los miembros elegidos representarían siete circunscripciones electorales de población aproximadamente igual, cuyos límites se fijarían por recomendación de un Comisionado ajeno al Territorio nombrado por el Administrador. El Consejo Legislativo se reuniría por lo menos una vez cada tres meses y la duración de su mandato sería aumentada, de tres a cuatro años. El Administrador podría prorrogar ese mandato o disolver el Consejo previa consulta con el Ministro Principal.

90. Se acordó que el Consejo Ejecutivo se compondría de dos miembros ex officio (el Attorney General y el Secretario de Hacienda) y de tres Ministros, uno de los cuales sería el Ministro Principal, a quienes se designarían entre los miembros elegidos del Consejo Legislativo. Se había propuesto que el Ministro Principal fuese elegido por sufragio directo y separado, pero la Conferencia había decidido finalmente que sería preferible seguir un sistema comparable al del Reino Unido: el Administrador designaría al Ministro Principal, por ser el miembro elegido en mejor situación de obtener el apoyo de la mayoría de los miembros elegidos del Consejo Legislativo, y en caso de duda sobre si contaba con el apoyo de esa mayoría, estos últimos indicarían su preferencia mediante votación. Los otros dos Ministros serían designados por el Administrador, previa consulta con el Ministro Principal.

/...

91. El Administrador asumiría ciertas responsabilidades especiales: defensa y la seguridad interna, las relaciones exteriores, las condiciones de servicio de los funcionarios públicos, la administración judicial y la hacienda. Tendría facultades legislativas reservadas, aunque únicamente con respecto a sus responsabilidades especiales, pero antes de hacer uso de aquellas facultades, debería consultar al Consejo Ejecutivo. En caso de desacuerdo, informaría al Secretario de Estado y procuraría obtener su aprobación previa.

92. La Constitución habría de prever también el nombramiento de una Comisión de Administración Pública, compuesta de tres miembros designados por el Administrador por períodos de hasta tres años. El Administrador debería consultar a esta Comisión sobre todas las cuestiones relativas a los funcionarios. Asimismo, la Conferencia había convenido en aprobar la sugerencia de que la competencia de la Corte Suprema de los Estados Asociados de las Indias Occidentales se extendiera a las Islas Vírgenes Británicas.

93. Conforme a la decisión de la Conferencia, a fines de 1966 se había designado a un ex juez de Granada Comisionado de las circunscripciones electorales, quien había presentado al Consejo Legislativo recomendaciones que habían sido aprobadas por éste. El 14 de abril de 1967 se habían celebrado elecciones en las circunscripciones así delimitadas para cubrir los siete escaños correspondientes a los miembros elegidos del Consejo Legislativo, de los cuales, cuatro habían sido ganados por el United Party, dos por el Democratic Party y uno por el People's own Party. Cinco de los elegidos habían sido miembros del Consejo saliente. El porcentaje de votantes había sido elevado, y no había habido que deplorar ningún incidente. Se designaría, según el procedimiento previsto, a un Ministro Principal, probablemente un miembro del Partido de la mayoría, o sea, el United Party.

94. La economía del Territorio estaba estrechamente vinculada a la de las Islas Vírgenes Americanas y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La rápida expansión económica de esos territorios había afectado de distintas maneras a la economía de las Islas Vírgenes Británicas, particularmente porque atraía la mano de obra local y provocaba un aumento de salarios. La ganadería, que había sido siempre la actividad económica esencial y seguía siendo importante estaba decayendo desde hacía algunos años, mientras que el turismo adquiría mayor importancia. Los fondos que el Gobierno británico proporcionaba al Territorio, entre ellos los

subsidios del Colonial Development and Welfare Fund, eran dedicados principalmente a proyectos destinados a la expansión de la agricultura, las comunicaciones, el comercio y el turismo.

95. La enseñanza era obligatoria hasta los 15 años de edad, Para una población escolar total de 2.536 alumnos, había 16 escuelas primarias y una escuela secundaria públicas, y tres escuelas privadas, una de ellas subvencionada. En la esfera de la salud pública, el Territorio contaba con un hospital y ocho dispensarios. En cuanto a la ayuda concedida por su Gobierno, en 1966 se habían proporcionado cifras recientes sobre su cuantía al Subcomité.

96. En conclusión, el representante del Reino Unido estimó que los rápidos progresos hechos en las Islas Vírgenes Británicas, - sobre todo en el plano constitucional, con la entrada en vigor de la nueva Constitución -, daban a los propios habitantes la mayor parte de la obligación de gobernarse y decidir su futuro.

97. El representante de la Costa de Marfil y el representante de Italia solicitaron informaciones más precisas sobre los partidos políticos a que se había referido el representante del Reino Unido, y en particular sobre la forma en que éstos concebían el porvenir del Territorio.

98. El representante de Madagascar pidió que se le proporcionaran detalles más amplios sobre las funciones del Consejo Legislativo que acababa de ser elegido, y sobre sus futuras relaciones con el Gobierno. Preguntó asimismo al representante de la Potencia administradora si existía en el Territorio alguna escuela profesional, y si, al acabar sus estudios, los alumnos de secundaria tenían la posibilidad de seguir estudios superiores. En caso afirmativo, dijo que quisiera saber cuantos jóvenes del Territorio cursaban estudios superiores.

99. El representante de Bulgaria preguntó qué pensaba la Potencia administradora sobre el envío de una misión visitadora al Territorio.

100. El representante del Uruguay dijo que quisiera saber cuáles eran las tendencias de la opinión pública y cuál era la actitud de los partidos políticos de las Islas Vírgenes Británicas en lo que se refería al futuro estatuto político de los territorios. Con referencia a los párrafos 66 y 141 del documento de trabajo de la Secretaría (A/6700/Add.14 (Parte I)), el orador preguntó si el Territorio había pensado en la posibilidad de formar una especie de federación con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos o con otros territorios de la región.

101. El representante del Reino Unido remitió a los representantes de Italia y del Uruguay al párrafo 138 del informe del Subcomité (A/6300/10, anexo), en el que se decía que los habitantes de las Islas Vírgenes Británicas no había expresado interés alguno en formar parte de una federación con las Islas Leeward y Windward. Periódicamente se había estudiado la posibilidad de una integración del Territorio con las vecinas Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Como en todas partes, el Gobierno británico tomaría en cuenta los deseos de la población. La Conferencia Constitucional de Londres se había preocupado sobre todo del porvenir inmediato del Territorio, y el principal cuidado de los representantes elegidos en las últimas elecciones, más por sus cualidades personales que por sus diferentes programas políticos, sería ahora administrar los asuntos del país dentro de la estructura del nuevo sistema ministerial. Los partidos políticos no había elaborado todavía políticas claramente diferenciadas, ni formulado ideas sobre el posible estatuto del Territorio.

102. En respuesta a la pregunta del representante de Madagascar, dijo que el Consejo Legislativo de las Islas Vírgenes Británicas legislaría sobre todas las cuestiones de su competencia. El Administrador sólo haría uso de sus poderes reservados en circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando las decisiones del Consejo Legislativo fueran incompatibles con las leyes británicas o con la Constitución del Territorio o con sus propias responsabilidades. Eso era normal en esta fase de la evolución de los territorios británicos hacia la autonomía. Cabía observar a este respecto que las responsabilidades especiales del Administrador habían sido convenidas por la Conferencia Constitucional. Por otra parte, toda decisión de hacer uso de sus poderes reservados, adoptada por el Administrador en contra de la opinión del Consejo Ejecutivo, debía ante todo ser aprobada por el Secretario de Estado. La experiencia en otros territorios sugería que esos conflictos surgían raras veces, si es que llegaban a darse.

103. Agregó que no disponía de datos detallados sobre la formación profesional en el Territorio. En vista de la escasa importancia numérica de la población, había pocos candidatos para la enseñanza pos-secundaria; los que habían terminado su educación secundaria y deseaban proseguir sus estudios, acudían, en muchos casos al Colegio Universitario de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos o a otros establecimientos docentes.

104. Su delegación había comunicado ya al Presidente, en respuesta a su carta relativa al envío de una misión visitadora, sobre la que había preguntado el representante de Bulgaria, que enviaría una segunda respuesta al Subcomité en cuanto recibiera instrucciones de su Gobierno.

105. El representante de Venezuela pidió algunos detalles sobre las facultades del Administrador. ¿En qué casos eran ejercidas y qué ocurría cuando había un conflicto de intereses entre el Administrador y las autoridades locales? Añadió que quisiera saber también si la ayuda financiera británica se destinaba sobre todo al desarrollo del turismo y cuál era el porcentaje de alumnos de segunda enseñanza en relación con el número de alumnos que asistían a la escuela primaria.

106. El representante del Reino Unido dijo que era engañoso hablar de conflicto de intereses entre el Administrador y las autoridades locales. Se trataba de un proceso normal de traspaso de poderes en virtud del cual ciertas cuestiones como la defensa y las relaciones exteriores, continuaban dependiendo de la Potencia administradora mientras el Territorio siguiera siendo no autónomo. El Administrador tenía asimismo facultades especiales en lo que se refería a la seguridad interna, la administración pública, la administración judicial y la hacienda. Pero cabía esperar que, con respecto a la mayoría de los asuntos de gobierno, el Administrador, los ministros y el Consejo Legislativo trabajarían en estrecha cooperación y consulta.

107. En cuanto a la ayuda financiera del Reino Unido, las autoridades locales eran quienes planeaban su distribución entre las diversas esferas de actividad: turismo, agricultura, sanidad, enseñanza, etc. Una vez fijadas estas prioridades, todo proyecto en ellas incluido que se estimaba viable, era automáticamente aprobado. Dijo que no disponía de datos sobre los porcentajes comparados del número de alumnos de segunda enseñanza y de la enseñanza primaria, pero toda persona interesada en ello, podría obtener esos datos de la información transmitida por el Gobierno del Reino Unido conforme al inciso e del Artículo 73 de la Carta.

108. El representante del Irán preguntó por qué había miembros no elegidos en el Consejo Legislativo. Dijo asimismo que quisiera saber si los partidos políticos y la población de las Islas Vírgenes Británicas conocían todas las posibilidades que se les ofrecerían cuando llegara el momento de ejercer su derecho a la libre determinación.

109. El representante del Reino Unido explicó que de los tres miembros no elegidos del Consejo Legislativo, dos eran funcionarios, el Attorney General y el Secretario de Hacienda, y que sus funciones consistían principalmente en participar en las deliberaciones del Consejo sobre las cuestiones relativas a sus respectivas esferas; el tercero, a quien se designaría en consulta con el Ministro Principal, sería sin lugar a dudas una personalidad eminente, escogida por su experiencia y su competencia, o bien una persona que representaría a un sector determinado o a un grupo de intereses de la población, que, por una u otra razón, no hubiese conseguido una representación adecuada en las elecciones.

110. Había tres miembros no elegidos y siete miembros elegidos, y cuando se trataba de un voto de confianza, sólo contaban los votos de estos últimos.

111. La población de las Islas Vírgenes tenía plena conciencia de las posibilidades que se le ofrecían en cuanto a su futuro estatuto político, pero en general se admitía que la tarea inmediata consistía en sentar las bases de su autonomía y en consolidarlas en forma gradual.

112. El representante del Uruguay pidió a la Potencia administradora que proporcionara al Subcomité lo antes posible información sobre las elecciones celebradas en el Territorio el 14 de abril. Esos datos podrían publicarse como adición al documento de trabajo preparado por la Secretaría.

113. El representante de Bulgaria manifestó que su delegación había estudiado cuidadosamente los documentos pertinentes sobre las Islas Vírgenes Británicas y escuchado atentamente la declaración del representante de la Potencia administradora.

114. No era necesario que su delegación reseñara detalladamente la historia de la dominación colonial del Reino Unido en los Territorios del Caribe. En 1964 el asunto había sido discutido plenamente en el Subcomité, sobre la base de la información proporcionada únicamente por la Potencia administradora, llegándose sin embargo a formular conclusiones positivas y valiosas sobre la situación en esos Territorios. Un estudio de los documentos pertinentes había mostrado que la Potencia administradora no sólo no aplicaba las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en el Territorio, sino que procuraba mantener su control sobre él. No se había tomado ninguna medida efectiva para consultar al pueblo del Territorio sobre su condición política futura. En las conclusiones y recomendaciones que había aprobado en 1966

sobre el Territorio, el Comité Especial había reafirmado que la Declaración era cabalmente aplicable al Territorio, y asimismo que el pueblo tenía pleno derecho a la libre determinación, y a ejercerlo en absoluta libertad. Además, había lamentado que la Potencia administradora no hubiera aceptado el envío de una misión visitadora, y había reiterado que tal visita era útil y necesaria. Los miembros del Subcomité sabían perfectamente cuál era la actitud del Reino Unido sobre la cuestión de las misiones visitadoras, tal como acababa de verse una vez más. El Reino Unido había reservado su posición respecto de las conclusiones y recomendaciones que el Comité Especial había aprobado en 1966. Sin embargo, deseaba señalar que esas conclusiones y recomendaciones habían constituido la base del examen que la Cuarta Comisión hiciera de la cuestión, y que la Asamblea General las había hecho suyas en su resolución 2333 (XXI).

115. Aunque la situación de las Islas Vírgenes Británicas tenía mucho en común con la de las demás posesiones Británicas del Caribe, el ritmo del avance constitucional había sido allí mucho más lento que en otras partes. Según lo había señalado la Comisionada Constitucional que había visitado el Territorio en 1966, el limitado sistema representativo establecido por la Constitución de 1773 no había evolucionado desde la partida de las clases blancas dominantes a raíz de la emancipación de los esclavos. En realidad, el poder gubernamental seguía en gran medida en manos del Administrador, que era designado por la Corona. La Comisionada Constitucional había hecho recomendaciones encaminadas a modernizar el Territorio y a adaptarlo un tanto a las condiciones del siglo XX. Sin embargo, la cuestión no era modernizar ni adaptar, sino poner fin a la dominación colonial y aplicar sin dilación la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El propósito de todos los cambios propuestos estribaba en mantener la administración colonial en el Territorio. La situación económica y financiera de éste era análoga a la de los demás territorios del Caribe; en efecto, no era posible equilibrar su presupuesto sin considerables subsidios del Reino Unido. A este respecto, la delegación de Bulgaria reiteraba su opinión de que la Potencia colonial, que había explotado el Territorio durante siglos, debía devolverle lo que había sacado de él a fin de que los habitantes pudieran ejercer su derecho a la libre determinación en plena libertad y no fueran colocados en una situación en la que no les quedase más posibilidad que la de permanecer bajo el control de la Potencia colonial.

116. La delegación búlgara estimaba que el Subcomité debía reafirmar las conclusiones y recomendaciones que había aprobado el año anterior respecto al Territorio; por su parte, agregó que abrigaba la esperanza de que la Potencia administradora comprendería la necesidad de una cooperación más práctica con las Naciones Unidas y aplicaría las diversas resoluciones pertinentes que se habían aprobado.

117. El representante del Reino Unido dijo que se limitaría a completar con algunos datos complementarios la declaración hecha por su delegación en la 74a. sesión del Subcomité.

118. Varias delegaciones habían pedido mayores detalles sobre las elecciones celebradas en el Territorio el 14 de abril de 1967; el documento de trabajo de la Secretaría (A/6700/Add.14 (Parte I), párrs. 91 a 98) que se acababa de distribuir contenía alguna información a este respecto. El representante del Reino Unido agregó que de 3.641 electores inscritos, había votado el 70%; el United Party (UP) había obtenido 1.094 votos, el Democratic Party (DP) 800 y el People's Own Party (POP) 663. Los programas de los partidos seguían las mismas pautas, el United Party (UP) se comprometía a trabajar para mejorar las relaciones con los países vecinos, en particular las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y a mantener buenas relaciones con la madre patria (el Reino Unido).

119. Resultaba interesante comprobar que el informe presentado en junio de 1965 por la Sra. Proudfoot, Comisionada Constitucional de las Islas Vírgenes Británicas, comprendía un memorando del Sr. Stoutt, Ministro Principal, que contenía sugerencias totalmente acordes con las propuestas de la propia Sra. Proudfoot; el Sr. Stoutt había señalado la necesidad de anteponer el desarrollo a las modificaciones constitucionales con miras a fomentar el desarrollo económico, la asistencia proporcionada por el Gobierno británico había aumentado considerablemente desde 1940 y llegaba a cerca de 6.500.000 dólares de los Estados Unidos; de esa cantidad, 1.900.000 dólares habían sido subsidios para el desarrollo. La medida de la asistencia financiera anual proporcionada para el desarrollo era la siguiente: de 1940 a 1949, 14.000 dólares de los Estados Unidos; de 1950 a 1959, 47.000 dólares; de 1960 a 1963, 137.000 dólares y de 1964 a 1966, 235.000 dólares. Entre los proyectos para el desarrollo previstos para 1967 se contaban una importante ampliación del suministro de electricidad y varios nuevos edificios como el Palacio de Justicia y el edificio



para las salas del Consejo. Estaban también en estudio importantes proyectos a cargo de contratistas privados, en particular, en lo tocante a las instalaciones portuarias en Road Town.

120. El representante de Venezuela observó que los miembros del Subcomité no podían formarse sino una idea muy parcial de la situación del Territorio y lamentó que no hubiera podido enviarse al mismo una misión visitadora, por haber negado su cooperación la Potencia administradora.

121. El representante de Venezuela pidió al representante del Reino Unido que se aclararan ciertos puntos. Según el párrafo 71 del documento de trabajo de la Secretaría, (A/6700/Add.14 (Parte I)), la Potencia administradora gozaba de una especie de derecho de veto en el Consejo Legislativo, ya que sus decisiones estaban sometidas al asentimiento del Administrador, que era designado por la Corona. Era difícil, en tales condiciones, sostener que el Territorio disfrutaba de cierta autonomía, ya que el Consejo Legislativo no podía legislar libremente sobre cualesquiera cuestiones relacionadas con los asuntos internos.

122. Por otra parte, en un régimen democrático el Parlamento representaba al pueblo, pero en las Islas Vírgenes Británicas el speaker, que era ni más ni menos el Presidente del Parlamento, no era elegido por el pueblo. El representante de Venezuela deseaba saber cómo se le designaba.

123. Los poderes de que disponía el Administrador parecían excesivos: prácticamente el Consejo Ejecutivo estaba en sus manos y hasta podía considerarse que conforme a la disposición mencionada en el párrafo 83 sus poderes eran casi absolutos.

124. Le sorprendió que las propuestas de la Sra. Proudfoot hubiesen sido tenidas en cuenta tan sólo parcialmente.

125. Por lo que hacía a la situación económica, el representante de Venezuela dijo que si se comparaban los datos de 1964 con los de 1965 se observaba que el valor total de las importaciones se había triplicado, mientras que el valor de las exportaciones había descendido en un 40%. Era de lamentar que el turismo fuese la única industria que se había estimulado en el Territorio en los últimos años, y que la cría de ganado, que era tradicionalmente una actividad fundamental, estuviera declinando. El propio representante del Reino Unido había indicado que la esfera social era la menos favorecida; la enseñanza, en particular, era descuidada, ya que una sola escuela secundaria y tres escuelas privadas no bastaban para garantizar la enseñanza obligatoria y gratuita.

126. El representante del Reino Unido lamentó que el representante de Venezuela se hubiera referido en forma tan negativa a los adelantos realizados por las Islas Vírgenes Británicas. Al referirse a la función del Consejo Legislativo y del Administrador, dicho representante había citado el párrafo 83 del documento de trabajo (A/6700/Add.14 (Parte I)); sin embargo, dicho párrafo se refería a la antigua constitución, y las recomendaciones de la Sra. Proudfoot y la Conferencia Constitucional habían tenido justamente por objeto modificar dicha constitución en el sentido de las objeciones por él formuladas. Invitó al representante de Venezuela a examinar la nueva Constitución, tal como se describía en el documento de trabajo de la secretaría, a partir del párrafo 74.

127. Como se decía en el párrafo 9 del informe de la Conferencia Constitucional el Speaker era elegido por simple mayoría de todos los miembros del Consejo Legislativo para el período de legislatura y no participaba en las votaciones sino en caso de empate. De análoga manera era elegido el Deputy Speakers; a diferencia del Speaker, sería elegido entre los miembros de ese Consejo.

128. La cuestión de la presencia en el Consejo Legislativo y en el Consejo Ejecutivo de dos miembros ex-officio, el Procurador General y el Secretario de Hacienda, ya se había debatido y explicado: la Conferencia Constitucional había estimado conveniente esa presencia por razones prácticas.

129. La función de la Comisión de Administración Pública, tal como se detallaba en el párrafo 24 del informe de la Conferencia Constitucional, consistía en asesorar al Administrador en todas las cuestiones relativas a los funcionarios a saber, nombramientos, ascensos, sanciones, etc. También conforme a lo acordado en la Conferencia, existía una comisión judicial y de servicios jurídicos, que era independiente.

130. El Administrador no ejercía en realidad control sobre el Consejo Legislativo. El Ministro Principal era designado por el Administrador, designación que recaía en el miembro elegido que contaba con el apoyo de la mayoría de los miembros elegidos del Consejo Legislativo. En caso de duda, estos últimos manifestaban su preferencia mediante una votación. Los dos Ministros eran designados en seguida por el Administrador a propuesta del Ministro Principal: en realidad, era a este último a quien correspondía verdaderamente la elección, del mismo modo que en el Reino Unido, donde la Reina nombraba como Ministros a las personas designadas por el Primer Ministro.

131. Las recomendaciones de la Sra. Proudfoot no habían sido aplicadas totalmente por la Conferencia Constitucional, pero la Conferencia, en que estaban representados todos los matices de la opinión de las Islas Vírgenes Británicas, se había guiado en gran medida por esas recomendaciones y había llegado a sus propias decisiones por acuerdo unánime.

132. El representante de Venezuela estimaba insuficientes los establecimientos de enseñanza con que contaba el Territorio; pero las estadísticas de la educación no parecían dar pie para esa opinión.

133. Por último, de existir algún conflicto entre las disposiciones de las resoluciones de la Asamblea General y el deseo de la población del Territorio, debía incumbir a fin de cuentas a la propia población decidir sobre su constitución y su futuro y el Reino Unido seguiría guiándose por el deseo de la población.

134. El representante de Venezuela estimó que, a pesar de las aclaraciones hechas por el representante del Reino Unido, la información de que disponía el Subcomité continuaba siendo demasiado vaga. Así pues, resultaba difícil juzgar la extensión de los poderes especiales conferidos al Administrador y saber con exactitud en qué circunstancias el Administrador podía prescindir de las decisiones del Consejo Ejecutivo, es decir, hacer uso del derecho de veto. Además, a pesar del intento de justificación del representante del Reino Unido, no se entendía claramente cómo los siete representantes elegidos por la población podían actuar con libertad en el seno de un Consejo en el cual también tenían asiento tres funcionarios.

135. La situación económica del Territorio, tal como se describía en los documentos presentados al Subcomité, era algo inquietante. La información recibida por la Secretaría no ponía de manifiesto ningún esfuerzo en favor de la industrialización. Como el representante del Reino Unido había reconocido en la declaración que hiciera en la 73a. sesión, la ganadería, que tradicionalmente era la actividad económica básica, estaba declinando, por lo que al parecer el desarrollo de las Islas Vírgenes Británicas dependía solamente del turismo, lo cual era insuficiente.

136. En cuanto a los partidos políticos de las Islas Vírgenes Británicas, era decepcionante para el Subcomité III, cuya misión era velar por que los territorios de que se ocupaba ejercieran su derecho de libre determinación, comprobar que sus programas no incluían objetivos políticos acordes con las resoluciones de la Asamblea General.

137. El representante del Reino Unido estimó que las dudas expresadas por el representante de Venezuela con respecto a los poderes del Administrador no se justificaban, pues dichos poderes estaban definidos de manera suficientemente precisa en el informe de la Conferencia Constitucional. El representante del Reino Unido leyó los párrafos 20 y 21 de dicho informe, según los cuales el Administrador sólo podía actuar sin consultar al Consejo Ejecutivo en casos urgentes o muy particulares, e insistió en señalar que se trataba de un procedimiento excepcional. En cuanto a los poderes legislativos residuales conferidos al Administrador, tampoco podía usarlos sino por excepción, dentro del marco de sus atribuciones particulares, y normalmente el Administrador no podía obstaculizar la legislación aprobada por el Consejo Legislativo.

138. Si los partidos políticos no hacían figurar en sus programas propuestas relativas a la evolución constitucional futura, aunque estaban en absoluta libertad de hacerlo, el Subcomité tenía que llegar necesariamente a la conclusión de que a los ojos de la población la cuestión carecía de interés inmediato. Ello era perfectamente comprensible, ya que la nueva Constitución había entrado en vigor hacía apenas unas semanas. La población del Territorio estaba evidentemente satisfecha con el actual estatuto, que había sido elaborado, por cierto, consultando plenamente al pueblo, que lo había aceptado. Cuando el pueblo deseara modificarlo, el Gobierno del Reino Unido estaría siempre dispuesto a preparar nuevamente con él los ulteriores cambios.

139. El representante de Venezuela lamentó que los miembros del Subcomité por carecer de un conocimiento suficiente de la verdadera situación que existía en el Territorio, debieran recurrir a hipótesis cuya verificación les resultaba difícil. El Subcomité tenía el deber de conocer el deseo de la población de las Islas Vírgenes Británicas, y eso se le hacía difícil por la actitud de la Potencia administradora. Por otra parte, la Sra. Proudfoot, Comisionada Constitucional de las Islas Vírgenes Británicas, ya había señalado ese problema en su informe, en el cual se subrayaba que la Potencia administradora no mantenía contactos suficientes con esa población.

140. El representante del Irán dijo que el representante de Venezuela había planteado cuestiones de suma importancia, particularmente en lo que se refería al desarrollo de una conciencia política en la población de las Islas Vírgenes Británicas. Recordó que en la 73a. sesión del Subcomité (A/AC.109/SC.4/SR.73), al

/...

responder a una de sus preguntas, el representante de la Potencia administradora había declarado que la población tenía plena conciencia de las posibilidades que se le ofrecían en cuanto a su futuro estatuto político. Sin embargo, cabía preguntarse en qué medida la población tenía verdaderamente conciencia de las posibilidades que se le ofrecían, pues no le había sido planteada la cuestión ni por los partidos políticos ni de ninguna otra manera. Las decisiones adoptadas por la Conferencia Constitucional reflejaban seguramente las opiniones del Consejo Legislativo, pero no podía tenerse en absoluto la certidumbre de que dichas opiniones representaban las de la población. Evidentemente, el envío de una misión visitadora facilitaría la tarea de las Naciones Unidas, pues permitiría obtener de la propia población esa certidumbre.

141. El representante de Venezuela hizo notar que del párrafo 124 del informe de octubre de 1966 del Subcomité III (A/AC.109/L.329/Add.1) se desprendía que, consultada en 1947, la población de las Islas Vírgenes Británicas había manifestado claramente que no deseaba formar parte de la propuesta federación de las Islas Leeward y Windward. Preguntó cuál había sido la evolución de la situación desde 1947.

142. El representante del Reino Unido respondió que, aunque las Islas Vírgenes Británicas formaban un territorio pequeño, los medios de información pública (prensa libre, publicaciones de todo carácter, radio) no faltaban allí. Además de los vínculos que unían a esas islas con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y con los demás países de las Antillas, así como con el Reino Unido, la BBC, por ejemplo, no dejaba de informar a la población de lo que pasaba en el mundo y en particular acerca de las actividades de las Naciones Unidas, del Comité de los Veinticuatro y de la Cuarta Comisión. Por otra parte, el Territorio contaría pronto con su propia emisora. En consecuencia, le parecía difícil que pudiera decirse que la población del Territorio no estaba informada; además contaba con una larga tradición de gobierno representativo. Si ni la población ni sus representantes elegidos habían planteado la cuestión del futuro político del Territorio, el Subcomité podía concluir que todavía no les inquietaba esa cuestión.

143. Por lo que hacía a la pregunta formulada por el representante de Venezuela, lamentó no tener a mano los informes correspondientes a 1947. Sin embargo, quedó claro que los habitantes de las Islas Vírgenes Británicas no habían dado muestras de interés por unirse a una federación con el resto de las Islas Leeward o Windward, y en la medida en que de algún modo habían mirado al exterior lo habían hecho hacia

/...

las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Al respecto del Reino Unido, el Gobierno se guiaría por la voluntad de la población y nada más que por ella.

144. El representante del Irán dijo que cabía sorprenderse de que un pueblo plenamente consciente de las posibilidades que se le ofrecían para su futuro político no se interesase en forma activa por el mismo. Ninguna Potencia administradora podía pedir a las Naciones Unidas que creyesen sin más en su sola palabra. El representante del Irán mantenía, pues, su posición, según la cual los contactos directos que establecería una misión visitadora con la población de las Islas Vírgenes Británicas serían útiles desde todo punto de vista. Tal vez el representante del Reino Unido pudiera decir de qué manera la asistencia que las Islas Vírgenes Británicas recibían en virtud del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo podría ayudarlas a alcanzar más rápidamente los objetivos de la descolonización.

145. El representante de Venezuela dijo que dada la actitud negativa de la Potencia administradora en lo referente al envío de una misión visitadora al Territorio, tal como lo probaba la carta leída por el Presidente en la sesión anterior (A/AC.109/SC.4/SR.74), el Subcomité podía con todo fundamento dudar de la información proporcionada por la Potencia administradora. Deseaba saber si los representantes de las Islas Vírgenes Británicas habían participado, cuando se celebró la Conferencia Constitucional de 1964, en los debates relativos a la formación eventual de una futura federación de las Antillas Orientales y Occidentales y, en caso afirmativo, cuáles habían sido sus opiniones.

146. El representante de Bulgaria encontró tanto más importantes las observaciones hechas por los representantes del Irán y de Venezuela cuanto que eran aplicables a todos los pequeños territorios, en particular los de la región de las Antillas. La Potencia administradora debería comprender que las Naciones Unidas, y especialmente el Comité de los Veinticuatro y sus Subcomités, necesitaban disponer de datos tan detallados como fuera posible, porque con respecto a los territorios coloniales tenían responsabilidades especiales en virtud de la Carta y de la resolución 1514 (XV) y de otras resoluciones de la Asamblea General, de manera que no podían aceptar pasivamente el punto de vista de las Potencias administradoras. Como había dicho el representante de Bulgaria en la sesión anterior (A/AC.109/SC.4/SR.74), no se trataba de modernizar el Territorio o de adaptarlo a las exigencias del siglo XX, sino de poner fin al régimen colonial, y era deber de las Naciones Unidas contribuir activamente a la emancipación política de los pueblos coloniales.

/...

147. El representante del Reino Unido estimó que los informes de los diversos órganos del PNUD contenían información detallada sobre la asistencia proporcionada a las Islas Vírgenes Británicas en virtud de dicho Programa. La mayor parte de la ayuda que recibían las Islas provenía del Gobierno del Reino Unido. Los habitantes de las Islas Vírgenes no habían participado en las conversaciones celebradas después del fracaso de la Federación de las Indias Occidentales acerca de una posible nueva federación de los territorios del Caribe, ni habían deseado hacerlo.

148. En respuesta al representante de Bulgaria, declaró que era práctica del Gobierno británico no sólo cumplir cabalmente las obligaciones que le correspondían en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta, como Potencia administradora sino también proporcionar a la Secretaría, al Comité de los Veinticuatro y al Subcomité III, voluntariamente, datos detallados no incluidos en las obligaciones estrictas de la Carta, en particular sobre la evolución política y constitucional del Territorio. Su delegación estimaba que al Subcomité debería serle posible extraer de esa información conclusiones juiciosas y bien fundadas.

149. El representante del Uruguay dijo que su delegación ya había dado a conocer su posición con respecto a las Islas Vírgenes Británicas. A su juicio, el Subcomité debía asegurarse, al recomendar la independencia para esos pequeños territorios, de que se hubiesen reunido las mejores condiciones. Toda obra de descolonización que condujera al desmembramiento y no se fundara en la realidad sería nociva y estaría condenada al fracaso. Esas pequeñas islas, que siempre habían sido independientes, no podían sobrevivir solas, dada su reducida superficie, su escasa población y sus recursos naturales muy limitados. La asociación o federación con otros grupos de islas parecía ser la mejor solución. Por otra parte, en el mundo moderno la coexistencia imponía la integración; Europa daba el ejemplo con el Mercado Común, y América Latina, al firmar recientemente la Carta de Punta del Este, había tomado el mismo camino. Las conclusiones del informe de la Sra. Proudfoot, Comisionada Constitucional para las Islas Vírgenes Británicas, también iban en ese sentido. Esos pequeños territorios de las Antillas sólo podían sobrevivir federados o asociados, y había que alentarlos a elegir la condición que fuese más conveniente para ellos.

150. Señaló además que, en el caso de las Islas Vírgenes Británicas, se había previsto efectivamente un programa con miras a mejorar las condiciones generales, pero bajo la dependencia de la Potencia administradora.

151. En el documento de trabajo de la Secretaría (A/6700/Add.14 (Parte I), párrs. 92 a 98), se veía que los diversos partidos no consideraban otra solución que el mantenimiento de la presencia colonial. Era importante que la población de esos territorios comprendiese bien las posibilidades que se le ofrecían y tuviese en cuenta la fórmula de la asociación o federación que, a juicio del representante del Uruguay, debía prevalecer.

152. El representante de Bulgaria convino en que para esas pequeñas islas de las Antillas, que tenían muchas semejanzas - pequeña superficie, el mismo origen étnico y la misma cultura, condiciones económicas similares, etc. - el agrupamiento en una federación, que podría incluir también a Puerto Rico, constituiría una excelente solución. Además, la fórmula de la federación estaba totalmente de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General. Sin embargo, la Potencia administradora no parecía favorecer esa solución y la Federación de las Indias Occidentales había tropezado con muchas dificultades suscitadas por la política del Reino Unido.

153. Lamentó que la Potencia administradora no diese a los territorios pequeños más posibilidad que la de seguir bajo su dependencia.

154. El representante de Venezuela manifestó que su delegación siempre había dicho que había que encontrar soluciones particulares para los territorios pequeños, no se trataba de alentarlos a perseguir una independencia que resultaría extremadamente precaria. Una vez independiente, un territorio no debía verse obligado a mendigar la asistencia de la ex Potencia administradora o la de otros países. Por lo tanto, el Subcomité debía esforzarse por recomendar una solución adaptada a los problemas particulares de los territorios pequeños. El envío de una misión visitadora de las Naciones Unidas sería particularmente útil para consultar directamente a los representantes de la población y evaluar los progresos realizados. La negativa de la Potencia administradora a permitir la visita a los territorios por ella administrados era inquietante. Ante todo era importante que las poblaciones pudieran pronunciarse libremente sobre la futura condición política de su territorio.

155. El representante del Reino Unido dijo que había escuchado con atención las sugerencias relativas a la constitución de una federación. El fracaso de la Federación de las Indias Occidentales no fue debido, como había dicho el representante de Bulgaria, a que el Gobierno británico fuese hostil a ese proyecto. Por el contrario, a partir de 1946 la política constante y declarada del Gobierno



del Reino Unido había sido la de fomentar el establecimiento de una Federación de las Indias Occidentales independiente, y nadie había trabajado para ello con tanto ahínco como el Reino Unido. Incluso se había fijado una fecha para la independencia de la Federación. Las causas del fracaso de la Federación residían en muchos factores complejos, con inclusión de divergencias entre las partes respecto de cuestiones de financiación, desarrollo económico y poderes políticos.

156. En ningún momento se había discutido la inclusión de las Islas Vírgenes Británicas en una federación pues el pueblo de las mismas no había indicado interés alguno en esa solución. Tanto respecto de este asunto como de otros, el Gobierno del Reino Unido se proponía guiarse por los deseos del pueblo del Territorio.

157. El representante de la Costa de Marfil dijo que tanto la Potencia administradora como los miembros del Subcomité eran dignos de encomio por las medidas tomadas para llevar a la independencia al pueblo de las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, el Reino Unido prestaría un servicio al Comité si le proporcionara más información. La información que había suministrado hasta ese momento era sin duda valiosa, pero para llegar a una solución equitativa se necesitaba más, particularmente en lo tocante a la participación de los autóctonos en los asuntos económicos y sociales y a los esfuerzos de la Potencia administradora por inculcar la noción de responsabilidad social. La negativa del Reino Unido a admitir una misión visitadora era lamentable. Por lo tanto, instó a ese Gobierno a que colaborase dando toda la información necesaria y permitiendo que una misión visitase el Territorio.

#### B. Aprobación del informe

158. En su 78a. sesión, el Subcomité examinó sus conclusiones y recomendaciones y las aprobó por consenso, con sujeción a las siguientes reservas:

159. El representante de Bulgaria expresó las reservas de su delegación sobre la cuestión de la presencia de las Naciones Unidas a que se hace referencia en el inciso 9. A juicio de su delegación, la presencia de las Naciones Unidas debería consistir primero en una misión visitadora, y después podría estudiarse la cuestión de otras formas de presencia.

### C. Conclusiones y recomendaciones

160. El Subcomité recomienda al Comité Especial que apruebe las conclusiones y recomendaciones siguientes:

- 1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones sobre el territorio que aprobó en 1964 y 1966, confirmadas por la Asamblea General en sus vigésimo primer y vigésimo segundo períodos de sesiones.
- 2) Reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales sigue siendo plenamente aplicable al territorio.
- 3) Reconoce que la exigüidad del territorio y su escasa población plantean problemas particulares que requieren especial atención.
- 4) Toma nota del resultado de la Conferencia Constitucional que se celebró en octubre de 1966 e igualmente de las elecciones en el territorio que tuvieron lugar en el mismo año.
- 5) Lamenta que, a pesar de que algún progreso político se ha logrado en el territorio desde su último examen del asunto, la Potencia administradora no haya aplicado mejor las disposiciones de la resolución 1514 (XV) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General con respecto a este territorio.
- 6) Reafirma el derecho inalienable del pueblo del territorio a la libre determinación y subraya una vez más que la Potencia administradora debe permitir al pueblo expresar su voluntad con respecto a la futura situación del territorio con total libertad y sin restricción alguna.
- 7) Invita a la Potencia administradora a promover la discusión abierta, libre y pública de las posibles opciones a que ese pueblo pueda acogerse para conseguir los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; y a cuidar de que el pueblo del Territorio ejerza su derecho a la libre determinación con pleno conocimiento de tales opciones.
- 8) Reitera el criterio de que debe ser posible que el Territorio se una a otros de la zona para formar un estado viable económica y administrativamente. Deplora que desde 1947 no se hayan tomado medidas efectivas para facilitar una posible federación con otros Territorios. Por consiguiente, invita a la Potencia administradora a que adopte las medidas del caso para que la población del Territorio conozca plenamente las diversas posibilidades que se le ofrecen en la consecución de los objetivos de la resolución 1514 (XV) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

9) Recordando el párrafo 6 de la resolución 2232 (XXI), que dice que "las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación," reitera su convicción de que una presencia de las Naciones Unidas durante los procedimientos de ejercicio del derecho de libre determinación será esencial para garantizar el ejercicio, por el pueblo del Territorio, de tal derecho con toda libertad y sin restricción alguna, y con pleno conocimiento de las posibles opciones a que pueda acogerse.

10) Lamenta que la Potencia administradora no haya aceptado todavía el envío de una misión visitadora al Territorio, y afirma que una visita a él es útil y necesaria. Por lo tanto, pide a la Potencia administradora que permita el envío de una misión visitadora de las Naciones Unidas al Territorio y que ofrezca a tal misión toda su cooperación y asistencia.

IV. ANTIGUA, DOMINICA, GRANADA, SAN CRISTOBAL-NIEVES-ANGUILA,  
SANTA LUCIA Y SAN VICENTE

A. Examen por el Subcomité

Introducción

161. El Subcomité examinó la cuestión de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente en sus sesiones 79a. a 89a., celebradas entre el 8 y el 28 de agosto de 1967.
162. El Subcomité tuvo a la vista los documentos de trabajo preparados por la Secretaría (véase el documento A/6700/Add.14 (Parte I), párrs. 114 a 405) y el texto de la resolución aprobada por el Comité Especial en su 506a. sesión, celebrada el 23 de marzo de 1967 (véase el párr. 948 de este capítulo).
163. En respuesta a su pedido de información acerca de la situación en Anguila, el Subcomité fue informado, en una carta del representante del Reino Unido, de fecha 11 de agosto de 1967, de que, en vista de la resolución del Comité Especial, que a juicio de su Gobierno prejuzgaba el examen futuro de la situación en los Estados Asociados del Caribe Oriental, la delegación del Reino Unido no podía asistir al Subcomité en sus ulteriores estudios relativos a esos Estados.
164. Presentaron peticiones de audiencia en relación con la cuestión de Anguila el Sr. J. Gumbs, anguilano y el Sr. Roger Fisher, profesor de derecho de Harvard y "Asesor jurídico del Gobierno provisional de Anguila". El Subcomité concedió audiencia al Sr. Gumbs en su 79a. sesión, celebrada el 8 de agosto de 1967, y al Sr. Fisher en sus sesiones 85a. a 87a., celebradas el 24 y el 25 de agosto de 1967.

Debate general

165. El Presidente dijo que el Comité Especial, al remitir al Subcomité III la cuestión de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente le había confiado una gran responsabilidad, ya que las decisiones que el Subcomité habría de adoptar podían tener consecuencias importantes para el porvenir de todos los territorios pequeños.
166. Por desgracia, el Subcomité tropezaba con el obstáculo de que el representante del Reino Unido no asistía sus deliberaciones, contrariamente a la práctica establecida, y había decidido no facilitar al Subcomité los informes que podían ser de utilidad. El representante del Reino Unido sostenía que, al elegir la condición jurídica de Estados asociados al Reino Unido, los territorios de que se ocupaba el

Subcomité habían alcanzado plena autonomía y que, además, los representantes elegidos por la población habían sido debidamente consultados. Sin embargo, en su mayoría, los miembros del Comité Especial habían considerado que, como las Naciones Unidas no tuvieron la posibilidad de conocer los deseos de la población de los seis territorios, el Comité no podía estar seguro de que la población hubiera podido realmente pronunciarse sobre ese asunto.

167. Tras el examen de esta cuestión por el Comité Especial, los nuevos acontecimientos ocurridos en tres de los seis territorios, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, y San Vicente no habían hecho sino reforzar las dudas expresadas en el seno del Comité Especial. En cuanto a Anguila, era sorprendente leer en el New York Times del 8 de agosto de 1967 que "las Naciones Unidas habían rechazado en ese día una petición de envío de una misión de investigación a Anguila". Efectivamente, como en el momento actual el único órgano de las Naciones Unidas que tenía el encargo de ocuparse de Anguila era el Subcomité III, no se comprendía cómo podría haberse rechazado la petición de Anguila, cuando tal petición ni siquiera había llegado al Subcomité.

168. El Subcomité III se encontraba ante una petición de independencia que procedía de un pretendido Estado asociado que rechazaba su estatuto de tal. Evidentemente, el Subcomité III no podía hacer caso omiso de esta petición, pero tampoco podía apoyarla sin estudiar previamente las posibilidades de Anguila de sobrevivir como Estado independiente. Anguila tiene una superficie de 35 millas cuadradas y su población es de 6.000 habitantes. Dadas las dimensiones de la isla, el Subcomité, sin dejar de inspirarse en los principios sólidamente establecidos que sirven de guía a las Naciones Unidas en su tarea de descolonización, debía tratar de elaborar nuevos preceptos en armonía con la situación particular de los territorios pequeños. Por lo tanto, era importante que el Subcomité III emprendiese un estudio sistemático y científico a fin de establecer criterios que permitiesen garantizar en el futuro a las poblaciones de los territorios pequeños el respeto de sus derechos en las mejores condiciones.

169. El representante de Venezuela recuerda que en su resolución 2189 (XXI) la Asamblea General aludió a la situación particular de los territorios pequeños. Además, la Asamblea subrayó la utilidad de las misiones visitadoras, pero los llamamientos dirigidos a las Potencias administradoras para que consintiesen en

recibir misiones visitadoras habían tropezado con frecuentes negativas. Una vez que el Comité Especial decidió remitir la cuestión de Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente al Subcomité, éste solicitó informes complementarios al Reino Unido, que no habían sido facilitados por dicho país. Por lo tanto, en el momento presente el Subcomité III no podía proseguir su examen más allá de lo que hiciera el Comité Especial, ya que no estaba mejor informado que él.

170. Parecía dudoso que la Potencia administradora hubiese aplicado integralmente la resolución 1514 (XV) a los seis territorios: en el documento de trabajo de la Secretaría (A/6700/Add.14 (Parte I), párr. 132) se leía que cuando se firmó el informe sobre su nueva condición jurídica de asociación con el Reino Unido, el jefe de la oposición de Santa Lucía, pidió elecciones generales; por su parte, el jefe de la oposición de Granada rechazó ciertas disposiciones e igualmente solicitó elecciones generales. Estos acontecimientos de Anguila confirmaban ahora que la población no estaba satisfecha con el estatuto jurídico de asociación elaborado durante la conferencia constitucional que se celebró en Londres del 28 de febrero al 26 de marzo de 1966.

171. El representante de Venezuela desea que el Presidente pida que se permita al Subcomité dirigirse a todas las fuentes posibles con objeto de recoger los datos pertinentes para la adopción de recomendaciones.

172. El representante del Uruguay recuerda que a fines del año pasado su delegación definió su posición respecto de los seis territorios de que se ocupa el Comité Especial. En aquel momento, el Comité trató de determinar, en primer lugar, si los cambios constitucionales propuestos a raíz de la conferencia de Londres respondían a los deseos de las poblaciones y, en segundo lugar, si constituían un progreso hacia la libre determinación de los seis territorios. El Comité estimó que para responder a estos puntos era preciso disponer de informes de la fuente misma, y remitió la cuestión al Subcomité III para que éste obtuviera tales informes. Por lo tanto, en la actualidad el Subcomité III era el órgano competente para examinar la petición de Anguila, y, en este aspecto, el artículo del New York Times al que había hecho alusión el Presidente, era particularmente inoportuno.

173. El Subcomité III debía recurrir a todas las fuentes posibles para obtener los informes que le hacían falta, pero no debía usurpar las atribuciones del Subcomité de Peticiones si deseaba escuchar a los anguilanos.

/...

174. El representante de Bulgaria secundó las observaciones hechas por el Presidente al principio de la sesión; por su parte, se percataba también de toda la importancia que tenía la cuestión para el porvenir de los territorios pequeños. El representante de Bulgaria apoyó asimismo las observaciones del Presidente acerca del artículo publicado por el New York Times sobre la petición de envío de una misión visitadora formulada por Anguila.

175. La misión que el Comité Especial encomendó al Subcomité III se definía en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución publicada como documento A/AC.109/235. Era de lamentar que en la realización de esta misión el Subcomité no pudiera contar con la ayuda del Reino Unido, y que este país no se encontrara siquiera presente en sus deliberaciones.

176. Resultaba difícil creer que las disposiciones constitucionales adoptadas para Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Santa Lucía y San Vicente estuviesen de acuerdo con el Capítulo XI de la Carta y con las disposiciones de la resolución 1514 (XV). Los acontecimientos que acababan de ocurrir en Anguila confirmaban las dudas expresadas por la mayoría de los miembros del Comité Especial. La tarea del Subcomité III y del Comité Especial consistía ahora en velar por la plena aplicación de las disposiciones de la resolución 1514 (XV), en particular las de los párrafos 2 y 5 de la parte dispositiva.

177. En la 79a. sesión del Subcomité, celebrada el 8 de agosto de 1967, el Subsecretario de Administración Fiduciaria y Territorios no Autónomos informó al Subcomité que el Sr. J. Gumbs, anguilano, lo había visitado el día anterior, y le había pedido que las Naciones Unidas enviaran una misión visitadora a Anguila. El Subsecretario había explicado al Sr. Gumbs el procedimiento que debía seguir, manifestándole que los órganos competentes en la materia eran el Subcomité de Peticiones, el Comité Especial y la Asamblea General. Sugirió también al Sr. Gumbs que se pusiera en contacto con el Presidente del Subcomité III.

178. El representante de Madagascar dijo que había escuchado atentamente las declaraciones del Subsecretario y de los representantes de Venezuela, Uruguay y Bulgaria. Sin embargo, reservaba su posición en lo tocante a la concesión de audiencia al Sr. J. Gumbs, de Anguila, pues el Subcomité de Peticiones era el órgano que decidía si convenía que una petición fuese examinada por el Comité de los Veinticuatro. Sugirió que se aplazase toda decisión a este respecto hasta la sesión siguiente y que, mientras tanto, se estableciese contacto con el Subcomité de Peticiones.

/...

179. El Presidente señaló que el Comité de los Veinticuatro no celebraba actualmente reuniones y que el único de sus miembros que estaba presente en Nueva York era el Relator, quien no tenía competencia para convocarlo. Por otra parte, en su resolución del 27 de marzo de 1967, el Comité Especial pidió a su Subcomité III que, a la luz de los recientes acontecimientos constitucionales, examinase la situación de los territorios en todos sus aspectos y, dado que el Sr. Gumbs seguramente sería una fuente importante de información, el Presidente opinaba que se justificaría que el Subcomité lo invitase a hacer una declaración, sin sentar por ello un precedente.

180. El representante del Uruguay opinó también que el Subcomité III debería evitar arrogarse atribuciones que correspondían al Comité de Peticiones pero, hecha esta reserva, consideraba que a aquél le convenía desde todo punto de vista recurrir a todas las fuentes de información a fin de poder cumplir el cometido que se le había confiado.

181. El representante de la Costa de Marfil compartió la reserva formulada por el representante del Uruguay. Aunque, como era sabido, el Subcomité de Peticiones se basaba en ciertos criterios bien definidos, convenía tener en cuenta, por una parte, que el Comité de los Veinticuatro estaba ausente y, por otra, que el representante de la Potencia administradora, que podría dar información al Subcomité, no estaba dispuesto a participar en sus debates. Pero para una cuestión de procedimiento la delegación marfileña formulaba las mismas reservas que el representante del Uruguay sobre la audiencia del Sr. Gumbs.

182. El Presidente dijo que el mandato del Subcomité era sumamente claro. Además, la resolución aprobada le confería amplios poderes. Propuso que el Subcomité invitase al Sr. J. Gumbs a hacer una declaración en la inteligencia de que ello no sentaría un precedente.

183. El Sr. Gumbs declaró que, contrariamente a la información publicada en el New York Times, las Naciones Unidas no habían rechazado el pedido de los habitantes de Anguila. La delegación de ésta fue bien recibida por el Subsecretario de Administración Fiduciaria y Territorios no Autónomos, que le indicó el procedimiento que debía seguir para hacerse escuchar. La población de Anguila abrigaba la profunda esperanza de que las Naciones Unidas defenderían su causa y enviarían inmediatamente una misión a la isla.



184. Al cabo de 300 años de dominación colonial y de 75 años de asociación con San Cristóbal y Nieves, Anguila carecía de agua potable, carreteras, energía eléctrica, escuelas, etc. En todo el país no existía un solo teléfono que permitiese entablar comunicación con el interior de la isla ni con el exterior. En cuanto a las escuelas, los niños se veían obligados a hacinarse por centenares en cada aula. Los naturales de Anguila sabían que esta situación no había de cambiar a menos que ellos mismos tuviesen la autoridad necesaria para mejorar su destino, y que sólo podrían tener esa autoridad si lograban la autonomía.

185. En cuanto a los incidentes registrados durante los últimos días, contrariamente a la información publicada en el New York Times, según la cual 250 anguilanos hicieron disparos contra la policía, los miembros de ésta se dispersaron atendiendo a la exhortación de un solo anguilano que rápidamente logró que se sumaran a la causa común, pese a que al hacerlo se exponían a ser encarcelados. En efecto, se había arrestado a cierto número de funcionarios policiales y, en estos momentos, la población tenía una invasión de la isla por fuerzas del Gobierno central.

186. El estatuto de asociación con San Cristóbal y Nieves sólo había sido para los anguilanos una fuente de opresión de la que querían librarse. Esta afirmación era corroborada por el hecho de que, el 11 de julio último, cuando la población fue consultada sobre la cuestión de si deseaba 1) retirarse de esa asociación y 2) formar un gobierno provisional, su respuesta fue netamente afirmativa y unánime. Al día siguiente, los representantes del pueblo, ayudados por un jurista de renombre internacional, se dedicaron a redactar una constitución y fijar la fecha de las futuras elecciones. Desgraciadamente, y como era de esperar, el Gobierno reaccionó de manera rigurosa, y a título de represalias se retenían en San Cristóbal el correo, los medicamentos, las transferencias monetarias, etc., destinados a los anguilanos. Habían quedado prácticamente congelados 500.000 dólares que les pertenecían. Durante una conferencia celebrada recientemente en Barbados, la delegación anguilana no fue autorizada a plantear la cuestión de la secesión, y se hizo presión sobre ella para obligarla a firmar el informe sobre la conferencia sin siquiera conocer su contenido.

187. Los anguilanos acudían por lo tanto a las Naciones Unidas y les pedían que interviniesen en su favor. Se trataba de un pueblo pacífico que, aunque comprendía perfectamente que debía mantenerse el orden público, no podía aceptar que se decidiese sobre su porvenir sin autorizarlo a expresar su voluntad por intermedio de sus representantes.

188. Anguila no era más que una pequeña isla con una superficie de 35 millas cuadradas y una población de 6.000 habitantes, pero era económicamente viable. Aparte del turismo, que podía convertirse en una industria floreciente gracias a las bellezas naturales de la isla, los anguilanos sabían que podían contar con la ayuda externa para desarrollar sus recursos naturales en todas las esferas. De hecho, ya habían recibido ofrecimientos con ese fin.

189. En respuesta a una pregunta del representante del Uruguay sobre la posición de Anguila en la conferencia de Barbados, dio lectura al texto siguiente:

"DECLARACION HECHA AL PUEBLO DE ANGUILA POR SU GOBIERNO

La Conferencia que se celebró recientemente en Barbados y la situación que resultó de ella han sido interpretadas de manera completamente equivocada. He aquí los hechos.

1) El pueblo de Anguila no está obligado a aceptar el informe de la Conferencia

Los representantes de Anguila precisaron claramente desde el comienzo de la Conferencia que su autoridad era limitada. En virtud de la Constitución provisional y del referéndum, ningún acuerdo que tienda a unir Anguila a San Cristóbal podrá tener carácter obligatorio, excepto si es aprobado por el pueblo. En su declaración preliminar sobre Anguila, registrada en cinta magnetofónica, Walter Hodge dijo lo siguiente:

"Ninguna de las disposiciones del acuerdo que se han examinado o aprobado puede tener carácter obligatorio para el pueblo de Anguila antes de que éste haya tenido la posibilidad de enterarse de ellas y de aprobarlas".

El pueblo de Anguila no ha entrado en conocimiento todavía del informe de la Conferencia y no lo ha aprobado. Por lo tanto, Anguila no está obligada a aceptarlo.

2) Consecuencias de la firma del informe de la Conferencia

Los cuatro miembros de la delegación de Anguila que firmaron el informe de la Conferencia consideraron que las condiciones obtenidas eran las mejores que se podían esperar y que era necesario someterlas al pueblo para que las examinase atentamente. El último día, se presentó a los representantes un informe que había sido ya mimeografiado y se les hizo varias advertencias anunciándoles que se trataba de condiciones que había que aceptar o rechazar. El informe presentaba numerosas ventajas y también numerosos inconvenientes. Ante una cuestión tan importante, había poderosas razones para firmar el informe y llevarlo a Anguila a fin de que sus habitantes pudieran examinarlo.

3) El informe de la Conferencia no ha sido rechazado por el pueblo de Anguila

El informe de la Conferencia es un documento complejo de 21 páginas con cuatro apéndices y varias citas de carácter jurídico. Contiene propuestas complicadas referentes a una fuerza de mantenimiento de la paz del Commonwealth, a la ayuda económica, a la autonomía local y a las medidas legislativas previstas. Consideramos que tenemos el deber, hacia los habitantes de Anguila, del Reino Unido y de las demás islas, de no rechazar de golpe las propuestas sin comprenderlas. Si el pueblo no está dispuesto a aceptarlas en su forma actual, presentaremos a nuestra vez propuestas concretas que habremos preparado y que tendrán por finalidad garantizar una autonomía adecuada al pueblo de Anguila.

4) Nuestra línea de acción futura

El Gobierno de Anguila, que actúa en virtud de la Constitución provisional, continuará administrando la isla independiente de Anguila en espera de un arreglo pacífico. Mientras tanto:

- a) Explicaremos el informe de la Conferencia al pueblo y lo estudiaremos con él.
- b) Invitaremos a personas que no sean habitantes de Anguila a que vengan a la isla para examinar el informe con los anguilanos.
- c) Trataremos de lograr un consenso respecto al informe y a las contrapropuestas que presentaría Anguila llegado el caso.
- d) Pediremos a las demás partes interesadas que nos dejen el tiempo necesario para nuestras deliberaciones constitucionales. Cualquier recurso precipitado a la fuerza por parte de otra isla sería particularmente injustificable.

5) Presidente interino del Consejo

En virtud de la Constitución actual, el Presidente está obligado a aplicar en todo momento las decisiones de la mayoría del Consejo. Por ahora, Ronald Webster continuará ejerciendo las funciones de Presidente interino. Todos los demás miembros seguirán formando parte del Consejo.

6) Unanimidad del Consejo

La presente declaración al pueblo de Anguila ha sido aprobada por unanimidad por todos los miembros presentes del Consejo.

Firmado el 7 de agosto de 1967.

Ronald Webster  
Peter Adams  
Walter Hodge

Emile Gumbs  
John Rogers  
John Hodge."

190. El Presidente recordó que, en su última sesión, el Subcomité le encargó que se pusiera en contacto con la delegación del Reino Unido para pedirle que suministrara información sobre la situación en Anguila. El Presidente procedió en consecuencia, y como resultado de su gestión, acababa de recibir de Sir Leslie Glass, representante del Reino Unido, una carta a la que dio lectura. La parte sustantiva de la carta decía así:

"Tengo el honor de referirme a su consulta, efectuada de conformidad con una decisión del Subcomité III del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, relativa a la posibilidad de que la delegación del Reino Unido participara en los debates del Subcomité acerca de la situación en Anguila, que forma parte del Estado Asociado de San Cristóbal-Nieves-Anguila.

"Respondiendo a esta solicitud, tengo instrucciones para confirmar la posición del Gobierno del Reino Unido según la indicó mi delegación al Comité Especial en marzo de 1967, es decir, que, en vista de los términos en que está redactada la resolución del Comité Especial de 24 de marzo de 1967, que, en opinión de mi Gobierno, prejuzgaba el examen ulterior de la situación a que se refería la resolución, no tendría objeto que la delegación del Reino Unido continuase colaborando con el Comité Especial en esos asuntos. Lamento que, en estas circunstancias, mi delegación no pueda ayudar al Comité en sus nuevos estudios relativos a los Estados Asociados del Caribe Oriental.

"En la medida en que el Subcomité prevé, en particular, la discusión de los acontecimientos ocurridos en cualquiera de los Estados Asociados del Caribe Oriental después de alcanzar su calidad de Estado, deseo recordar que al transformarse en Estados Asociados con la Gran Bretaña, los Territorios alcanzaron la plena autonomía. En consecuencia, el Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas dejó de aplicarse a partir de aquel momento y los siguientes acontecimientos que afectaron a los territorios, incluyendo la pretendida secesión de Anguila del Estado de San Cristóbal-Nieves-Anguila y los acontecimientos con ella relacionados, ya no son competencia del Comité Especial ni de sus Subcomités.

"A este respecto, el Gobierno del Reino Unido lamenta que, pese a haber alcanzado la plena autonomía el Estado Asociado de San Cristóbal-Nieves-Anguila el 27 de febrero de 1967, el Subcomité haya acordado no obstante oír a una persona en calidad de peticionario del Comité Especial sobre un asunto que atañe a los Estados Asociados.

"Por consiguiente, estoy plenamente facultado para reservar la posición de mi Gobierno, tanto en lo que se refiere a la audiencia de peticionarios respecto de asuntos de San Cristóbal-Nieves-Anguila o de cualquier otro Estado Asociado, como respecto de los debates que se celebren en el Comité Especial o en sus órganos subordinados acerca de acontecimientos ocurridos en los Estados Asociados de las Indias Occidentales una vez alcanzada su condición de Estados Asociados.

"El Gobierno del Reino Unido lamentaría especialmente cualquier acción o actuación del Subcomité que pudiera tender a perjudicar la aplicación pacífica del arreglo para solucionar el problema de Anguila negociado recientemente en Barbados gracias a los buenos oficios de los representantes de los Gobiernos de Barbados, Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tabago, y con la participación del Gobierno del Reino Unido."

191. El representante de Venezuela declaró que el problema de las Antillas es sumamente importante. La carta que había leído el Presidente al comienzo de la sesión era una nueva prueba de la falta de colaboración de la Potencia administradora, a la que ninguna decisión de la Asamblea General había autorizado para que se eximiese de las obligaciones enunciadas en el inciso e del Artículo 73 de la Carta. Contra lo que esa carta dejaba entender, el Subcomité era competente para conocer de la cuestión de San Cristóbal, Nieves y Anguila, en virtud de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Se trataba ciertamente de territorios pequeños, cuya viabilidad económica y política debía garantizarse, pero podía encontrarse una fórmula adecuada en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General. El representante de Venezuela rechazó categóricamente la respuesta británica.

192. Los documentos de la Secretaría, así como las declaraciones hechas por el Sr. J. Gumbs en las sesiones precedentes, ponían de manifiesto que después de más de 300 años de dominación colonial, los anguilanos no poseían ni siquiera la mínima infraestructura económica y social que les permitiera mejorar su suerte en un próximo futuro. La isla había sido explotada para servir únicamente los intereses económicos, políticos y estratégicos extranjeros. La secesión de Anguila del Estado asociado de San Cristóbal, Nieves y Anguila probaba que el proceso de descolonización se había emprendido sin que se hubiese autorizado a los 6.000 anguilanos a ejercer su derecho de libre determinación. Es significativo que posteriormente la Potencia administradora hubiese hecho presión sobre los representantes anguilanos para que firmasen el informe de la Conferencia de Barbados y que, según las últimas noticias, una fragata que transportaba fuerzas policiales se dispusiese a desembarcar en la isla para reprimir a los habitantes. Cabe preguntarse por qué el Reino Unido no había actuado de la misma manera con respecto al régimen rebelde blanco de Rhodesia del Sur. En todo caso, Venezuela se opone al uso unilateral de la fuerza.

193. El problema de Anguila no era un problema local. Debía examinarse en el contexto de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y era esencial que se tuviese en cuenta la voluntad del pueblo anguilano, si se quería que esta resolución fuese plenamente aplicada.

194. El representante de Bulgaria puso de relieve la importancia de los seis territorios que examinaba el Subcomité y recordó que en la 506a. sesión del Comité Especial su delegación votó a favor de la resolución presentada sobre esta cuestión (véase el párr. 948 de este capítulo) y expresó la esperanza de que la Potencia administradora cooperaría en forma constructiva con el Comité cuando se volviera a examinar el tema de los seis territorios.

195. No debía pasarse por alto la responsabilidad que imponían a las Naciones Unidas la Carta y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. En su última carta el representante de la Potencia administradora ponía en duda la competencia de las Naciones Unidas respecto de los problemas de los territorios examinados y no se podía sino deplorar esta actitud que perjudicaba el proceso de descolonización. La delegación de Bulgaria coincidía enteramente con el representante de Venezuela en que sólo una decisión de la Asamblea General podía desligar a la Potencia administradora de las responsabilidades que le imponía la Carta. Como era sabido, el Reino Unido seguía oponiéndose al envío de una misión visitadora a esos territorios, pese a las decisiones adoptadas por el Comité Especial y el Subcomité, y naturalmente esta actitud se ajustaba a la posición adoptada por la Potencia administradora en este asunto.

196. Lo que sucede actualmente en Anguila no debía interpretarse como un hecho aislado, sino como la prueba evidente de una realidad deplorable, a saber que la Potencia administradora se esforzaba de alguna u otra forma por mantener el control que ejercía sobre los territorios coloniales de cuya administración estaba encargada. Los datos que se comunicaban a las Naciones Unidas y lo que acababa de ocurrir en algunos de estos territorios confirmaban la conclusión a que había llegado la inmensa mayoría de los miembros del Comité Especial y del Subcomité, a saber que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General seguía aplicándose a estos territorios y que los arreglos constitucionales concertados no eximían a la Potencia administradora de las obligaciones que le imponía la Carta.

197. Como había declarado reiteradamente Bulgaria, debían liberarse todos los territorios, grandes o pequeños, y debía aplicárseles la resolución 1514 (XV). Era evidente que en el caso de los seis territorios examinados, la Potencia administradora no creó, como debió hacerlo, condiciones favorables para el ejercicio del derecho a la libre determinación. El Artículo 73 de la Carta insiste en el

"principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo". Por lo tanto, en cualquier solución que pudieran proponer, el Comité Especial y el Subcomité deberían tener presentes el objetivo de la resolución 1514 (XV) y, en particular, el párrafo 2 de la parte dispositiva. Era importante comprobar si la población de esos territorios había tenido oportunidad de expresar libremente su voluntad con respecto a los arreglos constitucionales que le interesaban, así como sobre su condición futura. Ahora bien, los datos disponibles hacían pensar que no había ocurrido así en los seis territorios examinados. El pueblo no había podido elegir entre varias posibilidades, se le había ofrecido simplemente la asociación con el Reino Unido.

198. Durante los debates que se celebraron en el Comité Especial sobre esta cuestión, la Potencia administradora insistió en que los arreglos constitucionales contenían disposiciones en virtud de las cuales la población tendría, en lo porvenir, el derecho de renunciar a la condición de Estado asociado, de unirse a otros territorios de la región, y hasta de escoger la independencia. Pero este derecho se refería únicamente a lo futuro y desde ahora, la población había indicado que no estaba satisfecha con su nueva condición.

199. Por otra parte, la Potencia administradora no ha tenido en cuenta los llamamientos que se le dirigieron para que autorizara el viaje de una misión visitadora a esos territorios. Al obrar así, impidió que las Naciones Unidas averiguasen directamente las necesidades del pueblo en cuanto a su condición futura. En el caso de la condición de Estado asociado, el Reino Unido conservaba el derecho de intervenir en los asuntos internos de los territorios sin esperar siquiera a que lo pidiesen los Gobiernos de dichos territorios. Este solo hecho demostraba que la nueva condición no había puesto fin al control que ejercía el Reino Unido sobre sus antiguas colonias.

200. La responsabilidad del Reino Unido en cuanto a estos territorios provenía del hecho de que éstos se habían encontrado bajo el dominio colonial británico desde hace centenares de años. Cabía recordar también que esta responsabilidad había sido un factor determinante en la disolución de la antigua Federación del Caribe, así como en los arreglos constitucionales de ahora.

201. La Potencia administradora y el Comité Especial tenían el deber y la tarea de preparar y recomendar medidas encaminadas a fomentar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho de libre determinación de todos los territorios

/...

coloniales y, en particular, de los pequeños territorios. Era evidente que, en la actualidad, las condiciones económicas, sociales y políticas de los territorios estudiados, así como las bases y los acuerdos militares, constituían un obstáculo a la aplicación de la resolución 1514 (XV). Las Naciones Unidas debían seguir examinando la situación en todos los territorios coloniales y proseguir sus esfuerzos para ayudar a la población a lograr la independencia.

202. El representante de Italia hizo algunas observaciones sobre los criterios políticos particulares que convenía tener en cuenta en el examen de los pequeños territorios. A este respecto, la resolución 1541 (XV) y 2189 (XXI) de la Asamblea General eran complementos obligatorios de la resolución 1514 (XV), ya que establecieron el fundamento jurídico sobre el cual la Asamblea General y el Comité Especial pudieron basarse para estudiar y adoptar resoluciones relativas a algunos grandes problemas coloniales todavía en suspenso. La necesidad de recurrir a métodos y políticas especiales en el caso de los pequeños territorios fue explicada extensamente por el representante del Uruguay; dichas explicaciones y las observaciones de la delegación italiana y de otros miembros del Subcomité podrían servir para definir una política más flexible y mejor articulada con miras a resolver los problemas que planteaba la descolonización de los pequeños territorios.

203. La delegación italiana opinaba que había que tener presentes cuatro consideraciones al tratar de los criterios especiales que se debían adoptar para los pequeños territorios. En primer lugar, la forma de independencia, el momento en que ésta se adquiriera y la organización del nuevo Estado habida cuenta de la importancia geográfica y de la situación económica de los territorios interesados. De conformidad con el principio VI enunciado en la resolución 1541 (XV), la independencia debería poder ser lograda también mediante la unión de varios territorios en un solo Estado y mediante la asociación de dicho Estado con la antigua Potencia administradora. En efecto, la libre determinación debería, ante todo, permitir la creación de entidades económicamente viables, condición que se debía cumplir para garantizar la estabilidad y el progreso social e impedir el retorno a una forma u otra de imperialismo. El Subcomité debía estudiar si dicha condición se cumplía con la integración de pequeños territorios en Estados políticos más grandes o con su asociación con la antigua Potencia administradora. Esta última fórmula no debía

/...



ser descartada automáticamente, ya que podía ofrecer garantías importantes. Efectivamente, la antigua Potencia administradora podía, sobre la base de las relaciones entre los Estados, proporcionar una ayuda económica que quizás no hubiera proporcionado anteriormente y que permitía no tener que recurrir a las empresas privadas, cuyas actividades frecuentemente tenían un carácter especulativo y eran peligrosas desde el punto de vista social. La asociación parecía ser una buena solución, particularmente en el caso de los pequeños territorios estudiados por el Subcomité III. Como señaló el Sr. Fisher, la población de Anguila no había elegido entre las varias soluciones posibles, y si se retirase el Sr. Bradshaw, la personalidad política a la cual la isla se oponía, ésta podría incluso considerar su asociación con San Cristóbal y Nieves.

204. En segundo lugar, era necesario considerar los medios por los cuales los pueblos coloniales podían manifestar su independencia. La resolución pertinente no limitaba dichas manifestaciones a ninguna forma particular, y la práctica de las Naciones Unidas estaba de acuerdo con los principios del derecho internacional, según los cuales las instituciones políticas son libres de adoptar los métodos adecuados para determinar la independencia. La práctica de los Estados mostraba igualmente que existían varias formas de ejercer la libre determinación y de establecer un régimen político. La cuestión era si no se debían prever métodos especiales para el ejercicio de la libre determinación en los pequeños Estados, que permitieran obtener, junto con la independencia, una cierta integración política y económica para formar estructuras más amplias. La tendencia a la federación y a la integración era una prueba de la madurez de los Estados; ahora bien, cuando un nuevo Estado alcanzaba la independencia, ésta iba siempre acompañada, como era muy natural, de tendencias separatistas. Anguila era un buen ejemplo de ello. Sin embargo, el temor de que esas tendencias separatistas provocaran el resquebrajamiento de los pequeños territorios y su decadencia social y económica siempre había impulsado al Comité Especial y al Subcomité a pedir encarecidamente a las Potencias administradoras que organizaran dichos territorios en estructuras políticas más amplias y más viables.

205. En tercer lugar, convenía considerar atentamente el hecho de que cada pequeño territorio formaba parte de una región del mundo bien determinada. Las Naciones Unidas debían siempre tener en cuenta las situaciones y prácticas locales y evitar toda iniciativa que, aunque estuviese inspirada por buenas intenciones, podía

/...

destruir el equilibrio y la estabilidad de una región. Esto era particularmente cierto en el caso de los pequeños territorios y en especial las islas que debían encontrar apoyo en organizaciones regionales, pero no un estímulo a sus tendencias naturales al particularismo y a la insalubridad, que podían perturbar la armonía regional y provocar la secesión y el resquebrajamiento de otros Estados de creación reciente de la región. También a este respecto, Anguila era un excelente ejemplo. Las Naciones Unidas deberían siempre preocuparse de las situaciones regionales y elaborar una práctica en estrecha consulta con los representantes de los países interesados.

206. En cuarto lugar, el Subcomité debería preocuparse de la cooperación de las Potencias administradoras y de la cuestión de las misiones visitadoras. Las misiones visitadoras eran necesarias en la mayoría de los casos, pero no se debían considerar como un instrumento esencial y universal de descolonización. Se podrían considerar otros medios, como las consultas con los Estados Miembros de las regiones interesadas o el envío de observadores a los territorios con motivo de negociaciones que les conciernan. En cuanto a la cooperación con las antiguas Potencias administradoras, el Subcomité debía, sobre todo, no tomar una actitud negativa o radical que corriera el riesgo de conducir a un callejón sin salida. Por lo tanto, posiblemente sería prudente hallar otros medios para asegurarse la cooperación de Gran Bretaña sin prejuzgar por el momento su posición. Al crear Estados asociados, Gran Bretaña había asumido la responsabilidad de sus relaciones exteriores, lo que significaba igualmente que había asumido la responsabilidad de sus relaciones con las Naciones Unidas y con los órganos de ésta cuyas actividades se refieren a las relaciones exteriores. En otros términos, los seis territorios estaban representados en las Naciones Unidas por Gran Bretaña, que debería por ello ser invitada a las reuniones del Subcomité y podría entonces proporcionar informes sobre todo lo que se refiriese a la situación de esos territorios de las Antillas, desde un punto de vista interior o exterior.

207. El representante del Uruguay manifestó que, cuanto más pequeño era un país, más se complicaban los problemas que en él se planteaban. Sin embargo, existía un problema que no había sido objeto de toda la atención que debería haber recibido: la vocación nacional de un país. Además de la existencia de una tradición histórica, de estructuras económicas y políticas viables, convenía asegurarse de que existía esa vocación, esa identidad nacional, y erigirla en criterio de modo que, sea cual

fuese el número de habitantes de un territorio, no se podía acusar un día al Comité Especial de haber lanzado a la vida internacional a pequeñas naciones ignorando todos sus problemas.

208. El representante del Uruguay estimó que, desde un punto de vista racional, era una equivocación hacer de pequeñas islas, dondequiera que éstas se encontrasen Estados o naciones. Esto no significaba en ningún modo que se opusiese a que los países cuya población era menos numerosa que la de las grandes Potencias, por ejemplo, tuviesen acceso a la independencia. No obstante, era cierto que la mayor desigualdad consistía en examinar sobre una base de igualdad dos cosas desiguales; era necesario distinguir entre una igualdad objetiva y teórica y una igualdad subjetiva basada en realidades. Si se hacía caso omiso de esto, las Naciones Unidas podían, a fuerza de crear Estados artificialmente, ver su objetivo y su poder disminuidos y su acción futura comprometida.

209. La cuestión de los pequeños territorios dio lugar a varias intervenciones del representante del Uruguay ante el Comité Especial. Todos sus aspectos habían sido extensamente analizados y estudiados, y el hecho de que el Subcomité III los considerase de nuevo se debía únicamente a la preocupación de asegurarse de que la voluntad del pueblo hubiera sido correctamente interpretada en la elaboración de los acuerdos constitucionales de Londres. Era esencial que se tuviera la certidumbre de que el gobierno de las islas, tal como existía en este momento, proviniese legítimamente de dichos acuerdos.

210. El Subcomité debía manifestar una actitud positiva con respecto a las realidades políticas e históricas que existían en las Antillas británicas, y no perder jamás de vista la voluntad y el bienestar de las poblaciones interesadas. Debía esforzarse en la aplicación conjunta de las disposiciones de las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV), que además se complementaban.

211. La fórmula adoptada por las conferencias constitucionales de Londres no parecía ser incompatible con las resoluciones del Subcomité III, del Comité Especial, de la Cuarta Comisión y de la Asamblea General. En cambio, era cierto que la Potencia administradora no había observado ciertos requisitos relacionados con el referéndum, tendientes a comprobar la voluntad del pueblo en cuanto al nuevo sistema institucional. El empleo del referéndum iba ligado al problema del traspaso de los poderes: la resolución 1514 (XV), efectivamente, estipulaba en el párrafo 5 de

/...

la parte dispositiva las medidas que deberían tomarse inmediatamente en los territorios en fideicomiso para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios. El Sr. Velásquez, en su obra sobre la concesión de la independencia, al hacer referencia al traspaso de los poderes a los "pueblos de esos territorios", se refiere evidentemente a los representantes de los pueblos, ya que el derecho constitucional moderno no conocía otro sistema que el de la representación, por lo menos para las funciones públicas más importantes. La única cuestión que se planteaba, por lo tanto, era la de saber cuáles eran las condiciones que debían reunir esos representantes para que la soberanía traspasada a ellos pudiera reputarse traspasada a los pueblos que representaban.

212. Sucedió en este caso que el Reino Unido hacía avanzar a los territorios que administraba según una evolución constitucional en la que no se preveía ningún referéndum. Dicha evolución se realizaba en varias etapas, que iban desde la concesión de la autonomía interna hasta las conferencias constitucionales en las que se ultimaban los detalles para la independencia. Dicho de otra forma, en el caso que se estudiaba, se habría cumplido el proceso descolonizador sin la intervención de las Naciones Unidas y sin consulta plebiscitaria. Este proceso no era por ello menos democrático, ya que los órganos legislativos locales debían aprobar los acuerdos constitucionales concertados entre los representantes elegidos por los territorios y el Gobierno británico.

213. La validez de este proceso, aunque el representante del Uruguay fuera personalmente partidario del referéndum, era innegable. Se trataba únicamente de determinar si el acto electoral que había creado el órgano legislativo era válido.

214. No se trataba en modo alguno de poner en tela de juicio la totalidad de la evolución constitucional en el marco del derecho británico, lo cual obligaría a muchos grandes países descolonizados a reexaminar hasta los fundamentos de su independencia si no la hubieran alcanzado mediante un referéndum. De hecho, si los acuerdos constitucionales que les atañían fueron concertados entre el Gobierno británico y un órgano legislativo representativo del pueblo interesado, eran inatacables.

215. En Anguila, el referéndum no se refería a la independencia absoluta, sino al hecho de que la isla quería separarse de San Cristóbal sin, por otra parte, poner fin a su asociación con Gran Bretaña. Se habían planteado dos cuestiones. La primera era la separación entre Anguila y San Cristóbal, y la segunda la creación

eventual de un gobierno provisional anguilano. No se trataba de las relaciones entre Anguila y el Reino Unido, sino de un referéndum incompleto que presentaba los mismos defectos que el que Francia organizó en la costa francesa de Somalia.

216. Por otra parte, la situación en Anguila era tal que los miembros del Subcomité III no podían dejar de recordar lo que dijeron ante el Comité Especial. Efectivamente, no existía ninguna información nueva respecto a la Conferencia de Jamaica, y el Subcomité no podría decir que poseía prueba alguna de que el pueblo de Anguila no había dado verdaderamente su consentimiento a la forma actual de gobierno.

217. Por el momento existía un hecho político innegable. Por lo tanto, el Subcomité no debía volverse atrás sino tratar de encontrar, teniendo en cuenta la situación, un medio de corregir ésta en lugar de querer destruir lo que existía en un impulso de fervor. La descolonización debía seguir su curso, y si a veces parecía escaparse al control de las Naciones Unidas, se debía tratar de participar en ella, no de detenerla. Aún si Anguila había alcanzado la independencia en virtud de acuerdos constitucionales, esto no restaba en absoluto valor a dicha independencia. No correspondía al Subcomité censurar la expresión de la voluntad del pueblo si ésta se había expresado libremente.

218. El representante de Venezuela explicó que no ponía en duda la validez del proceso empleado para descolonizar a los seis territorios. Sin embargo, insistió en que cuando la descolonización revestía una forma distinta de la independencia absoluta y total, como, por ejemplo, la de un Estado asociado en el presente caso, las Naciones Unidas debían examinar la cuestión con todo detenimiento para evitar la aparición de una forma disfrazada de neocolonialismo. En el caso extremo, uno podría encontrarse frente a pretendidas descolonizaciones que no serían más que un juego de textos.

219. El representante del Uruguay recordó que era partidario convencido del referéndum, el cual estaba, por otra parte, firmemente arraigado en las costumbres políticas del Uruguay, pero esto no le impedía reconocer que muchos países que en este momento pertenecían a las Naciones Unidas no habrán llegado a la independencia por ese medio. Ninguna resolución decía expresamente que el referéndum fuese el

único procedimiento de que disponían los pueblos para ejercer su derecho a la autodeterminación.

220. El Subcomité sólo debía asegurarse de que la voluntad de la población se había expresado con toda libertad y sin coacciones. El Comité no podía cumplir su función si no tenía pruebas directas de esto; y para ello habría sido preferible visitar el lugar. Por lo tanto, el Subcomité debía decidir si en el presente caso la elección de la que había surgido la Cámara local había desempeñado el mismo papel que un referéndum. Si es así, la tarea del Subcomité había terminado, pues no le correspondía crear un problema donde no lo había. Las dificultades del Oriente Medio y del Viet-Nam eran suficientes, y era inútil alentar la aparición de otras en las Antillas.

221. El representante de Venezuela dijo que, aunque no se mencionaba expresamente en las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de la Asamblea General, la doctrina de la consulta popular (es decir, del referéndum) estaba universalmente reconocida. Era cierto que si no disponía de información adecuada el Subcomité no podía hacer afirmaciones categóricas. Sin embargo, cuando una conferencia constitucional organizada por la Potencia administradora para un territorio colonial no terminaba en la independencia completa de ese territorio, cabía dudar de que su población hubiese sido plenamente consultada.

222. En cuanto al uso que se hacía de la bandera de las Naciones Unidas, el representante del Uruguay sabía muy bien que nunca había servido más que para defender el derecho sagrado de los pueblos a ser dueños de su destino.

223. El representante de Bulgaria deploró, como el representante del Uruguay, que existiesen en el mundo graves injusticias, en particular en el Viet-Nam, donde la pretendida libertad era impuesta con bombas y napalm, y en Rhodesia del Sur, donde 4 millones de africanos eran oprimidos por una minoría blanca. Apenas se hacía caso de la voluntad del pueblo, y las fuerzas reaccionarias del imperialismo y el colonialismo trataban de mantener su dominio usando métodos que se ingeniaban para adaptar a las normas de la sociedad moderna.

224. En cuanto a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, no creía que una conferencia constitucional fuese la

mejor forma de consulta popular. En efecto, una consulta popular no debía considerarse como una simple formalidad, sino cómo el primer acto soberano de un pueblo en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación. En el caso de los seis territorios de la región del Caribe, había motivos para dudar de que la población hubiese tenido la posibilidad de expresar plena y libremente su voluntad, como se preveía en el párrafo 2 de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Respecto de San Cristóbal, Nieves y Anguila, la única posibilidad que se discutió en la Conferencia Constitucional de Londres fue la del estatuto de Estado asociado. Sin rechazar a priori tal o cual estatuto político, las Naciones Unidas debían velar por que la población estuviese bien enterada de su derecho a elegir el que respondiera mejor a sus aspiraciones.

225. Los hechos y los principios de que se trataba eran claros, y deseaba reiterar que, según ellos: 1) la población de los territorios no había sido consultada; 2) la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales continuaba siendo aplicable a ellos, y 3) el Reino Unido continuaba siendo responsable de ellos. Para concluir, expresó el deseo de que la Potencia administradora demostrase un mejor espíritu de comprensión y cooperación.

226. El representante del Uruguay manifestó, para disipar todo malentendido, que no tenía nada contra los referéndums, sino al contrario. Sin embargo, existían otros medios por los cuales la población podía expresar libremente su voluntad; en especial podía hacerlo en forma igualmente legítima por conducto de sus representantes democráticamente elegidos.

227. Lo que importaba en el caso que preocupaba al Subcomité no era que se hubiese empleado tal o cual forma de consulta popular con preferencia a otra, sino que la población hubiese hecho conocer sus aspiraciones sin ninguna coacción y sería inapropiado que el Subcomité formulara conclusiones y recomendaciones en términos categóricos antes de estar seguro de que respondían exactamente a los hechos.

228. El representante del Irán manifestó que en general la libre determinación era el procedimiento fundamental para lograr la descolonización. Pero, así como hay excepción a toda regla, también lo hay para ésta. En los casos en que era evidente que la libre determinación podría producir un resultado contrario a la naturaleza y a los objetivos de la descolonización, se debía emplear un procedimiento diferente para lograr la misma. A pesar de su invariable reafirmación del derecho a la libre determinación, el Comité de los Veinticuatro, en los casos en que la libre determinación pudiera servir para perpetuar una situación colonial, había decidido recomendar un procedimiento diferente para lograr la descolonización. Así, como se había visto, el Comité, en los casos de Gibraltar, de las Islas Malvinas (Falkland) y de Ifni, en vez de recomendar la libre determinación, había instado deliberadamente a que se entablaran negociaciones como medio de alcanzar la descolonización.

229. Por la misma razón, si la libre determinación se demostraba contraria a los propósitos de la descolonización en los territorios pequeños que, debido a sus circunstancias peculiares, requieren especial atención, un procedimiento distinto de la libre determinación podía contribuir en mayor medida al logro de la descolonización. Puesto que la liberación de toda forma de subyugación, política, económica o de otras clases, era el objetivo fundamental de la descolonización, se debería examinar cuidadosamente la cuestión de si un territorio no viable podría de hecho alcanzar la libertad incluso si el pueblo interesado hubiera expresado el deseo de ser independiente. En vista de todo ello, las Naciones Unidas, debido a su responsabilidad global y a su amplia perspectiva, podrían estar en condiciones de proporcionar a un territorio no viable que aspira a la libertad y la independencia los medios óptimos para alcanzar y disfrutar tal condición, en la práctica y no sólo en teoría. Teniendo eso en cuenta, la mayoría de los miembros del Subcomité habían insistido a menudo en que se crease una federación o confederación para los territorios del Caribe. La asistencia y la colaboración de la Potencia administradora a este respecto era desde luego absolutamente esencial para el cumplimiento de las aspiraciones de los pueblos de los territorios pequeños que deseaban una libertad y una independencia auténticas, de conformidad con la resolución 1514 (XV).



230. El Presidente dijo que, conforme a la decisión adoptada en la sesión precedente por el Subcomité, se escuchaba al Sr. Fischer a título privado.

231. El Sr. Fischer declaró que se dirigía a los miembros del Subcomité en nombre del Gobierno Provisional de Anguila. Recordó que es profesor de derecho en la Universidad de Harvard y que si bien era especialista en cuestiones de derecho internacional, se ocupaba a veces de procedimiento y derecho penal. Antes de dedicarse a la enseñanza, ejerció la profesión de abogado durante diez años. Sus relaciones con Anguila eran muy recientes, ya que estuvo por primera vez en la isla en julio de 1967. A fines de junio uno de sus amigos y la esposa del Sr. Gumbs, a quienes había conocido dos años antes, le pidieron que ayudase a los anguilanos. Aceptó hacerlo en la inteligencia de que esto sería para él un asunto como cualquier otro, es decir que se le compensarían sus gastos y sus desplazamientos, y que cobraría honorarios aunque fuese mínimos. Aclaró que no tenía relación con ningún posible inversionista ni con ningún interés americano y que su único cliente era el Gobierno Provisional de Anguila. Había estado en total tres veces en la isla, cada una de ellas por alrededor de una semana. Durante esas estancias se reunió con los miembros del Consejo y con el Presidente, primero el Sr. Adams y después el Sr. Webster.

232. A principios del mes de julio fue puesta la isla bajo el control de un Comité de Mantenimiento de la Paz formado por sus habitantes, una vez que se fue en mayo la policía de San Cristóbal. El 11 de julio el Comité organizó un referéndum a fin de consultar a la población sobre la cuestión de saber si deseaba i) poner fin a la asociación con San Cristóbal y Nieves, y ii) formar un gobierno provisional. En ambos casos la respuesta fue casi unánime.

233. Anguila es una pequeña isla poblada por 6.000 habitantes, pobre y desheredada, sin teléfonos, sin un sistema público de electrificación y con sólo dos kilómetros de rutas asfaltadas. El problema era saber cuál sería el porvenir de esta isla. En este momento, muchos representantes de Anguila, miembros de la oposición, estaban detenidos en San Cristóbal. El Sr. Bradshaw, Primer Ministro de San Cristóbal, amenazaba con transformar a Anguila en un desierto si no se sometía. Se habían importado armas en San Cristóbal para tomar eventualmente a Anguila por la fuerza. El Reino Unido había impuesto a Anguila una Constitución que la asociaba a dos islas situadas demasiado lejos de ella como para que este arreglo pudiera constituir una buena solución.

234. El problema era saber si Anguila estaba obligada por soluciones pasadas y, si no lo estaba, determinar por una parte qué soluciones podían preverse y, por la otra, cómo llegar a una solución. Las dos soluciones pasadas que según algunas opiniones obligaban a Anguila eran las siguientes: la primera era la Constitución impuesta por el Reino Unido en circunstancias que el Subcomité conocía bien. En cuanto a esta solución, los anguilanos estimaban que no estaban obligados por los arreglos constitucionales hechos en Londres, ya que no se les consultó como debió haberse hecho. Si se les hubiera consultado, estos arreglos hubieran incluido un cierto grado de autonomía para Anguila, cosa que no ocurrió. Los anguilanos consideraban además que no era la antigua Potencia administradora la que debía decidir cuál era la forma de libre determinación más apropiada para un territorio. Asimismo, juzgaban inaceptable el tener que depender de San Cristóbal. La segunda solución que según algunos obliga a los anguilanos era la propuesta en la Conferencia. El Sr. Walter Hodges dijo, en nombre de la delegación de Anguila, que la autoridad de dicha delegación era limitada y que todo acuerdo negociado o concluido en la Conferencia no podría considerarse como obligatorio para la población de Anguila mientras ésta no hubiese examinado y aprobado dichos acuerdos. Se hizo esta aclaración a fin de evitar que se repitiera lo sucedido en la Conferencia de Londres, a saber, que se hiciesen arreglos sin haber consultado a la población de Anguila. En respuesta a esta reserva, Lord Shepherd, Ministro de Estado para los Asuntos del Commonwealth, declaró que durante la Conferencia se había hecho todo lo posible para tener en cuenta el punto de vista de los anguilanos y que una negativa de éstos a aceptar las conclusiones de la Conferencia constituirían un acto de suma gravedad que obligaría al Reino Unido a consultar con los otros gobiernos de los Estados de las Antillas a fin de estudiar las medidas que habría que adoptar.

235. El 31 de julio cuatro miembros de la delegación de Anguila firmaron el informe de la Conferencia de Barbados. Otros seis miembros prefirieron abstenerse. Todos los miembros, hubiesen firmado o no, hicieron saber que consideraban que el informe de la Conferencia no comprometería a la población de Anguila mientras no hubiese tomado ella conocimiento del mismo y lo hubiera aprobado.

236. Las conclusiones de la Conferencia de Barbados fueron las siguientes: Anguila debía aceptar nuevamente someterse al Gobierno de San Cristóbal; se establecería un dispositivo para el mantenimiento de la paz a fin de proteger a la población de Anguila, y se le concedería una cierta autonomía. El único punto claro de estas conclusiones era el retorno de Anguila a San Cristóbal. El resto era bastante obscuro, complicado y ambiguo. Después de la Conferencia, el Consejo de Anguila se reunió y decidió mantener en funciones al Sr. Webster, que había sido nombrado Presidente del Consejo en ausencia del Sr. Adams. Luego, el Consejo publicó una declaración en la que explicaba a la población la posición de la delegación de Anguila en la Conferencia de Barbados. En esta declaración se decía principalmente que el informe de la Conferencia no obligaba a la población de Anguila, que la isla se rechazaba a priori dicho informe, sino que deseaba estudiarlo detenidamente a fin de formular proposiciones constructivas y encontrar una solución pacífica. La respuesta a esta declaración fue el envío por el Reino Unido de una fragata a bordo de la cual había fuerzas de infantería de marina listas para desembarcar a la isla. El 9 de agosto el Sr. Webster, en nombre del Consejo de Anguila, dirigió al Ministro de Relaciones Exteriores de Barbados un llamamiento en el que confirmaba la conversación telefónica con él mantenida esa misma mañana y le aseguraba que la población de Anguila estaba dispuesta a estudiar atentamente el informe y a cooperar en toda solución ecuaníme, lo exhortaba a no recurrir a la fuerza y a no enviar infantería de marina a la isla, y pedía por último que se enviaran a Anguila consejeros que pudieran explicar a la población el tenor y la significación del informe de la Conferencia de Barbados. Posteriormente dos funcionarios del Commonwealth vinieron efectivamente a Anguila, donde participaron en una reunión a la que, además de los responsables del Gobierno, asistieron varios miles de personas que siguieron el debate e hicieron preguntas. Cuando los dos funcionarios se retiraron, lo hicieron con la impresión de que la población de Anguila encontraba inaceptable el informe de la Conferencia de Barbados, al que habría que hacer muchas modificaciones. Por lo tanto, la posición del Consejo era que Anguila no estaba obligada por los arreglos constitucionales de Londres ni por las conclusiones de la Conferencia de Barbados.

237. Había quienes habían comparado los acontecimientos de Anguila con los de Rhodesia del Sur. Se había dicho que en los dos casos había habido una declaración

unilateral de independencia y que el Reino Unido debería tomar medidas para restaurar la legalidad. A su juicio, era totalmente inapropiado comparar la situación de estos dos territorios. En efecto, en el caso de Anguila no se trataba de un Gobierno minoritario o mayoritario, sino de que toda la población de la isla quería poner fin a su asociación con San Cristóbal.

238. Si las soluciones anteriores no obligaban a Anguila, pues, se trataba de saber qué otras soluciones cabía prever. Evidentemente, la isla no era lo suficientemente grande como para quedar librada a sí misma. En efecto, dado el número de problemas que debía enfrentar un Estado moderno, y las estructuras administrativas que esto suponía, la población de la isla sería totalmente absorbida por la función pública. Por otra parte, los anguilanos querían gobernarse a sí mismos, ser libres, y sobre todo no depender más de San Cristóbal. No se trataba para ellos de una cuestión de prestigio: no querían tener embajadores ni que su país fuese miembro de las Naciones Unidas; querían simplemente manejar ellos mismos sus propios asuntos. En realidad, estarían dispuestos a considerar una asociación con San Cristóbal a condición de que esta asociación les permitiese tener un gobierno autónomo.

239. Otra solución podría consistir en una forma de fideicomiso bajo la supervisión de los países del Commonwealth, o una asociación con otras entidades, como ciertas islas de habla francesa de las Antillas o San Martín, con las que Anguila mantenía excelentes relaciones. Quedaba todavía la independencia total, con la explotación de los recursos naturales, principalmente el turismo y una ayuda preferentemente internacional. El Consejo de Anguila le había pedido igualmente que hiciese saber al Subcomité la posibilidad de que Anguila, como entidad autónoma e independiente, entrase en una forma de asociación con las Naciones Unidas; esto no exigiría modificación alguna de la Carta ni había razones para que las Naciones Unidas no pudiesen adaptarse a una situación de esta índole.

240. La tercera cuestión, por último, era la de cómo llegar a una solución. Era cierto que la fragmentación de los pequeños territorios planteaba problemas y que las Naciones Unidas no debían fomentar las tendencias a la secesión. Pero, por otra parte, un comité que se ocupaba de las cuestiones de la descolonización debía interesarse en los problemas de un pequeño territorio tanto como los de las colonias de una gran Potencia. En realidad, los habitantes de Anguila, llegado el caso, preferirían depender del Reino Unido antes que de San Cristóbal.

241. El Gobierno Provisional de Anguila desearía que fuese a la isla un representante de las Naciones Unidas para juzgar por sí mismo sobre la situación, desearía que el Subcomité reconociese en una u otra forma que la Constitución impuesta por el Reino Unido no resolvía la cuestión ni se ajustaba a las disposiciones de la resolución 514. El Gobierno desearía igualmente que las Naciones Unidas recomendasen a todas las partes que no recurrieran a la fuerza. Consideraba finalmente que el Consejo podría pedir al Secretario General que encargase a alguien que se ocupara de estos problemas y estudiara el apoyo administrativo, el asesoramiento técnico y la ayuda económica que podrían prestarse a Anguila.

242. Estaba convencido de que era posible llegar a una solución para la cuestión de Anguila, y que esta solución podría después servir de modelo para muchas otras islas y pequeños territorios, y esperaba que el Subcomité adoptase el lema de Anguila: "No es necesario ser grande para ser libre".

243. El representante del Uruguay solicitó ciertas aclaraciones sobre dos de los principales protagonistas de la revolución pacífica de Anguila, a saber, el Sr. Peter Adams y el Sr. Ronald Webster. Preguntó cómo era posible fuese actualmente el Sr. Webster quien presidiese el Consejo de Anguila cuando el Sr. Peter Adams había sido iniciador de los acontecimientos y de la organización del referéndum, y representó a Anguila en la Conferencia de Barbados, cuyas proposiciones aceptó. Asimismo, le causaba asombro que el Sr. Adams hubiese declarado que temía por la seguridad de su familia. Desearía saber de dónde venían las amenazas de que se había hecho objeto a la familia del Sr. Adams. Desearía igualmente saber por qué la actitud de la población de Anguila parecía ser actualmente opuesta a lo que el Sr. Adams aceptó en Barbados. ¿Era la opinión pública de la isla lo que había cambiado o era el propio Sr. Adams?

244. El Sr. Fisher afirmó que el Sr. Adams no había cambiado y que su comportamiento de los últimos meses era fácilmente explicable, así como su actitud en la Conferencia de Barbados. En esta ocasión, el Sr. Adams insistió en que su delegación no estaba autorizada para comprometerse en nombre de la población de Anguila. Ante la actitud de Lord Shepherd y el cuasi ultimátum de la Conferencia, el Sr. Adams estimó que la mejor solución en ese momento consistía en firmar el informe de la Conferencia formulando reservas acerca de las facultades de su

delegación. Consideró que valía más ganar tiempo, evitar la crisis y volver a Anguila con el informe, para luego hacer observaciones y comentarios. Evitó así una prueba de fuerza y el retorno a la férula de San Cristóbal.

245. El que el Sr. Webster fuese Presidente del Consejo de Anguila se explicaba por lo siguiente: el Sr. Adams se ausentó varias veces y el Sr. Webster asumió la presidencia interina del Consejo. Cuando tres o cuatro días después de la Conferencia de Barbados el Sr. Bradshaw declaró por la radio de San Cristóbal que como consecuencia de la Conferencia de Barbados Anguila volvía a San Cristóbal, que habría una amnistía y que la isla iba a obtener créditos, los habitantes de Anguila creyeron que el Sr. Adams los había traicionado. Llegó incluso a hablarse de detenerlo. Además, desde el regreso del Sr. Adams a la isla el Consejo de Anguila se reunió y decidió, en presencia del Sr. Adams y con consentimiento, que sería mejor que el Sr. Webster continuase ocupando la Presidencia del Consejo. No se trataba en modo alguno de una revolución de palacio.

246. El representante del Uruguay deseaba conocer las condiciones en que se desarrolló y saber si ofreció las garantías necesarias, en particular en cuanto al anonimato de los electores.

247. El Sr. Fisher declaró que el Comité que tuvo a su cargo el gobierno de la isla hasta el 10 de julio publicó, el 8 o el 9 de julio, una proclamación que daba todos los detalles de la organización del referéndum. Sólo podrían votar los electores inscritos en los registros electorales de las últimas elecciones generales. La votación se desarrollaría desde las 6 hasta las 19 horas. Habría cinco mesas electorales, las mismas que se utilizaron en las elecciones generales de 1966. El control de la votación iba a estar asegurado por el personal electoral que había actuado en las últimas elecciones generales. El Sr. Fisher visitó personalmente dos de las mesas electorales y comprobó que no se planteaba ningún problema. Las boletas de votación tenían una parte separable que el elector firmaba y que servía de comprobante del voto. Las boletas estaban marcadas con un "sí" y el símbolo correspondiente, un sombrero, o con un "no" y el símbolo correspondiente, un zapato. Estos símbolos se eligieron entre cinco símbolos utilizados comunmente en la isla. Durante la noche los votos fueron contados por la persona que se había encargado de esa tarea en las últimas elecciones. Todo se desarrolló en orden y justicia. Por otra parte, había en ese momento en Anguila representantes de una media docena de periódicos que pudieron comprobar por sí mismos la legalidad de la consulta electoral.

248. El representante del Uruguay deseaba saber de qué fuente emanaba la declaración según la cual la población de Anguila no se consideraba obligada por la decisión, adoptada en la Conferencia de Londres, de hacer de la isla un Estado unificado con San Cristóbal y Nieves.

249. El Sr. Fisher respondió que emanaba del Consejo de Gobierno Provisional de Anguila, que después del referéndum del 11 de julio envió al Gobierno británico un telegrama en el cual informaba de que el pueblo de Anguila había decidido separarse de San Cristóbal y Nieves, pero que deseaba estudiar la posibilidad de establecer nuevos vínculos con el Reino Unido en el marco del Commonwealth.

250. El representante del Uruguay señaló que, en la sesión precedente, el Sr. Fisher subrayó las dificultades que enfrentaría una isla pequeña y pobre para sobrevivir como nación independiente. Estaba de acuerdo con las observaciones del Sr. Fisher sobre dicho punto, así como también en que no había razón por la que Anguila estuviese subordinada a San Cristóbal si la población no lo deseaba. Sin embargo, el panorama de la situación descrita por el Sr. Fisher parecía ser excesivamente dramático. En Anguila no se han perdido vidas ni han desembarcado tropas. Las dificultades que se planteaban derivaban de sus condiciones particulares, y no de los recientes acontecimientos políticos. Había que separar la realidad de la fantasía. Las Naciones Unidas tenían razón en preocuparse por la situación de la población, pero el Subcomité no debería ocuparse de cuestiones ajenas al principio de la descolonización.

251. El Sr. Fisher analizó las distintas soluciones posibles para los problemas de Anguila y, entre otras cosas, se refirió a la posibilidad de asociarse con San Martín, que estaba en parte bajo jurisdicción francesa y en parte bajo jurisdicción de los Países Bajos. El Sr. Berro deseaba preguntar al Sr. Fisher si se había llevado a cabo conversaciones con las autoridades de alguna de las partes de esa isla respecto a la posibilidad de tal arreglo.

252. Le había sorprendido en cierto modo la sugerencia del Sr. Fisher sobre alguna forma de asociación de Anguila con las Naciones Unidas. Verdad era que las innovaciones de hoy son los lugares comunes de mañana, pero resultaba difícil imaginarse una solución así en la práctica. En todo caso, era poco concebible para el porvenir inmediato, y Anguila necesitaba soluciones inmediatas para sus problemas.

253. Como subrayó en ocasiones anteriores, la tarea de las Naciones Unidas no consistió en persuadir a la población de los territorios coloniales para que optasen por tal o cual solución, sino simplemente en ayudarlos en la tarea de determinar su propio porvenir señalando a su atención las alternativas entre las cuales podían elegir: la independencia total, o alguna forma de federación o asociación con las islas vecinas, entendiéndose claramente que debían quedar en libertad de tratar de obtener en cualquier momento un cambio ulterior de su condición jurídica.

254. A pesar de las críticas del Sr. Fisher a la Constitución que según dijo impuso a Anguila el Reino Unido, la propuesta que hizo fue que debía buscarse una solución en cooperación con los países vecinos del Caribe; con ello reconocía al parecer que dichos países no se proponían hacer imposición alguna a los anguilanos. El llamamiento del Sr. Fisher en el sentido de que no se emplease la fuerza era hasta cierto punto superfluo en cuanto al Subcomité, ya que indudablemente todos sus miembros compartían esa preocupación los esfuerzos del Subcomité tendían a poner fin a la violencia y a la colonización.

255. Aunque reconocía valor de las opiniones del Sr. Fisher como autoridad en derecho internacional, consideraba que el Comité no tenía tanta necesidad de consejos como de informaciones bien fundadas que le permitiesen llegar a sus propias conclusiones.

256. El Sr. Fisher dijo que según las informaciones de que disponía no se habían llevado a cabo negociaciones con las autoridades de ninguna de las dos partes de San Martín, y la posibilidad de asociarse con esa isla sólo se había examinado en Anguila. En cuanto a la asociación con las Naciones Unidas, estaba de acuerdo en que se necesitaría tiempo para elaborar una solución de esa índole, y en que se necesitaba alguna forma de condición jurídica provisional para Anguila. Sin embargo, a menudo era más fácil idear nuevos procedimientos en función de un caso particular que en forma abstracta. Se reconocía en general que la descolonización de territorios isleños pequeños planteaba problemas, y Anguila ofrecía la oportunidad de hacer frente a esos problemas en un caso concreto.

257. En cuanto al uso de la fuerza, no temía, desde luego, que las Naciones Unidas recurrieran a ella, y lo que pedía era ayuda para garantizar que otros no lo harían. Respecto de las dificultades con que tropezaría una Anguila independiente, la



población resolvió que, cualesquiera que ellas fueran, si había que elegir entre la independencia y la subordinación a San Cristóbal elegiría la independencia. En su opinión, era un error atribuir demasiada importancia a la cuestión de la independencia como tal. En el mundo moderno la mayor parte de los países, independientes o no, mantenían lazos estrechos con sus vecinos. Se trataba de encontrar una solución que diese a Anguila una medida apreciable de gobierno propio. La ley tenía por objeto servir a los intereses del pueblo, y no a la inversa. Deseaba agregar que se había presentado ante el Subcomité para pedir ayuda, y no para tratar de ofrecer soluciones.

258. El representante de Venezuela dijo que las informaciones proporcionadas por el Sr. Fisher sobre la situación reinante en Anguila eran sumamente útiles. Uno de los puntos que se desprendían de su declaración y de las conversaciones del Subcomité con el Sr. Gumbs era que, aunque el Reino Unido había declarado repetidas veces que carecía de autoridad para intervenir en los asuntos internos del territorio, algunas de sus medidas recientes estaban destinadas, evidentemente, a ejercer presión sobre Anguila. La declaración del Secretario de Estado para las Colonias de que el Gobierno no aceptaría la situación surgida en Anguila, el envío de un barco de la Marina Real a patrullar algunas zonas del Caribe, y el reciente comentario hecho por un portavoz oficial de que se podría enviar a la cárcel a toda la población de la isla si sus dirigentes no aceptaban las conclusiones de la conferencia de los países del Commonwealth eran ejemplos claros de coerción.

259. El hecho de que las autoridades políticas de la isla hubiesen autorizado al Sr. Fisher a sugerir que sería una solución alguna forma de unión con las Naciones Unidas parecía indicar que el Gobierno del Reino Unido no había informado plenamente a la población de las tres formas de gobierno propio - asociación, integración e independencia - entre las que debía elegir. Preguntó al Sr. Fisher si, en su opinión, el pueblo de Anguila tenía conocimiento de esas posibilidades antes de crearse el Estado asociado.

260. El Sr. Fisher manifestó que desde comienzos de julio la población de Anguila había estado examinando una variedad de formas de independencia. No sabía si las opciones posibles habían sido plenamente comprendidas antes de la separación de San Cristóbal.

261. El representante de la Costa de Marfil dijo que las informaciones de que disponía el Subcomité, y en particular la reciente comunicación del People's Action Movement, indicaban que la situación actual era en gran parte consecuencia de que el gobierno central de San Cristóbal no estableció en Anguila un consejo de gobierno local, tal como lo requería la Constitución. También había pruebas de que el gobierno central estaba tratando de destruir al partido de oposición, el People's Action Movement, que contaba con el apoyo de la mayor parte de la población.

Preguntó al Sr. Fisher si tenía algún conocimiento de las razones por las que el gobierno de San Cristóbal no organizó elecciones para el gobierno local en Anguila.

262. El Sr. Fisher convino en que una de las quejas de Anguila era que no se había promulgado ninguna medida legislativa que permitiese la celebración de elecciones para el gobierno local en Nieves y Anguila, pero dijo que no tenía conocimiento de que hubiera razones valederas para esta demora. Era verdad que la población de la isla, en su totalidad, apoyaba al partido de oposición.

263. El representante de Madagascar preguntó al Sr. Fisher cuál era la opinión de las autoridades de Anguila sobre las recientes conversaciones del Commonwealth y cuál de las distintas soluciones que expuso en su declaración era la que preferían.

264. El Sr. Fisher dijo que no tenía información directa sobre las conversaciones del Commonwealth. Creía, sin embargo, que las medidas a largo plazo recomendadas en ellas revestían poco interés para las autoridades de Anguila, que querían una solución inmediata. Lo que la población de Anguila deseaba más que ninguna otra cosa era un sistema sustancial de gobierno propio, libre de conexiones políticas con San Cristóbal. A falta de esta solución, sería aceptable la condición jurídica de unidad con gobierno propio asociada a las Naciones Unidas. Dijo que se estaba examinando una forma interina de participación en el Commonwealth británico con arreglo a la cual un comité del Commonwealth aprobado por todas las partes proporcionaría a la isla asistencia en cuestiones administrativas y lograría que se levantase el embargo impuesto por el gobierno central. También dijo que los limitados recursos que poseía en ese momento Anguila procedían de préstamos y de donaciones de los simpatizantes. En un futuro próximo la isla podría explotar su condición jurídica provisional emitiendo monedas y sellos de correo propios, pero no se podrían esperar inversiones extranjeras considerables mientras Anguila no tuviese un gobierno estable y reconocido.

265. El representante de Bulgaria manifestó que de las declaraciones del Sr. Fisher se desprendía que la población anguilense se había visto incluida en el estatuto de Estado asociado otorgado a San Cristóbal, Nieves y Anguila sin haber sido consultada, y que dicho estatuto no correspondía a sus aspiraciones. Veía en ello un problema que superaba el marco de las relaciones entre San Cristóbal y Anguila y que era imputable a la política que el Reino Unido había aplicado en la región durante más de tres siglos y que seguía aplicando. Esta política era la causa fundamental de todas las dificultades económicas y políticas que existían en Anguila y que sin duda existirían un día en otras islas de la región, incluida San Cristóbal. Según The New York Times del 29 de agosto, los esfuerzos del Reino Unido por poner fin a la secesión de Anguila habían llegado a un punto muerto. Se pretendía que la fragata británica anclada en la región no era una amenaza para Anguila y que el único deseo de la Potencia administradora era mantener el orden, pero no era la primera vez que las Potencias coloniales presentaban un pretexto semejante y las Naciones Unidas no debían dejarse inducir a error.

266. Deploró que la Potencia administradora se hubiese abstenido de participar en los debates del Subcomité y, por lo tanto, de proporcionarle la información que éste tenía el derecho de esperar de toda Potencia administradora con respecto a los territorios de que era responsable.

267. El Sr. Fisher dijo que Anguila era un ejemplo de descolonización defectuosa. En el artículo de The New York Times mencionado por el representante de Bulgaria, se aludía erróneamente a un Estado federal de San Cristóbal, Nieves y Anguila. No había federación, puesto que Anguila no tenía gobierno autónomo. Las tres islas eran consideradas como si fuesen una sola.

268. El representante del Irán dijo que desearía recibir indicaciones más amplias sobre ciertos puntos. ¿Cuál era la formulación precisa de las preguntas que se hicieron a la población anguilense en el referéndum del 11 de julio?

269. El Sr. Fisher dio lectura a esas dos preguntas, que se publicaron en The New York Times.

"1. ¿Desea Vd. que Anguila se separe de San Cristóbal? ¿Sí? ¿No?

"2. ¿Está Vd. en favor de la formación de un gobierno provisional?  
¿Sí? ¿No?"

Por gobierno provisional se entendía un comité encargado del mantenimiento del orden.

/...

270. El Presidente quería saber qué vínculos orgánicos existían entre Anguila y San Cristóbal antes del otorgamiento del estatuto de Estado asociado.
271. El Sr. Fisher respondió que, de una manera general, la isla de Anguila había sido administrada por intermedio de San Cristóbal durante los 300 años de dominación colonial.
272. El Presidente preguntó al Sr. Fisher qué habría sido de Anguila si, respondiendo a un referéndum de votación única organizado por la Potencia administradora San Cristóbal hubiese elegido la asociación con el Reino Unido y Anguila la independencia.
273. El Sr. Fisher dijo que era difícil responder a esa pregunta. Lo que los anguilenses deseaban era una amplia autonomía, posiblemente dentro del marco de cierta forma de asociación con el Reino Unido, pero ciertamente no con San Cristóbal. Pensaban que podían dirigir sus propios asuntos sin tener que depender de otras islas de las que estaban separados por más de 112 kilómetros.
274. El Presidente pensaba que el pueblo anguilense tenía lazos étnicos y culturales con el de San Cristóbal. ¿Qué opinaba a este respecto el Sr. Fisher?
275. El Sr. Fisher dijo que tales lazos existían no sólo entre Anguila y San Cristóbal sino entre todas las islas de la región.
276. El Presidente preguntó si la asociación de Anguila con las Naciones Unidas, tal como la consideraba el Consejo del Gobierno Provisional de Anguila, sería diferente del régimen de administración fiduciaria en vigencia en tiempos de la Sociedad de las Naciones.
277. El Sr. Fisher contestó que Anguila desearía tener el estatuto de un Estado asociado plenamente facultado para administrarse a sí mismo y libre de toda dominación extranjera. La comunidad internacional le proporcionaría el asesoramiento y la asistencia necesarios en materia técnica, económica, jurídica, etc. Se daba cuenta de que ésta sería una tarea delicada y compleja para las Naciones Unidas, pero creía que era más fácil dedicarse a un caso particular que buscar una solución uniforme universalmente aplicable.
278. El Presidente preguntó al Sr. Fisher si creía que la forma de asociación que acababa de describir podría asegurar a Anguila la viabilidad y el progreso que constituían el fin último de la descolonización.

279. El Sr. Fisher contestó que para los anguilenses lo que importaba en primer lugar era la capacidad de dirigir sus propios asuntos. Sin duda no tendrían en seguida la competencia deseada, pero ¿no era mejor resolver uno mismo sus problemas que hacerlos resolver por otros, aun si la solución fuera mejor en el segundo caso?

280. El Presidente reconoció que en cierto modo la independencia era un objetivo en sí misma pero seguía creyendo que era ante todo un medio de obtener una libertad política y una prosperidad económica mayores. Se podía admitir que un país que había logrado recientemente la independencia tuviese al principio momentos muy difíciles y que su situación fuese temporalmente peor que bajo el régimen colonial, si se sabía desde un principio que ese país, aun al precio de grandes esfuerzos, estaba en condiciones de asegurarse una verdadera independencia económica y política que garantizaría a sus habitantes una vida mejor.

281. El Sr. Fisher también había hablado de diversas formas de asociación, incluso de administración fiduciaria, expresión que era preferible no emplear en un Comité que se ocupaba de la descolonización, y el Presidente quería saber qué medidas preconizaba para establecer lazos más estrechos entre Anguila y las demás islas de manera que, aunque gozando cada una de autonomía, estuviesen ligadas entre sí y, desde el punto de vista jurídico, se presentasen al mundo como una entidad.

282. El Sr. Fisher respondió que, cuando mencionó una forma de administración fiduciaria como solución posible, lo hizo solamente a título de solución transitoria ya que era seguro que la situación actual no podía prolongarse. La experiencia había demostrado que era difícil establecer una federación en las Antillas, pero se podría considerar la posibilidad de una forma de asociación en la que cada isla sería completamente autónoma pero dependería, en materia de defensa por ejemplo, del Reino Unido. Ante todo era necesario llegar a un acuerdo que no crease una situación de tensión en una isla o grupo de islas y que diese a cada una suficiente autonomía.

283. El Presidente, observando que el Sr. Fisher había declarado que era difícil crear una federación en las Antillas, preguntó si esa dificultad se debía a la presencia de ciertas personas en el gobierno de las islas o si eran las poblaciones de esas islas las que se oponían a un sistema de federación. Como la antigua Potencia administradora parecía constituir el único factor de unidad, el Presidente preguntó además si sería posible crear una estructura que favoreciera el establecimiento de relaciones más estrechas entre las islas y permitiera constituir una federación o acaso una confederación de Estados asociados.

284. El Sr. Fisher respondió que de hecho existían fuertes lazos culturales e históricos que deberían facilitar las relaciones entre las islas, pero en la actualidad su falta de autonomía hacía difíciles estas relaciones al exacerbar las tendencias a la insularidad, que conducían fatalmente a una fragmentación de las unidades territoriales.

#### B. Aprobación del informe

285. El Subcomité examinó sus conclusiones y recomendaciones sobre Antigua, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente en sus 87a. a 89a. sesiones, celebradas el 25 y el 29 de agosto de 1967, y las aprobó sujetas a las reservas formuladas por el representante de Bulgaria respecto del párrafo 5.

286. El Subcomité examinó también una propuesta hecha por el representante del Irán en el sentido de que se pidiera al Secretario General que iniciara un estudio sobre la posibilidad de tomar medidas para que los territorios pequeños que desearan ser plenamente autónomos pudieran obtener la condición de entidad soberana asociada con las Naciones Unidas. En su 97a. sesión, el Subcomité, a la luz de los debates celebrados, decidió someter el asunto al Comité Especial para su ulterior examen. El representante de Bulgaria se reservó la posición de su delegación.

#### C. Conclusiones y recomendaciones

287. El Subcomité recomienda al Comité Especial que apruebe las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1) El Comité Especial recuerda sus anteriores conclusiones y recomendaciones sobre estos Territorios, confirmadas por la Asamblea General.

2) Recuerda la resolución que aprobó en su 506a. sesión, celebrada el 23 de marzo de 1967, y, en particular el párrafo 2 de la parte dispositiva, en virtud del cual se encarga al Subcomité III de que "a la luz de los recientes acontecimientos constitucionales, examine la situación de dichos Territorios en todos sus aspectos, incluyendo la posibilidad de enviar una misión visitadora, y que informe al Comité Especial lo antes posible".

3) Deplora la actitud de la Potencia administradora que se ha negado a cooperar con el Subcomité III en sus esfuerzos para obtener información más completa sobre los acontecimientos políticos y constitucionales en los Territorios.

/...

4) Por estimarlo necesario para llevar a cabo su tarea, procedió a escuchar a personas que le suministraron información sobre los recientes acontecimientos políticos y constitucionales en Anguila.

5) Toma nota de los acontecimientos constitucionales ocurridos en estos Territorios, y considera que representan un cierto grado de progreso en la esfera política para los pueblos interesados.

6) Toma nota además de los recientes acontecimientos políticos ocurridos en la isla de Anguila.

7) Reafirma que la resolución 1514 (XV) continúa aplicándose plenamente a estos Territorios.

8) Tomando en cuenta la resolución 2232 (XXI), reitera que la pequeña superficie y la escasez de recursos en estos Territorios plantean problemas particulares que requieren especial atención.

9) Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de estos Territorios a ejercer el derecho a la libre determinación con plena libertad y sin limitación alguna. Pide a la Potencia administradora que asegure que los pueblos de los Territorios estén informados acerca de las diversas posibilidades que se les ofrecen para lograr los objetivos de la resolución 1514 (XV).

10) Pide a la Potencia administradora que promueva el desarrollo de vínculos más estrechos entre estos Territorios mediante la construcción de una infraestructura política, económica y social común y conforme a los deseos de la población.

11) Recordando el párrafo 6 de la resolución 2232 (XXI), que establece "que las Naciones Unidas deben prestar a los pueblos de esos Territorios toda la ayuda que necesiten en sus esfuerzos por decidir libremente su futura situación", reitera su creencia de que la presencia de Naciones Unidas durante los procedimientos vinculados con el proceso de libre determinación será esencial para asegurar que los pueblos de los Territorios puedan ejercer su derecho en completa libertad, sin restricción alguna y con completo conocimiento de las opciones que se les ofrecen.

12) Deplora que la Potencia administradora no haya permitido el envío de una misión visitadora a estos Territorios y afirma que tal visita sería útil y necesaria. Por lo tanto pide, una vez más, a la Potencia administradora que permita a las Naciones Unidas el envío de una misión visitadora a los Territorios y le extienda completa cooperación y asistencia.

V. BERMUDAS, BAHAMAS, MONTSERRAT, ISLAS TURCAS  
Y CAICOS E ISLAS CAIMAN

A. Examen por el Subcomité

Introducción

288. El Subcomité examinó la situación en los Territorios de Bermudas, Bahamas, Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán en sus 90a. a 96a. reuniones, celebradas entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 1967.

289. El Subcomité tuvo a la vista los documentos de trabajo preparados por la Secretaría (A/6700/Add.14 (Parte I), párrs. 406 a 604).

290. Conforme al procedimiento acordado por el Comité Especial, el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como Potencia administradora, participó en la labor del Subcomité sobre estos Territorios por invitación del Presidente.

Declaraciones generales

a) Bermuda, Bahamas y Montserrat

291. El representante de Bulgaria observó que, como la Potencia administradora se había negado nuevamente a permitir que una misión de las Naciones Unidas visitase los Territorios, el Subcomité sólo disponía de datos limitados.

292. Pese a todas las resoluciones y recomendaciones expresamente probadas por el Subcomité y otros órganos de las Naciones Unidas respecto de los pequeños Territorios que se examinaban, no se había hecho ningún progreso importante en la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia y el ritmo de progreso político había sido bastante lento. No adelantaba el proceso de libre determinación y la Potencia administradora no parecía estar dispuesta a crear las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho de libre determinación. No había ocurrido ningún cambio particular desde que el Subcomité examinó los Territorios por última vez; en realidad parecía haberse hecho muy pocos progresos desde 1964. Persistía la dominación colonial, y como podía verse en el documento de trabajo correspondiente (A/6700/Add.14 (Parte I), párr. 498), la actual Constitución de las Bahamas reservaba al Gobernador ciertas atribuciones importantes que ejercía a su discreción.



293. También era evidente que no había cambiado la situación económica de los Territorios. El testimonio prestado por un peticionario de las Bahamas en 1966 había mostrado que el costo de vida era muy elevado y los servicios sociales insuficientes. La economía, basada únicamente en el turismo, era débil e inestable, pese a lo cual no se había hecho ningún esfuerzo para fomentar otras industrias.

294. La Potencia administradora tampoco parecía prestar atención a la importante cuestión del Atlantic Undersea Test and Evaluation Centre. El establecimiento de una base militar extranjera en las Bahamas constituía una grave amenaza para la paz y la seguridad de la población de toda la región. Se estacionarían en la base, situada en una región sensible del mundo, centenares de marineros y civiles estadounidenses. Esto ciertamente no redundaba en provecho del pueblo de las Bahamas, a quien no se había consultado para nada. Además, la actitud adoptada por la Potencia administradora, que gozaba de ciertas atribuciones discrecionales en cuanto a la política extranjera y la defensa, era contraria al espíritu y la letra de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

295. También quería poner de relieve la cuestión de los casinos y establecimientos de juego, que se habían abierto en las Bahamas y otros Territorios con capital estadounidense. La mayoría de estos casinos estaban controlados por intereses estadounidenses que gozaban de privilegios fiscales.

296. El Comité Especial debía reafirmar que la Declaración sobre la concesión de la independencia se aplicaba plenamente a los Territorios examinados y debía ser aplicada por la Potencia administradora. La delegación de Bulgaria insistía en que se enviaran misiones visitadoras a los Territorios para que el Subcomité llevase a cabo su tarea.

297. El representante de Venezuela dijo que tras haber leído atentamente los documentos de trabajo preparados por la Secretaría, había llegado a la conclusión de que la información que contenían acerca de una serie de cuestiones era insuficiente. A su juicio, la Potencia administradora debía facilitar al Subcomité informaciones más completas y precisas que le permitieran sacar conclusiones y hacer recomendaciones. Por ejemplo, el documento de trabajo sobre las Bermudas (A/AC.109/L.361) contenía muy poca información sobre la Conferencia Constitucional celebrada en Londres en noviembre de 1966. Se hablaba del informe de la mayoría y de los informes de las minorías, pero éstos no representaban más que las opiniones de los partidos políticos y no indicaban que decisiones concretas se habían tomado con respecto al

sistema electoral. En una petición dirigida al Comité Especial, el Progressive Labour Party (PLP) había denunciado que el sistema electoral estaba fundado en una política encaminada a segregar a la clase trabajadora y a los electores de color y había pedido al Gobierno del Reino Unido que insistiera en la institución de un sistema electoral que no estuviera fundado en distinciones de clase o de color. Además, el PLP había recomendado que se concediera la independencia a las Bermudas. Según informa en la conferencia de prensa celebrada después de la clausura de la Conferencia Constitucional, el Secretario de Estado británico para las Colonias había declarado que, al parecer, el PLP había cambiado de posición en la materia y que se creía que ningún delegado deseaba ya la independencia. Ahora bien: en una carta dirigida al Times de Londres, el jefe del grupo parlamentario del PLP había dicho que su partido estaba a favor de la independencia pero que estimaba que los habitantes de las Bermudas sólo debían resolver la cuestión de la independencia después de haber oído todos los argumentos en favor y en contra. Por esa razón, precisamente, el PLP no había planteado la cuestión de la independencia en la Conferencia Constitucional. En todo caso, la delegación venezolana tenía la impresión de que, en conjunto, desde las elecciones de 1963 y desde que la Asamblea General hizo sus últimas recomendaciones acerca de las Bermudas, se había progresado poco en lo político.

298. La economía de las Bermudas dependía casi exclusivamente del turismo. La existencia de casinos contribuía a atraer turistas pero, al mismo tiempo, tenía efectos indeseables para la población autóctona. La información disponible no permitía ver si la Potencia administradora había tomado disposiciones para diversificar la economía y desarrollar la agricultura con objeto de que las islas pudieran valerse por sí mismas.

299. También deseaba tener información más precisa sobre la enseñanza. Desearía saber, sobre todo el número de niños en edad escolar para poder juzgar si había bastantes escuelas, si las subvenciones del gobierno eran suficientes, etc. En lo que respecta a la sanidad, le inquietaba que la tasa de mortalidad infantil fuera tan elevada en las Bermudas. Era preciso que la Potencia administradora ampliara más los servicios de obstetricia y pediatria.

300. Se desprendía de los documentos presentados al Subcomité que el Jefe del Ejecutivo, es decir, el Gobernador nombrado por la Reina, disfrutaba de poderes muy

amplios. En el ejercicio de sus funciones le asesoraba un Consejo Ejecutivo, pero no estaba obligado a aceptar la opinión de ese Consejo. El Gobernador podía decretar la disolución de la Asamblea y la Corona estaba facultada para anular las leyes votadas por el Parlamento colonial. Deseaba saber qué cambios se habían previsto al respecto en la Conferencia Constitucional.

301. El representante del Uruguay subrayó que la falta de información se debía al silencio de la Potencia administradora. Los documentos de trabajo preparados por la Secretaría contenían datos sacados de todas las fuentes posibles, pero esos datos no bastaban para que el Subcomité hiciera recomendaciones precisas. Recordó que la última vez que había hecho uso de la palabra para referirse a la cuestión había dicho que si la Potencia administradora no suministraba la información indispensable, el Subcomité tendría que ir a esos Territorios para estudiar la situación sobre el terreno. El Subcomité debía obrar sin demora para impedir que la población local se hallara a merced de elementos sin escrúpulos. En efecto: las revistas Time y Life habían publicado artículos donde denuncian las maniobras de los pandilleros, sobre todo en las Bahamas, donde se entregaban al tráfico de estupefacientes, fomentaban los juegos de azar y, bajo el manto de sociedades ficticias, se dedicaban a toda clase de actividades ilícitas. Aunque algunas de esas actividades probablemente habían cesado, a raíz de la publicidad resultante de esos artículos, pero no se sabía qué influencia política ejercían todavía tales elementos.

302. En septiembre de 1966, un miembro de la Asamblea, el Sr. Fawkes había propuesto que se reuniera una conferencia constitucional para examinar la cuestión de la independencia de las Bahamas y había declarado que la independencia era inevitable por tres razones primordiales. Sin embargo, ello sólo había sido una maniobra de un partido político, que no había aportado nada constructivo y con la que no se había propuesto ninguna solución concreta. El Sr. Fawkes parecía haber reclamado la independencia más bien por razones de orden económico que por razones de orden constitucional. En el debate sobre la moción del Sr. Fawkes, el entonces Primer Ministro había declarado que la independencia le costaría muy cara a las Bahamas y que requeriría recursos considerables que, según el Gobierno, se podrían emplear mucho mejor en el desarrollo de las Bahamas en interés de todos sus habitantes. Como su moción había sido rechazada, el Sr. Fawkes había dirigido al Comité Especial una petición en ese mismo sentido.

303. En diciembre de 1966 se habían celebrado elecciones generales, como consecuencia de las cuales se había constituido un nuevo gobierno en enero de 1967. Al entrar en funciones, el nuevo Primer Ministro había tomado disposiciones para tranquilizar a los turistas y a los inversionistas acerca de las intenciones de su gobierno y había dirigido un mensaje al Presidente de los Estados Unidos en el que le garantizaba que las Bahamas querían mantener relaciones de amistad con ese país y seguir desempeñando su papel en el sistema de defensa del mundo occidental e iban a dejar de ser el paraíso de los pandilleros. Esa nota había sido alentadora, pero el Subcomité no había recibido más información sobre la situación en las Bahamas desde febrero de 1967. Propuso por ello que el Subcomité pidiera a la Potencia administradora que le facilitase información suplementaria para poder fundar sus recomendaciones en datos de actualidad.

304. El representante del Reino Unido dijo que la Potencia administradora ya había presentado al Subcomité un informe detallado sobre Montserrat, que estaba resumido en los párrafos 121 a 125 del informe del Comité Especial a la Asamblea General (A/6300/Add.10, cap. XXII, Anexo). Conforme a la nueva Constitución, el Territorio poseía actualmente un Consejo Ejecutivo, a cuya cabeza se hallaba un Ministro principal, y un Consejo Legislativo compuesto de siete miembros elegidos, dos miembros funcionarios y un miembro designado. En las elecciones de marzo de 1966, el Montserrat Labour Party había logrado una vez más la mayoría. En la campaña electoral, no se habían planteado cuestiones constitucionales y sólo se había discutido el desarrollo económico y social. No obstante, el Gobierno del Reino Unido estaba dispuesto a convocar una conferencia para estudiar la revisión de la Constitución de Montserrat tan pronto como los partidos políticos del Territorio estuvieran listos para ello.

305. Conforme a su programa electoral, el Gobierno de Montserrat había concentrado sus esfuerzos en desarrollar la agricultura y el turismo. Durante el último año civil, el Reino Unido había prestado asistencia al Territorio por un monto total de 274.000 libras para la ejecución de programas de desarrollo y de protección social y para mejorar las instalaciones del aeropuerto de Blackbourne.

306. De los tres Territorios en examen, las Bermudas había sido el que había progresado más en el plano político y constitucional. Recordó la evolución constitucional de las Bermudas desde el establecimiento de un gobierno representativo

en 1620 y subrayó que, como en el caso del Reino Unido, la Constitución del Territorio constaba de toda una serie de disposiciones escritas y de muchas convenciones no escritas. Los textos escritos daban a veces una impresión engañosa de la situación real. En efecto, aunque teóricamente el Gobernador estaba dotado de poderes muy amplios y la Asamblea, cuyos miembros eran elegidos, parecía no participar apenas en la administración del Territorio, en la práctica era precisamente la Asamblea la que había de aprobar toda la legislación y todos los gastos, había una estrecha cooperación entre el ejecutivo, más particularmente el Gobernador, y el órgano legislativo. En realidad, por tanto, las Bermudas habían disfrutado desde hacía cierto tiempo de bastante autonomía. También se había progresado mucho en el plano electoral. En 1963 se había concedido el derecho de sufragio a todos los naturales de las Bermudas de más de 25 años de edad, y a los propietarios, que hasta entonces habían podido votar en todas las parroquias en que tenían bienes, se les había restringido ese derecho a un solo voto suplementario. A principios de 1966, se había reducido la edad para votar a los 21 años y ese voto adicional de los propietarios se había abolido. Con ello las Bermudas, en un espacio de tres años, habían pasado por una transición completa hacia el voto universal de los adultos, proceso que en el Reino Unido había requerido más de un siglo.

307. Tal era la situación en las Bermudas al tiempo de celebrarse la Conferencia Constitucional en Londres del 8 al 22 de noviembre de 1966. El documento de trabajo preparado por la Secretaría (A/6700/Add.14 (Parte I), párrs. 444 a 467) resumía la labor de esa Conferencia. El informe de la Conferencia no había sido aprobado por unanimidad, y se le habían agregado dos informes de minoría, uno firmado por dos representantes independientes y otro por los representantes del Progressive Labour Party. Aquéllos afirmaban que las decisiones tomadas iban demasiado lejos y éstos que los cambios previstos no eran suficientes. Dada la gran divergencia de esas dos opiniones, parecería, pues, que tales decisiones representaban un término medio satisfactorio y de hecho la mayoría de los delegados las habían aceptado. Conforme a tales decisiones, las Bermudas tendrían una Constitución escrita única, que se les concedería por Order in Council, como a los demás Territorios administrados por el Reino Unido. En esa Constitución se preveía para las Bermudas un gobierno responsable, pero el Gobernador tendría poderes especiales en materia de defensa, relaciones exteriores, seguridad interna y policía. El Territorio tendría dos cámaras:

una alta, llamada Consejo Legislativo, con cinco miembros designados por el Gobernador y seis escogidos por los jefes de los dos partidos principales, y una cámara baja o Asamblea, con 40 miembros elegidos por sufragio universal de los adultos. La primera tendría poderes análogos a los de la Cámara de los Lores. Para las elecciones a la Asamblea, se había creado una comisión especial, encabezada por un presidente independiente, con el encargo de delimitar nuevas circunscripciones electorales de manera que todas ellas tuvieran aproximadamente el mismo número de habitantes adultos, sin distinción alguna por motivos de raza. Una vez que hubiera sido elegida la Asamblea, se constituiría, por recomendación del miembro de la Asamblea que mereciera más la confianza de sus colegas, un nuevo Consejo Ejecutivo compuesto de miembros de las dos cámaras conforme a la Constitución. El Gobernador habría de actuar conforme a los dictámenes del Consejo Ejecutivo en todas las materias, salvo en lo referente a relaciones exteriores, defensa, seguridad interna y policía. La nueva Constitución de las Bermudas garantizaba, asimismo, los derechos y las libertades fundamentales y aseguraba la independencia de la judicatura y de la administración pública. Facilitaría así una forma moderna de gobierno.

308. El informe de la Conferencia ya había sido aprobado por la Asamblea Legislativa y la comisión especial encargada de delimitar las circunscripciones electorales había dado cima a su labor. Sus recomendaciones eran unánimes, salvo en lo relativo a una circunscripción acerca de la cual las recomendaciones de la mayoría entrañaban un número mayor de circunscripciones casi iguales que las propuestas por un miembro disidente. La Asamblea había aceptado las recomendaciones de la Comisión y había decidido, además, hacer más flexibles las disposiciones que obligaban a ciertos funcionarios a dimitir para poder presentar su candidatura a la Asamblea o para formar parte de ella. Además, había aumentado apreciablemente la remuneración de los parlamentarios. Ello permitiría ampliar el círculo de personas capaces para actuar en la Asamblea Legislativa. De acuerdo con la decisión de la Conferencia se había designado también a un experto en registros electorales, cuyo informe llegaba a la conclusión de que el sistema era justo y eficaz. Las recomendaciones de este informe habían sido aceptadas por la Asamblea, con una pequeña excepción relativa a una dependencia móvil de inscripción.

309. Una vez promulgada la Constitución de las Bermudas por Order in Council, habría que modificar o redactar gran número de leyes locales. Habría que preparar las listas electorales de las nuevas circunscripciones y que tomar otras disposiciones necesarias para celebrar las nuevas elecciones generales. Era probable que las inscripciones electorales se hicieran en la primavera próxima y que las elecciones generales se celebraran en el momento previsto, es decir, a mediados de 1968. La nueva Constitución eliminaba ciertos aspectos arcaicos del viejo sistema constitucional e introducía varias innovaciones importantes. Sin embargo, como había señalado el Ministro de Estado para los Asuntos del Commonwealth en la Cámara de los Comunes cuando se examinaba el proyecto de ley sobre la Constitución de las Bermudas, las constituciones siempre evolucionaban y, sin duda, más adelante se propondrían reformas. El Gobierno del Reino Unido siempre estaría dispuesto a tomar en consideración esas propuestas a su debido tiempo, una vez puesta a prueba la nueva Constitución.

310. Refiriéndose seguidamente al documento de trabajo sobre las Bermudas preparado por la Secretaría, señaló que los párrafos referentes a la situación de los partidos políticos en las Bermudas, ya no correspondían a la realidad. En efecto, tres antiguos afiliados al Progressive Labour Party (PLP) habían formado un nuevo partido, el Bermuda Democratic Party, que era actualmente, por su importancia, el segundo partido de la Asamblea. Además, otro antiguo afiliado del PLP actuaba en la Asamblea como independiente. Con esos cambios, la composición de la Asamblea había quedado así: United Bermuda Party 23 diputados; independientes, ocho; Bermuda Democratic Party tres diputados; y Progressive Labour Party dos.

311. La llamada "Bermuda Constitutional Conference" mencionada en el párrafo 21 del documento de trabajo y en las peticiones dirigidas al Comité Especial, no era, en todo lo que la delegación del Reino Unido sabía, una organización política con un número cualquiera de afiliados. Por supuesto, no había ninguna relación entre esa "Constitutional Conference" y la Conferencia Constitucional celebrada en Londres en noviembre de 1966.

312. En el párrafo 16 habría que mencionar que en las Bermudas había un tribunal de apelación. Por último, la redacción del párrafo 91 tal vez no

destacase con claridad suficiente el hecho de que no existía ya discriminación racial en lo que respectaba a la admisión en las escuelas total o parcialmente subvencionadas por el Gobierno.

313. Refiriéndose a las Bahamas, recuerda que obtuvieron la autonomía interna en 1964. El Gobernador estaba encargado de las relaciones exteriores, la defensa, la seguridad interior y la policía; salvo en esas esferas, el Gobernador actuaba con el previo asesoramiento de los ministros. Conforme a la Constitución promulgada en 1964, había un Gabinete presidido por un Primer Ministro y compuesto de ocho ministros, así como un Parlamento compuesto de un Senado y una Asamblea. En enero de 1967, se habían celebrado por vez primera en las Bahamas elecciones generales a base del sufragio universal, y había quedado abolida la segunda vuelta que se limitaba a los propietarios y los arrendatarios de bienes raíces. El número de miembros de la Asamblea había aumentado, y una comisión especial había delimitado 38 circunscripciones. El número de puestos previsto para la isla de New Providence, donde se encontraba Nassau; la capital, había pasado de 12 a 17. La representación de las demás islas seguía siendo igual (21 puestos); sin embargo, estos puestos habían sido objeto de una nueva distribución.

314. Con las elecciones, el número de puestos del Progressive Liberal Party, dirigido por el Sr. Lynden Pindling, había pasado de 4 a 18. El United Bahamas Party, con 18 escaños también, había perdido varios puestos y el Bahamas Labour Party había conservado el único puesto que tenía. El National Democratic Party, que tenía tres puestos en la Asamblea anterior, no había ganado ninguno en la nueva, y había sido elegido un diputado independiente, como en la Asamblea anterior. En consecuencia, el Gobernador había invitado al Sr. Pindling, como jefe parlamentario del PLP, a formar gobierno. El anterior Primer Ministro, Sir Roland Symonette, había pasado a ser jefe de la oposición. En una conferencia de prensa celebrada el 16 de enero, el nuevo Primer Ministro había anunciado que su Gobierno tenía la intención de fomentar el turismo y las inversiones y de seguir manteniendo relaciones de amistad con los países de la región.

315. La delegación del Reino Unido estaba al tanto de que en el Subcomité se había mencionado la cuestión de los establecimientos de juego en las Bahamas. Juzgaba apropiado, a ese respecto, recordar que el Secretario para las Colonias había

/...



anunciado en diciembre del pasado año en la Cámara de los Comunes que el Primer Ministro de ese Territorio estaba dispuesto a aceptar que expertos independientes hicieran una investigación acerca de las acusaciones contra la administración de los casinos de las Bahamas. El 1.<sup>o</sup> de marzo de 1967, el Ministro de Estado para los Asuntos del Commonwealth había informado a la Cámara de los Comunes que las autoridades que acababan de ser elegidas en las Bahamas habían instituido una comisión de investigación, conforme a las Bahamas Commission of Inquiry Act. Un ex comisario adjunto de Scotland Yard había aceptado la dirección de la encuesta, y los demás miembros de la comisión eran un abogado y un detective jefe de Scotland Yard. Esa comisión había empezado sus investigaciones en Nassau el 13 de marzo. Habida cuenta de esas circunstancias, no sería procedente que la delegación del Reino Unido, o cualquier otra delegación, hiciera observaciones que pudieran prejuzgar el informe de la Comisión.

316. El Subcomité y el Comité Especial se habían venido interesando por la cuestión de las actividades de los ministros que eran incompatibles con sus funciones. Tal cuestión había sido planteada por el Sr. Pindling, actualmente Primer Ministro de las Bahamas, cuando había comparecido ante el Comité Especial como peticionario. El nuevo Gobierno de las Bahamas había redactado un código de ética administrativa que había transmitido a la Asamblea el 15 de junio. Previamente había aprobado el pago de sueldos y prestaciones a los ministros y a los tres miembros de la Asamblea. Anteriormente, éstos no percibían ninguna remuneración y estaban autorizados a seguir ejerciendo sus actividades comerciales privadas. El nuevo código exigía que los ministros procedieran de manera que no surgiera ningún conflicto entre sus intereses privados y sus deberes públicos. Les estaba absolutamente prohibido participar activamente en empresas que tuvieran relaciones contractuales con algún departamento de la administración. El código se fundaba en los principios enunciados en 1952 por Sir Winston Churchill con respecto al Gobierno del Reino Unido, y comprendía, asimismo, la práctica que se había ido estableciendo en los países del Commonwealth. Tenía a disposición de los miembros del Subcomité el texto íntegro de ese nuevo código.

317. A principios de 1967, el Gobierno de las Bahamas había encargado a un economista eminente, Sir Arthur Lewis, de Santa Lucía, que hiciera recomendaciones preliminares para un estudio económico de las Bahamas que pudiera servir para preparar

un plan completo de desarrollo. Entre sus recomendaciones, cabía citar la de que se nombrara un consultor industrial encargado de examinar cuestiones como la utilización actual de la mano de obra especializada y las posibilidades de formación profesional, la creación de un organismo de desarrollo, la reforma de la ley de fomento de la industria, el aumento de la producción agrícola local para el consumo interno y la posibilidad de crear pequeñas industrias para el mercado local. A raíz de esas recomendaciones, se había confiado a una firma de consultores de Puerto Rico la ejecución de un programa de asistencia técnica. El Gobierno de las Bahamas había acelerado, asimismo, sus planes de expansión de la enseñanza y contratado recientemente un centenar de profesores en Gran Bretaña.

318. Varios puntos del documento de trabajo preparado por la Secretaría (A/6700/Add.14 (Parte I)), exigían observaciones. El párrafo 502 principalmente, parecía decir que era necesario el asentimiento del Gobernador para la promulgación de todas las leyes aprobadas por la Asamblea y, en especial, que las leyes sobre tributación o sobre gastos del tesoro público no podían ser promulgadas más que por recomendación o con el asentimiento del Gobernador. Esa presentación de los hechos daba una impresión falsa de la situación. En efecto, conforme al artículo 22 de la Constitución, el Gobernador sólo podía actuar por consejo del Gabinete o de un ministro que representase al conjunto del Gabinete. El Gobernador actuaba por consejo de los ministros, salvo en un pequeño número de asuntos que se especificaban en el artículo 53, párrafo 3 de la Constitución para los que se requería una decisión del Gobierno del Reino Unido. En cuestiones tales como el refrendo de leyes sobre impuestos o gastos públicos, el Gobernador estaba obligado a actuar conforme al dictamen de los ministros.

319. Al leer el inciso e) del párrafo 514 del documento de trabajo se podría creer que, en las últimas elecciones, la votación no había sido secreta. Ahora bien, la votación era secreta en las Bahamas. La propuesta mencionada en ese inciso era, simplemente, que se tomaran más precauciones.

320. El representante de Venezuela señaló que, durante las últimas elecciones en Montserrat, no se habían planteado ni la cuestión de la evolución constitucional

ni la cuestión de la independencia. Cabía preguntarse por ello qué se había hecho para aplicar a ese Territorio la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

321. Con respecto a las Bermudas y las Bahamas, subrayó que la Potencia administradora no había puesto a los partidos políticos en condiciones de pronunciarse sobre el estatuto político de esos Territorios. La Constitución de las Bermudas se remontaba a 1620, y desde esa época no parecían haberse registrado muchos cambios ni progresos, ni siquiera hacia la autonomía interna. Los poderes del Gobernador habían seguido siendo los mismos; nombraba a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los del Consejo Legislativo, podía disolver la Asamblea, debía prestar su consentimiento para la promulgación de las leyes y poseía amplios poderes en lo que respectaba a las relaciones exteriores y a la seguridad del Territorio. Señaló asimismo que, con ocasión de las elecciones, el Progressive Labour Party de las Bermudas había publicado un manifiesto en el que atacaba al sistema electoral, que a su juicio se basaba en una política de segregación. El representante del Reino Unido acaba de hablar de un nuevo sistema electoral y convendría que detallase las medidas adoptadas para eliminar la segregación. El Progressive Labour Party había recomendado también que las Bermudas se independizasen, no obstante lo afirmado por el Secretario de Estado para las Colonias en una conferencia de prensa celebrada después de la clausura de la Conferencia Constitucional. Al Subcomité le agradaría disponer de detalles más amplios sobre esa Conferencia Constitucional y sobre las medidas adoptadas por el Reino Unido para atender los deseos de la población, es decir, para hacerla progresar hacia la independencia, objetivo que parecía seguir estando muy lejano.

322. El representante de Bulgaria señaló que, desde su último examen de la cuestión de los territorios, la Potencia administradora no parecía haber adoptado ninguna medida concreta para segurar la aplicación de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. El hecho de que la Constitución de las Bermudas fuera una de las más antiguas del Commonwealth británica no tenía gran importancia. La Potencia administradora no debía adoptar medidas para modernizar la administración, sino para asegurar el proceso de descolonización

de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. El Subcomité debía colaborar con los demás órganos interesados de las Naciones Unidas y con el Reino Unido para adoptar medidas concretas que permitieran aplicar la Declaración sobre la Concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

323. La declaración del representante del Reino Unido era muy útil para el Subcomité, pero no podía serlo tanto como una misión visitadora que reuniera información sobre el terreno. Por lo demás, deseaba saber si la población de los Territorios estaba al corriente de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y de las demás decisiones de las Naciones Unidas.

324. El representante de Italia observó que habían ocurrido ciertos cambios en los territorios. En materia constitucional la práctica era más importante que el texto oficial de la Constitución, y por consiguiente, deseaba que se dieran detalles sobre las modificaciones prácticas mencionadas por el representante del Reino Unido.

325. El representante del Reino Unido dijo que las sugerencias y comentarios hechos sobre la aplicación de la resolución 1514 (XV) en las Bermudas, las Bahamas y Montserrat parecían revelar algunos equívocos acerca de la política de su Gobierno en esos y otros territorios coloniales. En realidad no había conflicto entre el párrafo 3 de la parte dispositiva de esa resolución y los procedimientos para el desarrollo constitucional aplicados en los Territorios: el Gobierno británico actuaba en consulta con la población y con el consentimiento de ella y se guiaba por sus deseos en cuanto al ritmo y la dirección de su progreso político, libremente expresado mediante procedimientos parlamentarios democráticos. Ello era evidentemente compatible con la importancia que en la resolución 1514 (XV) se atribuía a la voluntad libremente expresada de los pueblos de los países coloniales como medida del progreso constitucional en el traspaso de los poderes a la población local.

326. En la resolución 1514 (XV) no se exigía que se forzase a los pueblos coloniales a adoptar decisiones sobre su estatuto definitivo antes de que desearan hacerlo y sería improcedente que el Gobierno del Reino Unido o el Comité Especial ejercieran presión sobre ellos. En consecuencia el punto de vista del representante búlgaro

según el cual el progreso político y constitucional antes de la descolonización no interesaba al Subcomité era contrario a la resolución 1514 (XV) e ignoraba los deseos de los propios pueblos coloniales.

327. Ya había dado cuenta de las nuevas disposiciones constitucionales para las Bermudas en su declaración de la sesión anterior, pero los comentarios formulados posteriormente por miembros del Subcomité indicaban que era necesario esclarecer una vez más las atribuciones del Gobernador. Como ya había dicho, el Gobernador no elegía a los Ministros del Gobierno; su función consistía en nombrar como Jefe de Gobierno, o Primer Ministro, al miembro de la Asamblea que tenía más probabilidades de obtener el apoyo de la mayoría. Seguidamente estaba obligado a contar con el asesoramiento del Jefe de Gobierno para nombrar a los demás Ministros. Por supuesto, toda elección equivocada de Jefe de Gobierno quedaría rechazada al no obtener el voto de confianza de los miembros elegidos de la Asamblea. Análogamente, en el caso del Consejo Legislativo, o cámara alta, de un total de once miembros el Gobernador tenía que nombrar a seis propuestos por los dirigentes de los principales partidos políticos. Además, la facultad del Gobernador de reservar su asentimiento a los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa era sumamente limitada; excepto en el caso de sus responsabilidades especiales para los asuntos exteriores, defensa, seguridad interna, policía y algunas otras cuestiones, tenía que aceptar el dictamen del Consejo Ejecutivo para conceder o reservar su refrendo. Su facultad de disolver la Asamblea Legislativa estaba sujeta a restricciones análogas.

328. La sugerencia de que el nuevo sistema electoral de las Bermudas contenía elementos de discriminación racial era totalmente infundada. El informe de la Conferencia Constitucional mostraba que la Comisión encargada de demarcar las circunscripciones electorales había dado instrucciones para que no se tomase en cuenta la distribución racial de los electores.

329. En los tres Territorios había una prensa libre y activa y los periódicos y otros medios de información daban amplia difusión a todas las resoluciones de las Naciones Unidas y a las deliberaciones que interesaban a los Territorios. La prensa y otros medios de comunicación podían obtener información de la Oficina Regional de las Naciones Unidas, de la Oficina de Prensa del Gobierno y de las demás fuentes que estaban a la disposición de cualquier país independiente.

330. La delegación del Reino Unido esperaba que el Subcomité revisase las partes pertinentes de su proyecto de conclusiones y recomendaciones sobre los Territorios a la luz de la información que había proporcionado.

331. El representante de Bulgaria dijo que su delegación reconocía que se había realizado un progreso constitucional limitado en los Territorios en examen; sin embargo, cabía poner en duda el hecho de que las Bermudas, por ejemplo, que hasta el año en curso habían sido gobernadas por disposiciones constitucionales del siglo XVII, constituyeran un ejemplo de progreso satisfactorio. La Potencia administradora tenía el deber de estimular activamente la descolonización y tomar medidas concretas para divulgar las disposiciones de la resolución 1514 (XV). En consecuencia, el Subcomité no podía aceptar como satisfactoria la seguridad dada de que la población de los Territorios tenía pleno acceso a la información sobre las deliberaciones de las Naciones Unidas y las decisiones sobre sus asuntos, ni la garantía de la Potencia administradora de que se celebraría una conferencia constitucional para Montserrat cuando los partidos estuviesen listos para ello. Por otra parte, al menos en un Territorio, las Bahamas, el Gobernador conservaba todavía considerables poderes y controlaba las principales esferas de la vida política. La delegación búlgara esperaba que en lo futuro la Potencia administradora cooperase más efectivamente con el Comité Especial y, en particular, que permitiese que una misión visitadora recorriera los Territorios del Caribe.

332. El representante de Madagascar se mostró de acuerdo con las observaciones del representante de Bulgaria sobre las atribuciones del Gobernador de las Bahamas. Pidió al representante del Reino Unido que indicase al Subcomité la fecha aproximada en que se esperaba traspasar a un gobierno electivo los poderes del Gobernador y en que el parlamento local sería facultado para promulgar leyes sin necesidad del asentimiento del Gobernador.

333. El representante del Reino Unido, contestando al representante de Bulgaria, señaló que eran los propios partidos políticos de Montserrat los que decidirían el momento oportuno para celebrar una conferencia constitucional.

334. En cuanto a la sugerencia de que el Gobernador de las Bahamas controlaba todavía las principales esferas de la vida económica y política del Territorio, la documentación puesta a disposición del Subcomité dejaba claramente sentado que el Territorio gozaba de un gobierno interno plenamente autónomo en virtud de su

Constitución. Por otra parte, los párrafos 499 y 502 del documento (A/6700/Add.14 (Parte I)) eran inexactos en cuanto a los hechos y debían corregirse. El poder del Gobernador de negar su consentimiento a la promulgación de las leyes sólo se ejercía previo dictamen de los Ministros de las Bahamas, salvo en una reducida categoría de casos extraordinarios. En la Conferencia Constitucional de 1963, cuyos resultados habían sido ampliamente discutidos por el Subcomité en 1965 y 1966 y resumidos en los informes del Comité, se habían convenido los poderes del Gobernador en cuanto a los nombramientos para el Senado. Deseaba solamente señalar una vez más que no era cierto que el Gobernador hiciera todos los nombramientos para el Senado a su discreción, como se había sugerido. En cuanto a la cuestión planteada por el representante de Madagascar acerca de las atribuciones del Gobernador relativas a la legislación, que se describían inexactamente en el documento de trabajo, se remitió a su propia declaración en la 93a. sesión celebrada la víspera por el Subcomité.

335. El representante de Venezuela dijo que la escasa información que figuraba en los documentos de trabajo de la Secretaría había suscitado dudas en cuanto a la libertad de la Asamblea Legislativa del Territorio. Esas dudas habían sido sólo parcialmente disipadas por las declaraciones del representante del Reino Unido. Aunque acaso las atribuciones del Gobernador no fueran absolutas, tenía algún poder para limitar la acción legislativa.

336. El Subcomité no había sido establecido para tomar nota de los cambios en los sistemas coloniales, sino para observar el progreso en la aplicación de la resolución 1514 (XV), que fue aprobada como resultado de un clamor general contra el colonialismo. Aunque las Naciones Unidas no podían forzar a un Territorio a elegir ningún sistema particular, sí podían exigir que la población estuviese enterada de las posibilidades que se le ofrecían y que se le permitiera elegir en completa libertad.

337. El representante del Reino Unido contestando a los representantes de Bulgaria y Madagascar, se refirió a los párrafos 497, 498 y 503 del documento de trabajo (A/6700/Add.14 (Parte I)) y dijo que la Constitución de las Bahamas disponía que, en el ejercicio de sus funciones, el Gobernador debía obtener el consejo del Gabinete y actuar en conformidad con el mismo, excepto en las esferas descritas en el párrafo 498 del documento de trabajo. Aunque por pura forma el Gobernador daba su asentimiento a las decisiones, éstas eran adoptadas por los Ministros de las Bahamas.

338. En la Conferencia Constitucional de 1963 se había convenido en que algunos miembros del Consejo Legislativo completarían los términos para los que se les había nombrado. La decisión de esa Conferencia en el sentido de crear una nueva cámara baja había significado la necesidad de algunos procedimientos de transición, entre los cuales figuraba esa disposición, para que las personas nombradas a la anterior cámara pudieran completar sus mandatos en el nuevo Senado.

b) Islas Turcas y Caicos e islas Caimán

339. El representante del Reino Unido dijo que su delegación había descrito ya detenidamente en el Subcomité, en otras oportunidades, los antecedentes históricos generales de los Territorios. Después de la disolución de la Federación de las Indias Occidentales en 1962, las islas Turcas y Caicos consideraron la posibilidad de convertirse en un territorio de ultramar libremente asociado con Jamaica, pero una propuesta en ese sentido no encontró apoyo en la Asamblea Legislativa, y cuando Jamaica obtuvo la independencia el Territorio quedó bajo la administración directa del Reino Unido. Desde entonces el Territorio tuvo en cuenta la posibilidad de unirse a las Bahamas, y en 1964 se creó un grupo de trabajo compuesto de representantes de los gobiernos interesados para estudiar qué forma podía revestir una asociación. La posición general en cuanto al establecimiento de relaciones más estrechas con las Bahamas seguía siendo muy similar a la descrita en el documento de trabajo preparado por la Secretaría el año anterior. En el verano de 1965 dos miembros del Parlamento del Reino Unido, un laborista y un conservador, visitaron el Territorio en nombre del Secretario de Estado para las Colonias. Recomendaron que el Gobernador de las Bahamas pasase a ser Gobernador del Territorio, cambio que se llevó a cabo poco después de la visita, y que el Consejo Ejecutivo y el Consejo Legislativo fuesen sustituidos por un Consejo de Estado único, cambio que aún se estaba discutiendo pero que no parecía tener mayor aceptación en el Territorio. También recomendaron que se nombrase un funcionario de catastro para preparar un sistema eficaz de registro de tierras sobre la base de un catastro; ya habían comenzado los trabajos para llevar a la práctica esa recomendación.

340. En lo que se refería a los cambios constitucionales en las islas Turcas y Caicos, los párrafos pertinentes del documento de trabajo de la Secretaría presentado al Subcomité habían perdido actualidad y debían refundirse. Se debía indicar



que el Administrador era nombrado por la Reina y ejercía sus funciones de conformidad con las instrucciones que le daba Su Majestad (es decir, en la práctica, el Gobierno del Reino Unido) o el Gobernador de las Bahamas; que debía consultar al Consejo Ejecutivo en todos los asuntos importantes dentro de la esfera de sus responsabilidades y podía actuar en contra de la opinión de aquél, informando en tal caso a la Reina por conducto del Secretario de Estado sobre los motivos de sus actos; y que el Gobernador podía, cuando estaba en las islas, ejercer cualquiera de las funciones conferidas al Administrador. También se debía indicar que la administración de justicia estaba a cargo de un magistrado que era un juez interino del Grand Court, que el Grand Court también tenía jurisdicción en casos de divorcio y cuestiones matrimoniales, y que las apelaciones contra el Grand Court se interponían ante el Tribunal de Apelación de las Bahamas.

341. Las islas Caimán también habían pensado en la posibilidad de asociarse con Jamaica al disolverse la Federación de las Indias Occidentales, y se les había ofrecido oficialmente la independencia, en asociación con Jamaica. El Territorio había preferido romper todo vínculo constitucional con Jamaica y permanecer con el Reino Unido. Cuando en 1962 se propuso una federación de los pequeños territorios del Caribe oriental, la Asamblea Legislativa votó a favor de continuar su asociación con el Reino Unido y negociar la autonomía interna, teniendo en cuenta los deseos del pueblo del Territorio en cuanto a la fecha, y decidió que esas negociaciones debían aplazarse hasta después de una elección general. Estas recomendaciones habían sido aceptadas por el Reino Unido. En 1962 no se hizo ninguna propuesta con referencia a las negociaciones y, a raíz de las elecciones celebradas en noviembre de 1965, el partido que propiciaba un rápido cambio constitucional había perdido terreno en la Asamblea. El Secretario para las Colonias del Reino Unido había manifestado que el Reino Unido se dejaría guiar por la opinión local al estudiar el porvenir del Territorio. Se estableció un comité plenario de la nueva Asamblea Legislativa a fin de considerar la cuestión del progreso constitucional y, previa consulta con los electores, redactar propuestas para un cambio constitucional. En enero del año en curso se había reunido el Comité y la mayoría de los miembros había convenido en varias propuestas; habían propuesto que se suprimiera la disposición que preveía la inclusión de miembros designados en la Asamblea Legislativa, que

el stipendiary magistrate fuese reemplazado por un fiscal general, y que el Presidente de la Asamblea fuese una persona independiente que no perteneciera al Poder Legislativo, en vez del Administrador. También se había propuesto que el Consejo Ejecutivo tuviera cinco miembros elegidos, ningún miembro designado y tres miembros oficiales, el Administrador adjunto, el Tesorero y el fiscal general. Los miembros elegidos del Consejo Ejecutivo tendrían responsabilidades ejecutivas y serían titulares de una cartera. Los cambios propuestos otorgaban más autoridad a los miembros elegidos. Los representantes elegidos habían examinado las propuestas con sus electores en todo el Territorio y habían hallado oposición en todos los distritos electorales menos dos, porque una importante mayoría del pueblo no deseaba entonces ningún cambio de las disposiciones constitucionales existentes. El Comité Constitucional llegó a la conclusión de que no había ningún mandato claro del pueblo para los cambios propuestos, a pesar de que contaban con el apoyo de la mayoría de los representantes elegidos. Por consiguiente el Comité no había recomendado ningún cambio, excepto la substitución del stipendiary magistrate en 1968 por un fiscal general. Toda persona o partido político que no estuviese de acuerdo con esas recomendaciones podría plantear la cuestión al electorado en las próximas elecciones, que se celebrarían antes de 1969. Por último, el orador señaló que el Gobierno del Reino Unido no había pedido a la Asamblea Territorial que aprobase la New Banks and Trust Companies Law, y que debía modificarse en consecuencia el documento de trabajo.

342. El representante de Madagascar dio las gracias al representante del Reino Unido por su declaración. Sin embargo, quería saber quiénes eran los tres miembros oficiales del Consejo Ejecutivo de las islas Turcas y Caicos, pues parecía que de un total de seis miembros sólo dos eran elegidos. También deseaba que se le aclarase la afirmación hecha, según la cual toda la legislación estaba sujeta al asentimiento del Administrador. En lo que se refería a las condiciones de la enseñanza en las islas Turcas y Caicos, advirtió que en el párrafo 185 de ese documento no se mencionaba la enseñanza superior, y preguntó si el Reino Unido había pensado en establecer escuelas para la formación de personal administrativo superior o en conceder becas a los estudiantes que deseaban seguir estudios universitarios.

343. El representante de Venezuela observó que el proceso de desarrollo constitucional de las islas Turcas y Caicos y de las islas Caimán seguía las modalidades familiares en los demás territorios administrados por el Reino Unido. En todos esos territorios el representante de la Reina seguía ejerciendo amplios poderes y las funciones del órgano legislativo local eran limitadas. En ninguno de ellos, por lo tanto, se habían registrado progresos políticos apreciables el año anterior. Además, en el caso de las islas Turcas y Caicos era difícil ver cómo podría consultarse debidamente a la población sobre el desarrollo político futuro si no existían partidos políticos.

344. Naturalmente, la Potencia administradora también era responsable del desarrollo económico y social de los territorios, y en lo que se refería a la cuestión de la enseñanza, por lo menos, la situación era satisfactoria en las islas. En cambio, la alta tasa de mortalidad infantil parecía indicar que los servicios de salud pública y bienestar debían ser mejorados.

345. El representante de Bulgaria dijo que nada en la información suministrada por el representante del Reino Unido le daba motivos para modificar las conclusiones que había expuesto en su declaración general sobre los territorios examinados. No se había producido ningún nuevo acontecimiento, aparte de las consultas organizadas en las islas Caimán, en el curso de las cuales no se adoptó ninguna decisión en cuanto a un cambio constitucional.

346. El representante del Uruguay agradeció al representante del Reino Unido su valiosa e informativa exposición sobre las islas Turcas y Caicos y las islas Caimán. Si bien era cierto que el progreso hacia la descolonización no había sido tan rápido y eficaz como pudiese desear el Subcomité, un proceso de desarrollo lento no era inapropiado en territorios muy pequeños con recursos naturales limitados. Las citas tomadas del informe del Comité constitucional de las islas Caimán eran prueba de que se estaban adoptando medidas prácticas para consultar al pueblo acerca de su estatuto futuro, y el orador esperaba que el Reino Unido pudiera poner a disposición del Subcomité el informe completo.

347. La presencia de un representante de la Potencia administradora había resultado extremadamente útil y había facilitado la labor de los miembros al proporcionarles la oportunidad de oír otro punto de vista sobre los problemas de la descolonización.

348. El representante de Italia se asociaba a las observaciones del representante del Uruguay acerca de la utilidad de que asistiese un representante de la Potencia administradora a los debates del Subcomité sobre los territorios. En realidad, quizás convendría invitar a las Potencias administradoras a asistir a todas las sesiones, ya que en todos los casos tenían a su cargo las relaciones exteriores de los territorios.

349. El representante del Reino Unido dijo que tendría sumo gusto en entregar a la Secretaría un ejemplar del informe del Comité Constitucional de las islas Caimán para que se distribuyese entre los miembros, sugirió que se incorporase al informe del Subcomité, ya que ofrecía pruebas de un proceso democrático que incluía amplias consultas personales con el pueblo de un pequeño territorio acerca de su porvenir. De igual modo había un continuo proceso de consulta en las islas Turcas y Caicos, y la ausencia de partidos políticos a que se había referido el representante de Venezuela, no era un inconveniente en un territorio cuya población no llegaba a 7.000 habitantes. En esas islas el principal tema de las últimas discusiones había sido la posibilidad de unión con las Bahamas.

350. En respuesta al representante de Madagascar, el orador dijo que en las actas del Subcomité de 1964 y en el documento de trabajo de la Secretaría de ese año, reproducido en el informe del Comité Especial a la Asamblea General (A/5800/Rev.1, capítulo XXIV, párrs. 59 a 63), figuraban detalles completos sobre la Asamblea Legislativa de las Islas Turcas y Caicos. No estaba en condiciones de dar cifras detalladas sobre becas de enseñanza superior para los estudiantes de los dos territorios; pero todos los estudiantes calificados podían solicitar las becas que se otorgaban en virtud de los programas de asistencia técnica del Reino Unido para los territorios dependientes. Además, ambos territorios mantenían estrechas relaciones con Jamaica y las Bahamas y podían aprovechar los amplios servicios docentes del Caribe, la Gran Bretaña y otros países. Ninguno de los territorios tenía una población suficientemente numerosa para mantener una universidad propia.

#### B. Aprobación del informe

351. En la 96a. sesión, celebrada el 8 de septiembre de 1967, el Subcomité aprobó por consenso sus conclusiones y recomendaciones sobre estos territorios.

C. Conclusiones y recomendaciones

352. El Subcomité recomienda al Comité Especial que apruebe las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1) El Comité Especial recuerda sus anteriores conclusiones y recomendaciones relativas a las Bermudas, Bahamas, Montserrat, islas Turcas y Caicos e islas Caimán, aprobadas por la Asamblea General;

2) El Comité Especial toma nota de la declaración de la Potencia administradora que contiene información adicional sobre esos territorios;

3) El Comité Especial reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica plenamente a estos territorios;

4) El Comité Especial lamenta que la Potencia administradora no haya tomado todavía medidas efectivas para aplicar la Declaración a estos territorios y le insta a que lo haga sin más demora;

5) El Comité Especial toma nota de que ciertos intereses financieros ajenos al desarrollo político, económico y social de estos territorios pueden constituir un impedimento en la aplicación de la resolución 1514 (XV) al territorio de las Bahamas;

6) El Comité Especial considera que, en vista de que no dispone de suficiente información sobre estos territorios, la Potencia administradora debería permitir que las Naciones Unidas enviaran lo antes posible, una misión visitadora a los territorios;

7) El Comité Especial considera que la Potencia administradora debe tomar inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, de conformidad con su voluntad y su deseo libremente expresados, para permitirles gozar de libertad e independencia absolutas;

8) El Comité Especial reitera su convicción de que, sobre todo en el caso de los pequeños territorios, las Naciones Unidas deben tomar medidas apropiadas para asegurar que los pueblos de estos territorios tengan la posibilidad de expresarse libremente en cuanto a su situación futura, con pleno conocimiento de las diversas opciones que se les ofrecen.

## VI. ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS)

353. En la sesión 90a. del Subcomité, celebrada el 30 de agosto de 1967, el representante del Uruguay expresó que la Asamblea General en la sesión plenaria No. 1500a., de diciembre 20 de 1966, tomó nota del consenso relativo a las Islas Malvinas (tema 23 del programa), formulado en el párrafo 13 del informe de la Cuarta Comisión cuyo texto dice así:

"Con referencia a la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1965, relativa a la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands), la Cuarta Comisión tomó nota de las comunicaciones de fecha 15 de diciembre de 1966, enviadas por la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (A/C.4/682 y A/C.4/683). En relación con este tema la Comisión llegó a un consenso a favor de que se instara a ambas partes a que continuaran las negociaciones con objeto de lograr lo antes posible una solución pacífica del problema y a que mantuvieran debidamente informados al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y a la Asamblea General acerca de la marcha de las negociaciones sobre esta situación colonial, cuya eliminación interesa a las Naciones Unidas dentro del marco de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de fecha 14 de diciembre de 1960."

354. Considerando que las negociaciones bilaterales constituyen el método más adecuado para resolver la cuestión de la descolonización de las Islas Malvinas (Falkland Islands), pero careciendo de noticias respecto al progreso logrado en dicha vía desde que se aprobó el consenso el 20 de diciembre de 1966, el representante del Uruguay, apoyado por el representante de Venezuela, propuso que se reitera a las partes, los términos de la resolución 2065 (XX) y del consenso de diciembre 20 de 1966, con el objeto de lograr lo antes posible una solución pacífica del problema, teniendo en cuenta la recomendación contenida en la parte final del citado consenso en cuanto a la información que debe proporcionarse al Comité Especial y a la Asamblea General "acerca de la marcha de las negociaciones sobre esta situación colonial, cuya eliminación interesa a las Naciones Unidas, dentro del marco de la resolución 1514 (XV), de fecha 14 de diciembre de 1960".

355. En su sesión 91a. celebrada el 31 de agosto de 1967, el Subcomité adoptó la siguiente declaración, que recomienda para su adopción por el Comité Especial:

Considerando que las negociaciones bilaterales constituyen el método más adecuado para resolver la cuestión de la descolonización de las Islas Malvinas (Falkland Islands), pero careciendo de noticias respecto al progreso logrado en dicha vía

desde que se aprobó el consenso el 20 de diciembre de 1966, el Comité Especial recomienda que se reitere a las partes, los términos de la resolución 2065 (XX) y del consenso de diciembre 20 de 1966, con el objeto de lograr lo antes posible una solución pacífica del problema, teniendo en cuenta la recomendación contenida en la parte final del citado consenso en cuanto a la información que debe proporcionarse al Comité Especial y a la Asamblea General acerca de la marcha de las negociaciones sobre esta situación colonial, cuya eliminación interesa a las Naciones Unidas, dentro del marco de la resolución 1514 (XV), de fecha 14 de diciembre de 1960.

## VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LOS TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACION DEL REINO UNIDO

356. En su 96a. sesión, celebrada el 8 de septiembre de 1967, el Subcomité aprobó por unanimidad las siguientes conclusiones y recomendaciones generales sobre los Territorios bajo administración del Reino Unido, conclusiones y recomendaciones que el Subcomité presenta al Comité Especial para su aprobación:

1) El Comité Especial recuerda las conclusiones y recomendaciones relativas a estos territorios, que fueron adoptadas por el Comité Especial en 1966 y aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones.

2) El Comité Especial reafirma que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales se aplica plenamente a estos territorios. Al mismo tiempo, reconoce que la poca extensión y la escasa población de los mismos, así como la naturaleza de su economía, plantean problemas peculiares que requieren especial atención.

3) El Comité Especial reafirma el derecho de los pueblos de estos territorios al ejercicio de la libre determinación con toda libertad y con pleno conocimiento de las diferentes formas de condición política que se les ofrecen. Asimismo, expresa su convicción de que, sobre todo en el caso de los territorios pequeños, las Naciones Unidas deberían adoptar medidas para que las poblaciones de esos territorios se pudieran pronunciar libremente sobre su condición futura, con pleno conocimiento de las posibilidades que se les ofrecen.

4) El Comité Especial reitera su recomendación acerca de la necesidad de enviar misiones visitadoras a estos territorios y, con tal fin, insta a la Potencia administradora a que permita que el Comité Especial envíe misiones visitadoras a tales territorios.

5) El Comité Especial recuerda que en 1964 manifestó la convicción de que estos territorios deberían tener la posibilidad de unirse a otros territorios de la región para formar un Estado que fuera económica y administrativamente viable. También recuerda que en aquel entonces algunos de estos territorios estaban en negociaciones tratando de establecer una federación. El Comité Especial lamenta que esas negociaciones no dieran resultado y que, en consecuencia, cada territorio se haya visto obligado a buscar una solución por separado. Manifiesta la esperanza de que la Potencia administradora haga todo lo posible por estrechar más los vínculos que existen entre estos territorios, estableciendo una infraestructura común en la esfera política, económica y social conforme a los deseos de las poblaciones.